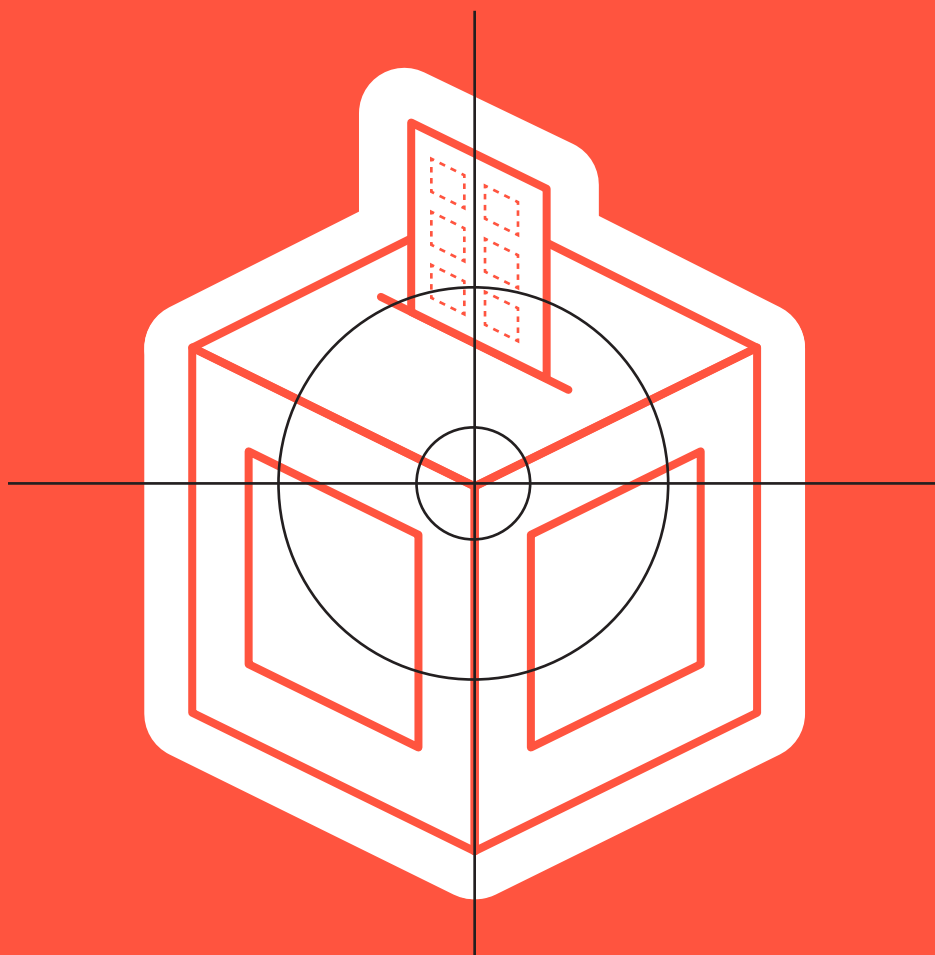


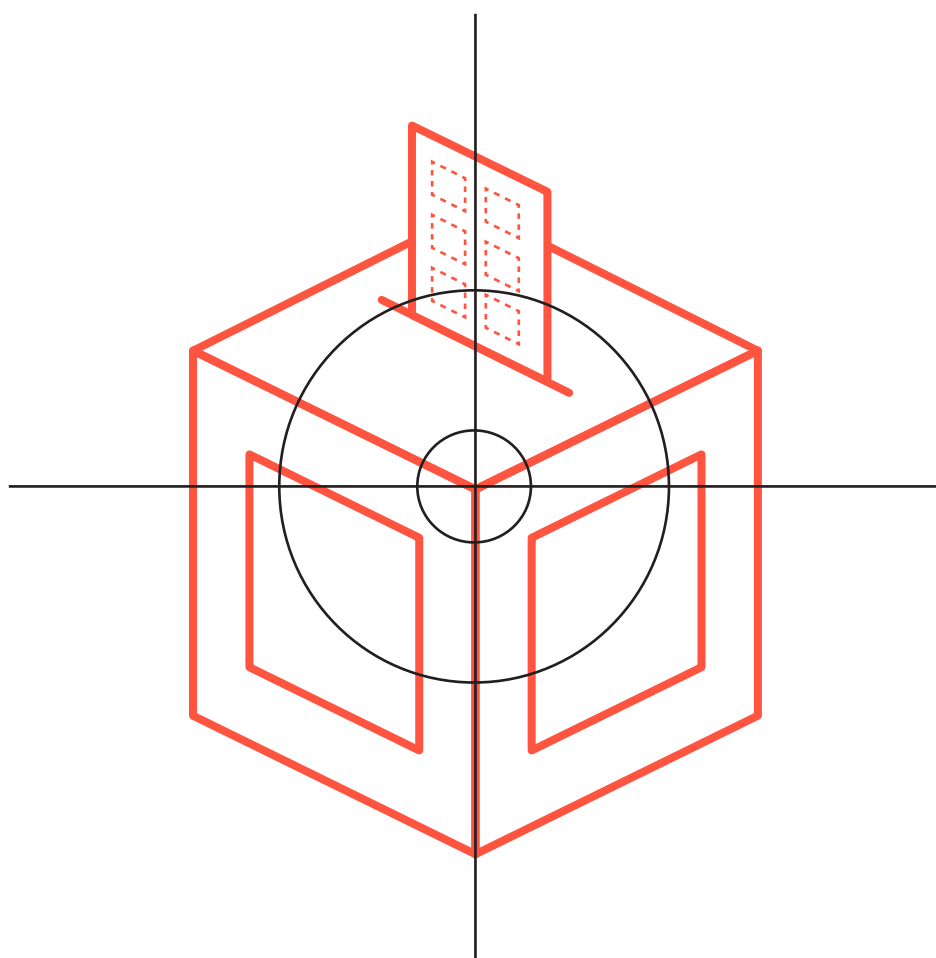
LA DEMOCRACIA LIBERAL BAJO ASEDIO: INSTANTÁNEAS DE EUROPA Y AMÉRICA LATINA

ÉRIKA RUIZ SANDOVAL
(editora)



LA DEMOCRACIA LIBERAL BAJO ASEDIO: INSTANTÁNEAS DE EUROPA Y AMÉRICA LATINA

ÉRIKA RUIZ SANDOVAL
(editora)



LA DEMOCRACIA LIBERAL BAJO ASEDIO: INSTANTÁNEAS DE EUROPA Y AMÉRICA LATINA

Editora: Érika Ruiz Sandoval

Autores: Jacques Coste, José Andrés Fernández Leost, Luis Alfonso Gómez Arciniega, Alicia Gutiérrez González, Andrés Herrera Esquivel, Luis Antonio Huacuja Acevedo, Mónica Laborda Sánchez, Anais López Caldera, Jonas Medeiros, Niccolò Morelli, Mario Ojeda Revah, José Joel Peña Llanes, Alejandro Pisanty, Camila Rocha, Érika Ruiz Sandoval, Mariano Schuster, Esther Solano, Ana Luisa Trujillo Juárez.

Diseño: Buró Público

Derechos reservados

© 2023, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)

Representación en México

Yautepac 55, Colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, 06140, Ciudad de México

<https://mexico.fes.de/>

Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi)

Av. Insurgentes Sur 1647, piso 1, interior A, Colonia San José Insurgentes,

Alcaldía Benito Juárez, 03900, Ciudad de México

<https://www.consejomexicano.org/>

Primera edición: noviembre de 2023

ISBN: XXX

El uso comercial de todos los materiales editados y publicados por la FES está prohibido. La reproducción parcial o total del libro requiere autorización por escrito. Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan las de la FES o las del Comexi.

Hecho en México

Printed in Mexico

ÍNDICE

Presentación	5
<i>Elisa Gómez Sánchez</i>	
Introducción	7
<i>Érika Ruiz Sandoval</i>	
I. Reflexiones generales sobre las amenazas a la democracia liberal	13
1. Las consecuencias de una mala lectura de los sucesos de 1989: el duro despertar a la realidad	15
<i>Érika Ruiz Sandoval</i>	
2. Los vínculos entre la globalización y las amenazas a la democracia liberal	25
<i>Ana Luisa Trujillo Juárez</i>	
3. Los efectos políticos de la tecnología: populismos, democracia e internet	35
<i>Alejandro Pisanty</i>	
4. La integración europea, el euroescepticismo y los populismos	47
<i>José Joel Peña Llanes</i>	
II. Estudios de caso: Europa	55
5. Los años de abundancia han terminado... Contradicciones, fracturas y tensiones del orden liberal democrático en Alemania	57
<i>Luis Alfonso Gómez Arciniega</i>	
6. La democracia en España: ¿resistencia o fatiga de materiales?	69
<i>José Andrés Fernández Leost</i>	

7. Francia, de democracia avanzada a poliarquía en entredicho <i>Mario Ojeda Revah</i>	79
8. El hombre fuerte de Hungría: Viktor Orbán <i>Andrés Herrera Esquivel</i>	85
9. Los rostros del populismo en Italia: la Lega Nord (LN), Fratelli d'Italia (FDI) y el Movimento 5 Stelle (M5S) <i>Niccoló Morelli</i>	95
10. Polonia: de ejemplo de transición democrática a autocracia en ciernes <i>Mónica Laborda Sánchez</i>	105
11. La crisis de los <i>tories</i> en la era <i>brexit</i> <i>Alicia Gutiérrez González</i>	111

III. Estudios de caso: América Latina **121**

12. ¿Quién es Javier Milei?: la derechización de la política argentina <i>Mariano Schuster</i>	123
13. ¿Por qué los brasileños eligieron votar por la ultraderecha?: el fenómeno Bolsonaro <i>Camila Rocha, Esther Solano y Jonas Medeiros</i>	133
14. Nayib Bukele: ¿el dictador del futuro? <i>Jacques Coste</i>	143
15. Las amenazas a la democracia en México: entre la desigualdad, el desapego democrático y el populismo <i>Luis Antonio Huacuja Acevedo</i>	151
16. Las amenazas a la democracia liberal como fenómeno global: el caso de Venezuela <i>Anais López Caldera</i>	163

PRESENTACIÓN

A través de dieciséis *instantáneas* este libro de divulgación reflexiona y da cuenta de las amenazas a la democracia liberal que se libran en Europa y América Latina. A pesar de las diferencias estructurales e históricas entre ambas regiones, hoy hay un rasgo indiscutible que las asemeja: una gravísima recesión democrática. Así, como menciona la autora de uno de los capítulos, no hay duda de que *la democracia liberal hace agua en todos lados*. No hay duda pues de que la democracia liberal está bajo asedio.

El abanico de amenazas va desde la incursión y el protagonismo de fuerzas políticas de derecha y ultraderecha en la escena electoral, pasando por la puesta en marcha de estrategias y discursos populistas, la activación de nacionalismos y propuestas antisistema, hasta el establecimiento de gobiernos autoritarios y el desmantelamiento del Estado. Unos casos más graves que otros, pero todos igualmente preocupantes para el porvenir de la democracia y el bienestar de nuestras sociedades.

El libro abre boca con cuatro capítulos sobre reflexiones teóricas e históricas alrededor de momentos e ideas clave que explican la situación actual y que dan contexto a los estudios de caso: los sucesos de 1989 y sus consecuencias, los impactos de la globalización en el desarrollo de la democracia, el uso de la tecnología con fines políticos y las dificultades de la Unión Europea para preservar su modelo político. La segunda sección del libro está dedicada a los estudios de caso de Europa; son capítulos sobre Alemania, Francia, Hungría, España, Italia, Polonia y Reino

Unido. En la tercera sección, sigue el turno de los casos latinoamericanos con los capítulos sobre Argentina, Brasil, El Salvador, México y Venezuela.

A lo largo de este interesante recorrido las y los autores de los dieciséis capítulos recuerdan y cuestionan viejos problemas que siguen sin resolverse y que alimentan las amenazas a la democracia liberal en estos países, por ejemplo, la crisis de representación política, la desigualdad económica, la marginación social, las tensiones entre la soberanía nacional y los procesos de integración regional, y la debilidad estatal. Asimismo, nos aproximan a nuevos problemas que agudizan la situación, por ejemplo, la propagación del populismo a través de la tecnología, la caducidad del eje ideológico derecha-izquierda como marco de referencia y los discursos de odio y la radicalización del electorado como estrategias políticas.

Este volumen editado es producto de la colaboración entre la Fundación Friedrich Ebert (FES) en México y el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) ante una preocupación compartida por el futuro de la democracia liberal y las consecuencias de su deterioro para América Latina y la Europa integrada. Algunas de las interrogantes que motivaron la conversación fueron: ¿En qué se parecen o no las amenazas a la democracia liberal en ambas regiones? ¿Qué han experimentado las distintas sociedades y qué resultados se han obtenido? ¿Cómo se plantean los retos para la democracia liberal en 2023 y en una perspectiva de corto, mediano y largo plazos?

Con esta contribución colectiva buscamos llegar a un público amplio, interesado pero no experto, a través de capítulos cortos para fomentar una reflexión profunda y amplia sobre este fenómeno global. Vaya aquí un agradecimiento a todas y todos los autores, quienes son miembros de la Unidad de Estudio y Reflexión Europa+ de Comexi, de las representaciones de la FES en América Latina o expertas y expertos cercanos a estas instituciones, por poner al servicio de este ejercicio de reflexión su experiencia y sus conocimientos. Un agradecimiento especial a Érika Ruiz Sandoval por su estupendo trabajo de edición.

ELISA GÓMEZ SÁNCHEZ

*Coordinadora de Diálogo Político
Fundación Friedrich Ebert en México*

INTRODUCCIÓN

Érika Ruiz Sandoval*

Uno de los rasgos más distintivos de este primer cuarto del siglo XXI tiene que ver con las amenazas a la democracia liberal en todo el mundo y, particularmente, en Occidente. Por distintas razones internacionales –la crisis de la globalización/hiperglobalización, la indignación por las medidas tomadas para atajar la Gran Recesión (2008-2009) o el uso y abuso de las redes sociales para manipular la opinión pública, por ejemplo– e internas –la desigualdad o la corrupción de las élites, entre otras–, las democracias –consolidadas o recientes, consideradas plenas o meramente formales– se enfrentan a este fenómeno, y padecen importantes consecuencias políticas, económicas y sociales dentro de sus fronteras, pero que también repercuten en la gobernanza global y el orden internacional, en tiempos de gran agitación geopolítica. La revuelta populista global, la deriva autoritaria y el retorno de la rivalidad entre grandes potencias retan la legitimidad del consenso internacional que promovió y sostuvo a la globalización, así como al mismo orden liberal de la segunda posguerra.

* Profesora-investigadora asociada de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Tiene amplia experiencia en la academia y en el servicio público, tanto en México como en el extranjero. Fue coordinadora de asesores del subsecretario de Relaciones Exteriores en la Cancillería mexicana y *sous-sherpa* de México para el Grupo de los Veinte. Es internacionalista por El Colegio de México, maestra en Asuntos Públicos por la Universidad de Princeton y maestra en Relaciones Internacionales e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), donde coordina la Unidad de Estudio y Reflexión Europa+.

Es común reducir la explicación sobre el asedio a la democracia liberal a la aparición de liderazgos populistas, en una suerte de taquigrafía conceptual que permite comparar y contrastar circunstancias específicas para encontrar patrones que faciliten entender cómo se erosiona poco a poco la democracia liberal. Cabe destacar que el populismo es un fenómeno tan antiguo como la democracia. Hay muchos “populismos” (populismo clásico, neopopulismo, populismo radical, *tecnopopulismo*), aunque pueda identificarse un patrón de comportamiento que incluye, en general, el carisma y adoctrinamiento como base del liderazgo; mecanismos de comunicación directa con el pueblo; debilitación de los mecanismos de rendición de cuentas, a los que, con frecuencia, se les considera corruptos; colonización del Estado; eliminación de la sociedad civil independiente; promesas incumplidas e inconclusas, y prácticas autoritarias desde el poder. Una y otra vez, sin importar las coordenadas geográficas de que se trate, se repite la misma historia: los populistas afirman que las élites (políticas, económicas y sociales) son corruptas y funcionan como un cártel que solo busca satisfacer sus propias necesidades. Para enfrentar a esta situación, los populistas consideran que hay una necesidad de que un líder represente al “pueblo”.

Si se considera indispensable definir el populismo, puede recurrirse a las teorías de la modernización, que dicen que el populismo es un período de transición entre los modelos oligárquicos heredados de la Colonia –en América Latina– o de la Revolución industrial –en el Occidente desarrollado– y el surgimiento de una sociedad urbano-industrial. Si se usan teorías político-estratégicas, habría que decir que el populismo se desmarca de la visión derecha-izquierda y adquiere una de arriba-abajo, con lo cual busca crear una lucha antagónica hasta llegar y mantenerse en el gobierno. Hay quienes ven al populismo como ideología, y generalmente lo acompañan de socialismo para los de izquierda y de neoliberalismo para los de derecha. También puede considerarse al populismo como una lógica política que articula las demandas insatisfechas de los excluidos. Finalmente, hay teorías que estipulan que el populismo no es una forma de gobierno ni un modelo político o económico, sino un *estilo de gobernar*.

Ahora bien, contrario a la creencia general, el populismo no es solo una cuestión de políticas irresponsables o de llamados a los desposeídos. Es una forma de hacer política, de corte antielitista, pero también antipluralista. Y, a pesar de las nociones optimistas de muchos liberales, los partidos populistas no son solo partidos de protesta incapaces de gobernar. También hay que considerar que los populismos se consolidan en el poder con el apoyo fundamental de parte de la columna vertebral de las democracias: la clase media en ascenso. Los populistas dependen de las clases medias que se sienten cada vez más amenazadas por las minorías. Si no es el caso, los regímenes populistas tratan de crear su propia clase media y equipararla con el “pueblo verdadero” como tal. Los regímenes populistas tienen su propia coherencia e incluso su atractivo moral para parte de la clase media, algo que hay que entender si se les quiere combatir.

Si hubiera que plantear una sola definición de populismo, habría que hablar de una concepción moralista de la política, una forma de percibir el mundo político que pone en una relación de oposición a un pueblo plenamente unido y moralmente puro con élites corruptas e, incluso, inmorales. No hay populismo sin antielitismo, pero no todos los antielitistas son populistas. Son antipluralistas: solo ellos pueden representar adecuadamente al pueblo verdadero, y todos sus opositores son esencialmente ilegítimos. En su narrativa, oponerse a los populistas es equivalente a admitir implícitamente que se es corrupto o que no se pertenece al pueblo. En general, los líderes populistas buscan fortalecer su carisma mediante algunas dimensiones de su visión social. Tienden a tener una misión redentora; invocan mitos; pronuncian discursos emotivos en actos de masas; ponen en marcha mecanismos de distribución de beneficios, y se ven a sí mismos como “padres” de la patria.

Los partidarios del populismo son actores racionales e instrumentales que apoyan a sus líderes de manera estratégica; buscan resolver problemas materiales, pero también buscan bienes inmateriales, como la dignidad o la participación, y que alguien escuche sus demandas. Los líderes buscan establecer lazos directos con sus seguidores mediante la radio, la televisión, el internet, las redes sociales (son grandes innovadores mediáticos), y organizaciones paralelas creadas desde el Estado o desde la sociedad civil. Desdeñan el pluralismo y a sectores que no comparten su “identidad”. Son nacionalistas y patriotas que se oponen al cosmopolitismo. Tienden a tener una visión insular (desconocen y rechazan al exterior) y se subordinan a las visiones, objetivos, proyectos y pulsiones del líder.

El populismo es, a la vez, incluyente y excluyente. Los líderes no tienen la misma actitud en sus períodos de campaña y sus primeros días de gobierno que cuando se han consolidado en el poder. Prometen democracia, pero no la practican: gobiernan con prácticas autoritarias, especialmente en un escenario de instituciones frágiles. Asimismo, puede hablarse de una “fórmula populista”: se hace un uso instrumental de las leyes y de las instituciones para crear terrenos electorales desiguales; se usa el poder como posesión personal del líder que otorga beneficios y favores a cambio de votos, y se silencian las voces críticas para regular la esfera pública, la sociedad civil y adoctrinar al pueblo en la “verdad” del líder.

Los populismos actuales son una manifestación del movimiento antiglobalización y su auge está relacionado con la crisis del orden liberal. Por eso, es importante revisar las interpretaciones –hoy sabemos que fueron erróneas– que se hicieron sobre los acontecimientos de 1989 y el fin de la Guerra Fría (por ejemplo, “el fin de la historia” de Fukuyama); la aplicación a rajatabla del Consenso de Washington con sus promesas de que el libre mercado y la democracia liberal traerían bienestar para todos, y las consecuencias reales de promover la globalización –y la *hiperglobalización*– como una panacea o “producto milagro” que resolvería todos los males.

Muchos se preguntan cómo es posible que ganen los populistas frente a alternativas democráticas. Ganan porque son los únicos que dicen que la promesa de la globalización no se cumplió y son claros y directos con respecto a su preferencia por la soberanía nacional y la democracia popular, por encima de la globalización, lo que genera simpatías entre la población. También hay explicaciones económicas y culturales para los populismos. Entre las económicas están el rechazo a la globalización de quienes se sienten excluidos por las divisiones sociales y cognitivas que impulsan la propia globalización y la tecnología, las políticas de austeridad que minan el Estado de bienestar, la mala distribución del ingreso, el desempleo y la ansiedad económica. Entre las culturales están el nativismo, el sentimiento antiinmigrante, el racismo y el supremacismo blanco que impulsan la narrativa de derecha y el contraataque conservador al liberalismo social.

¿Por qué los populistas amenazan a la democracia? Los populistas minan las instituciones formales (cortes, legislativos y agencias regulatorias) por considerarlas creaciones de la “élite corrupta”. Cuando ganan elecciones democráticas, no consiguen autolimitarse y, en cambio, vacían y politizan las instituciones formales de la democracia liberal. Por otra parte, los populistas redefinen al “pueblo”, con frecuencia mediante la exclusión de minorías étnicas o religiosas vulnerables, inmigrantes y grupos económicos marginados. El resultado es el gobierno de la mayoría sin derechos para las minorías. Además, los populistas erosionan las normas informales de la democracia. Cuestionan la lealtad de la oposición y consideran que cualquier crítica es falsa. En vez de tolerar la prensa libre y la oposición política, tratan de minar su legitimidad.

Hasta ahora, los partidos políticos tradicionales, otrora considerados la columna vertebral de la democracia representativa, no han conseguido hacer frente a estas amenazas. Los votantes perciben que los partidos políticos tradicionales no responden o no ofrecen alternativas claras, además de considerar que no rinden cuentas. La centro-izquierda ha abandonado a sus votantes tradicionales y la centro-derecha ha fracasado en el intento de contener la retórica extremista de la derecha; es más, algunos partidos de centro-derecha se han convertido en partidos populistas. Las sociedades siguen divididas por desigualdades socioeconómicas importantes, pero los partidos políticos ya no las traducen a conflictos ideológicos como en el siglo XX. El éxito político hoy está más cerca si se evita por completo la ideología.

A partir del fin de la división ideológica entre izquierda y derecha, los sistemas de partidos se quedaron congelados, al punto que se desconectaron fundamentalmente sociedad y política. Hoy, nadie cuestiona las coordenadas básicas del capitalismo o de la democracia como durante la Guerra Fría, aunque sí se cuestione el tipo de democracia (véase el surgimiento de la democracia *iliberal*, por ejemplo). El lugar principal de la competencia política se ha desplazado a las cuestiones “culturales” o “simbólicas”. Este es campo fértil para los populismos. Los aspirantes a un cargo electoral no rinden cuentas a clases o grupos específicos dentro de la sociedad. En consecuencia, hay incentivos para apelar a los intereses y valores

de la sociedad en su conjunto, a la que se trata como una masa indiferenciada de electores individuales. La concepción populista del “pueblo” es ejemplo de esas concepciones no mediadas por el bien común. El populismo llena un vacío entre una sociedad atomizada y políticamente impotente y una clase política autorreferencial que busca la validación electoral apelando a abstracciones y generalizaciones como “el pueblo”.

También puede hablarse de la desustancialización de la política. Los candidatos contemporáneos a cargos públicos se atacan personalmente de forma habitual y, a veces, incluso con saña, pero no discrepan demasiado en cuanto a la sustancia de las políticas públicas, muchas veces porque no hay tal sustancia. Los niveles de toxicidad política a los que se han acostumbrado los votantes son también consecuencia del auge del populismo como nueva lógica vertebradora de la política democrática contemporánea. Si todos los aspirantes a un cargo electoral afirman representar los intereses y valores de la sociedad en su conjunto, no pueden permitirse enemistarse con las opiniones o intereses de grupo específico alguno. En consecuencia, las plataformas políticas se diluyen para hacerlas parecer tan consensuadas y ampliamente atractivas como sea posible, con el fin de enmascarar cualquier conflicto sustantivo que puedan ocasionar.

El electorado está descontento con la calidad de la representación política que se le ofrece, justo cuando los partidos políticos pretenden ofrecer una representación más directa y sin intermediarios de la verdadera voluntad del pueblo. La existencia de algún tipo de mecanismo de mediación entre los intereses y valores dispares de la sociedad y los resultados políticos concretos resulta ser una condición esencial para una percepción de representación democrática eficaz. Sin ese nivel intermedio de organización política partidista, los individuos atomizados son demasiado débiles e insignificantes desde el punto de vista estadístico para tener la sensación de que sus opiniones e intereses importan a la hora de tomar decisiones vinculantes colectivamente. Al final, terminan desencantados con la democracia.

La integración económica internacional ha producido desintegración interna. Reconstruir polis saludables requiere una reintegración de la economía y la sociedad nacionales. Hace falta un reordenamiento de prioridades entre lo interno y lo internacional. Además, hay que usar la retórica política para movilizar a los votantes y defender las instituciones democráticas, atacar la interferencia electoral y reclamar el Estado de derecho. También habrá que involucrarse en una nueva política de coaliciones que responda a los votantes y excluya a las fuerzas antidemocráticas. Asimismo, es necesario el compromiso con las reformas institucionales que mejoren la integridad de la competencia electoral mediante más seguridad electoral, la despolitización de la administración de las elecciones, y considerar otras formas de votación. No obstante, hay que entender que no revivirían los partidos políticos o las luchas ideológicas del siglo XX. Habrá que idear y avanzar nuevas formas de intermediación política, es decir, nuevas formas de

partidismo, que reflejen los conflictos concretos de intereses y valores que existen hoy en la sociedad.

La tarea para la sociedad civil que cree en la democracia liberal no es fácil. Sirva esta colección de instantáneas sobre cómo llegamos hasta este punto y lo que está pasando actualmente en América Latina y en Europa para que cada uno reflexione y llegue a sus propias conclusiones sobre qué se podría hacer para reconducir el barco y dejar de sentirse completamente impotentes ante el implacable asedio a la democracia liberal. Ojalá que sean muchas las conciencias que se despierten e identifiquen cuál es su tarea, antes de que hayamos perdido por completo la libertad, creyendo que hay soluciones fáciles para los problemas complejos de la vida en el Occidente contemporáneo.

I.

***REFLEXIONES
GENERALES SOBRE
LAS AMENAZAS
A LA DEMOCRACIA
LIBERAL***

LAS CONSECUENCIAS DE UNA MALA LECTURA DE LOS SUCESOS DE 1989: EL DURO DESPERTAR A LA REALIDAD

Érika Ruiz Sandoval¹

Hoy, el mundo se enfrenta a un escenario de polícrisis², megacrisis, multicrisis, tripledemia, permacrisis, “tormenta perfecta” o cualquiera que

¹ Es licenciada en Relaciones Internacionales por El Colegio de México, maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Princeton, especialista en Estudios de la Integración Europea por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestra en Relaciones Internacionales e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es candidata a doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea. Es profesora-investigadora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Coordina la Unidad de Estudio y Reflexión Europa+ del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi).

² Término que acuñó Edgar Morin, un filósofo francés, quien lo utilizó por primera vez en 1999. Desde entonces, otros intelectuales, particularmente el economista Adam Tooze, lo han popularizado. La novedad está en que la interacción de diversas crisis genera una falla en cascada e imparable de los sistemas naturales y sociales. Por tanto, los hitos de la polícrisis son la complejidad extrema, una alta no linealidad, la causalidad transfronteriza, la profunda incertidumbre y la sincronización causal. Los choques son dispares, dice Tooze, pero interactúan de forma tal que el todo es aún más sobrecogedor que la suma de sus partes (Whiting y Park, 2023).

sea el neologismo de moda que busque reflejar el empalme de diversos problemas –cambio climático, pandemia, desigualdad, conflictos, migraciones masivas, oleadas de refugiados nunca vistas desde la Segunda Guerra Mundial, crisis fiscal, crisis monetaria, hiperinflación y un largo etcétera–, y también a la sensación de que nada será como antes. Luego, en 2022, el presidente ruso, Vladimir Putin, decidió contribuir a esta mezcla explosiva, al lanzar una agresión genocida e imperialista de viejo cuño contra Ucrania, lo que algunos han considerado un verdadero cambio de época (*Zeitenwende*). Esa acción trastrocó los flujos de gas y petróleo hacia Europa, lo que degeneró en una severa crisis energética, una emergencia alimentaria global –al no permitir la exportación de granos ucranianos desde los puertos de ese país durante buena parte de 2022– y una inflación aún más alta. La invasión rusa de Ucrania también contribuyó a otra crisis de refugiados.

Ante este panorama apocalíptico, surge la obvia pregunta de cómo fue que llegamos hasta aquí y

preocupan los efectos de estos fenómenos en los electorados y en las élites políticas, en los que se ha observado desde el cinismo hasta la estupidez llana, pasando por el escapismo, la mentira y la negación. Esto ha contribuido al declive en la calidad de la democracia y a la correspondiente expansión de los populismos y de las teorías de la conspiración (Przeworski, 2019). Nadie puede negar que la democracia liberal está bajo asedio hasta en los países democráticos por excelencia, aquellos encargados de “dar ejemplo”, y ni qué decir de lo que pasa en aquellos que son democracias nominales o electorales, en donde la desafección democrática no deja de avanzar.

Este texto busca dar algunas pistas para responder a esta interrogante, a partir del análisis de las consecuencias que tuvo haber hecho una lectura, si no errónea, sí cuando menos simplista de los sucesos de 1989 y del fin de la Guerra Fría desde Occidente, y haber pensado que la única conclusión posible era que quedaba un solo camino a seguir. Sin importar la latitud o las circunstancias, la prescripción era la misma: economía de mercado y democracia liberal para todo el mundo. Así, hoy tenemos ante nosotros un escenario que lleva gestándose prácticamente treinta y cinco años, en el que la democracia liberal parece estar amenazada por todos los flancos, y el despertar a la realidad para quienes se compraron el sueño liberal sin cuestionamiento alguno está siendo particularmente duro.

LA CAÍDA DEL MURO Y LAS EXPECTATIVAS DE ENTONCES

La caída del Muro de Berlín la noche del 9 de noviembre de 1989 dejó al mundo estupefacto. Tras más de cuatro décadas de Guerra Fría y de “equilibrio de terror” más que de poder, de repente se abrió la posibilidad de tener una Europa unida, libre y en paz, lo que tendría repercusiones en todo el mundo. Rápidamente se dio rienda suelta a un rabioso optimismo entre los liberales que presagiaron en documentos como la Carta de Pa-

rís de la entonces Comisión para la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE) de 1990 “una nueva era de democracia, libertad y unidad” para Europa, y, de manera implícita, para el resto del mundo también.

Desde la academia, en un primer ensayo –“The End of History?” de 1989– y luego en su libro *The End of History and the Last Man* de 1992, Francis Fukuyama argumentó que las tradiciones de la democracia liberal occidental habían mantenido su lugar en el escenario político durante el último siglo a pesar del ascenso sucesivo de sistemas alternativos de gobierno. El gobierno de la democracia liberal había sobrevivido a las monarquías, al fascismo y al comunismo. De hecho, decía, la democracia liberal había sobrevivido para convertirse en la opción preferida de sistema político para *todos* los países.

Su tesis central es que la historia humana se movía hacia un estado de armonía idealizado mediante los mecanismos de la democracia liberal. Para él, la realización de un sistema político y económico ideal, con los elementos esenciales de la democracia liberal (libertad de expresión, elecciones libres y justas y la separación de poderes), es el propósito detrás de la marcha de la historia. Según Fukuyama, no hay contradicción alguna en la vida humana que no pueda resolverse en el marco del liberalismo. Si el argumento se lleva más allá, para el autor no hay una estructura política y económica alternativa que pueda ofrecer soluciones a problemas tales como la necesidad de libertad, de protección y de hacer valer los derechos humanos. El futuro tendría que ser liberal o no sería y punto.

No puede soslayarse lo extraordinario de los acontecimientos de 1989, particularmente por haberse tratado de revoluciones no violentas y negociadas, la disolución pacífica de una potencia nuclear como la Unión Soviética y las transiciones a la democracia y a la economía de mercado en Europa Central y Oriental. Esa es la versión de la historia que se hizo popular entre los liberales occidentales, en la que 1989 es la fecha en la que la democracia

venció al comunismo, se cayó el Muro³, y se abrió la posibilidad de tener una Europa unida y en paz, además de iniciar una nueva era para la democracia (Tausendfreund, 2019).

Pero, si se profundiza un poco, lo primero que habría que señalar es que Occidente no ganó la Guerra Fría, es decir, no venció al comunismo. Más bien el contrincante se colapsó en el cuadrilátero en el décimo asalto, cuando nadie lo esperaba. Así, la democracia liberal sobrevivió al comunismo, pero no lo derrotó. El modelo que propugnaba el bloque soviético dejó de funcionar, porque no pudo cumplir las promesas que había hecho a la población.

Por eso, treinta y cinco años más tarde, la historia adquiere otros matices y termina siendo muy diferente. Si hablamos solo de los europeos, no están del todo unidos –véanse las tensiones que se producen en el seno de la Unión Europea (UE) dados los retrocesos democráticos de Hungría y Polonia, por ejemplo–, aunque eso quizás también es un rasgo inherente a su proceso de integración. No obstante, donde sí hay que poner atención es en que no todos los europeos están viviendo de la misma manera el sueño liberal de paz y democracia que se prometió en la década de los noventa del siglo pasado y puede decirse que hay quienes ni siquiera quieren vivirlo o esperar a que se materialice, a juzgar por el ascenso de la extrema derecha en muchos Estados miembros de la UE, sin importar si son de la parte occidental o de la oriental.

Lo mismo pasa en el resto del mundo. El retroceso de la democracia liberal es palpable en todos lados, aunque es particularmente notorio en Occidente, o sea, Estados Unidos, Europa y América Latina. Un

nuevo nacionalismo ha retornado como reacción a la globalización y sus consecuencias, y por eso la idea de una cooperación internacional basada en normas, reglas y valores –la base del multilateralismo– está en crisis. Estamos, entonces, ante las cenizas de las expectativas que generaron los liberales en su lectura de lo que 1989 había significado. Puede ser que la lectura haya sido mala o que se haya pecado por omisión al simplificar de más fenómenos tremendamente complejos. En todo caso, lo importante es que en ese momento se sembraron las semillas del mundo en el que estamos hoy, uno en el que el futuro de la democracia liberal está en entredicho o, cuando menos, no puede considerarse una certeza o la única posibilidad como se hizo en 1989.

¿QUÉ SALIÓ MAL?

Hoy, cuando la tendencia es la recesión democrática, el resurgimiento de los autoritarismos y, en general, el debilitamiento del orden liberal cabe preguntarse qué fue lo que falló. Habitualmente, quienes estudian los populismos tienden a encontrar la falla dentro de las democracias occidentales, y parten de dos tipos de explicaciones: la económica y la cultural. En el primer caso, el problema ha estado en el avance imparable de la globalización y en la cada vez mayor división del trabajo en el ámbito global. Eso, aunado a nuevos desarrollos tecnológicos, se ha traducido en el estancamiento de los ingresos de las clases medias en Occidente. Para esas clases medias, esto les ha hecho sentirse olvidadas por el sistema, y por eso han generado sentimientos en contra de las élites globales y de lo internacional en general. En el caso de la explicación cultural, se trata de una violenta reacción en contra de la existencia de un solo mundo, el liberal y globalizado. La globalización ha hecho porosas las fronteras o las ha eliminado del todo, lo que ha traído flujos migratorios descontrolados, lo que mina al Estado-nación y, de nuevo, a las clases medias, quienes han empezado una revuelta política para defenderse de esa sensación de estar siendo invadidos por los de fuera. Estas dos explicacio-

³ Cabe destacar que realmente todo inició en Polonia y la caída del Muro fue el gran final, aunque la narrativa oficial se centre en la apertura de la frontera entre las dos Alemanias como el inicio del fin del control soviético en Europa Central y Oriental. El gobierno polaco que se formó después de la arrolladora victoria de Solidaridad en las elecciones de junio de 1989 fue el que dio el ejemplo que luego siguieron Hungría, Alemania Oriental y Checoslovaquia.

nes no son excluyentes entre sí. Lo que cambia es la mezcla de ambas que se presenta en cada país.

Así pues, en la explicación económica, tiene un papel preponderante la globalización, este fenómeno complejo y contradictorio sobre el que no hay una definición estándar, aunque sea comúnmente aceptado que, como mínimo, consiste en la ampliación, profundización y aceleración de la conectividad mundial, es decir, una suerte de interdependencia compleja en esteroides. Obviamente, plantea retos para el concepto tradicional de Estado-nación y la sempiterna preocupación por la soberanía. Para los liberales, la globalización ha sido una fuerza unificadora; para nacionalistas y populistas, ha sido una fuerza divisoria de gran alcance.

La narrativa tradicional sobre globalización la hace ver como un fenómeno enteramente positivo, casi milagroso, gracias al cual Estados, comunidades y hogares están unidos en una economía global mediante entramados complejos de comercio, finanzas y redes de producción globales. Tal fue su éxito que, antes de la Gran Recesión iniciada en 2008-2009, la globalización económica, medida en términos de flujos de capital, bienes y servicios, había alcanzado niveles históricos.

La globalización moderna implica una revolución en los transportes y las tecnologías de la comunicación. Esto hizo posible manejar redes de producción *just-in-time* intercontinentales y movilizar personas con pensamiento similar en tiempo real de forma virtual. Ahora bien, la escala e intensidad de la conectividad global han creado interdependencias sistémicas de gran complejidad que generan profundas vulnerabilidades también sistémicas. La pandemia de COVID-19 lo hizo evidente.

El otro fenómeno que también vino aparejado con esta globalización es el aumento en el flujo de personas y patrones migratorios globales modificados, que incluyen lo mismo movimientos del Sur al Norte que de Este a Oeste. Si se mueven los bienes, los servicios y los capitales, es evi-

dente que también se moverán las personas, pero ese aspecto de la panacea en la que se convirtió la globalización según la narrativa liberal empezó a generar reacciones en contra y a volverse un tema escabroso políticamente.

Al final, la globalización es la madre de todos los cambios estructurales en la escala de la organización social y económica humana. Como todo cambio estructural, no se experimenta de manera uniforme en todo el mundo, con sus obvias consecuencias para la inclusión y la distribución de la riqueza. En consecuencia, esto que parecía tan inofensivo y natural desde la perspectiva económica liberal, resulta que también es un cambio disruptivo asociado con transformaciones significativas que crean un mundo mucho más complejo, peligroso e impredecible desde la perspectiva política y social.

¿Qué pasó exactamente cuando la globalización se aceleró? En países como Estados Unidos, Francia o Reino Unido, la producción industrial se relocizó en Asia, concretamente en China, con la consecuente pérdida de empleos bien pagados y también desempleo de largo plazo (Kleine-Brockhoff, 2019). Esto rápidamente se tradujo en el aumento en la desigualdad en la distribución del ingreso. En Estados Unidos, el sueldo promedio no ha aumentado desde los años ochenta. Todas las ganancias derivadas de la innovación de la era digital han ido a parar al 10 % superior de la pirámide; esto implica que ese 10 %, de representar el 34 % del PIB en 1980, pasó a ser prácticamente el 50 %. Por eso no es difícil comprender que la población promedio se pueda sentir víctima de la globalización y de una nueva oligarquía depredadora que se queda prácticamente con medio pastel a sus costillas.

En otras latitudes, por ejemplo, el norte y centro de Europa, las cosas son distintas. Las economías han crecido desde el final de la primera década de este siglo en países como Suecia y, en Alemania, antes de la invasión rusa de Ucrania, la situación merecía hablar de un “segundo milagro” económico, con amplias regiones reportando prácticamente pleno

empleo y sin los niveles de desigualdad de Estados Unidos. Por consiguiente, es difícil hablar aquí de sociedades victimizadas por la globalización y, no obstante, se presenta también una revuelta antiliberal. ¿Por qué?

La explicación está en la tesis cultural, es decir, el sentimiento de alienación cultural y desarraigo. Esta explicación no ha sido la tradicional para explicar la revuelta populista global y la deriva autoritaria, pero hay que prestarle más atención, si se quiere revertir estas tendencias. En general, las mayorías liberales gobernantes en Occidente no solo ignoraron durante años las opiniones opuestas en temas como migración y política identitaria, sino que las han deslegitimado. Cualquier manifestación que no encajara en el pensamiento liberal dominante rápidamente se tildaba de “sexista, racista o fascista”, en una suerte de “liberalismo iliberal” en el que solo se toleran, paradójicamente, las visiones liberales. En este caso, entonces, no se trata de un problema de desigualdad en el ingreso, sino de desigualdad en la atención prestada, es decir, una suerte de “asimetría del respeto”. La población que por tradición cultural no comulga con el liberalismo a ultranza busca en los nuevos liderazgos autoritarios o semiautoritarios la reivindicación de su dignidad frente a las élites que la ha tenido sojuzgada.

Al final, no importa si la explicación que más pesa es la económica o la cultural. Ambas se derivan de una crítica a la globalización. Si la gente se considera en desventaja en términos económicos o marginada culturalmente, en ambos casos asume que la fuente de la opresión viene de fuera, es decir, que tiene que ver con los migrantes o con una élite liberal y cosmopolita global a la que la élite de su país le rinde culto y por eso hay que acabar con ella.

Los populistas ganan terreno frente a los liberales, se trate de la explicación económica o de la cultural. Si se trata de la económica, los populistas ganan porque son los únicos que dicen que la promesa de la globalización no se cumplió. Los líderes políticos liberales o de centro hicieron creer durante mucho

que mantenían el control sobre los efectos negativos de la globalización, mientras periódicamente se escondían detrás de acuerdos comerciales o de la competencia global para justificar las pérdidas para la sociedad. En el caso de la explicación cultural, los populistas son los primeros en abandonar la corrección política y en alentar a sus seguidores a expresar sus sentimientos antiinmigrantes, racistas, de supremacismo blanco o en contra de minorías como la población LGBTI+. Los sectores más conservadores sienten que se pueden deshacer de la mordaza que les habían impuesto los liberales para rechazar plenamente el liberalismo social, ese que, según la narrativa de 1989, nos uniría más en democracia y libertad.

CEGUERA DE TALLER

La laxa interpretación de los sucesos de 1989 y de sus consecuencias para el orden internacional hizo que los liderazgos occidentales cayeran en la complacencia, al pensar que el futuro sería tan rosa como ellos mismos se lo imaginaron. Al considerar que realmente el fin de la Guerra Fría fue un triunfo de un modelo sobre otro, se creyeron invencibles y pensaron, como buenos liberales ilustrados, que la historia era progreso y que mañana estaríamos mejor que hoy. La paz perpetua de Kant se había hecho realidad. Esto los hizo, por un lado, arrogantes y triunfalistas con respecto al poder de Occidente y, por otro, les hizo creer que era inevitable que el mundo entero siguiera sus pasos, al no haber alternativa posible.

Dado que el conflicto ideológico había tocado a su fin –Fukuyama aclaró que no se refería realmente al “fin” de la historia, sino de la rivalidad ideológica–, no había por qué cuestionar el modelo. Todo sería coser y cantar, si se adoptaba el paquete de democracia liberal, economía de mercado, comercio libre y cooperación internacional. Estos elementos, ingredientes del Consenso de Washington y su receta de cambio estructural para cualquier caso y en cualquier lugar, estaban dados y, por tanto, no tenían que defenderse o justificarse. De aplicarse

como previsto, cualquier país podía convertirse en parte del Occidente vencedor de la Guerra Fría y creyente en un futuro democrático glorioso y eterno.

Pero no sucedió así. Primero, apareció la crisis de la globalización y de su variante radical, la hiperglobalización, y, luego, la crisis del orden liberal global en la que seguimos inmersos. ¿Cómo se llegó ahí? Parte de la respuesta está en la Gran Recesión o crisis financiera global que inició en 2008-2009, la cual dio impulso al resurgimiento de los populismos nacionalistas y a un amplio desencanto público con el “sistema” que la produjo, pero también con el que le dio “solución”. Quién lo diría, el modelo liberal empezaría a morir desde adentro y no desde afuera, dado que Occidente no tenía enemigo a la vista tras el fin de la Guerra Fría (Mearsheimer, 2019).

China, un rival potencial, tuvo su propio 1989 con características chinas –con resultados muy distintos al 1989 europeo– y Occidente le dejó llevar a cabo su apertura económica pensando que irremediablemente seguiría la apertura política. Eso no pasó. Rusia parecía que se convertiría en un Estado normal sobre las cenizas de la Unión Soviética, y Occidente albergó esperanzas de que se democratizara. Cuando Moscú se alejó de la receta liberal, se le dio más tiempo. Hoy queda claro que Rusia no busca ceñirse al modelo liberal. Tanto China como Rusia han traído de vuelta al escenario internacional la rivalidad entre grandes potencias, y han tomado por sorpresa al Occidente autocomplaciente que pensó que dominaba el mundo por ser el creador de un modelo superior según su autodiagnóstico.

Cabe hacer un apunte sobre lo acontecido en Europa Central y Oriental. A casi veinte años de la “gran ampliación” de la UE, hay que reflexionar sobre si la narrativa que adoptó Occidente sobre los sucesos de 1989 se cumplió. A primera vista, parecería que sí, dado que esos países transitaron hacia la democracia liberal y adoptaron la economía de mercado; hicieron todas las reformas necesarias para incorporarse a la Organización del Tratado del

Atlántico Norte (OTAN) y también a la UE, y se asimilaron a Occidente aparentemente sin tropiezos. No obstante, hoy queda claro que para esos países la prioridad no fue la adopción del modelo liberal, sino su liberación del yugo soviético, es decir, su independencia, una vieja deuda histórica de esa región europea. Si a cambio de esa independencia y de su estatus como Estados-nación de propio derecho adoptaron el modelo, no necesariamente lo hicieron integralmente o al menos no con respecto al liberalismo social y a la heterogeneidad étnica que implica el cosmopolitismo occidental con su concepto de sociedades abiertas, incluso si este no aplica cabalmente en Europa Occidental, dados los problemas de integración que experimentan las sociedades de Alemania, Francia o Italia. El cosmopolitismo agnóstico de Occidente no es un credo universal ni siquiera para el propio Occidente. Al final, en países como Hungría o Polonia, parece pesar más el nacionalismo que el liberalismo, dado que este último fue solo una herramienta para liberarse del dominio soviético, pero no algo que adoptaran por convicción. La crisis de refugiados de 2015 lo hizo más que evidente, como lo siguen haciendo otras tantas medidas que chocan de frente con los valores, intereses y normas de la UE.

CONSIDERACIONES FINALES

El legado de 1989 es complejo y contradictorio, pero hoy más que nunca es importante entenderlo si queremos encontrar la punta de la madeja para deshacer el nudo que hoy atenaza a la democracia liberal en Occidente. Las lecciones que se derivan de la lectura simplista y el optimismo desbordado deben llevarnos a ser más cautelosos con las interpretaciones que hagamos en adelante. Por ejemplo, hoy que la democracia se encuentra amenazada en el mismo lugar en donde inició todo en 1989, Polonia, habría que preguntarse si podemos seguir apostando por diagnósticos y recetas únicas, aderezados de buenas intenciones. Ningún cambio estructural está exento de costos y pensar, como hacen tantos liberales, en que eso no importa, dado que en el agregado y en el largo plazo todos es-

haremos mejor es sembrar semillas amargas para el futuro. Hay que decirlo con todas sus letras: la democracia liberal ha fracasado en mejorar la vida de todos por igual. Ni siquiera el experimento más exitoso de la historia moderna, la integración europea, puede escapar de las consecuencias de haber sobresimplificado las “revoluciones de terciopelo” y lo que implicaría ampliarse hacia el este tan rápido y con tantos miembros. Valga hoy esa advertencia para cuando haya que dar el siguiente paso en el proceso de ampliación.

En cuanto a si 1989 fue el triunfo arrollador de la libertad sobre el autoritarismo y, en consecuencia, de un único modelo para alcanzar el éxito, es evidente que hay que moderar los ímpetus de entonces y pensar que el modelo por sí mismo tiene poco valor. Hay que prestar más atención a la realidad en el terreno, a los desarrollos cotidianos, y entonces quedará claro que no puede vivirse solo de la narrativa o de las promesas de un futuro mejor, y mucho menos en sociedades que hoy experimentan más o menos desigualdades, pero que son desiguales al fin. Y habrá que subrayar que no es solo la desigualdad de ingreso o riqueza, sino también la desigualdad de trato o la percepción de no ser parte de la comunidad liberal y cosmopolita que habita en la “aldea global” y se considera “ciudadana del mundo”.

Contrario al exitoso eslogan de campaña de Bill Clinton en 1992 –*“It’s the economy, stupid!”*–, lo que tenemos hoy es el retorno incendiario de la política y de las consecuencias de haberla ignorado durante más de tres décadas, rendidos ante la supuesta perfección de los modelos económicos. Para ponerlo en los mismos términos, *“It’s politics, stupid!”*, y es en la política y en la sociedad en donde tiene que ponerse toda la atención. Hay que saber en dónde se está librando la batalla y evitar caer de nuevo en la tentación de creer a pies juntillas en la narrativa simplista pero seductora de los economistas liberales, tan empeñados en decir que el mundo sin fronteras en el que bienes, servicios y capitales –pero definitivamente no personas– se mueven libremente es lo más cercano al Paraíso.

Hay que recordar que la democracia liberal no se instala de forma permanente; hay que luchar por ella cada día. Por eso hay que asegurarse de que quienes se presenten como demócratas en cada elección de verdad lo sean y no hagan un mero uso instrumental, electoral y cortoplacista de la democracia liberal para luego minarla desde adentro. Los partidos políticos también deben ser sujeto de escrutinio para garantizar que sean verdaderas instituciones mediadoras entre el gobierno y la sociedad, y que tengan plataformas electorales de sustancia y no una colección genérica de promesas para ganar votos y olvidarse después de quienes los votaron.

También hay que recordar que el terreno político no es ni remotamente el mismo que en 1989. Hoy, hay dos elementos cruciales para tener en cuenta: por un lado, las nuevas tecnologías son elemento esencial del juego y, si bien pueden considerarse herramientas para la democratización, su capacidad para la manipulación también puede ser infinita, sobre todo entre quienes no saben manejarlas. Por eso, hoy es más complicado predecir la conducta del electorado, dado que el votante no se guía exclusivamente por el estado de su bolsillo, sino que también puede estar buscando otras cosas, mucho más difíciles de asir y medir, como puede ser la dignidad o el sentido de pertenencia a la comunidad política.

Por otro, hay que considerar que el terreno no es parejo. Que todas las sociedades en la era posterior a la fase de hiperglobalización y que han sufrido sus consecuencias experimentan desigualdad en mayor o menor medida. Esa desigualdad es un obstáculo para que se afiance la democracia liberal, dado que no hay un principio de igualdad real desde el cual partir. La democracia liberal ofrece beneficios intangibles que se pueden disfrutar y defender cuando se tienen las necesidades básicas cubiertas, incluida la autopercepción de pertenencia a una comunidad. Si esos mínimos no están cubiertos, se le exigirán a la democracia liberal cosas que no puede cumplir en el corto plazo o en lo particular, y se terminará por atacar a la democracia liberal como un todo en vez de ver que el pro-

blema es otro subyacente. Ahí radica el éxito de los populistas cuando ofrecen soluciones simples a problemas muy complejos mientras erosionan la democracia desde el poder.

Nada está escrito ni es inevitable, pero sí puede anticiparse que la batalla por la democracia liberal será larga, compleja y de pronóstico reservado. Si logramos desprendernos de la narrativa original de 1989, en donde la democracia y la libertad triunfaron por su superioridad moral, tendremos mejores armas para dar la pelea. La democracia liberal no es una condición natural; hay que construirla y defenderla de otras fuerzas muy poderosas como el nacionalismo y cualquier otra ideología excluyente. El libre mercado no lleva por sí solo a sociedades libres; el capitalismo es también compatible con el autoritarismo. La democracia es una idea poderosa, pero puede colapsarse si no satisface las expectativas que se generan en torno a ella. Hay que ser claros: la democracia liberal no es una panacea en sentido alguno y, además, puede –y debe– cambiar para adaptarse a las nuevas circunstancias, pero necesita de mucho trabajo ciudadano cada día. En ese sentido, las democracias no se mueren porque sí, sino porque dejamos de prestar atención. Sirva esta reflexión como recordatorio de que no hay respuestas fáciles para preguntas complejas, que no hay triunfos o derrotas permanentes, y que lo que está en juego es demasiado importante como para dejarlo exclusivamente en manos de unos cuantos.

REFERENCIAS

Fukuyama, Francis, “The End of History?”, *The National Interest*, núm. 16, Summer 1989, pp. 3-18.

Fukuyama, Francis, *The End of History and the Last Man*, New York, Free Press, 1992.

Kleine-Brockhoff, Thomas, “Liberal Overreach and the Misinterpretation of 1989”, en Kleine-Brockhoff, Thomas; Kornbluh, Karen; Oertel, Janka; Hockenos, Paul; Smoczynski, Wawrzyniec; De Hoop Scheffer, Alexandra; Quencez, Martin; Techau, Jan; Janes, Jack; Brady, Anne Marie; Rosenberger, Laura, y Gorman, Lindsay, *Reassessing 1989: Lessons for the Future of Democracy*, German Marshall Fund of the United States, 2019.

Mearsheimer, John J., “Bound to Fail: The Rise and Fall of the Liberal International Order”, en *International Security*, vol. 43, núm. 4, Spring 2019, pp. 7-50.

Przeworski, Adam, *Crises of Democracy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2019.

Tausendfreund, Rachel, “Introduction”, en Kleine-Brockhoff, Thomas; Kornbluh, Karen; Oertel, Janka; Hockenos, Paul; Smoczynski, Wawrzyniec; De Hoop Scheffer, Alexandra; Quencez, Martin; Techau, Jan; Janes, Jack; Brady, Anne Marie; Rosenberger, Laura, y Gorman, Lindsay, *Reassessing 1989: Lessons for the Future of Democracy*, German Marshall Fund of the United States, 2019.

Whiting, Kate y Park, HyoJin, “This is why ‘polycrisis’ is a useful way of looking at the world right now”, World Economic Forum, 7 de marzo, 2023, (DE, 7 de septiembre, 2023: <https://www.weforum.org/agenda/2023/03/polycrisis-adam-tooze-historian-explains/>).

LOS VÍNCULOS ENTRE LA GLOBALIZACIÓN Y LAS AMENAZAS A LA DEMOCRACIA LIBERAL

Ana Luisa Trujillo Juárez¹

La globalización es un fenómeno tecnológico, social, económico y cultural que ha permeado en la vida de absolutamente todos los habitantes de este mundo. Hoy vivimos una realidad con características inusitadas que nos llevan a tener una estrecha relación con la tecnología, ya que una buena parte de nuestras actividades dependen del uso de internet y de dispositivos electrónicos. Eso, nos ha llevado a que el mundo se haya hecho más pequeño; es decir, las distancias y los trayectos se han acortado, la información se desplaza a tal velocidad que es posible enterarse en tiempo real de prácticamente todo suceso ocurrido en cualquier parte del mundo. Actualmente, es posible adquirir productos o consumir alimentos provenientes de los lugares

más lejanos de nuestro país a precios similares a los que tienen en su país de origen. Las redes sociales se han convertido en una especie de foro mundial, en donde el inglés es la lengua universal en la que se expresan millones de seres humanos respecto de temas que se convierten en asuntos de la opinión pública mundial. Pero ¿cómo ha influido la globalización en nuestra manera de pensar la democracia y en las formas de organización? ¿Somos sociedades más tendientes a procesos democráticos? ¿La globalización ha deteriorado a la democracia? En estas líneas se trata de dar algunas pautas al respecto.

IDEAS EN TORNO A LA GLOBALIZACIÓN Y SUS EFECTOS EN LAS SOCIEDADES DEL SIGLO XXI

La globalización no es un fenómeno nuevo; hay quienes señalan que la primera etapa de la globa-

¹ Profesora investigadora adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la FCPyS-UNAM. Miembro de la Unidad de Estudio y Reflexión Europa + del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi). Es responsable del proyecto de investigación PAPIIT “La consolidación de la identidad europea a partir de la implementación del Programa Next Generation (2021-2027). La Política Social Europea como eje de cohesión”. Contacto: trujillo@politicass.unam.mx

lización inició con el descubrimiento de América y el enorme intercambio de productos que se generó a partir de entonces. Otros señalan que en realidad las manifestaciones de la globalización pueden ubicarse en la etapa de expansión del capitalismo durante la segunda fase de la Revolución industrial, en el siglo XIX. Sin embargo, es una realidad que el avance de la tecnología observado durante los últimos cincuenta años del siglo XX, como, por ejemplo, el primer vuelo del Concorde (en marzo de 1969), el primer avión comercial capaz de hacer trayectos trasatlánticos en cuestión de siete horas; el desarrollo de internet a partir de los años setenta, con la red de nodos de Arpanet entre diferentes universidades en Estados Unidos, y su posterior masificación a partir de los años noventa; o bien el desarrollo de los teléfonos celulares, que empezaron a comercializarse en la octava década del siglo pasado y que se popularizaron a finales de la década de los noventa, han cambiado por completo nuestra forma de ver el mundo y relacionarnos. No es necesario explicar al lector lo que ha sucedido a partir de los teléfonos inteligentes, comercializados de forma masiva a principios de los años 2000. La posibilidad de transmitir en vivo, tomar fotos o documentar cualquier suceso en tiempo real ha diluido hasta cierto punto la línea que separaba el ámbito público del privado. Actualmente, no concebimos la vida sin los teléfonos móviles junto a nosotros a cada momento del día, pues se han convertido en herramienta de trabajo, entretenimiento, comunicación e información. Es evidente que todas estas tecnologías han dado un impulso descomunal a las posibilidades de comunicación, intercambio y crecimiento económico.

Desde una primera aproximación, estas condiciones seguramente hubieran fascinado a hombres y mujeres de otros tiempos al pensar en la posibilidad de conocer regiones distantes, intercambiar ideas con personas de diferentes nacionalidades, conocer costumbres, tradiciones y sabores de culturas desconocidas. Desde esta perspectiva, se estaría formando uno de los grandes ideales que muchos intelectuales y pensadores tuvieron a partir de sus experiencias en guerras y luchas encarnizadas por

la tierra y las rutas de comercio. La posibilidad de una sociedad mundial, basada en valores universales como el respeto, la solidaridad, la amistad, la honestidad, la gratitud y el amor por la vida en todas sus formas, abre la puerta a una verdadera fraternidad universal en donde se haga posible esa paz perpetua de la que hablaba Emmanuel Kant o esa sociedad posnacional que señalaba Jürgen Habermas en sus escritos. Pareciera que se esbozaba esa sociedad ideal que se movería no a partir de intereses nacionales o de los de las élites, sino que tomara como estandartes aquello que considerara que va acorde a los valores universales. En términos ideales, la globalización es un fenómeno casi natural en la trayectoria de la historia de la humanidad y se convierte en un espacio de enormes oportunidades para el desarrollo de los pueblos del mundo.

Pese a todas estas posibilidades y expectativas, lo cierto es que la globalización no ha traído consigo esa enorme oportunidad de construir una sociedad más fraterna y próspera. Por el contrario, los procesos globalizadores han generado en las sociedades modernas un sentimiento de “indefensión” y zozobra frente a embates provenientes del exterior. El mundo se convirtió en lo que Octavio Ianni (Ianni, 1994) denominó una aldea global en la que se puede comprar y vender toda clase de productos. En este sentido podemos ver dos caras de misma la moneda: por un lado, existe la posibilidad de adquirir productos a bajo precio, pues se cumple la máxima económica de la ventaja comparativa, pero, por otro, se crean empresas y monopolios transnacionales que van desplazando compañías y negocios locales que no pueden competir en precios ni mercancías, lo que también genera desempleo. Adicionalmente, estas transformaciones económicas han derivado en un proceso de homogeneización de patrones de consumo y de costumbres que también ha generado la deslocalización de empresas y fábricas en búsqueda de mano de obra más barata, menos impuestos y regulaciones laborales mínimas.

Es así como la atracción de inversión, de capitales y de empresas se convirtió en un factor decisivo en

el diseño de la política exterior de muchos Estados en desarrollo. La desregulación de los mercados en aras de mostrarse como un destino atractivo para los grandes capitales hizo que los Estados relajaran sus reglamentos y disposiciones enfocadas en la promoción de derechos laborales, y, al mismo tiempo, propició el establecimiento de políticas económicas que no siempre actúan en favor de los sistemas de bienestar y la calidad del empleo.

En estas condiciones, resulta lógico que, al desplazarse el capital, con él también se desplazarán las personas. Es decir, la globalización ha incitado el incremento de movimientos migratorios, ya que cada vez más individuos tienen que dejar sus lugares de origen en búsqueda de oportunidades de desarrollo. Es lógico y natural que, si hay traslados de capital de una región a otra, suceda lo mismo con la mano de obra. En contraste, los Estados no están preparados para gestionar los nuevos flujos migratorios y las dinámicas nacionales que se pueden derivar de ellas.

En otro orden de ideas, la globalización también ha transformado la cultura y el desarrollo de las comunidades. Muchos hubieran creído que a la luz de los procesos globalizadores los pueblos del mundo se mostrarían mucho más abiertos y receptivos a nuevas costumbres y a sincretismos culturales, pero no ha sido así. Si bien hoy en día no hay región o cultura alguna que no haya recibido algún tipo de influencia del exterior, también es verdad que estos estímulos culturales provenientes del exterior han generado un proceso de redescubrimiento de las comunidades y sentido de protección de las tradiciones autóctonas. Por tanto, puede afirmarse que las sociedades han comenzado un proceso de revalorización que las lleva a retomar su esencia y a mostrarse como culturas únicas y valiosas en el mundo. Un buen ejemplo de esto es lo que ha sucedido con el Día de Muertos en México.

GLOBALIZACIÓN Y NEOLIBERALISMO: DESAFIANDO LA CAPACIDAD DEL ESTADO

Frente a un escenario tan complejo, es necesario preguntarse qué papel ha desempeñado el Estado frente a un fenómeno que tiende a traspasar y desvanecer fronteras nacionales y a permear todos los aspectos de la vida humana, incluso hasta el punto de estimular hechos que están fuera de la regulación estatal. Cabe pensar, por ejemplo, en las redes del crimen organizado dedicadas al tráfico de drogas, armas, personas, a la piratería o las transacciones en la *deep web*. Pareciera que en este escenario en donde la sociedad se mueve y reproduce a partir de miles de transacciones a nivel mundial, el Estado se ve rebasado y obsoleto en regulaciones y alcances. Incluso, durante la primera década del siglo XXI algunos analistas llegaron a plantear el fin de la organización estatal, con el argumento de que la soberanía de los Estados se vería vulnerada irreversiblemente.

Sin embargo y contra todo pronóstico fatalista, el Estado sigue operando como unidad fundamental de las relaciones internacionales, aunque ahora manifiesta su soberanía de formas disímiles y busca satisfacer el interés nacional mediante distintos mecanismos. Es decir, la globalización lejos de desaparecer al Estado y crear esta sociedad posnacional, ha llevado a las entidades estatales a diseñar mecanismos regionales que le permitan resistir los efectos negativos de la globalización y los riesgos a la seguridad derivados de estos. No es casualidad que, a la par del avance de las rondas de negociación de la Organización Mundial del Comercio (que pretendían crear una zona de libre comercio mundial) durante los años noventa se hayan diseñado y fortalecido una gran cantidad de mecanismos de integración regional y zonas de libre comercio. Muestra de ello son la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1992, el Mercado Común del Cono Sur (Mercosur) en 1991

o la consolidación del proceso de integración europeo mediante el Tratado de Maastricht firmado en 1991 que consolida el mercado común europeo y a la Unión Europea (UE) como entidad con personalidad jurídica internacional.

A la par de este proceso globalizador del que ya se ha hablado, se fue desarrollando una nueva teoría económica que relanzó el pensamiento liberal y las ideas del libre mercado. La teoría neoliberal plantea que las acciones de los gobiernos se deben enfocar en la desregulación de la economía, la reducción del Estado mediante la venta de empresas estatales, la apertura al capital privado en sectores que antes estaban reservados solamente para el Estado, el adelgazamiento de la administración pública y el fomento de las libertades económicas mediante la relajación de normativas fiscales y laborales, todo con el fin de generar condiciones de crecimiento y prosperidad. El neoliberalismo, comenzó a ser la opción preferida de gran cantidad de gobiernos en todas las regiones a partir de los años setenta del siglo XX. Basta recordar la gestión de Margaret Thatcher en Reino Unido (1979-1990), Ronald Reagan en Estados Unidos (1981-1989), Carlos Salinas de Gortari en México (1988-1994), Fernando Henrique Cardoso en Brasil (1995-2003) o Carlos Saúl Menem en Argentina (1989-1999).

La puesta en marcha a nivel mundial de un modelo económico neoliberal, combinado con un esquema globalizador detonó un crecimiento económico sin precedentes en la historia de la humanidad. Basta revisar la información estadística que publica el Banco Mundial año con año. La apertura comercial fue para muchos países en desarrollo y no desarrollados una oportunidad de alcanzar el crecimiento económico y, con eso, la posibilidad de encontrar soluciones a problemas históricos y estructurales como la pobreza, la desigualdad y el atraso. En el caso de los países de renta alta, significó una vía para potenciar sus capacidades económicas e incursionar en nuevos mercados. Además, con el fin de la Guerra Fría las ponderaciones sobre el poder y el liderazgo internacionales se trasladaron del ámbito militar y la carrera armamentista, al espa-

cio económico, la competitividad, la lucha por los mercados, la inversión y la coerción económica como estrategia de política exterior.

En términos generales y a partir de indicadores macroeconómicos, es verdad que, derivado de la implementación de un modelo neoliberal durante las últimas décadas del siglo XX y las primeras del presente siglo, hay un crecimiento importante del Producto Interno Bruto (PIB) y el Producto Interno Bruto per cápita (PIB per cápita) y que cierto número de regiones han podido salir de la pobreza extrema. En contradicción, hoy no se puede hablar de un avance significativo en términos de reducción de la pobreza en el ámbito global, ni de mejores condiciones de vida para el mundo. La desregulación estatal y la apertura de mercados han traído mucha más incertidumbre a los distintos sectores que integran la economía de los países y a las sociedades en general, lo que en términos reales también ha transformado la forma en la que los individuos perciben a sus gobiernos y la posición que sus países ocupan en el escenario internacional.

En este proceso desregulador, hay una lucha entre Estados por atraer la mayor cantidad de inversión extranjera, incluso a costa de rebajar impuestos, simplificar legislaciones laborales o reducir las disposiciones relacionadas con la protección del medio ambiente. Las consecuencias han sido diferentes tanto en países desarrollados como en los en vías de desarrollo. En los primeros la globalización y la apertura de mercados se han convertido en un proceso de deslocalización de empresas nacionales que en búsqueda de menores impuestos, regulaciones ambientales más relajadas y mano de obra barata dejan sus lugares de origen, y generan desempleo, disminución de la inversión y deterioro de las comunidades. En el caso de los países en desarrollo, esos procesos han generado empleos mal pagados y precarios, no han redituado en las arcas del Estado pues las ventajas fiscales para las empresas transnacionales en muchos casos son altas, al tiempo que generan contaminación y daño ambiental.

Al adoptar modelos neoliberales y reducir los subsidios, así como los programas sociales y de asistencia los Estados han menguado su autoridad como reguladores y distribuidores de la riqueza, lo que atestigua el aumento de la desigualdad entre las personas y la erosión de la clase media. Así, la movilidad social se está convirtiendo en un mito no solamente en países en desarrollo y no desarrollados, sino también en países considerados de renta alta.

Este es un momento complejo y lleno de paradojas, pues, por un lado, el aumento en el intercambio de bienes, servicios, productos y capitales ha incrementado el PIB mundial y nacional; sin embargo, este crecimiento no ha permeado en todos los sectores de la sociedad. Los modelos neoliberales no han encontrado equilibrio entre prosperidad económica y distribución equitativa. Hoy sabemos que crecimiento no es igual a desarrollo. Un efecto significativo de esto es lo que sucede con las clases medias. Sin duda, es un sector en deterioro, pues, pese a la posibilidad de contar con un empleo, sus condiciones de vida se reducen al ver que sus trabajos son cada vez más precarios e incapaces de garantizar la satisfacción de los requerimientos mínimos para tener calidad de vida, lo que al final genera incertidumbre, inestabilidad, malestar y desconfianza hacia las instituciones y los gobiernos nacionales.

Por tanto, la globalización no nos ha llevado a la construcción de una sociedad próspera y equitativa. Por el contrario, ha generado sentimientos de rechazo, descontento y zozobra en prácticamente todas las sociedades del mundo. Hoy, puede afirmarse que la autorregulación de los mercados y su capacidad de proveer beneficios para todos por medio del crecimiento económico no es verdad. Es una realidad que el proceso de globalización no tiene vuelta atrás y que tampoco ha desaparecido al Estado; no obstante, se requieren adecuaciones en las formas de organización que ayuden a las sociedades a solventar los cambios derivados de las dinámicas globales y, que, lejos de deteriorar, fortalezcan los procesos democráticos en el ámbito nacional.

RIESGOS PARA LA DEMOCRACIA LIBERAL

Una vez hecho el esbozo de cómo la globalización ha afectado a las sociedades de nuestro tiempo, resulta necesario explorar cómo la globalización ha cambiado la forma en la que nos organizamos y la manera en que entendemos la democracia y los procesos electorales hoy. En primera instancia, nadie podría pronunciarse abiertamente en contra de la democracia; todos los pueblos del mundo aspiran en mayor o menor medida a ser regímenes democráticos y libres. Estas aspiraciones deben enfocarse en promover sistemas políticos representativos en los que se puede elegir entre más de dos opciones y en donde se pueden preservar los derechos de las personas, el respeto a las minorías, el orden jurídico-político y el bienestar social. Ahora bien, si hay un consenso claro acerca de la democracia como el mejor sistema político y hoy más que nunca existe una gran cantidad de países con sistemas que se autodenominan democráticos ¿por qué existe un desencanto tan marcado hacia la democracia?

En primer lugar, hay que señalar que la democracia ha ido expandiendo sus alcances, o bien, se le han sumado exigencias a su desempeño. En la actualidad los ciudadanos no solo consideran democrático a un régimen en el que se pueden llevar a cabo procesos electorales limpios, sino que también comienzan a exigir que esos regímenes garanticen condiciones de equidad, justicia e igualdad de oportunidades para todos los habitantes. Eso pone a los regímenes democráticos una losa difícil de cargar sobre todo a la luz de los efectos que han tenido la globalización y el neoliberalismo en la economía nacional y en las capacidades del Estado para resolver problemas. Esta aseveración se hace indiscutible si se toma como ejemplo lo sucedido durante la crisis financiera y económica de 2008, cuando el gobierno de Estados Unidos y de varios países de la Unión Europea otorgaron generosos préstamos bancarios a instituciones financieras para efectuar un rescate bancario, todo a cuenta del erario y sin importar que para lograrlo se tuvieran que ajustar

las finanzas públicas e implementar numerosos recortes al gasto público, sobre todo en programas sociales y subsidios.

En palabras de Héctor Zamitiz (Zamitiz, 2018), la crisis económica ha dejado entre sus secuelas más graves, no solo un deterioro en la calidad de vida de muchos ciudadanos sobre todo en Europa y Estados Unidos, sino que también ha causado un daño irreversible en los sistemas democráticos. A partir de estos hechos se hace evidente lo que algunos expertos ya advertían como riesgos a la seguridad y la estabilidad de los Estados. Y es que las sociedades son más estables, participativas y tolerantes en tanto tengan resueltas sus necesidades económicas y mientras sientan que sus gobiernos son capaces de resolver problemas. En el caso europeo, la crisis de 2008 hizo evidente las limitaciones de los Estados para contener crisis y resolver dificultades. Basta recordar que una de las razones por las que la crisis fue de tal magnitud en países de la Unión Europea tiene que ver con la poca legislación en el ámbito supranacional para los temas monetario y fiscal, en contraste con los candados que se le imponen a los Estados en el manejo de su política monetaria, por estar vinculadas al Banco Central Europeo.

Una crisis económica severa como la de 2008 puede ser el parteaguas que marca el momento en el que los ciudadanos se desencantan de los partidos políticos y de sus gobernantes, pues queda latente la percepción de que la política se ha subordinado a las fuerzas del mercado. La idea de que los partidos han dejado de representar a los ciudadanos y sus intereses comienza a ser parte de muchas discusiones en las opiniones públicas nacionales. Los efectos de esta aseveración se reflejan en un posible desdibujamiento de las corrientes políticas, pues, para los ciudadanos los partidos de izquierda, socialistas, socialdemócratas, laboristas; y de derecha, liberales, demócrata-cristianos o conservadores están en una misma categoría: la de partidos tradicionales, parte del *establishment*, y están corrompidos por las fuerzas del mercado.

A partir de ese momento, surgieron con mucha más pujanza los denominados partidos antisistema, cuyas plataformas políticas no necesariamente responden a la lógica tradicional de izquierda (precursores de derechos sociales y del Estado de bienestar) y derecha (promotores del libre mercado), sino que enarbolan desde distintas aristas la lucha contra el orden establecido (generalmente se refieren a la globalización y al neoliberalismo; en el caso europeo a las instituciones de la Unión Europea), con el argumento que este ha sido desfavorable para la mayoría y que ha provocado el deterioro de las capacidades de gestión del Estado, la desaparición del Estado de bienestar, el orden y la paz social. Es así como las disputas políticas se empezaron a definir a partir de partidos tradicionales y antisistema, de forma que ambos terminaron por tomar como bandera el mejoramiento de las condiciones de vida de los individuos y los derechos sociales, aunque ninguno tiene propuestas concretas sobre cómo alcanzar dichos objetivos.

Es importante precisar que los partidos antisistema, que se podrán ubicar como de extrema izquierda o de extrema derecha, han tomado con mucha más fuerza la lucha contra los efectos negativos de la globalización y el fortalecimiento del Estado. A esto, hay que agregar las tendencias populistas de estos grupos, algo que sin duda también representa un riesgo para la democracia pues muchas de estas propuestas no serán verificables en la realidad, ni tampoco serán viables, pero se aprovecharán del hartazgo del electorado y la urgencia de encontrar respuestas a problemas que, dadas las condiciones de interconexión global, escapan de las capacidades del Estado, pero afectan la calidad de vida de las personas. Ejemplo de estas situaciones difíciles de resolver son fenómenos como el desempleo, la precariedad y la inflación que en la actualidad no son solo consecuencia de una mala política económica y monetaria nacional, sino que también son resultado del rompimiento de cadenas de suministro derivado de la pandemia de COVID 19 y del encarecimiento de los combustibles que ha provocado la invasión rusa de Ucrania. Otro ejemplo puede ser la escasez de agua y

el encarecimiento de los alimentos, producto de sequías intensas derivadas del cambio climático.

Como se puede apreciar, los sistemas democráticos están en una encrucijada pues los intercambios y formas de comunicación de las redes sociales han hecho que la ciudadanía sea más exigente, aunque no necesariamente más ilustrada e informada, algo que también contradice las promesas de la globalización. No perdamos de vista el efecto de los bulos y los algoritmos en la búsqueda de información en la red y en la formación de la opinión de los electores antes de una elección. A esto debemos agregar las condiciones de deterioro de la calidad de vida, la escasez del empleo, la incertidumbre en torno al futuro y la urgencia por parte del electorado de encontrar liderazgos que ayuden a las sociedades a recobrar algo de lo que se ha perdido. En este sentido, hay al menos cinco consecuencias de las dinámicas de la globalización que ponen en riesgo a las democracias liberales en la actualidad:

1. *Ascenso de grupos de ultraderecha y partidos anti-sistema.* Este es uno de los riesgos más importantes para las democracias liberales de nuestro tiempo, pues los discursos de los grupos de ultraderecha en muchos casos contruidos a partir de los efectos negativos de la globalización y de la poca eficacia de los gobiernos para resolver problemas, se combinan con discursos populistas y movimientos xenófobos. Estos grupos construyen discursos simplistas que buscan responsabilizar del deterioro de las condiciones de vida a grupos minoritarios, a migrantes y a la apertura comercial. En este sentido, el riesgo se percibe a partir de que, de llegar al poder, pueden socavar las libertades de las minorías, criminalizar a los migrantes, validar discursos de odio y dejar de reconocer pactos y ordenamientos establecidos por gobiernos anteriores.
2. *Desequilibrio en el sistema de gobierno y los poderes del Estado.* Otro de los riesgos es que, a fin de generar respuestas atractivas y rápidas para las sociedades aquejadas por las condiciones actuales, se pueden producir procesos de re-

estructuración y una búsqueda por volver a un orden que, desde la perspectiva de grupos populistas y anti-sistema, fue mucho más favorable para la sociedad. En aras transformar el *statu quo* y lograr una distribución más equitativa, se proponen cambios administrativos que pueden poner en riesgo los cimientos del orden democrático en sí mismo. Las críticas de los poderes ejecutivos hacia los otros poderes que integran al Estado o bien a las instituciones autónomas, en realidad representan riesgos y retrocesos para el orden racional e institucional al que aspiran todas las democracias. Otra muestra de cómo se socava el orden institucional está, por ejemplo, en las críticas y propuestas de Javier Milei en Argentina sobre cómo reestructurar el Estado.

Es evidente que el Estado moderno requiere adaptarse a las sociedades actuales y necesita más instrumentos que le devuelvan el carácter de regulador, sin embargo, es importante no perder de vista que hay una profunda interconexión mundial y una evidente influencia de la tecnología en nuestras sociedades que ya no tiene vuelta atrás. Se requieren acciones multilaterales que se enfoquen en atender aquello que muchos analistas han denominado los bienes públicos mundiales, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, la preservación de la salud y el bienestar social internacional.

3. *Gobiernos inestables.* Los riesgos a la democracia antes mencionados y los gobiernos inestables forman una especie de círculo vicioso. La decepción de los ciudadanos con respecto a la política y los procesos democráticos, el poco interés y el hartazgo derivados de condiciones económicas precarias han dificultado, sobre todo en sistemas parlamentarios, las posibilidades de mantener gobiernos funcionado y con un nivel de aceptación mínimo que los legitime. Las posibilidades de formar gobierno se hacen cada vez más complicadas pues los procesos electorales no muestran tendencias claras que den la mayoría

a un partido político, lo que obliga a los partidos a negociar con distintas facciones para alcanzar la mayoría necesaria para poder establecer un gabinete. En el caso de los sistemas presidenciales, los procesos electorales se convierten en verdaderos coliseos que dejan secuelas políticas y sociales que no siempre pueden sanarse y que en muchos casos se reflejan en la conformación del poder legislativo.

4. *Sociedades polarizadas.* Esta puede ser causa y consecuencia de los riesgos a las democracias actuales. Como señala Moisés Naím (Naím, 2022), los procesos electorales hoy en día se han convertido en verdaderas competencias entre porras o grupos de animación. El nivel de las discusiones se ha rebajado, los discursos han dado paso a los insultos y las descalificaciones de un bando y otro, dejan poco espacio para el análisis de propuestas concretas y reales. Los ciudadanos debemos recuperar la capacidad de debatir, de intercambiar ideas y debemos exigir a nuestros gobernantes y líderes partidistas más autocritica, menos discursos tendenciosos y más resultados cuantificables.
5. *Deterioro de los sistemas de bienestar.* Este es quizás el riesgo más importante para las democracias y uno de los más difíciles de resolver. Los sistemas de bienestar permitieron en su momento mantener en funcionamiento la fórmula perfecta, es decir, Estado de bienestar más sistemas electorales representativos, igual a democracias liberales. En un ambiente de certidumbre, donde las preocupaciones de los individuos con respecto al empleo, el sustento, la vivienda, la educación y la salud están a su alcance se reproducen de manera más propicia los procesos democráticos y el capitalismo. Es mucho más factible el desarrollo de sistemas democráticos en espacios donde los aspectos relacionados con la seguridad social permiten

a los individuos el desarrollo pleno. Se requieren mejores condiciones económicas y sociales de forma que los individuos reduzcan su desconfianza en el futuro, y, así se conviertan en promotores de procesos que generen mayor afinidad con su comunidad, un sentimiento de identidad nacional fortalecido, así como cohesión y paz social.

CONSIDERACIONES FINALES

Estamos en un período de ajuste de los sistemas democráticos liberales, pero no frente a su desaparición. No hay que perder de vista que las apuestas deben ser siempre hacia construir modelos democráticos y representativos. Sin embargo, este fortalecimiento debe nacer del conocimiento de nuestra realidad digitalizada e interconectada con el mundo. Al mismo tiempo, debemos enfocar los esfuerzos hacia la exigencia de mejores condiciones de vida y el cuidado del medio ambiente. Nos toca ser ciudadanos del mundo y ser mucho más responsables de nuestra forma de consumir productos y adquirir bienes, pero también de cómo nos informamos y tomamos decisiones políticas.

Nuestros esfuerzos deben concentrarse en vigilar que se construyan lazos entre los Estados y que el multilateralismo avance desde una perspectiva igualitaria, constructiva y no intervencionista a fin de que se atiendan los grandes problemas globales, es decir todos los Estados deben tomar responsabilidad de acuerdo con sus posibilidades. Dentro de cada Estado, no nos queda más que exigir que los gobiernos favorezcan espacios de diálogo y entornos políticos sanos que construyan instituciones y proyectos racionales que trasciendan, en la medida de lo posible, los tiempos políticos y que al mismo tiempo generen condiciones de bienestar social, elemento fundamental para que las democracias y las libertades se preserven en el mundo.

REFERENCIAS

Beck, Ulrich, *¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización*, trad. de Bernardo Moreno y María Rosa Borràs, Madrid, Paidós, 1998.

Ianni, Octavio, *Teorías de la globalización*, México, Siglo XXI, 1996.

Naím, Moisés, *La revancha de los poderosos*, México, Debate, 2022.

Stiglitz, Joseph, *El malestar en la globalización*, trad. Carlos Rodríguez, Madrid, Taurus, 2002.

Zamitiz Gamboa, Héctor, “De la democracia liberal a la posdemocracia: explicaciones sobre el malestar ciudadano contra las elecciones”, en *Revista de Estudios Políticos*, núm. 45, 2008, UNAM, México, pp. 27-55. URL <https://doi.org/10.22201/fcpys.24484903e.2018.45.67128>

LOS EFECTOS POLÍTICOS DE LA TECNOLOGÍA: POPULISMOS, DEMOCRACIA E INTERNET

Alejandro Pisanty¹

Este ensayo explora las consecuencias de las tecnologías de información y comunicación, específicamente de Internet, sobre las intervenciones políticas de movimientos, partidos políticos y gobiernos democráticos y populistas. Para ese fin, se aplica un marco de referencia de mi autoría denominado 6F para establecer la relación entre fenómenos en línea y sus correlatos preexistentes a Internet o fuera de línea (Pisanty, 2020). En aras de la simplicidad y del espacio disponible, se propone una definición de trabajo de populismo generalmente aceptada. Después de eso se presentan los principios generales de diseño de Internet y, como consecuencia de estos, los seis componentes del marco de referen-

cia 6F. A continuación, se realiza un análisis de las consecuencias diferenciadas de estos factores en la relación que se puede establecer entre Internet y la democracia, por un lado, y el populismo, por otro. Como resultado de este análisis, es posible planear intervenciones en el discurso público en línea que compensen las ventajas desleales que el populismo adquiere al utilizar a su favor estos factores en formas que no favorecen a la democracia.

Para los efectos de este breve ensayo, partiré de la definición de populismo que dice que es un discurso en el que se expresa una concepción maniquea del mundo. En este discurso, la política se concibe como una lucha permanente entre el bien y el mal. En esta lucha, una noción homogénea y unificada del “pueblo” representa la virtud y el bien, mientras que las élites representan el vicio y la corrupción. Según la concepción ideacional, el populismo es:

todo discurso, idea o expresión que tenga tres elementos (Hawkins y Rovira, 2019): a) una concepción

¹ Departamento de Física y Química Teórica, Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Agradezco a la Facultad de Química de la UNAM, mediante su director, el Dr. Carlos Amador Bedolla, y, dentro de dicha Facultad, al Departamento de Física y Química Teórica y a su jefe, el Dr. Jorge Martín del Campo, así como a la Coordinación de Actividades Sociohumanísticas, por medio del Dr. Rolando Bernal, el apoyo para y la oportunidad de realizar esta investigación.

maniquea del mundo, donde todo puede reducirse a una lucha permanente entre el bien y el mal; b) una concepción de “pueblo” en la que adopta la forma de una comunidad homogénea y virtuosa, y c) una elite que es corrupta y viciosa por definición” (Monsiváis-Carrillo, 2021).

Dado que el texto se enfoca en los efectos de la tecnología de Internet en la política, se adopta esta definición de trabajo, en el entendido de que el tema es complejo y objeto de amplios estudios. En diversos momentos de este texto, se puntualizarán, además, características diferenciadoras del discurso populista en tanto oposición política y el que se emite desde el gobierno.

En aras de concentrar el esfuerzo en entender los efectos de la tecnología –específicamente de Internet y de sus aplicaciones– entenderé un contraste entre populismo y democracia. En democracia, las partes que se consideran una a otra como portadoras del bien o del mal coexisten, luchan y buscan la resolución de diferencias en el campo de las ideas, mediante la deliberación y la celebración de elecciones, sin buscar el avasallamiento de la otra parte; admiten que ninguna es portadora de verdades absolutas, inmanentes y eternas, y la sociedad se entiende diversa, plural y cambiante. También se entiende que todos los participantes en sociedad tienen el potencial de incurrir en corrupción, y, por eso, establecen mecanismos de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas que progresivamente hacen cada vez más difícil y costoso incurrir en esas prácticas y otras como el abuso de autoridad. Suscribo también una visión, sin duda inocente, afín al concepto de esfera pública de Habermas como marco de referencia general. Desde luego se entiende que las categorías opuestas a la democracia son más amplias. Se podrán encontrar tratamientos de estos conceptos en otras contribuciones de esta colección de ensayos.

PROPIEDADES DE INTERNET Y MARCOS DE REFERENCIA

Mientras más se expande el acceso a Internet y más se diversifican y vuelven accesibles sus aplicaciones, se vuelve crítico comprender sus propiedades fundamentales, pero esto no ocurre. Un uso puramente instrumental de Internet, especialmente un uso cada vez más dedicado a la comunicación entre personas y entidades sociales, ignora los aspectos más básicos de lo que hace que Internet sea lo que es, y dificulta obtener resultados socialmente deseables a la vez que facilita el abuso deletéreo para grandes partes de la población y para la democracia. Internet es un conjunto de redes interconectadas (“red de redes”) globalmente, con un conjunto único de protocolos técnicos de comunicación adoptados por consenso y un sistema único de identificadores globales, que se administra de manera descentralizada y se coordina mediante la adopción voluntaria de las normas técnicas para los protocolos y acuerdos entre operadores de redes para su interconexión.

La construcción de Internet cumplió, en orden jerárquico, los objetivos de diseño de “mejor esfuerzo” o respuesta a la falibilidad; interoperabilidad de componentes de diferentes tecnologías y fabricantes; apertura frente a la interconexión de cualquier entidad que cumpla con los protocolos técnicos y no destruya la red; robustez de Postel o “ser liberal con lo que se recibe y parco con lo que se envía”; “punta a punta” o “inteligencia en la orilla”, es decir, la red se dedica exclusivamente a enrutar paquetes de información de emisor a receptor de la manera más eficiente posible y las propiedades como seguridad, confidencialidad, fidelidad de imágenes o sonidos, etc., se asignan como responsabilidad de la “orilla”, o sea, emisores y receptores, lo cual también se mapea con base en el principio de Neutralidad de la Red, y un objetivo aspiracional de robustez y resiliencia, así como otro de escalabilidad. De estos se deriva el principio de “innovación sin pedir permiso”, que ha acompañado a Internet durante varias décadas

ya, en el entendido de que significa que la innovación se incorpora a la red sin requerir autorización de una entidad central, pero eso no significa que Internet sea “tierra de nadie” o “el nuevo Viejo Oeste”, y tampoco que impere “la ley de la selva”, ya que toda actividad o entidad en Internet es producto de un agente vinculado a algún territorio y sus leyes, normas y políticas.

Internet está construida sobre dos hipótesis arquitectónicas más fundamentales sobre las cuales se levanta el edificio hasta aquí descrito: la conmutación por paquetes y la arquitectura de capas. La conmutación por paquetes significa que la información que se transmite en Internet está dividida en numerosos pequeños paquetes que están formados por un encabezado y una carga útil. El encabezado, descrito de forma minimalista por simplicidad, contiene el origen, el destino y el número secuencial de cada paquete en cada conversación. El origen y el destino están en una dirección numérica llamada “dirección IP”. El punto esencial de la conmutación por paquetes es que, entre emisor y destinatario, no se utiliza un canal único, aislado, reservado para la comunicación, sino que cada paquete es enviado por aquella ruta en la red que resulta más ventajosa en el momento, y todos son reensamblados en el equipo del destinatario. No siempre es posible determinar con anticipación cuál será la ruta que sigan los paquetes y esta puede incluso cruzar repetidamente fronteras internacionales.

La arquitectura de capas agrupa y aísla conjuntos de funciones como la interconexión física, el enrutamiento de los paquetes, la interpretación de los paquetes por sus funciones como correo electrónico, acceso remoto a computadoras, conversaciones instantáneas, páginas web, videoconferencias, etc., y sus usos por servicios computacionales en la “orilla” como banca, comercio, difusión de video, videojuegos o servicios gubernamentales. Para muchos de estos sistemas, la World Wide Web o WWW que existe en la capa de aplicación es, a su vez, una plataforma que les permite hacer abstracción de lo que sucede en las capas inferiores para hacer posible el acceso a los usuarios finales.

Una consecuencia de la arquitectura de capas es la especialización en cada una de ellas. Así, conectar la capa física es fundamentalmente una tarea de ingenieros en telecomunicaciones y empresas operadoras de redes de cables de cobre o fibra óptica, o de radios de corto o largo alcance, con enlaces radiales paralelos a la superficie terrestre o satelitales. De la misma manera, la regulación de esta capa se centra en la regulación de las telecomunicaciones, como por ejemplo el acceso al espectro radioeléctrico y otros recursos escasos como los derechos de vía, regulación de competencia económica, subsidios y estímulos para conectividad en regiones en las que se presentan fallas de mercado, etc.

¿De qué hablamos, entonces, cuando hablamos de Internet? Para fines políticos y los de este breve ensayo, rara vez se hace referencia directa a los cables, radios, láseres, microondas, *switches*, enrutadores, puntos de acceso WiFi, etc., y la atención se centra en servicios de redes sociales en línea que son servicios computacionales que ofrecen diversas empresas y organizaciones mediante el uso de la capa de aplicación, específicamente la WWW, como plataforma. Y esto nos remite a las características de estos servicios, que son técnicamente un subconjunto muy pequeño de Internet, aunque sean, por otra parte, la cara visible y el motor económico de Internet.

Las redes sociales en línea son servicios computacionales que se ofrecen a través de la WWW o de “apps” (programas computacionales que engloban una serie de funciones equivalentes a las de la página web que almacenan en dispositivos móviles información para su operación), que tienen como función primaria para los usuarios la comunicación entre personas o grupos. La mayoría de estos servicios se caracteriza, además, por contar con un “motor de recomendación” que es *software* encargado de decidir qué contenidos se despliegan ante cada usuario en cada instante; un mecanismo de “moderación de contenido” que regula, corrige e incluso puede revertir los despliegues de contenido, y un mecanismo de monetización a partir de publicidad desplegada a la par del contenido producido o so-

licitado por los usuarios, publicidad que se intenta volver enfocada y personalizada para cada usuario y cada momento con la promesa a los anunciantes de que esta personalización hará más eficiente el gasto publicitario.

En cada una de las funciones mencionadas operan múltiples actores no visibles para los usuarios, como agencias y *brokers* (corredores) de publicidad, que se encargan de correlacionar datos personales de los usuarios y de priorizar diferentes contenidos. Dado que, en el modelo de negocios descrito, la venta de publicidad es el motor generador de ingresos para el operador de la plataforma, la plataforma tenderá a priorizar los contenidos que aumenten el *engagement* (participación, atención, reacciones) de los usuarios. Los algoritmos para ir tomando en tiempo real estos millones de decisiones por segundo no son conocidos públicamente, tanto para proteger el negocio de las plataformas como para evitar abusos extraordinariamente lesivos que el *hackeo* de los algoritmos permitiría.

Se infiere parte de la operación de estos algoritmos *ex post* o mediante “ingeniería inversa” y eso da lugar a industrias como la SEO (optimización de motores de búsqueda) y otros servicios que se ofrecen para aumentar el impacto de quienes los contratan. Esos contratantes pueden ser empresas que buscan aumentar sus ventas, gobiernos que buscan maximizar el beneficio de sus servicios en la población, o actores políticos de variada laya que buscan maximizar el alcance e impacto de sus mensajes.

¿Es más fácil abusar de las propiedades de Internet para propagar el populismo que usarlas constructivamente para defender la democracia? ¿Qué hacen los seres humanos y sus instituciones y qué efecto tiene sobre eso el uso de las tecnologías dominantes?

Describiré ahora concisamente un esquema que permite hacer un mapa entre conductas establecidas antes o fuera de Internet y la forma, muchas veces calificada de disruptiva y profundamente transformadora, que toman en Internet. Hacer esta separación permite tratar por separado am-

bos aspectos –por ejemplo, entender y atender la motivación de los ciberdelincuentes y su uso de los medios comisorios– para volver a integrarlos en busca de soluciones eficaces a problemas reconocidos. Posteriormente se verá cómo operan estos factores de manera diferencial en la actividad de los populismos en el ciberespacio.

Escala Internet

Los principios de Internet y la construcción de la red con base en ellos han permitido, primero, alcanzar a usuarios y productores (“prosumidores”, es decir, productores y consumidores a la vez) en una escala masiva; segundo, una convergencia de medios antes separados, como radio, video o prensa; tercero, un alcance global casi ilimitado, y, cuarto, una enorme velocidad de interacción. Esto puede entenderse a cabalidad a partir de un ejemplo básico: en el correo electrónico, en comparación con el postal, toma unos cuantos milisegundos transmitir un mensaje, el mensaje puede transmitirse simultáneamente a millones de destinatarios y el costo marginal de cada envío es prácticamente cero. Otro ejemplo de la escala de Internet está en las publicaciones en redes sociales en línea, en las que, en cada minuto aproximadamente, 4,000 millones de usuarios suben millones de elementos de contenido como textos, imágenes, sonidos o video, o bien los juegos en línea, en los que simultáneamente millones de jugadores cooperan y compiten con latencias de milisegundos.

Identidad

El único elemento de identidad que proviene propiamente de la capa de Internet es la dirección numérica o dirección IP asignada a cada componente de la red, en muchos casos solo por un instante. Debajo de esta capa está la dirección MAC, que identifica componentes de los equipos; arriba, apenas aparecen en la capa de aplicación elementos de identidad como nombres de dominio y URL para la web, direcciones de correo electróni-

co y, más arriba y sobre todo afuera de la red, en los equipos de la orilla responsables de los servicios en línea, identificadores tales como números de cuenta bancarios, identificadores de registros ante las autoridades electorales (clave de elector, en el caso de México) o fiscales (el Registro Federal de Contribuyentes que proporciona el SAT también en el caso de México), claves de usuario ante sitios de comercio electrónico o entretenimiento, etc. La red por sí sola, por lo tanto, no garantiza la identificación de personas físicas o morales y permite el anonimato y los pseudónimos, con efectos positivos, si se trata de la comunicación en regímenes opresivos, pero negativos, si termina por facilitar a los delincuentes que puedan ocultar su identidad.

Transjurisdiccional

El diseño de Internet no reconoce fronteras políticas. La asignación de direcciones IP puede trascender dichas fronteras y el tráfico las puede atravesar de ida y vuelta. Los nombres de dominio genéricos se asignan sin distinción de nacionalidad ni requerimiento geográfico, cosa que también sucede en muchos dominios “nacionales” o *ccTLD* como .mx, .fr, etc.

Las acciones de cada actor individual o colectivo tienen lugar siempre ante un dispositivo ubicado en algún lugar físico de la Tierra y deben estar sujetas a las leyes aplicables en ese territorio, o, en su defecto, violarlas. Sin embargo, es posible llevarlas a cabo de tal manera que no violen las leyes locales o que las violaciones no interesen a las autoridades locales, y en cambio tengan efecto en otros territorios desde los cuales será difícil rastrearlas y perseguirlas. Este efecto también es ambivalente, pues, por un lado, permite la comunicación sin correr el riesgo de enfrentar la represión en regímenes autoritarios, y facilita el ocultamiento de la acción delincencial hasta volver imposible su persecución. Esto último se contrarresta parcialmente con la acción concertada de autoridades mediante MLAT o acuerdos multinacionales como la Convención de Budapest.

Abatimiento de barreras

La acción coordinada en el ciberespacio permite actividades como la formación y operación de empresas sin requerir numerosas oficinas, almacenes y tiendas. Las oficinas y almacenes por supuesto que tendrán que sujetarse a las leyes, pero el hecho de poder llevar a cabo las operaciones comerciales de catálogos, inventarios, exhibición de mercancías, pagos, cobros e incluso reclamaciones en línea facilita enormemente la formación de nuevos emprendimientos y su alcance internacional. Estos emprendimientos comerciales pueden ser tiendas en línea y medios de comunicación, o no comerciales como organizaciones de la sociedad civil, iniciativas colaborativas globales como *Wikipedia*, etc. De nuevo, se trata de un factor ambivalente, ya que también la organización de complejos ecosistemas criminales en línea, puros o auxiliares de delitos en el espacio físico, se vuelve más fácil.

Reducción de fricción

En términos simplistas, se entiende por fricción el gasto de energía; en Internet, se trata del número de operaciones o pasos necesarios para realizar una acción deseada. La reducción de la fricción es mantra del comercio electrónico y se ha extendido al gobierno electrónico, los juegos virtuales y a casi cualquier otro campo. Su manifestación es la UX o “experiencia del usuario”, en la que con un solo clic se pueden llevar a cabo complejas operaciones bancarias, comerciales, lúdicas, o políticas.

El lado oscuro de la reducción de la fricción es que, si un engaño puede producir una acción de baja fricción, un usuario puede perder su patrimonio con un solo clic, o bien un mensaje engañoso o provocador puede difundirse con una rapidez antes inconcebible, hasta alcanzar en pocos segundos a millones de personas, las cuales, a su vez, lo propagarán con base en la misma baja fricción. Combinado con el *engagement* antes descrito y los factores anteriores de esta lista, la baja fricción es uno de los puntos clave sobre los que se actúa para reducir los posibles

daños de las redes; por ejemplo, la introducción de un paso que requiere un clic adicional en algunas operaciones para confirmar si en verdad deseamos borrar un archivo, hacer una transacción o enviar un mensaje, o la campaña “Stop-Think-Connect” del Anti-Phishing Working Group (APWG).

Memoria y olvido

La conjunción de tecnologías de cómputo y de almacenamiento de gran capacidad y bajo costo, *software* para el procesamiento de todo tipo de información e Internet ha producido para la humanidad acervos ingentes y potencialmente permanentes. Lo mismo están almacenados en forma digital sentencias de jueces y diarios de debates de los parlamentos del mundo que el conocimiento enciclopédico y las clases grabadas de todo tipo de asignaturas escolares, así como también fotografías familiares, videos de fiestas, ocurrencias, accidentes, gestos y conductas de animales... o identificadores bancarios y de tarjetas de crédito para su explotación criminal.

Quedan almacenados los gestos más triviales que pueden explotarse para atacar sin misericordia ni freno a personas que, víctimas de tal hostigamiento, terminan en crisis psicológicas, exilios voluntarios, el ostracismo, e, incluso, el suicidio. La memoria digital permanente de todo acto posible no funciona de la misma manera que la frágil y falible memoria humana, ni mucho menos el olvido gradual o la pérdida de importancia de los recuerdos que es la base tácita de buena parte de la convivencia social.

Por otra parte, el olvido puede ser masivo: la falta de *software*; borrar archivos de forma accidental o deliberada, voluntaria o maliciosa; la falta de contraseñas y permisos de acceso, quizás originada en algún momento por un requerimiento de confidencialidad, y muchos otros factores pueden llevar a la pérdida de la memoria de la sociedad o a la imposibilidad de acceder a ella. Mención aparte merece el llamado “derecho al olvido”, que reduce el acceso a información mediante búsquedas. El “derecho a

saber”, por otra parte, se ha potenciado y permite a la ciudadanía exigir transparencia y una rigurosa rendición de cuentas a las autoridades, al menos en los regímenes democráticos.

6F, INTERNET, POPULISMOS Y DEMOCRACIA

Ahora, se puede hacer una rápida comparación entre los efectos de estos factores en el discurso democrático y en el populista, asumiendo todas las sobreesimplificaciones asumidas para el modelo:

Escala Internet

En democracia, la escala Internet favorece el debate democrático, al ampliar su alcance a poblaciones y participantes a través del “espacio de los flujos” *castellsiano*, no restringidos únicamente al contacto geográfico, laboral y familiar inmediato ni a medios de comunicación de alcance acotado por la escalabilidad de su medio físico (impresos) o el control centralizado del canal de comunicación (transmisión de radio o televisión). El “prosumidor” en red puede entablar una conversación horizontal que reduce las jerarquías y amplía la esfera pública. En contraste, en un escenario populista, la forma que han adoptado las redes sociales en línea favorece el *engagement* con contenido irritante o provocador. Favorece la polarización y la respuesta irreflexiva que contrarresta la deliberación ponderada de argumentos y el consenso, con la coexistencia de opiniones opuestas entre sí, propios de la democracia.

La escala Internet o “hiperescala” tiene un efecto perverso ante las comunicaciones destructivas. Las comunicaciones en redes sociales en línea se emiten a una tasa de millones por hora desde emisores que, como se verá en los puntos siguientes, pueden, además, ocultar su identidad y actuar desde múltiples territorios, así como multiplicarse mediante la automatización y la propia hiperescala. La moderación de contenidos, en cambio, es reactiva y tiene

una escalabilidad más baja. Una primera fase de la moderación de contenidos es automática y puede competir en escala con la generación de estos; en instancias más complejas, las solicitudes de remoción de contenido o la reclamación contra medidas como la remoción de contenido o la reducción de su alcance pasa por seres humanos que tienen que tomar decisiones al respecto en apenas unos instantes. En una última etapa, estas reclamaciones pueden llegar a entidades cuasijudiciales como el Consejo de Supervisión de Contenidos de Facebook/Meta, que requieren tiempos de semanas o meses y, por tanto, están limitadas a tratar unas cuantas decenas de casos al año (lo cual se compensa parcialmente porque generan lineamientos generales a futuro). Adicionalmente, las decisiones de moderación de contenido pueden estar sesgadas por la presión de actores importantes como los gobiernos (tal es el caso de India y la promoción del odio étnico-religioso que se favorece desde el gobierno).

Identidad

En cuanto al anonimato y la pseudonimia en democracia, el ocultamiento o al menos “ofuscación” de la identidad en Internet permite divulgar ideas y mensajes y hacer valer los derechos de libre expresión y libre asociación en condiciones represivas. Los *whistleblowers* en sindicatos, empresas y gobiernos, la comunicación de violaciones a los derechos humanos, la educación en salud sexual reproductiva, la promoción global del *agenda-setting* de la sociedad civil y la denuncia de crímenes de lesa humanidad, entre otros, son posibles porque se reduce el temor a la represión al disminuir la posibilidad de identificar a las personas para hacerlas objeto de represión.

En un escenario populista, el ocultamiento de la identidad –en un uso característico también de organizaciones delictivas, a las cuales facilita el delito cibernético– favorece la construcción de discursos de odio, polarización, subversión del debate público y construcción de agendas de pensamiento único. Las cuentas de usuario anónimas pueden automa-

tizarse y multiplicarse hasta crear ejércitos de *bots* (usuarios automatizados) que complementan a la organización de cuentas pseudónimas que operan seres humanos para crear ataques masivos a la opinión divergente. Todas las fuerzas políticas, incluidas las democráticas, tienen acceso a estos recursos, pero su uso es asimétrico, dadas las reglas que cada parte se impone a sí misma.

Los comportamientos inauténticos coordinados (cuentas reales coordinadas, cuentas falsas y cuentas automatizadas) que se operan desde gobiernos con agendas autoritarias o totalitarias y sus fuerzas afines, con financiamiento gubernamental directo o indirecto (*vgr.* por medio de pagos de publicidad en publicaciones, pagos a agencias de relaciones públicas o de “control de crisis”) son una contribución desleal y asimétrica en contra de la democracia. Las empresas operadoras de redes sociales en línea invierten masivamente para evitarlas, pero están rebasadas en el corto plazo. El impacto negativo de muchas campañas de esta naturaleza se materializa en pocas horas, mientras que frenarlas o reducir sus efectos es un proceso generalmente lento, incierto y que deja subsistir elementos residuales indefinidamente. Los movimientos, partidos políticos, y gobiernos antidemocráticos pueden enmascarar su responsabilidad respecto a las cuentas automatizadas y los mecanismos de coordinación fuera de banda mediante contratos con agencias de comunicación política, relaciones públicas, o gestión de crisis que son materialmente las creadoras de las cuentas.

Transjurisdiccional

Merced al traslado transjurisdiccional, es posible que la democracia se fortalezca y enriquezca. El flujo transnacional e intercultural de ideas impulsa una sociedad abierta, multiplica las perspectivas y acelera el desarrollo de las sociedades modernas. El *agenda-setting* de la sociedad civil, que amplifica el impacto de números relativamente limitados de individuos, atraviesa fronteras, arroja reflectores sobre problemas locales con una perspectiva global,

y genera presión para, por ejemplo, hacer cambios contra el autoritarismo tanto como contra el cambio climático antropogénico. En países o sociedades en los que imperan condiciones represivas, la organización social, las publicaciones, la difusión de información y la denuncia pueden llevarse a cabo con riesgos reducidos de represión y de supresión cuando residen en plataformas fuera del alcance inmediato de las autoridades arbitrarias.

La propaganda populista y la subversión del sentido de verdad establecida –los populistas favorecen la duda– florecen también al amparo de las plataformas con sede fuera del país del que se trate. Aun cuando se violen las leyes del país en cuestión, los violadores de estas se ponen a cubierto del alcance de la ley al actuar mediante servicios y equipos ubicados en el extranjero, aprovechan el desinterés de las autoridades de terceros países en perseguir delitos que no violan leyes de su territorio, y, sobre todo, al amparo de leyes de terceros países que permiten conductas y expresiones que en el propio estarían penalizadas.

Particular mención merece aquí una ley clave para Internet, la Sección 230 de la *Communications Decency Act* de Estados Unidos. Esta ley fundamental exime de responsabilidad civil a las empresas que sirven para que terceros emitan comunicaciones sin que la empresa pueda conocer el contenido previamente a la publicación, como ocurre con los servicios de correo electrónico, publicaciones electrónicas, blogs, videos y redes sociales debido a su escala y forma de funcionamiento (hay que aclarar que la Sección 230 no es solamente permisiva a este respecto; también crea incentivos para que las plataformas actúen en caso de conocer conductas ilegales, y la moderación de contenidos resultante es una disciplina intensamente activa y compleja).

Abatimiento de barreras

En democracia, la formación de organizaciones formales o informales que aprovechan los factores an-

teriores, como, por ejemplo, el cruce de fronteras y la protección contra la represión mediante el ocultamiento de la identidad, favorece el desarrollo democrático. La esfera pública puede poblarse con una gran diversidad de puntos de vista y oportunidades para contrastarlos constructivamente. La horizontalidad de las interacciones que hace de lado jerarquías favorece la comunicación y la construcción de confianza.

En contraste, la facilidad con la que se forman organizaciones criminales tiene su paralelo en las organizaciones antidemocráticas y sus comunicaciones. La coordinación –en particular el comportamiento inauténtico coordinado en las redes sociales en línea–, el *doxxing* seguido de hostigamiento físico, o sucesos dramáticos como la toma del Capitolio en Washington el 6 de enero de 2020 se ven facilitados por el abatimiento de barreras organizacionales. La toxicidad de los ataques y la intensidad del hostigamiento actúan como supresores de voces relevantes, un equivalente virtual y multitudinario al linchamiento y la censura.

Reducción de fricción

Al reducir el tiempo y la cantidad de operaciones o energía requeridos para realizar acciones como unirse a protestas en línea, sumarse a debates, votar, o participar en foros de discusión, el debate democrático se acelera y la participación se amplía. La contracara de los efectos democratizadores de la reducción de la fricción se manifiesta en el sobrecalentamiento de los debates (conocido como *flame wars* desde los años de los foros en línea y los *Bulletin Board Systems* o BBS), la instantaneidad del hostigamiento que cierra los debates, su conversión en amenazas físicas, y la facilidad con la que partes bien financiadas, como partidos y gobiernos, instauran comportamientos inauténticos coordinados de alcance extenso en milisegundos.

Combinados, estos factores hacen que muchos debates en redes se conviertan en representaciones de justicia medieval, en la que la acusación misma

ya constituye un juicio, ya que el señalamiento no se basa en la violación de precepto legal establecido alguno. El juez es la opinión coordinada en lugar de una autoridad establecida e independiente, por lo que no hay oportunidad real para la defensa ni presunción de inocencia, y las penas son injustas, crueles, desproporcionadas, e imprescriptibles –todo lo que el proyecto de la Ilustración, o incluso el Derecho Romano, quiso superar–. Los participantes democráticos están en una situación asimétrica de gran desventaja en estos casos, con las manos atadas por sus propias reglas de civilidad, respeto a la diferencia y apego a la ley.

Memoria y olvido

La democracia se fortalece mediante la creación de medios de memoria de la sociedad que alimentan el derecho a saber en el sentido más amplio. El acceso al conocimiento, la consulta de precedentes, el acceso a la información sobre el funcionamiento del gobierno incluidas compras y contrataciones públicas, los diarios de debates de las legislaturas, los ingentes acervos de videograbaciones de deliberaciones de los tres poderes y los tres órdenes de gobierno proveen un rico sustrato para la democracia. La posibilidad de abuso de algunas informaciones personales se corregido parcialmente mediante al llamado “derecho al olvido” (en realidad un mucho más modesto derecho a no aparecer en ciertas búsquedas nominales), pero seguimos aprendiendo a manejar una memoria que ya no se parece a la biológica por ser permanente y quedar al alcance de todas las personas en el planeta, como agudamente lo describió Mayer-Schoenberger.

El abuso de la memoria permite retrotraer información del pasado de los participantes en la deliberación pública que puede afectarles negativamente, sobre todo cuando ha dejado de ser relevante o se saca de contexto. Si bien estos ataques basados en el pasado de las personas han existido desde la antigüedad, los acervos de memoria en línea les dan una magnitud nunca vista y los ponen al alcance de cualquiera.

Hay algunas formas más de abuso antidemocrático de la gestión de la memoria, entre ellas el borrado selectivo de archivos, abusos en la clasificación de la información pública como confidencial o “de seguridad nacional”, y el recurso al “derecho al olvido” para hacer inaccesibles datos que pueden incomodar a políticos, como un pasado en gobiernos represivos o actos de corrupción. Adicionalmente, existen empresas dedicadas a “limpiar reputaciones”, cuyo negocio consiste en investigar, identificar y borrar, modificar o volver inaccesibles los datos que políticos y otros personajes consideran indeseables. La frase coloquial de “siempre hay un tuit” representa uno de los efectos de doble filo de esta memoria. Tanto para ilustrar la consistencia de posiciones a lo largo del tiempo como para mostrar contradicciones, mentiras y deslealtades, los acervos globales en línea han modificado el debate, lamentablemente por ahora en desventaja para la democracia por las razones ya citadas.

Anticiencia

El discurso relativo a la ciencia, sus aplicaciones, y el pensamiento científico en las redes sociales en línea se ha vuelto problemático en extremo. Si bien existe lo que se suele llamar “Twitter científico” y muchas subdivisiones de este, es decir, discusiones públicas entre un número acotado de participantes expertos que debate, analiza, aporta información y puntos de vista bajo principios de racionalidad, rigor metodológico y con base en evidencia, el debate extenso sobre temas como epidemias, vacunas, organismos genéticamente modificados, así como pseudociencia y patrañas como las teorías sobre *chemtrails*, seres vivos extraterrestres, pseudoterapias, y muchos más se produce de forma acelerada, intensamente polarizada, y con mecanismos de supresión del contrario similares a los de la discusión política.

La relación entre pensamiento crítico, ciencia y democracia requiere de tiempo y espacio para el razonamiento, para la argumentación, y para el análisis de la evidencia para estas tres entidades, así

como oportunidades para que los participantes puedan modificar sus opiniones, expresar sus dudas y titubeos, pensar en contrafácticos, especular sobre consecuencias, criticarse mutuamente todo lo anterior, y convivir sin que cambios en posiciones impliquen victorias o derrotas. Las posiciones anti- y pseudocientíficas, por el contrario, prosperan con base en dogmas inamovibles; falacias lógicas y argumentativas; “evidencia” falsa, irrelevante, manipulada o mal interpretada, y la negativa a escuchar argumentos o conocer evidencias que puedan minar su posición inquebrantable.

Descrito así es claro que la presencia de la ciencia y sus resultados sufre en presencia de un ambiente populista, así como en los autoritarios. De esto se pueden derivar daños importantes a la salud de la población. Ejemplos de este fenómeno son la negación del origen viral del sida en Sudáfrica, y, en años recientes, con la presencia de las redes sociales, la promoción de productos tóxicos como supuestas curas para la COVID-19 por parte del presidente Trump en Estados Unidos, la propagación de mitos antivacunas en muchos países con el mito adicional de que las vacunas servirían para controlar a los individuos mediante las redes de telecomunicaciones 5G, o la oposición del régimen de Bolsonaro en Brasil a combatir la epidemia. La población así movilizada llegó al extremo de derruir torres de telecomunicaciones con reales o supuestas antenas para 5G y desde luego al uso irrestricto de falsos remedios como los derivados de los óxidos de cloro o la ivermectina contra la COVID-19. Cabe subrayar que algunos de estos sucesos se presentaron en países con gobiernos democráticos como Reino Unido, pero impulsados por movimientos populistas como los que, en ese caso, favorecieron el *brexit*. Si el derecho a la ciencia es, cuando menos, el derecho de todos al acceso a los beneficios materiales de la ciencia, y en interpretación lata al conocimiento científico, a los métodos y razonamientos de la ciencia, y a que la sociedad y el gobierno sean conducidos con rigor lógico y apego a la evidencia, la actividad populista en redes sociales conduce a conculcar este derecho primero en el sentido lato

e inmediatamente después también en el sentido más acotado.

Contra el pensamiento crítico

Lo mismo que se ha descrito para la ciencia se aplica en forma más general al pensamiento crítico. La democracia requiere deliberación, análisis, contraste civilizado de posiciones diferentes o antagónicas y análisis crítico tanto de las posiciones ajenas como de las propias. Para ese fin, debe enriquecerse con el pensamiento crítico que lo es ante todo de sí mismo, y de la pluralidad de visiones y de participantes.

Con lo descrito para la ciencia podemos saltar rápidamente a decir que la actitud y actividad populista suprimen el pensamiento crítico, mientras que la actitud democrática lo favorece. En ambas instancias (ciencia y pensamiento crítico), los seis factores juegan de maneras similares. La ciencia y el pensamiento crítico se benefician de la escala de participantes, moderadamente se pueden beneficiar de la gestión de identidad, ganan con la transferencia internacional del conocimiento y de la argumentación, y pueden beneficiarse del abatimiento de barreras y de la reducción de fricción. Estas últimas dos y el anonimato juegan a favor del populismo y de la antidemocracia. Omito por simplicidad la consideración del factor memoria y olvido.

Investigación empírica en México

Cada vez más laboratorios y centros de investigación en México se ocupan de estos temas con métodos cuantitativos e información empírica. Para los fines de este trabajo, destacan particularmente dos que se describen de manera sucinta a continuación, por ser pertinentes para este trabajo.

El laboratorio Signalab, que dirige la doctora Rosana Reguillo en el ITESO en Guadalajara, Jalisco, México, ha documentado extensamente campañas no orgánicas en Twitter. En estos estudios ha

exhibido campañas de hostigamiento que han llegado a amenazar su integridad física. El caso particular más significativo para el presente trabajo es su exhibición de la #RedAMLOVE, una campaña coordinada desde el poder híbrido gubernamental-partidista en México, basada en ataques y campañas de ridiculización a periodistas, medios de comunicación y usuarios con una posición crítica hacia las acciones del presidente López Obrador a partir de los primeros cien días de su mandato en 2019 (Signa_Lab, 2019).

Por su parte, Piña y coautores (por ejemplo, Piña-García & Espinoza, 2022) hacen un seguimiento constante de las campañas orgánicas y artificiales en Twitter. Repetidamente, a través de su cuenta en Twitter y en publicaciones como la citada, Piña muestra los momentos exactos, las cuentas eje, y los comportamientos artificiales de distintos tipos (*bots*, *trolls*, *sock puppets*, *astroturfing*, etc. (Keller et al., 2020),) y señala incluso los momentos precisos en que se detonan deliberadamente.

En el artículo citado, Piña y Espinoza muestran las campañas artificiales populistas favorecedoras del gobierno y supresoras de la crítica a la conducción gubernamental de la respuesta a la pandemia de COVID-19 iniciada en 2020. Siguiendo especialmente los *hashtags* #GatellOrgulloMexicano y #AMLOPresidenteDeLaSalud, permiten observar las formas y tiempos de estas campañas. Subrayo este caso particular, porque, además de presentar

un estudio sistemático y riguroso del comportamiento inauténtico coordinado desde una posición populista en el gobierno, la incidencia sobre el tema de la COVID-19 se extiende a la supresión del discurso científico y a los daños materiales a la sociedad que son posibles mediante estas conductas. En otros ámbitos, como los países de Asia Central, Pearce y Kendzior (2012) han explorado la categoría “autoritarismo en red” (*networked authoritarianism*) para analizar cómo estas conductas en red, dirigidas por un gobierno autoritario como es el caso en Azerbaiyán, pueden suprimir el discurso crítico de la sociedad, bajo una apariencia “orgánica”.

Conclusión o coda

A partir de una definición de trabajo relativamente cruda pero utilizable, se han descrito brevemente las diferencias del impacto de Internet, especialmente de las redes sociales en línea, sobre las participaciones de actores populistas y democráticos. El esquema de seis factores que desarrollé anteriormente se pone a prueba en este trabajo y muestra su utilidad para mostrar de qué forma se sirven unos y otros actores de las características esenciales de Internet para perseguir sus fines. La comparación puede servir a los actores democráticos para ajustar sus estrategias en formas tales que disminuyan la ventaja que la distorsión de la herramienta y el abuso asimétrico de las reglas de enfrentamiento pueden dar a los populistas.

REFERENCIAS

- Keller, F. B., Schoch, D., Stier, S., & Yang, J., "Political Astroturfing on Twitter: How to Coordinate a Disinformation Campaign", en *Political Communication*, 37 (2), 2020, pp. 256–280. <https://doi.org/10.1080/10584609.2019.1661888>
- Monsiváis-Carrillo, A., *Populismo – Prontuario de la democracia*, 26 de marzo de 2021. <https://prontuario-democracia.sociales.unam.mx/populismo/>
- Pearce, K. E., & Kendzior, S., "Networked Authoritarianism and Social Media in Azerbaijan", en *Journal of Communication*, 62 (2), 2012, pp. 283–298. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2012.01633.x>
- Piña-García, C. A., & Espinoza, A., "Coordinated campaigns on Twitter during the coronavirus health crisis in Mexico", en *Tapuya: Latin American Science, Technology and Society*, 5 (1), 2022. <https://doi.org/10.1080/25729861.2022.2035935>
- Pisanty, A., "Open Internet Governance: The 6F Framework and COVID-19", en Belli, Luca, Pahwa, Nikhil y Manzar, Osama, eds., *In the Value of Internet Openness in Times of Crisis. (Official Outcome of the UN IGF Coalitions on Net Neutrality and on Community Connectivity)*, Digital Empowerment Foundation, 2020, pp. 95–102. <https://www.defindia.org/wp-content/uploads/2020/12/THE-VALUE-OF-INTERNET-OPENNESS-IN-TIMES-OF-CRISIS.pdf>
- Signa_Lab, *Signa_Lab—Democracia, libertad de expresión y esfera digital. Análisis de tendencias y topologías en Twitter. El caso de la #RedAMLOVE*, Signa_Lab, ITESO, 2019. http://signalab.iteso.mx/informes/informe_redamlove.html

LA INTEGRACIÓN EUROPEA, EL EUROESCEPTICISMO Y LOS POPULISMOS

José Joel Peña Llanes¹

En términos generales, la integración regional es un proceso que implica la decisión voluntaria de países que, habitualmente, comparten fronteras geográficas y tienen sistemas económicos y políticos similares, de establecer esquemas de cooperación y trabajar de manera coordinada para alcanzar ciertos objetivos, generalmente de carácter económico, pero también se han incluido temas sociales, ambientales e incluso de seguridad colectiva. En otras palabras, la integración regional es una estrategia de política exterior de los países que buscan, por ejemplo, disminuir los costos del transporte de mercancías, y, por ende, el precio final de éstas, al acordar con un país vecino la disminución o elimi-

nación de aranceles mediante la firma de un tratado de libre comercio. Pero, también la integración sirve para que los países pequeños, al establecer una relación formal con otros de mayor tamaño y peso internacional, puedan llevar sus problemas e inquietudes a foros internacionales. O, quizá, la integración regional permita a los países que participan en dicho proceso contar con apoyo militar de otros miembros para garantizar su seguridad.

Esto fue lo que sucedió en la década de los años cincuenta, cuando los países europeos que habían sufrido con mayor intensidad los estragos de la Segunda Guerra Mundial decidieron iniciar un proceso de integración, único en el mundo hasta la fecha, para favorecer la recuperación de sus economías y obtener otros beneficios como la seguridad y la estabilidad social. En 1951, Alemania Occidental, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos firmaron el Tratado de París que permitió la constitución de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), el antecedente más remoto de la actual Unión Europea (UE). Desde entonces, el

¹ Doctor en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, A.C., y doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Maestro y licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. Profesor de asignatura adscrito a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) y de su Unidad de Estudio y Reflexión “Europa plus”.

proceso de integración europea ha evolucionado, tanto en términos de su nivel de integración económica como de su número de países miembros, pasando de seis en sus inicios a veintisiete en la actualidad, tras la salida del Reino Unido el 1 de enero de 2020.

Por lo que se refiere a su grado de integración, y retomando lo expuesto por Bela Balassa en la década de los años sesenta, la UE ha transitado exitosamente por tres etapas: primero, inició como una zona de libre comercio que eliminó, de manera progresiva, los aranceles de las mercancías que circulaban entre los países miembros, para, después, en segundo lugar, acordar un arancel externo común que se aplicara a las mercancías que se comercian con terceros países. Esto permitió posteriormente la articulación de una política comercial común cuando se concretó la unión aduanera. La tercera etapa, denominada mercado común, se alcanzó con éxito cuando los países miembros autorizaron la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas trabajadoras, lo que, por cierto, no ha logrado plenamente otro proceso de integración. En cuanto a la cuarta etapa de integración (unión económica), el bloque regional ha armonizado políticas importantes como la económica y la monetaria (creación de un Banco Central Europeo y una moneda común que utilizan veinte países miembros), pero lo cierto es que esta unión es imperfecta porque no se ha llegado a un acuerdo respecto de otras políticas esenciales como la fiscal.

Es muy importante reconocer que la UE se ha creado a partir de la suscripción de instrumentos jurídicos vinculantes para los países firmantes, lo que otorga una mayor certeza jurídica y, al tener como un valor común el respeto al Estado de derecho, se asegura la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los casi 500 millones de personas que habitan en la Unión. Para que todo funcione dentro de la UE, los tratados suscritos prevén compartir la soberanía en ciertas materias, como la monetaria y económica antes señaladas, con instituciones que están por encima de ellos, mejor conocidas como instituciones supranacionales o comunitarias.

Las instituciones principales son el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea, el Consejo Europeo, la Comisión Europea y la Corte Europea de Justicia. El Parlamento y el Consejo de la Unión Europea son órganos colegisladores y aprueban la legislación del bloque regional, a la usanza de los poderes legislativos de los países democráticos. El Consejo Europeo, integrado por las y los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros, tiene como principal actividad decidir la orientación política de la UE, es decir, qué rumbo tomará en cuanto al fortalecimiento del proceso de integración y de sus relaciones con otros actores internacionales.

Finalmente, están las dos instituciones supranacionales, la Comisión Europea y la Corte Europea de Justicia. La Comisión actúa como el poder ejecutivo del bloque, y tiene dos actividades esenciales: la propuesta de las nuevas leyes que aprobarán las instancias colegisladoras y gestionar las políticas de la Unión, además de supervisar su cumplimiento. La Corte Europea de Justicia, por su parte, es, al igual que la Comisión, guardiana de los tratados constitutivos de la UE, y también es la encargada de hacer valer la legislación europea y dirimir los distintos conflictos que pueden surgir en un proceso de integración de esta complejidad. Como complemento, vale mencionar que estas instituciones reciben apoyo de otras que tienen misiones mucho más específicas, como el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas Europeo.

Por lo que se refiere a los beneficios de la Unión en sus más de setenta años de existencia, destaca el hecho de que ha permitido que sus países miembros alcancen un nivel de desarrollo económico y social que no hubieran logrado de no ser por su pertenencia al bloque regional, sobre todo porque hay un nivel de solidaridad que se materializa, entre otras cosas, en la transferencia de recursos económicos para propiciar la cohesión económica, social y territorial del bloque en su conjunto o en el apoyo durante las diferentes crisis que han sorteado la Unión y sus miembros. Otro logro fundamental se relaciona con el hecho de que la región no se ha visto direc-

tamente involucrada en conflictos armados, salvo por la reciente agresión de Rusia a Ucrania que, por la cercanía de los países involucrados y aun cuando no son miembros del bloque regional, ha ocasionado que la Unión actúe en conjunto para apoyar al país agredido. Y, como un ejemplo más, se destaca la existencia del mercado único, ya que, junto con otros elementos, ha llevado al bloque regional a convertirse en una de las principales economías del mundo con una gran capacidad de acción en la arena internacional, incluida, desde luego, la prestación de ayuda humanitaria y oficial al desarrollo.

Pero todo esto, si bien es un logro único que ha permeado en otras regiones del mundo al ser ejemplo para otros procesos de integración, principalmente en América Latina y el Caribe, ha tenido muchos momentos de estrés que, incluso, han cuestionado la continuidad del proceso de integración. La salida del Reino Unido (*brexit*) es el más reciente. Entre las crisis de este siglo, basta recordar la económica y financiera de 2008, la migratoria de 2015, la derivada del *brexit*, la provocada por la pandemia de la COVID-19 y ahora la crisis energética, la inflación y, en general, el aumento del costo de vida que se vincula con el conflicto ruso-ucraniano.

No obstante, hay un problema que se ha gestado con el paso de los años, denominado crisis democrática que, en pocas palabras, se refiere a la incapacidad de las instituciones europeas de atender las necesidades sociales, lo que conlleva la pérdida de confianza de la ciudadanía hacia éstas. De manera paralela, como apunta Linz, surgen “[...] oposiciones desleales [que] se ofrecen como solución” (Linz, p. 93), por lo general partidos políticos opositores que aprovechan la coyuntura de crisis para ofrecerle a la ciudadanía aquello que los que gobiernan no han podido otorgar.

En el marco de la UE hay múltiples ejemplos de este fenómeno, y, sobre todo en las últimas décadas, con partidos de ultraderecha como el Frente Nacional en Francia, Alternativa para Alemania, la Alianza Nacional en Italia o Fidesz-Unión Cívica en Hungría, entre una decena de agrupaciones

políticas que pretenden llegar al electorado con argumentos nacionalistas que se traducen en ataques a la UE, específicamente a sus instituciones, sus políticas y también a sus políticos, pues se le acusa de ser un proyecto caduco, de injerencia excesiva en asuntos que le competen tradicionalmente a los Estados-nación, de falta de democracia en la toma de decisiones que afectan a la Unión en su conjunto, de ineficiencia burocrática, y un largo etcétera.

El nivel de desconfianza de la población es tal que la Real Academia de la Lengua Española reconoce la palabra “euroescepticismo” como la “desconfianza hacia los proyectos de la Unión Europea”. Si bien existen distintos niveles de euroescepticismo, pues hay quienes solamente exigen cambios mínimos a las estructuras y funciones de las instituciones supranacionales, son cada vez más los que se apegan a un sentimiento antieuropeo o eurófono, en apoyo a los movimientos políticos y sociales que se pronuncian por la salida de sus respectivos países de la UE.

Pero ¿qué estrategia o qué estilo adoptan las y los líderes de estos partidos políticos o movimientos antisistema? En este siglo, señala con certeza Benjamin Moffitt, se escucha en todos los medios y a toda hora el término “populismo”, definido por el autor como un estilo de hacer política que “[...] se ha convertido en un comodín de uso difundido para diagnosticar todo aquello que resulta exaltante, preocupante o disfuncional en las democracias contemporáneas del mundo entero” (Moffitt, p.15).

De manera más precisa, Susanne Gratius y Ángel Rivero retoman las siguientes características generales de la ideología de gobiernos o partidos populistas que ayudan a definir con mayor precisión el concepto:

- La defensa de un pueblo virtuoso con una voluntad única;
- La crítica a la democracia representativa desde un lenguaje antiliberal y soberanista;
- La preferencia por un espacio político estructurado en arriba/abajo, frente a izquierda/derecha;

- La personificación en un líder carismático que habla en nombre de la voluntad del pueblo;
- Un programa nacionalista y antiglobalización (en el caso latinoamericano contra la hegemonía de Estados Unidos y, en el europeo, contra la Unión Europea);
- La sustitución del pluralismo político por la búsqueda permanente de un enemigo del pueblo contra el que desplegar un discurso político emocional, maniqueo y moralista (Gratius y Rivero, p. 36).

En ese sentido, se habla de populismo cuando una lideresa o un líder o un movimiento social o partido político se dirigen a la población de manera distinta a las y los políticos tradicionales, es decir, con un lenguaje y actitudes simples para garantizar una mejor comprensión de lo que se propone y se pone como enemigos a los partidos en el poder y, por ende, a quienes gobiernan, con el argumento de que las crisis que se enfrentan son producto de la ingobernabilidad que solamente se sorteará con un cambio de partido político o de sistema. ¿Quién no ha escuchado a candidatas y candidatos a cualquier cargo de elección popular decir que son ellos quienes representan verdaderamente la voluntad del pueblo o que el gobierno en turno es responsable de las crisis que afectan la calidad de vida de la población?

Estas frases, claramente populistas, se repiten con mayor frecuencia en los países miembros de la UE. Marine Le Pen, quien ha buscado en dos ocasiones ser la presidenta de Francia, se ha referido al actual presidente Emmanuel Macron como “el niño mimado del sistema y de las élites” para mostrarlo ante la ciudadanía como una persona a la que no le interesan los problemas del grueso de la población, pero sí los de la UE como actor internacional. Por su parte, Georgia Meloni, quien, valiéndose precisamente del populismo como estrategia política, logró ocupar el cargo de presidenta del Consejo de Ministros de Italia desde octubre de 2022; se autodescribe como italiana, madre y cristiana para enarbolar valores tradicionales de la sociedad de su país, y mostrarse en contra de quienes han

luchado por extender la idea de una ciudadanía europea, por el avance de la igualdad de derechos y oportunidades para el colectivo LGBTI+ y por un reconocimiento a la pluralidad de religiones. Ambos discursos tienen algo en común: se dirigen a segmentos de la población vendiendo la idea de que sus gobernantes están atentando contra los valores fundamentales, los intereses y necesidades de sus pueblos, lo que fabrica así una crisis de legitimidad en la estructura política por excelencia, es decir, el Estado.

El populismo, afirman Camil Ungureanu e Iván Serrano, es una estrategia que sirve para:

[...] apelar exitosamente a un segmento importante de la población que se siente perjudicado o desposeído de sus perspectivas de bienestar, en el contexto de un mundo que se percibe como amenazador, ya sea por la globalización económica, el terrorismo o el fenómeno migratorio. La fuerza del relato populista deviene así un síntoma y una reacción a las continuas crisis de las democracias capitalistas, ante las cuales una porción significativa –cuando no mayoritaria– de la población se siente desposeída y pone en cuestión el sistema vigente (Ungureanu y Serrano, p. 29).

Por otro lado, es importante aclarar que el populismo, al ser una estrategia, puede utilizarla cualquier persona o partido político, sin importar su ideología o ubicación en el espectro político, sobre todo porque una de sus principales características es que presentan soluciones supuestamente sencillas a problemas complejos. De hecho, “el eje ideológico izquierda-derecha ha perdido la capacidad para encapsular los diferentes retos y alternativas políticas. En este contexto, los movimientos populistas tienden a sujetar el eje izquierda-derecha en una lógica discursiva en la que se contraponen la oposición pueblo-élite, lo que les permite a menudo combinar planteamientos políticos dispares en términos de izquierda-derecha” (Ungureanu y Serrano, p. 27).

Marine Le Pen, representante de la extrema derecha francesa, y Yolanda Díaz, partidaria de la izquierda radical española, así lo han hecho. La primera con frases como la citada en párrafos anteriores, y la segunda mostrándose abierta a un diálogo en el que participen todos los estratos de la sociedad o declarando que ella jamás se cambiaría de bando porque está con los de abajo, refiriéndose a las clases más desprotegidas y necesitadas.

Lo cierto es que la presencia creciente de movimientos populistas se relaciona estrechamente con la pérdida de credibilidad de la ciudadanía hacia sus instituciones y representantes, pues aprovechan esa inconformidad para su propio beneficio. Es por eso por lo que, en muchas ocasiones, se relaciona al populismo con la destrucción de la democracia, pero esto no es del todo cierto. Hay partidos políticos como Fidesz-Unión Cívica Húngara del actual primer ministro Viktor Orbán que, desde su llegada al poder en 2010, ha socavado los valores democráticos, al grado que el propio Parlamento Europeo ha declarado que se trata de un país que ya no puede considerarse como una democracia plena.

Empero, otros partidos populistas que han resultado victoriosos recurriendo a una retórica nacionalista y de preservación de la identidad frente a la identidad europea, como ocurrió en Grecia y más recientemente en Italia, no se pronuncian en contra de la democracia *per se*, sino en contra de los gobiernos que finalmente terminan venciendo. Pero también hay casos en los que los partidos populistas cambian su discurso al momento de acceder al poder, volviéndose defensores de la democracia que inicialmente se propusieron atacar (ej. Podemos en España).

Ahora bien, de acuerdo con un estudio del Pew Research Center, en España, Grecia, Italia y Francia se encuentra el mayor número de personas que considera que la democracia no satisface sus expectativas, lo que coincide con la presencia creciente de partidos políticos radicales de ambos polos del espectro político (Wike). Sin embargo, en términos generales, un poco más de la mitad de las y

los ciudadanos europeos están satisfechos con la forma en que trabaja la democracia (Parlamento Europeo), lo que significa que existe una ventana de oportunidad para que los gobiernos actuales, la mayoría con ideologías más centristas y proeuropeas, mejoren sus niveles de gobernabilidad y, con ello, recuperen la confianza de la ciudadanía.

Pero quizá son los propios partidos políticos y sus miembros los que deben aprender de la coyuntura y mejorar su forma de trabajar, pues, de acuerdo con información del Índice de Confianza Global de Ipsos, la profesión en la que menos confía la sociedad es en las y los políticos. En el índice destacan países como Hungría, España, Polonia e Italia al mostrar los niveles más altos de desconfianza, seguidos muy de cerca por Francia y Alemania (Ipsos).

En ese sentido, se coincide con las conclusiones a las que llega el propio Consejo de la Unión Europea al analizar el estado actual del populismo en la Unión:

Enfrentar los retos que plantea el populismo va a requerir de una respuesta de varios niveles que tome en consideración todas las condiciones que han contribuido a su aparición, incluyendo factores subyacentes como la polarización socioeconómica. Ante la presión de los populistas, los partidos políticos mayoritarios podrían estar tentados a copiar las políticas y métodos populistas [...]. Un reto clave de estos partidos será aprender del éxito de los populistas, pero evitando vender su alma en el proceso. Las cuestiones plantadas y utilizadas por las fuerzas populistas son muy reales, y frecuentemente son una expresión de profunda frustración por parte de algunos sectores de la sociedad. Los partidos políticos mayoritarios y las instituciones probablemente tendrán que responder a dichas cuestiones cambiando a una narrativa política más inclusiva que ponga énfasis en la identidad compartida basada en valores cívicos comunes. Esto podría ayudar a reorientar el debate lejos de las cuestiones divisorias y polarizadoras favorecidas por los partidos populistas, privándoles así de su relevancia política (Consejo de la Unión Europea).

Como se puede advertir, existe una relación estrecha entre los tres conceptos: integración, euroescepticismo y populismo. El primero hace alusión a un proceso de convergencia de intereses de los países, en este caso europeos, para la satisfacción de necesidades sociales, y de cuyo funcionamiento puede derivar un apoyo reiterado de la ciudadanía o, por el contrario, un euroescepticismo que aprovechan los partidos políticos de extrema derecha y extrema izquierda para obtener, mediante estrategias como el populismo, un número mayor de votantes que eventualmente los llevará al poder.

Aunque el principal problema, que no se analizará en este artículo, se presenta cuando los movimientos populistas, una vez que asumen el poder, derivan en regímenes autoritarios que, lejos de cumplir con lo prometido, afectan aún más a la población que los partidos o movimientos que los antecedieron. En términos muy generales, “el autoritarismo suele entenderse como una forma de gobierno o política que concentra el poder, minimiza el pluralismo político y reprime a la sociedad civil, a menudo en nombre de la lucha contra un supuesto ‘enemigo’ interno o externo” (Buxton).

Es preciso señalar que lo descrito no es privativo de la UE, pues el populismo se trata de un fenómeno global presente en prácticamente la totalidad de países del orbe. En América Latina, así como en la UE, se advierte un aumento de políticas y políticos populistas que han llegado al poder, al tiempo que la oposición, que se vale exactamente de las mismas estrategias, busca desprestigiar a los gobiernos en turno, al presentarse como la única solución a los problemas sociales.

Pero ¿qué futuro tienen los partidos extremistas de corte populista, especialmente los de derecha, en la UE? En junio de 2024 se llevarán a cabo las elecciones europeas, siendo el momento en el que las personas ciudadanas del bloque regional eligen a las y los diputados que les representarán en el Parlamento Europeo. Y este hecho será precisamente un momento esencial que permitirá evaluar qué tan acertadas han sido las estrategias de los partidos

extremistas para ganar adeptos y ocupar posiciones clave en una de las principales instituciones comunitarias, incluso con posibilidad de llegar a controlarla si los principales partidos de centro-derecha y derecha extrema se alían para obtener la mayoría parlamentaria.

Si este escenario llegara a concretarse, aunado a la posibilidad de que los partidos pro europeos (Partido Popular Europeo, Renovar Europa y los socialdemócratas) resulten debilitados, las agendas políticas de los extremistas Identidad y Democracia y Conservadores y Reformistas Europeos tendrían la oportunidad única de traducirse en políticas tendientes a disolver de manera progresiva al bloque regional en sus términos actuales, o al menos dificultarían la toma de decisiones en el ámbito europeo, específicamente cuando se discutan temas a los que se han opuesto tradicionalmente: migración, agenda verde, apertura comercial y mayor cesión de facultades a las instituciones comunitarias, entre muchos otros.

No obstante, no todo está dicho, pues las proyecciones que ofrece la plataforma *EuropeElects* demuestran que, hasta julio de 2023, los partidos tradicionales obtendrían una mayoría absoluta con 390 de los 705 escaños del Parlamento Europeo (*EuropeElects*). Es por eso que ahora se puede apreciar el despliegue de estrategias y alianzas para garantizar que la extrema derecha no aumente sus índices de popularidad y, por ende, obtenga cada vez más votos. Pero lo realmente necesario es llegarle a la ciudadanía con propuestas sólidas y hechos concretos que demuestren los beneficios de la UE. Se coincide con Héctor Sánchez Margalef cuando afirma que, “[...] quien tema a la extrema derecha deberá arrimar el hombro, no para aislarla, sino para combatir sus ideas y propuestas, y demostrar que pueden ofrecer un proyecto político mejor. Para ello, será imprescindible explorar nuevas mayorías” (p. 3).

Prescindiendo del resultado de las elecciones europeas de 2024, lo importante es preguntarse si la UE, concebida como un proyecto democrático y liberal, puede subsistir si aumenta el número de

países miembros en los que gobiernen partidos que contribuyen activamente a la erosión democrática. Si bien es cierto que estos últimos atentan contra los valores tradicionales del bloque regional, como el respeto a las minorías, el pluralismo político, la transparencia pública, las elecciones libres y universales, el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho, es probable que solamente se transforme la UE de tal suerte que se le devuelvan a los países facultades que han cedido a las instituciones supranacionales, pero manteniendo prácticamente intacta la estructura económico-comercial, pues finalmente ha sido un elemento exitoso que dota a los miembros de posibilidades para colocar sus productos en mercados potenciales y, al mismo tiempo, comprar a bajo precio aquellos que demanda su población, entre otros muchos beneficios.

Lo que es un hecho es que los partidos de extrema derecha han sabido aprovechar el descontento social y el desencanto que ha provocado una UE que se expuso como la panacea, pero que recientemente ha demostrado debilidad (estructural) para atender las necesidades básicas de una población cada vez más demandante y, lamentablemente, dispuesta a sacrificar algunos principios liberales, incluidos sus propios derechos humanos, por discursos populistas que ofrecen alternativas simples, aunque poco realistas, que se alimentan del racismo, la xenofobia, el odio hacia el *establishment* y cualquier otra demostración de regresión democrática.

BIBLIOGRAFÍA

- Buxton, Nick, “Understanding and confronting authoritarianism”, *Transnational Institute*, noviembre de 2017, <<https://www.tni.org/files/tni-understanding-and-confronting-authoritarianism.pdf>>, 27 de julio de 2023.
- Consejo de la Unión Europea, “Populism”, *Consejo de la Unión Europea*, diciembre de 2021, <<https://www.consilium.europa.eu/media/53807/art-paper-on-populism-8-dec-2021.pdf>>, 25 de julio de 2023.
- EuropeElects, “EU Parliamentary Projection: The Race for the Top Gets Tighter”, *EuropeElects*, 31 de julio de 2023, <<https://europeelects.eu/2023/07/31/july-2023/>>, 16 de agosto de 2023.
- Gratius, Susanne y Rivero, Ángel, “Más allá de la izquierda y la derecha: populismo en Europa y América Latina”, *Revista CIDOB d’Afers Internacionals*, núm. 119, septiembre de 2018, pp. 35-61.
- Ipsos, “Global Trustworthiness Index 2021”, *Ipsos*, octubre de 2021, <<https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2021-10/Global-trustworthiness-index-2021-ipsos.pdf>>, 25 de julio de 2023.
- Linz, Juan J., *La quiebra de las democracias*, Madrid, Alianza Universidad, 1987.
- Moffitt, Benjamin, *Populismo. Guía para entender la palabra clave de la política contemporánea*, México, Siglo XXI, 2016.
- Parlamento Europeo, “EP Spring 2023 Survey: Democracy in action - One year before the European election” *European Union*, junio de 2023, <<https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/3093>>, 24 de julio de 2023.
- Sánchez Margalef, Héctor, “Lidiar con la extrema derecha”, *CIDOB*, febrero de 2019, <https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion/europa/lidiar_con_la_extrema_derecha>, 16 de agosto de 2023.
- Ungureanu, Camil y Serrano, Iván, “El populismo como relato y la crisis de la democracia representativa”, *Revista CIDOB d’Afers Internacionals*, núm. 119, septiembre de 2018, pp. 13-33.
- Wike, Richard *et al.*, “Social Media Seen as Mostly Good for Democracy Across Many Nations, But U.S. is a Major Outlier”, *Pew Research Center*, diciembre de 2022, <<https://www.pewresearch.org/global/2022/12/06/satisfaction-with-democracy-and-political-efficacy-in-advanced-economies-2022>>, 24 de julio de 2023.

II.

ESTUDIOS DE CASO: EUROPA

LOS AÑOS DE ABUNDANCIA HAN TERMINADO... CONTRADICCIONES, FRACTURAS Y TENSIONES DEL ORDEN LIBERAL DEMOCRÁTICO EN ALEMANIA

Luis Alfonso Gómez Arciniega¹

No es al simple fracaso del mundo moderno a lo que hoy asistimos, sino al fracaso de su éxito.

—NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA

A la luz de la reciente incursión militar rusa en Ucrania, la democratización total del mundo luce lo suficientemente inverosímil como para suponer un futuro más convulso y borrascoso. Según este relato fundacional de las sociedades occidentales, predicado *urbi et orbi* tras la desintegración de la Unión Soviética, la humanidad, redimida de las sombras del pasado, transitaría, tarde o temprano,

hacia el paraíso auroral de la democracia liberal, el capitalismo global y el reconocimiento universal de los derechos humanos. El mito está hermanado con el “hombre nuevo”, la “paz perpetua”, el “fin de la historia” o “la tierra es plana”... todas variaciones de la gran partitura ilustrada: la existencia de un individuo racional que puede discernir lo mejor para él y, mediante la libertad, moldear el mundo conforme a sus necesidades. Ni siquiera la sangrienta disolución de Yugoslavia iniciada en 1991 o el atentado terrorista en Nueva York del 11 de septiembre de 2001 mermaron la confianza en la sociedad igualitaria, multicultural, ecologista, que en el disfrute de abundancia material y tras resolver los desacuerdos esenciales, se dedicaría a intercambios comerciales y culturales en un festival humanitario permanente. El trabajo de los políticos en el siglo XXI se reduciría a ajustar —ya por el convencimiento, ya por la fuerza— las categorías mentales de quienes, por ignorancia, irracionalidad o maldad, se resistieran a incorporar esta suerte de “palabra revelada” al sentido común. Había que reubicar artificialmente los límites de

¹ Profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), candidato a doctor en Filosofía Política y maestro en Ciencia Política y Filosofía por la Universidad de Heidelberg, internacionalista por el ITAM y estudios en Letras Alemanas por la UNAM. Sus últimos textos son: “Las estrofas del ánfora sagrada: Hölderlin y la posible remitificación del mundo en el ánimo finisecular” y “En nombre de la Humanidad. Apuntes para una metafísica de la guerra en el siglo XXI”. Correo: alfonsofae@gmail.com/ Twitter: @lagarciniega.

lo “pensable” o, en palabras del politólogo italiano Antonio Gramsci, lograr una “hegemonía cultural”. Con la caída del Muro de Berlín, había cambiado la realidad y, en consecuencia, las personas tenían que hacer ajustes mentales. Ningún Estado encarnó mejor este mito que Estados Unidos, “la nación indispensable” –en palabras de la exsecretaria de Estado, Madeleine Albright– que, elegida por la Providencia, tenía el deber de escribir la historia de la libertad para todos los pueblos.

Cuando digo mito –por si acaso hiciera falta la aclaración–, me refiero a algo más que a una fantasía pueril, fábula primitiva o “niebla mental”: es un relato que, estructurado en episodios simbólicos y protagonizado por héroes, mártires o enemigos arquetípicos, trata de hacer inteligible el mundo. Hans Blumenberg (1981) ha explicado que el mito es una manera de apaciguar el “absolutismo de la realidad”. Y es que, frente a la impotencia o falta de disposición biológica para hacer frente a una naturaleza hostil (*mysterium tremendum*), en el estado primigenio, los mitos disipan el miedo, proveen confianza y posibilitan orientación... Aun en las “sociedades modernas”, estos siguen teniendo utilidad porque la realidad sigue siendo obtusa, monótona, intransigente e impredecible (“*narrare necesse est*”, Odo Marquard *dixit*). Como pensaba el teórico político y constitucionalista francés, Georges Burdeau, los mitos son “puntos de referencia” y “figuras de alivio” que ordenan el caos para que cada individuo pueda fungir como actor social en una comunidad determinada y, en términos políticos, explican el poder como si explicaran “el rayo, la sequía o las enfermedades del ganado” (Burdeau, 1979, p. 56). Desde esta perspectiva, el orden liberal democrático de las sociedades occidentales puede entenderse como un arreglo de poder legitimado mediante un relato mítico, traducido a su vez en programas políticos que, con herramientas y planes adecuados, pretende transformar la realidad.

*

El 23 de diciembre de 1989 –a mes y medio de la caída del Muro de Berlín–, Leonard Bernstein di-

rigió la *Novena sinfonía* de Beethoven en Berlín occidental y, dos días después, en la *Konzerthaus* de la zona oriental. El afamado director de orquesta parafraseó el último movimiento, con el argumento en el programa de que Schiller había bosquejado otra versión de la *Oda a la alegría* titulada *A la libertad* y la afirmación de que era el momento “enviado desde el cielo para entonar la palabra libertad” (Borchmeyer, 2019, p. 495). A pesar de que la versión alternativa provenía de la pluma de Adolf Glaßbrenner, el texto original de Schiller, como sugiere Dieter Borchmeyer, está plagado de suficientes referencias ilustradas y prolongados suspiros por una “hermandad metapolítica de la humanidad” (*metapolitische Menschheitsverbrüderung*), cuyo esplendor eclipsaría el sufrimiento y la injusticia (Borchmeyer, 2019, p. 497). La anécdota no es trivial. Tras la segunda posguerra, los alemanes adoptaron el mito de los vencedores: en un primer momento, el “antifascismo soviético” para la República Democrática Alemana (RDA) y el “milagro económico” para la República Federal Alemana (RFA) y, después de la Guerra Fría, la confianza en el triunfo final del liberalismo para el país entero. Para los estadounidenses, la transformación de los belicosos alemanes en demócratas ejemplares era una prueba más de la importancia de su misión evangelizadora. Para los alemanes, abrazar este relato fundacional les permitió integrarse a la comunidad internacional como miembro ejemplar de pleno derecho gracias a instancias multilaterales como la Unión Europea (UE), la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o Naciones Unidas (ONU). Pero el mito también adoptó acentos particulares. La Ley Fundamental (*Grundgesetz*) y las formas de “lidiar con el pasado problemático” (*Vergangenheitsbewältigung*) sustituyeron como fundamento del orden político a épicas nacionalistas como el triunfo del querusco Arminio en la batalla del bosque de Teutoburgo (9 d. C.), la proclamación del Imperio alemán en el Palacio de Versalles (1871) o la promesa de restauración imperial en la leyenda medieval de Barbarroja. Una alquimia mítica inoculó tradición a la nueva democracia invocando el Festival de Hambach de 1832 o la República de Weimar de 1918 como antecedentes.

Lejos de convertirse en un “territorio desmitificado”, el nuevo relato que sustentaba el orden democrático se asumió como un proyecto racional, definitivo, superior a cualquier narración pretérita. Por eso, el filósofo Jürgen Habermas (1992) podía escribir con toda naturalidad que bastaba con asegurar un procedimiento para fundar el Estado de derecho. Los valores fundamentales se legitimarían mediante argumentos racionales, sin apelar a tradiciones religiosas o relatos emotivos. El rechazo de los “fundamentos prepolíticos del Estado de derecho” pretendía reivindicar la validez universal de los derechos fundamentales (Habermas, 1992, pp. 106-118). Perfeccionar las instituciones para que no se repitiera la catástrofe de 1933 era, finalmente, la obsesión de la reunificación. En 2006, durante el Mundial de Fútbol, las banderas que ondeaban por las calles simbolizaban la nueva cara de un país que, sin *Pickelhauben* ni cruces gamadas, abría las puertas para recibir a visitantes de todo el mundo. El mito de una Alemania comprometida con el orden democrático internacional alcanzó, no obstante, sus notas más álgidas con la “cultura de bienvenida” (*Willkommenskultur*) durante la crisis de refugiados, más de una década después. En aquellos años fue posible observar rituales cívicos de profunda emotividad: niños que, entre aplausos y lágrimas, recibían a caravanas de refugiados con osos de peluche en las estaciones de tren; estudiantes universitarios que se enlistaban febrilmente para enseñar alemán a los recién llegados, y burócratas que introducían “alemán simplificado” en los documentos oficiales para facilitar las solicitudes de asilo. ¿Qué mejor lugar para escenificar una arcadia multicultural que el lugar donde se planeó el exterminio de millones de seres humanos en nombre de una raza superior? Durante las primeras décadas del siglo XXI, el consenso político se reflejaba en la universidad, con “transitólogos” valorando a los Estados como “defectuosos” o “fallidos” dependiendo del grado en que se acercaran o no a la democracia liberal, las teorías de acción racional o la Filosofía Política normativa –Adorno, Kant, Rawls, Habermas–. En la industria de entretenimiento, se hizo evidente con una adaptación cinematográfica multipremiada de la novela de Eric Maria Remarque, *Sin novedad*

en el frente (2022), con marcado tono antibélico; la melodramática distopía *Rumbo a lo desconocido* (2017), sobre una familia alemana huyendo de la “extrema derecha” a Namibia, o en el zafio humor del comediante Jan Böhmermann, quien, en 2016 y so pretexto del autoritarismo del personaje, atacó ferozmente en la cadena pública ZDF al presidente turco Recep Tayyip Erdoğan con un “poema injurioso” (*Schmähgedicht*) en el que lo acusaba de “follar cabras”, “patear kurdos”, “oprimir minorías” y “golpear a cristianos” mientras mira “pornografía infantil”, o tuitear que la democracia cristiana (CDU, por sus siglas en alemán) eran “nazis con contenido”. También se hizo presente en el lenguaje de los políticos como la excanciller democristiana Angela Merkel, quien, refiriéndose a la integración de los refugiados, proclamó con su característica parquedad: “Lo lograremos”. Otros, como la verde Katrin Göring-Eckardt, secundaron el optimismo: “Alemania va a cambiar y nos alegramos de que así sea”. Finalmente, también se hizo visible en la prensa –donde se endilgaba el calificativo peyorativo de “comprendedor de Putin” (*Putin-Versteher*) a quien intentara alejarse del consenso proucraniano–, en la etiqueta *#ichbinhier* que pretendía denunciar racismo en redes sociales o en acaloradas discusiones en *Eckkneipen* o *Biergärten*.

A pesar del inquebrantable optimismo, el saldo desastroso de la Primavera Árabe, la violencia generada por la migración descontrolada, la desconfianza en la ciencia, el *brexit*, las sucesivas crisis económicas y la guerra entre Rusia y Ucrania mostraron los agudos problemas de una sociedad que se imaginaba a sí misma en la cúspide de la historia. No tendría por qué ser diferente. La realidad está lejos de ser un cuento de hadas; en general, esta es desagradable y, con frecuencia, bastante cruel: son demasiados los problemas y además insuperables. Ante esa discrepancia, lo más cómodo es hacer a un lado las noticias estridentes y descontarlas como anomalías. El problema es que son muchas. Y, pasado cierto tiempo, se advierte que, fuera de las oficinas gubernamentales, las aulas universitarias y las oficinas periodísticas, un agresivo nacionalismo se afirma contra la utopía multicultural y el funda-

mentalismo religioso ha sembrado una panoplia de horrores: de Berlín a Bruselas, pasando por París o Palmira; de la sala de redacción de *Charlie Hebdo* al mercado navideño en la Breitscheidplatz, pasando por el Museo de Mosul, la sala de conciertos Bataclan o la prisión de Abu Ghraib. En muchos lugares, la “democratización” a golpe de recetas ajenas a las realidades locales ha desestabilizado los órdenes existentes (en México, Oriente Medio o el espacio postsoviético, por ejemplo). Por si fuera poco, el ánimo belicista de los dirigentes alemanes –en parte por la necesidad de contribuir a la seguridad internacional tras los pasos dubitativos de Estados Unidos, en parte por la urgencia de detener flujos migratorios, en parte por la obsesión con la “amenaza rusa”– generará agrias disputas en torno a la reasignación de recursos y exigirá acrobacias mortales para mantener un sistema de prestaciones sociales. Y, aunque el bienestar económico sea importante, la zozobra de individuos angustiados y refugiados en un hedonismo nihilista revela la incapacidad de las sociedades secularizadas para ofrecer un sentido de trascendencia más allá de lo puramente material. De estas contradicciones se nutren los partidos “populistas”, como Alternativa por Alemania (AfD, por sus siglas en alemán), que irrumpió en escena durante las elecciones federales de 2013 –tras la activa intervención de Merkel en el rescate crediticio de Grecia–, obtuvo tres diputaciones y 91 escaños de representación proporcional en 2017 y, en 2021, 83 en total. En junio de este año, Robert Sesselmann se convirtió en administrador del pequeño distrito rural (*Landkreis*) de Sonneberg, en el este del país, y, una semana después, Hannes Loth se convirtió en el primer alcalde de esta formación política, tras ganar la elección de la ciudad de Raguhn-Jeßnitz, en Sajonia-Anhalt. En los sondeos, AfD pasó en diez años de un precario 4 % en 2013 a un 20 % de intención de voto².

² Es posible constatarlo en esta página: <https://www.wahlrecht.de/umfragen/index.htm>. El sitio contiene un archivo histórico de encuestas dominicales de los principales institutos de sondeos alemanes (Allensbach, Forsa, INSA o Yougov...), que se remonta aproximadamente a 1994. Incluye encuestas tanto en el ámbito federal como en el estatal.

Durante un tiempo, con la memoria de las “camisas pardas” o “espartaquistas” en las calles a inicios del siglo XX, los políticos alemanes entendieron que había que *contener* los radicalismos: se perseguía a grupos violentos, pero se brindaba a los partidos foros para manifestar sus ideas –mejor exponer sus contradicciones y mantener canalizadas las energías desestabilizadoras–. En este clima político, el Partido Nacional Democrático (NPD, por sus siglas en alemán), sucesor más o menos directo del nacionalsocialismo histórico y ahora denominado *La patria*, nunca pudo rebasar, desde su fundación en 1964, el umbral mínimo del 5 % para ocupar curules de representación proporcional en el *Bundestag*. El partido *Los Republicanos*, creado en 1983 por antiguos miembros de la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU, por sus siglas en alemán) y liderado por un popular conductor de radio y televisión y antiguo voluntario de las Waffen SS, Franz Schönhuber, ingresó en 1989 en el parlamento de Berlín, obtuvo 7.1 % de votos en las elecciones europeas y casi 15 % en su feudo bávaro, pero, a partir de 1990 fue perdiendo importancia. A inicios del siglo XXI, no obstante, una nueva generación de políticos se convenció de que, con las políticas correctas, era posible superar cualquier obstáculo a la democratización. El estrechamiento del espectro ideológico del sistema de partidos, tras una “era Merkel” fincada en la negociación con distintas fuerzas políticas, acabó por desfigurar el conservadurismo y la socialdemocracia. Lo mismo ocurrió con los medios. La homologación en contenidos en los principales diarios facilitó el surgimiento de nuevos medios como *Tichys Einblick* o la deriva hacia posiciones conservadoras de *Cicero* o el *Neue Zürcher Zeitung* (NZZ). Con la “Coalición Semáforo”, que formó gobierno en 2021, el espectro se ha comprimido a tal punto que, quienes no asuman abiertamente la agenda progresista –energías verdes, representación de minorías, multiculturalismo– como dogmas, suelen ser descalificados (son desconcertantes, por ejemplo, los intentos de emparentar discursivamente a la democracia cristiana con la extrema derecha). Los éxitos electorales de la AfD, suponen los adeptos al mito de la democratización total del mundo, solo pueden explicarse desde el radicalismo, el atraso

o la irracionalidad. El mismo día, el ministro federal de Salud, el socialdemócrata Karl Lauterbach, tuiteaba: “Es el punto más bajo de nuestra política desde la caída del Muro de Berlín. La población debe involucrarse más en la protección del clima y la justicia”. Al unísono, Göring-Eckardt añadía que “todos debían escuchar la advertencia”. Este tono moralizante, que se apresura a descalificar cualquier resultado adverso, es un escollo para entender las manifestaciones políticas que dinamitan el orden político.

*

Confieso que *Kampfbegriffe* como “extrema derecha”, “fascismo” o “populismo”, cada vez me resultan menos útiles para explicar el descontento con el orden liberal: me desagradan el uso inflacionario para desacreditar al contrincante y los indicios de capitulación intelectual. Recientemente, Chantal Delsol ha revalorado el “populismo” –sobre todo en su libro *El populismo o los retardados de la historia* (2015)–, como una categoría para describir la revuelta de lo “popular” o “tradicional” contra la ideología universalista preponderante en las élites europeas, heredera de la Ilustración francesa y que propugna la emancipación de los individuos de todo arraigo particularista. Chantal Mouffe o Ernesto Laclau, tras admitir que se trataba de un término fluctuante, revalorizaron en distintas publicaciones la categoría para construir un significado del “pueblo” como identidad común entre grupos diversos y abrir con ello, en *arrière-pensée*, una lucha discursiva para saturar el espacio público con una nueva narrativa. Un “populismo de izquierdas”, piensan estos autores, revitalizaría una democracia con déficit de representación. Es fácil decirlo desde Inglaterra, donde existe un consenso sobre el orden político y los actores tienden a dirimir diferencias en marcos institucionales, pero no deja de resultar macabro suponer qué significaría “activar el populismo” en lugares como Ucrania, Uganda, Israel o India, donde los conflictos están profundamente enraizados en cuestiones religiosas o étnicas. Encima, después de leer las páginas de Jan-Werner Müller o Nadia Urbinati, caigo en cuenta de que, incluso cuando

los especialistas parecen reconocer el fenómeno como una serie de demandas heterogéneas, dan por sentada la democracia liberal, como si esta fuera la única forma posible de imaginar el orden político y, en consecuencia, aducen al populista intentar sustituirla por democracias plebiscitarias o dictaduras. Es decir: son ejercicios normativos y no esfuerzos heurísticos. Para más inri, los términos se han banalizado a tal grado que se utilizan indistintamente para descalificar a quien dispare el déficit público o a quien promueve regulaciones en materia migratoria. Esta tendencia no solo oscurece los fenómenos que se pretenden denunciar –xenofobia, racismo, antisemitismo, mesianismo, corrupción–, sino que también los normaliza a tal punto que los supuestos “populistas”, lejos de avergonzarse, ostentan con orgullo su etiqueta. Hoy es posible que radicales se indignen cuando se les catalogue con este término peyorativo y es probable cometer linchamientos injustos aprovechándose de la estridencia de las redes sociales. En esta afanosa búsqueda de enemigos definidos hay quienes franquean todas las barreras: el moderador Maurice Gajda mostró en un programa televisivo un tuit falso de la política de AfD, Frauke Petry, criticando al cantante Trong Hieu del festival Eurovisión. Tras el revuelo, la cadena RTL se vio obligada a pedir disculpas y a retirar al moderador.

Pese a todo, me parece que, si se le libera de sus adiposidades normativas, la categoría puede ser útil para referirse a una *estrategia comunicativa* de la que se sirven las más variopintas posiciones ideológicas –y no necesariamente a un conjunto de ideas, programas políticos estructurados o individuos concretos–. Esto supone, para empezar, que ciertos actores, partidos o grupos sociales pueden recurrir a un lenguaje populista sin ser ellos mismos “populistas” o representar una “personalidad autoritaria”. Recuerdo a un encantador apicultor de Hannover que culpaba a Merkel de todas las desgracias o a mi amabilísimo casero de Heidelberg, quien me confesó que, después de que un grupo de “extranjeros” amenazaran a su hijo con una navaja en una estación de autobús, pretendía votar por AfD para que los partidos tradicionales reaccionaran,

pero también pienso en el político verde Winfried Kretschmann, jefe de gobierno de Baden-Württemberg, quien se pronunció por un endurecimiento del proceso de solicitud de asilo para contrarrestar la migración ilegal. La lógica populista echa mano de una construcción mítica del “pueblo”, con raíces en la Revolución francesa, para denunciar a grupos gerenciales al servicio de intereses oligárquicos, facciosos o cleptócratas. Esta forma de comunicación se sirve, además, de la convicción tecnocrática de que la política debe resolver problemas de manera expedita y dividir tajantemente entre el bien y el mal. Según el clásico Guy Hermet, el éxito de los populistas se debe al anhelo de una abolición cuasimágica de la distancia entre los deseos y su realización, distancia que, debido a la complejidad del mundo, termina por prevalecer en la mayoría de los casos. Su atractivo surge de la confianza en que los sueños pueden alcanzarse sin grandes esfuerzos y transformaciones dolorosas (Hermet, 2001, pp. 49 y ss.). La estrategia populista obliga a soluciones definitivas: levantar muros para contener la migración ilegal, aniquilar quirúrgicamente a “cárteles de droga”, repartir dinero para grupos desfavorecidos, afirmar que un país puede acoger a todos los refugiados o pretender resolver el colonialismo eliminando del callejero el nombre de Paul von Hindenburg. La estrategia populista viene de la mano con aquello que Dalmacio Negro (2021, p. 38) llamó “política utópica o futurista” que aspira a conseguir el orden político perfecto y está ligada con el desprecio por el político tradicional, en peligro de extinción desde finales de la Guerra Fría, pues, resueltas todas las contradicciones históricas, apenas eran necesarios tecnócratas para traducir en políticas públicas verdades incontrovertidas con la mayor celeridad y eficiencia posibles.

Ahora bien, para explicar el extremismo político hay que privilegiar la precisión: no es lo mismo el régimen nacionalcatolicista de Francisco Franco que la dictadura militar de Ion Antonescu como tampoco la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, actúa en el mismo tenor que el primer ministro húngaro Viktor Orbán. El discurso antimexicano de Donald Trump difícil-

mente compaginaría con la “iberosfera” de Santiago Abascal. Tiene su chiste fijarse en las diferencias, porque, en buena medida, la naturaleza de la crisis del orden democrático y su destino dependen de una serie de circunstancias concretas: no es lo mismo, de modo alguno, vivir los prolegómenos a la Empresa de Fiume con Gabriele D’Annunzio que asistir a la victoria en segunda vuelta de un candidato de AfD en un poblado de Turingia. Los triunfos electorales de AfD no son una nueva *Kristallnacht* ni 2023 es 1932. Hay también diferencias entre los líderes de esta formación: Alexander Gauland, el jefe del partido y de la fracción parlamentaria, llegó a pronunciar que “Hitler y los nazis son solo una caca de pájaro (*Vogelschiss*)” y que “los malditos doce años” del nazismo no deberían empañar “más de mil años de historia exitosa”; Beatrix von Storch denunció en un documento del partido de 2019 el antisemitismo del Día de Al-Quds en Berlín; Björn Höcke –exlíder de *Der Flügel*, facción del partido autodenominada como resistencia contra la erosión de la identidad alemana, con vínculos con grupos neonazis y vigilada por la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV, por sus siglas en alemán)– calificó recientemente a la UE como una “instancia y una agencia de la globalización que extrae dinero de los bolsillos de los contribuyentes alemanes sin que obtengamos grandes beneficios de ello y uniforma la diversidad cultural de Europa” y apostilló diciendo que “la UE debe morir para que la verdadera Europa pueda vivir”; Alice Weidel –exasesora de Goldman Sachs y doctora en Economía– se ha pronunciado a favor de las parejas homosexuales y en contra de la migración poco calificada. Las divergencias ejemplifican que estos partidos operan como movimientos transversales y atraen a ciudadanos de todos los espectros políticos, clases sociales y origen demográfico. La izquierda también echa su cuarto a espadas. Al fin y al cabo, antisemitismo, racismo o euroescepticismo no son atributos exclusivos de la “extrema derecha”; tampoco, las teorías conspirativas, el rechazo a la democracia liberal o el cuestionamiento de la ciencia. En el escenario de la “operación especial” rusa en Ucrania, por ejemplo, la AfD ha llegado a coincidir con el partido *La Izquierda* en su

rechazo a la intromisión de Alemania en el conflicto. La controvertida Sahra Wagenknecht –política perteneciente a esta formación– ha condenado la ofensiva rusa, pero se ha opuesto al envío de armas y se ha manifestado a favor de terminar las sanciones con el fin de abrir negociaciones con Moscú y recuperar el *statu quo ante* que permitía a los consumidores contar con un suministro energético a un precio relativamente bajo. Su “Manifiesto por la paz”, impulsado junto con la activista feminista Alice Schwarzer y apoyado, entre otros, por Peter Gauweiler de la CSU, el exgeneral de brigada y exasesor militar de la excanciller Merkel, Erich Vad, o el portavoz federal de AfD, Tino Chrupalla –de quien, Wagenknecht, no obstante, se distanció rápidamente–, le han granjeado diversas acusaciones de “populista”. Según algunas fuentes periodísticas, la polifacética política izquierdista ha decidido crear un nuevo partido que dispute el voto duro de AfD. Es posible agregar algo más. Después del giro liberal de la socialdemocracia tras la caída del Muro de Berlín, el “tercermundismo” ha revitalizado a una izquierda alemana desorientada: Ayotzinapa, la causa palestina, las mujeres iraníes o la Primavera Árabe ofrecen una ideología de sustitución que permite una crítica radical del modo de vida occidental sin consecuencias reales para ese modo de vida. Ahora hay que sumar la obsesión con las identidades de género y la condescendencia con el islamismo radical. Y otro tanto habría que decir de los activistas ecologistas del grupo *Última generación*, que se pegan a las carreteras o aeropuertos para protestar contra la falta de medidas para hacer frente al cambio climático.

Si uno se pusiera catastrófico, podrían decirse, con tono lastimero, cosas muy grandilocuentes sobre los éxitos electorales de la AfD o el apoyo a la izquierda radical. Podría decirse, por ejemplo, que se trata de preludios de una nueva *Machtergreifung* o del fin de una decadencia espiritual de lentísima gestación, como hubiera pensado Oswald Spengler. Y a lo mejor sería cierto todo. Sin embargo, viendo las cosas más de cerca, no hace falta mucho para descubrir que cierta parte de la protesta esporádica y confusa que condensan esos votos no obe-

dece a un programa delineado ni está encuadrada en partido alguno; es simplemente expresión de una inconformidad general, igualmente desorientada, que se dirige casi contra lo que sea. Se dice “los políticos” como se dice “los migrantes” o “el capitalismo”. Otros votan por AfD porque añoran los años del milagro económico y sí, seguramente, también habrá quien esté convencido del nacionalismo *Blut und Boden* (“sangre y tierra”). Ahora bien, ni todos los votantes “populistas” son euroescépticos, antisemitas o islamóforos, ni los radicalismos se agotan en los partidos: en Dresde tiene su sede el movimiento Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente (*Pegida*, por sus siglas en alemán) y en Heidelberg, unos integrantes de la sociedad estudiantil (*Burschenschaft*) Normannia aparecieron retratados en 2017 haciendo un saludo hitleriano. Difícil circunscribir geográficamente el voto populista: un análisis del *Tagesspiegel* de 2021 muestra que, en Berlín, el apoyo a AfD crece afuera del anillo de S-Bahn (Haffert, 2022, p. 19). Lukas Haffert ha explicado, con acopio de razones, que si bien en Alemania del Este es posible hablar de un contraste entre ciudad y provincia, para Alemania occidental el panorama es más complejo: en las elecciones de 2017, AfD obtuvo grandes éxitos en la región del Ruhr, en ciudades medianas sureñas y en la provincia bávara (Haffert, 2022, p. 51). No todos los radicales son “hombres blancos privilegiados”. Mesut Özil, el exfutbolista de ascendencia turca de la selección campeona en 2014 y galardonado con el Premio Bambi de integración, ha aparecido fotografiado junto al presidente Erdoğan o mostrando un tatuaje con un símbolo del Partido de Acción Nacionalista (MHP, por sus siglas en turco) –calificado por el gobierno alemán como de “extrema derecha”–. Están también las microagresiones cotidianas de los “demócratas ejemplares”, que tienen las obras completas de Goethe en el librero y recolectan ropa para los “refugiados”, pero están convencidos de que Rusia es un país atrasado, preguntan sin pudor a un alemán de tez oscura de dónde viene realmente o cambian de alemán a inglés o a un dialecto para establecer una frontera entre ellos y los otros. Aquí también, el uso indiscriminado de la etiqueta populista no solo oscure-

ce los fenómenos que se pretende denunciar, sino que los normaliza a tal punto que los “populistas”, lejos de avergonzarse, parecen exclamar: “Si mi forma de vida es la de un nazi, pues soy un nazi”.

Se entiende que el orden democrático liberal requiera enemigos mostrencos, agravios milenarios, ultrajes imperdonables, porque se trata de una elaboración mítica de la política. Los líderes capitalizan la autoridad moral de las víctimas, los “expertos en movimientos radicales” dividen a grupos enteros entre “buenos” y “malos”, advirtiendo que cualquier matiz o intento de explicación es una “minimización de la amenaza” (*verharmlosen*), y los oportunistas pescan a río revuelto. Pero, si se quieren tomar en serio las amenazas al orden político, es indispensable evadir generalizaciones, por grandilocuentes y tentadoras que estas parezcan. Por esta razón, más allá de proponer una definición exacta del “populismo”, lo que me propongo a continuación es dividir, de manera muy esquemática pero con la menor arbitrariedad posible, a los inconformes con el orden liberal en dos tipos ideales: los moderados, que suscriben el mito fundamental pero exigen correcciones en su traducción en políticas públicas, y los radicales, que cuestionan los fundamentos míticos del sistema político.

*

Oscilando entre la decepción y el enojo, entre el aburrimiento con programas partidistas anodinos y el malestar con políticos incompetentes, el inconforme moderado está convencido de que, con todas sus fallas, el proyecto democrático liberal tiene sentido como aspiración. No en vano una encuesta de Forsa para *Stern* tras las elecciones en Sonneberg mostraba el desacuerdo de 73% de posibles votantes con una posible coalición entre los partidos tradicionales y AfD. Simplemente difieren sobre las formas de traducir el mito liberal en políticas públicas. A este grupo pertenece, por ejemplo, quien aspira a rentar una vivienda a precio asequible, quien desaprueba el seguidismo europeo en torno a la política exterior estadounidense, quien piensa que el eurodiputado no representa los intereses de la provincia, quien

quiere ir a una piscina pública sin sufrir acoso sexual, quien considera el *burkini* una capitulación de los ideales ilustrados, quien quiere poder ir sin miedo a la estación de tren en Colonia o al parque Görlitz en Berlín o quien simplemente percibe que los políticos no brindan apoyo suficiente al cuerpo de bomberos local. Hay quienes consideran injusto destinar dinero para erigir centros de refugiados y clasemedios que, sin ser racistas consumados, miran con escepticismo la posibilidad de integrar a millones de inmigrantes. Hay académicos que, sin negar la pertinencia de la UE para asegurar la paz en el continente, consideran que esta no debe defender la democracia en todo el mundo. Hay quien defiende la opción de alimentarse con proteína animal en los comedores estudiantiles y quien piensa que los paneles solares afean el paisaje tradicional. Otros, como mi casero de Heidelberg, apenas están interesados en emitir un voto de castigo. Todos reconocen el orden vigente y encauzan sus demandas mediante las urnas. Es decir, hacen “política” en el sentido más elemental del término. Y, para ser sinceros, nada de esto tendría qué sorprender: la realización de todo mito fundacional siempre conlleva negociaciones, correcciones, disputas y ajustes y el resultado siempre será distinto a la partitura. El marco democrático liberal evita que los conflictos se vuelvan esencialistas y dota a las personas de canales de representación.

El problema es cuando la democracia se convierte en un hatajo inmovilizado de dogmas. La competencia partidista se reduce a un consenso artificial de “tercera vía”, los partidos quedan disminuidos a alternativas burocráticas y las discusiones intelectuales descienden al nivel de entretenimiento televisivo. Odo Marquard advirtió hace varias décadas sobre los “monomitos”: quien no cree en el camino imparable hacia la libertad tras la Revolución francesa se vuelve un hereje, un traidor de la historia, un enemigo de la humanidad... un reaccionario en el mejor de los casos (2015, pp. 53-55). Mientras el monomito está obsesionado con una sola verdad, la diversidad de historias (“polimito”) disgrega la violencia en muchas historias, que se limitan entre sí (Marquard, 2015, pp. 53-55). La democracia

liberal ha construido una “hegemonía cultural” en ciertos sectores de la población, sin que esto signifique el fin de las disidencias. La ilusión del fin de la historia, además de crear conflictos esenciales –quien se muestra inconforme con algunos aspectos del programa se vuelve automáticamente enemigo del sistema entero–, desestima las demandas de ciertos grupos o sectores sociales. En los últimos años, los líderes urbanos, individualistas, con educación universitaria y consumidores de productos orgánicos, suelen mirar a la sociedad tradicional, predominantemente agraria, tradicional y familiarista con un dejo de paternalismo y superioridad moral –un reclamo constante, por cierto, de Sahra Wagenknecht–. El desprecio por la población mayor es también ostensible. En 2021, los grupos ecologistas iniciaron una campaña (*Enkelkinderbriefe*) para que los nietos convencieran a sus abuelos para votar por la alternativa ecológica: para el relato moderno, el faro de la juventud debe alejar a los fósiles vivientes de las profundidades abisales de los prejuicios. En el mismo ánimo, la CDU intentó, durante la “era Merkel”, “ajustarse al *Zeitgeist*” con el reconocimiento de parejas homosexuales, la posición en torno al aborto, las políticas migratorias laxas o el cambio de paradigma en torno a la energía nuclear.

Pese a todo, esos “reductos de irracionalidad” no tienen visos de desaparecer pronto. Si el sistema de partidos se reduce a la administración de verdades esenciales, consecuencia lógica del progreso, se genera una crisis de representación que los “populistas” intentan atender. Otro problema de este consenso artificial es que, cuando la élite política no satisface las demandas de los votantes, incluso los adeptos más leales del orden liberal terminan por desmoralizarse y, al no existir alternativas verosímiles, caen seducidos por partidos extremistas. En lugar de imaginar enfrentamientos metafísicos entre demócratas y populistas, hay que mirar los paisajes locales: mientras mejor se entienda por qué están protestando las personas, mejor podrá imaginarse una estrategia de contención desde los canales tradicionales. Una mayor representación en el sistema partidista evitaría que ciertos actores

moderados, alienados y estigmatizados, acaben por engrosar las filas de grupos radicales y derrumbar así el orden democrático liberal.

Bajo la etiqueta de “populistas” también se esconden, no obstante, quienes no consideran las elecciones como mecanismo legítimo de representación, que suponen a los partidos como clanes y a la élite política como un cóncave conspiracionista y sostienen que creencias religiosas tienen preeminencia sobre lo político... Escépticos de cualquier sistema político siempre ha habido. El problema es suponer que el mito liberal es el que mejor ayuda a hacer inteligible el mundo. Frente a los síntomas de malestar con el orden liberal, la primera reacción es la negación, lo que elimina de tajo la capacidad de tratarlos. El siguiente impulso es prohibir ciertas manifestaciones. Se entiende que un sistema político combata con denuedo a quienes cuestionen sus fundamentos: un imperio puede sobrevivir a los desastres de un monarca limitado, pero no al cuestionamiento incesante de la idea de la monarquía; la República de Weimar puede sobrevivir a disputas parlamentarias, pero no si se le declara ajena al orden histórico alemán. También la autoridad liberal requiere un fundamento mítico –más allá de las leyes– que, ni siquiera desde la idea más exhaustiva de “libertad de expresión”, debe cuestionarse –y, si este principio se toma en serio, tendría que ser válido no solo para la extrema derecha, sino también para la extrema izquierda o el fundamentalismo religioso–. El problema está en establecer el límite para las opiniones válidas, pues una tradición intelectual habituada a cuestionar la autoridad tiende a someter incluso este punto decisivo a una discusión interminable. Asociar la prohibición con la democracia erosiona, además, el mito de “la libertad de expresión”. Encima, también hay cuestiones pragmáticas de difícil resolución: ¿cómo afirmar la Constitución en un barrio con mayoría religiosa activa?, ¿tiene el liberalismo fundamentos filosóficos para justificar vigilar el radicalismo que sucede al amparo de la “vida privada”? Por eso, quizá sea recomendable combatir estas disidencias mediante el cultivo de los mitos que sustentan el orden liberal, pues re-

currir únicamente a “argumentos racionales” sería de una inocencia catastrófica. No es casualidad que, en 1796, Hegel, Hölderlin y Schelling esbozaran en “El más antiguo programa sistemático del idealismo alemán” una “mitología de la razón” para avivar el entusiasmo ilustrado. Que todavía haya muchos defendiendo la democracia liberal –incluso en el campo de batalla– es un indicio de que la mejor defensa que puede hacerse del orden político involucra imágenes poderosas que tengan el poder de convencer y, al mismo tiempo, maleabilidad suficiente para no osificarse. Finalmente, el éxito o fracaso de un sistema político depende de su capacidad para hacer inteligible el mundo para las personas.

*

En las páginas finales del *Doktor Faustus* de Thomas Mann, la cantata sinfónica *Lamento del doctor Fausto* –última composición del virtuoso Adrian Leverkühn antes de que su pacto con el diablo termine por arrastrarlo al infierno– emerge como la contraparte melancólica a la *Novena sinfonía* de Beethoven. Un espantoso grito de dolor ahoga la exultante *Oda a la alegría*. Al despojar al *lied* fúnebre de todo resabio de esperanza, Leverkühn expresa su atribulada convicción de que a su época le ha sido arrebatada la oportunidad de contemplar un sentido de humanidad universal. El adagio final de la pieza apocalíptica simboliza, en palabras de Serenus Zeitblom –narrador de la novela y biógrafo

del músico condenado–, el “lamento de Dios sobre la perdición del mundo”. Como a Leverkühn, el impulso fáustico llevó a los alemanes en el siglo XX a conocer los confines más oscuros del infierno. Que la construcción del paraíso terreno no es un progreso lineal es la lección más importante de aquellos horrores.

En consecuencia, la tarea de los políticos no es resolver la pobreza mundial, garantizar la libertad de todos los seres humanos o conseguir la paz perpetua en un mundo condenado a la imperfección, sino dar significado a los conflictos, incorporarlos en esquemas generales de gobierno, condensarlos en un programa partidista, elaborarlos como parte de un orden de antagonismos claros pero no absolutos. El orden político es resultado de la pluralidad humana y no de la eliminación sistemática de divergencias. Si un conservadurismo serio o una izquierda sensata desaparecen del mapa político –suponiendo un consenso definitivo–, los nacionalismos, las utopías, las religiones políticas y los relatos de grandezas imperiales seguirán cosechando voluntades en un liberalismo crepuscular. Si pese a todos los esfuerzos, el mito que sustenta el orden liberal en realidad ha perdido todo el encanto que tenía a finales de la Guerra Fría, entonces habrá que prepararse para una nueva época. Y no tiene caso hacer dilaciones o negaciones conceptuales. Después de todo, no será la primera ni la última vez que un sistema político colapse.

REFERENCIAS

Blumenberg, Hans, *Arbeit am Mythos*, Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 2ª ed., 1981.

Borchmeyer, Dieter, *Was ist Deutsch? Die Suche einer Nation nach sich selbst*, Berlín, Rowohlt, 4ª ed., 2019.

Burdeau, Georges, *La Politique au pays des merveilles*, París, Presses Universitaires de France, 1979.

Habermas, Jürgen, *Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats*, Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 4ª ed., 1994.

Habermas, Jürgen, “Vorpolitische Grundlagen des demokratischen Rechtsstaates?”, en *Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze*, Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 2005, pp. 106- 118.

Haffert, Lukas, *Stadt Land Frust. Eine politische Vermessung*, Bonn, Bundeszentrale für politische Bildung, 2022.

Hermet, Guy, *Les Populismes dans le monde. Une histoire sociologique XIXe-XXe siècle*, París, Fayard, 2001.

Marquard, Odo, “Lob des Polytheismus. Über Monomythie und Polymythie”, en Marquard, Odo, *Zukunft braucht Herkunft. Philosophische Essays*, Stuttgart, Reclam, 2015, pp. 46-71.

Negro, Dalmacio, “Los tres modos de la política”, en *El fin de la normalidad y otros ensayos*, Madrid, Dykinson, 2021, pp. 37-57.

LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA: ¿RESISTENCIA O FATIGA DE MATERIALES?

José Andrés Fernández Leost¹

El sistema democrático español, al igual que el resto de los países de su entorno, ha estado sujeto a graves tensiones desde la crisis económica de 2008 que en parte perduran hasta la actualidad y cuyos precedentes pueden remontarse al período de la transición política. No obstante, y enunciado con la cautela que merece diagnosticar el presente, cabe afirmar que los riesgos de que España se convierta en un régimen iliberal son menores, siempre que su entramado institucional se mantenga robusto y la situación económica permita prolongar su cohesión social, para evitar derivas de polarización ideológica. Para sostener esta tesis, el análisis se divide en dos intervalos temporales –1977–2010,

previo a la crisis, y 2010–2023, posterior a ella–, en cada uno de las cuales se indaga sobre la evolución de los planos económico, cultural y político de la realidad española. El último apartado se reserva a un conjunto de consideraciones sobre el futuro inmediato de la democracia en plena “policrisis” (Tooze, 2022).

ANTES DE LA CRISIS

La coyuntura económica española en los albores de su transición a la democracia vino marcada por la crisis petrolera, que sometió al país a una situación de estanflación tras el ciclo tecnócrata que caracterizó al régimen franquista entre 1959 y 1973, con un crecimiento anual sostenido del 7 %. Dicho desempeño, a partir del cual el modelo productivo empezó a terciarizarse, comenzó a gestar una amplia clase media, al tiempo que se produjo un *boom* demográfico y se inició una veloz mutación cultural de hábitos y valores.

¹ Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y está graduado en Filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Profesor asociado del Departamento de Historia, Teoría y Geografía Política de la UCM desde 2015. Fue responsable de Investigación y Publicaciones en la Fundación Atman para el diálogo entre culturas (2005–2007). Se incorporó al área de Estudios de la Fundación Carolina en 2008, donde continúa trabajando en la actualidad.

La tesitura crítica de finales de los años setenta quedó en cierta medida paliada por los Pactos de la Moncloa –destinados a contener la inflación– y superada por el reimpulso económico que implicó el ingreso del país a la Comunidad Económica Europea (1986). A la modernización empresarial y la apertura a la inversión extranjera que eso supuso, se sumó en esos años una intensa inversión pública en infraestructuras –desarrollo del tren de alta velocidad, Juegos Olímpicos, proyecto Hispasat, y otros– que, sin embargo, desembocaron en una recesión, fruto de la deuda pública y un drástico aumento del paro (–1 % del PIB y 24 % de desempleo en 1993).

En todo caso, este bache se revirtió a partir de 1995, cuando arrancó una nueva fase expansiva que llegó hasta 2008, con un incremento medio del PIB del 3.5 %. La entrada en el euro, la internacionalización de las empresas, la bajada de los tipos de interés –que acabó hinchando el mercado inmobiliario– y la llegada de inmigrantes (empleados en gran parte en el sector de la construcción) afianzaron el optimismo económico de un largo decenio, golpeado abruptamente por la crisis de 2008. Con todo, la ilusión de un progreso continuo –respaldado por las cifras de un PIB per cápita que pasó de poco más de 1,000 euros en 1975 a más de 24,000 en 2008²– se proyectó casi automáticamente sobre la dimensión cultural y, quizá de forma más matizada, en la esfera política.

La transformación en el plano formativo, con descensos de las tasas de abandono escolar del 70 % a menos del 30 % en los primeros treinta años de andadura democrática, y la triplicación del número de estudiantes universitarios –de 450,000 a más de 1.5 millones en el mismo período– da cuenta cuantitativa de un profundo cambio social que se extiende a la inserción de las mujeres en el mundo laboral, del 28 % al 42 % (Conde Ruiz, 2016); el aumento de la laicidad, del 8 % al 22 %, o la adopción de medidas

legislativas, como la despenalización del aborto o la pionera ley de matrimonio homosexual, ya en 2005, reflejo preciso de la conversión española de retaguardia a país de vanguardia en términos de costumbres. A su vez, a los fenómenos de notoriedad artística e incluso proyección cultural exterior –la Movida madrileña, el cine de Almodóvar, la pintura de Barceló, la gastronomía, etc.–, se agregó el influyente papel de los medios de comunicación en la configuración de un espacio público cuya sociedad se va identificando cada vez más con lo que el sociólogo Robert Inglehart categorizó como valores “posmaterialistas”, de emancipación y autoexpresión individual, por encima de los “materialistas”, más ligados a la seguridad.

De hecho, los resultados de su *Encuesta Mundial de Valores* (2004) señalaban a España como uno de los 81 países analizados en el que la brecha valorativa intergeneracional era más acusada. Cabe barruntar la hipótesis de una hegemonía cultural de izquierdas –simpatizante asimismo del nacionalismo periférico– como resultado de una identidad “constituyente” antifranquista, superpuesta, e incluso de mayor alcance, a la que articularon los mitos fundacionales de la transición –la reconciliación, la europeización y la modernización (Morán, 1995)–, mitos que contribuyen a explicar la arrolladora victoria del Partido Socialista (PSOE) en las elecciones generales de 1982, pero no tanto la casi inalterable autoubicación ideológica de los españoles en el centroizquierda hasta el presente (2023).

Queda por rememorar la reiterada “historia de éxito” que, en el intervalo planteado, protagonizó el país desde el punto de vista político tras la muerte del dictador, y en la que se encadenan, entre otros hitos, la Ley de la Reforma Política (el “*harakiri* de las Cortes franquistas”), la aprobación de la Constitución de 1978, la adopción en 1979 de los primeros Estatutos de Autonomía (Cataluña y País Vasco), el golpe de Estado de 1981, la victoria del PSOE en 1982, el relevo en el poder del centroderecha (1996–2004) y la recuperación posterior del gobierno por parte de la izquierda. Sin perjuicio de las lecturas críticas de la transición, el sistema resultante go-

² Datos de libre acceso del Banco Mundial: <https://datos.bancomundial.org/>.

zó –al menos hasta 2010– de una notable solidez institucional, secundada por la profesionalización de sus administraciones públicas, el encaje de los nacionalismos periféricos en el modelo autonómico de distribución territorial del poder, la supeditación de las Fuerzas Armadas a las autoridades civiles, o el prestigio social de la Corona, ante todo tras su papel en el golpe de Estado frustrado de febrero de 1981.

La propia conformación parlamentarista del sistema –más versátil ante los cambios de coyuntura, o menos polarizador– se ha esgrimido a menudo como garantía de estabilidad política (Linz, 1990), siempre que además cuente con el apoyo de la sociedad y el concurso de partidos políticos afianzados. La prolongación de una alternancia gubernamental bipartidista durante treinta años, la suscripción de diversos pactos de Estado –los referidos de la Moncloa, el Pacto de Toledo de 1995, el Antiterrorista de 2000– sumada al sostén social al sistema, acreditado con grados de participación media del 73 % en las nueve elecciones generales de 1979 a 2008, autorizan a hablar de un “caso de éxito”. Y así lo corroboraba la decimoquinta posición que ocupaba el país en el *Democracy Index* de *The Economist* de 2008.

Por descontado, dichos años no dejaron de atestiguar severos déficits de “calidad democrática”, según reflejaron los casos de corrupción política –debidos, entre otras causas, a la falta de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas³–; a la imprecisión en la delimitación del Estado de la Autonomías, y, por encima de todo, a la persistencia de la actividad terrorista de ETA, banda independentista, socialista y revolucionaria vasca que acumuló hasta 2011 más de 850 asesinatos, 669 cometidos tras la muerte de Franco. Tampoco cabe olvidar otras circunstancias de desencuentro, en ocasiones muy agudo, entre oposición y gobierno, con ocasión del apoyo de este a la guerra de Iraq –que quebró una trayectoria de consenso en mate-

ria de asuntos exteriores como política de Estado, aun reproduciendo una brecha extendida al resto de Europa–; tras el atentado de raíz yihadista del 11 de marzo de 2004, tres días antes de las elecciones generales (quizás el mayor trauma que ha padecido la sociedad española en democracia), o ante la reforma del Estatuto de Autonomía catalán, que entró en vigor con el referéndum de junio de 2006 –previa aprobación en las Cortes Generales con los votos del partido gobernante–, pero que fue corregido (“recortado”) por el Tribunal Constitucional en 2010, después del recurso que interpuso el Partido Popular (PP).

En este sentido, a partir aproximadamente de 2003 y hasta la crisis económica de 2010, se generó un clima de crispación, de germen de guerra cultural con ecos incluso guerracivilistas, en el que, al clivaje izquierda-derecha, se agrega el eje nacionalismo-constitucionalismo. En efecto, datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) muestran cómo el indicador de confianza ciudadana en el sistema gobierno/oposición cayó de valores por encima del 50 % a finales de los años noventa y principios de los 2000 (casi un 60 % en 2004), al 30 % en 2010⁴. A escala institucional, este ambiente de tensión quedó en parte eclipsado por la primacía de afrontar esa crisis, y de ahí el acuerdo de reforma constitucional entre los partidos mayoritarios en septiembre de 2011, que introdujo el concepto de estabilidad presupuestaria y la prioridad del pago de la deuda pública en su articulado. Pero la desafección política no se disipó.

TRAS LA CRISIS

Así se abre el segundo intervalo temporal, marcado a principios de la década de 2010 por las consecuencias de una crisis financiera global que en España se combinó con fragilidades estructurales ligadas a la burbuja inmobiliaria y a la baja

³ La primera ley en regular la financiación de los partidos políticos data de 1985.

⁴ Véase: https://www.cis.es/cis/opencms/ES/11_barometros/Indicadores_PI/documentos/serGobOpo1.html

productividad de una economía muy dependiente de la construcción y de la hostelería, y que elevó con rapidez el nivel de desempleo (la gran asignatura pendiente del país) por encima del 25 %, frente al casi 10 % de la Unión Europea (UE). Las medidas de austeridad que anunció en mayo de 2010 el gobierno socialista para volver al objetivo comunitario del 3 % de déficit público (llegó a rebasar el 10 %), y que implicaron recortes en el sueldo de los funcionarios, congelación de las pensiones y una reforma laboral, suscitaron un amplio descontento en la sociedad, prolongado en los siguientes años. Ciertamente, la presión por la desconfianza de los mercados financieros hacia el pago de la deuda pública, las ulteriores políticas de ajuste del gasto público del gobierno del PP –acompañadas por la subida de impuestos, la reestructuración del sector bancario (incluidas nacionalizaciones) o la adopción de una nueva reforma laboral–, además de provocar una fuerte contracción del consumo privado y no surtir efectos sino en el mediano plazo (el paro no descendió del 20 % hasta 2016), consolidaron la desafección institucional. Con todo, la reversión de la tendencia económica, impulsada inicialmente por el buen comportamiento del sector exterior –con saldos positivos por primera vez en más de una década en la balanza de bienes y servicios– se plasmó entre 2015 y 2017 con crecimientos del PIB por encima del 3 % y una evolución ralentizada, aun superior al 2 %, en los dos siguientes, ya caracterizados por la inestabilidad política.

La irrupción de la pandemia truncó de forma provisional los planes del nuevo gobierno (constituido en enero de 2020), al ocasionar una profunda caída del PIB (-11.3 %), lastrado por la paralización del sector turístico y la vulnerabilidad energética intrínseca al país. No obstante, la reacción de la UE, opuesta esta vez a la austeridad y canalizada por el programa de estímulos *Next Generation EU* –con un fondo dotado de 750,000 millones de euros, del que España solicitó 69,500 millones–, junto con la suspensión de las reglas fiscales europeas, posibilitó aplacar los efectos ante todo sociales de la crisis.

Ya en febrero de 2022, la incipiente recuperación económica –empujada de nuevo por la buena conducta de los intercambios exteriores– se topó con otro desafío: la guerra de Ucrania, estrechamente ligada al alza de los precios energéticos, en un escenario pospandémico de incremento previo de la inflación. Y, de nuevo, la respuesta se articuló en torno a un paquete de medidas de protección social como la rebaja del IVA de la luz y de los alimentos de primera necesidad, la bonificación del carburante, o el aumento del ingreso mínimo vital, a lo que se sumó el logro gubernamental de que la UE autorizase a España adoptar un mecanismo excepcional de ajuste de costos de producción para la reducción del precio de la electricidad.

Todo lo anterior, unido a una reforma laboral orientada a combatir la temporalidad, la subida del salario mínimo interprofesional, o la actualización de las pensiones conforme al IPC, han ubicado al país en una situación estable, pero no exenta de riesgos. El encadenamiento de crisis, la cota de los precios y el alza de los tipos de interés han supuesto una merma significativa del poder adquisitivo de la población, a la espera de una desinflación que todavía tardará en sustanciarse. A su vez, la reactivación (pendiente) de las reglas fiscales de la UE y la retirada de apoyo del Banco Central Europeo en materia de compra de deuda podría complicar el futuro financiero.

Por lo demás, como es sabido, este horizonte se enmarca en un escenario global de automatización de la actividad productiva, digitalización y declive geoeconómico (y demográfico) occidental, frente al auge de las potencias emergentes (ya emergidas) que, desde principios de siglo, vienen desplazando el centro gravitacional del poder tecno-económico a las costas del Pacífico, con la consecuente erosión de las clases medias europeas (el PIB per cápita de la UE se mantiene casi en los mismos números de 2008, un poco por encima de los 37,000 dólares). Este factor, junto con el de la inmigración, que desde finales de los años noventa apenas ha aumentado en la Unión del 6 % a poco más del 8 % –bien es cierto que, con tasas altamente concen-

tradas en Alemania, España, Italia y Francia, con datos en torno al 12 %-16 %- anda detrás del giro nacional-populista en Europa, sin perjuicio del recio componente ideológico presente en las repúblicas excomunistas de Visegrado.

Resultaba previsible que, en la década de 2010, el retroceso económico y la desigualdad conllevarse –ya en el ámbito cultural– el retorno en Europa de los valores securitarios y tradicionales, “materialistas”, favorecidos por la relegación del trabajador masculino poco cualificado y una pirámide poblacional regresiva, cuyas clases trabajadoras (empleadas en el sector agrícola o industrial) no se identifican forzosamente con las predilecciones “posmaterialistas” hacia el medio ambiente o el cosmopolitismo, tanto más si estas se asocian con pérdida de ingresos e intereses de la élite. Esta corriente “contracontracultural” (en tanto la “contracultura” empieza a percibirse como hegemónica o *mainstream*), de raigambre antisistema, autoritaria y nativista –simbolizada asimismo por los llamados *white trash* estadounidenses que supo captar el candidato Trump–, es la que parece haber cristalizado a este lado del Atlántico, beneficiada por la reconfiguración de una esfera pública desintermediada, vía redes sociales, dominada por las emociones.

En la época de las *fake news*, cuando todo hecho se convierte en interpretable, la conversación racional sobre los problemas comunes desaparece para dar lugar al “narcisismo de la opinión” (Adorno), y a una lucha de identidades en la que al cabo participan ambos polos del espectro ideológico, lo que da lugar a la colusión entre las reivindicaciones de las minorías étnicas o sexuales contra las de un reactivo neonacionalismo identitario. Así se reproduce una guerra cultural entre reaccionarios y *wokistas*, que polariza el debate político al punto de condenarlo a un diálogo entre sordos. No cabe de cualquier manera entender este fenómeno de forma estrictamente homogénea en la realidad europea, toda vez que, en cada país, el populismo contiene rasgos diferenciales: desde el proteccionismo económico con guiños obreristas y abierto al matrimonio homosexual de la extrema derecha de Francia, al neoliberalismo

casi libertario de los casos austriaco o neerlandés, pasando por el enfático conservadurismo moral de Hungría o Polonia, dejando ahora de lado el análisis de un populismo de izquierdas, no nativista, pero igualmente antisistema y con ribetes autoritarios también presente en distintos grados de intensidad en Francia, Italia, Alemania o Grecia. En este sentido, el caso español refleja asimismo una idiosincrasia marcada por su historia e inercias sociológicas (comunitarista y familiar), sin dejar de mantener patrones similares a otros países.

El movimiento del 15 de mayo de 2011 (15-M), aun motivado por factores económicos, aglutinó a sectores política y socialmente transversales, unidos por una “indignación” en la que se adivinaban trazos que llegan a nuestros días, máxime después del confinamiento por la pandemia: la ausencia de una narrativa de progreso, en la que a la frustración de expectativas se añade el mero reclamo de “conservar” los logros sociales del Estado de bienestar. Desde entonces, el enojo de las clases medias y populares ha pasado de expresarse en clave casta/pueblo a hacerlo bajo otro esquema más poroso (cosmopolitas vs. nacional-populistas), en el que el resentimiento que generan las desigualdades apunta cada vez más hacia una “cultura progresista”, aparentemente despreocupada de los “perdedores de la globalización”.

Ahora bien, en este punto, la sociedad española, aun realumbrando nacionalismos identitarios, no ha experimentado un repliegue de valores conservadores, se resiste asimismo al discurso antiinmigración, y sus guerras culturales están acotadas al plano mediático (también político), muy ruidoso, pero que de momento no se ha generalizado entre una ciudadanía tolerante, moderada, todavía europeísta, y cuya cultura política continúa comprometida con el sistema democrático. Su descontento se cierne sobre el funcionamiento de las instituciones y la conducta de la clase política, y este es el aspecto que conduce al análisis político.

La amplia victoria conservadora en noviembre de 2011, seis meses después del 15-M, abrió una legis-

latura de cariz tecnócrata, centrada en afrontar la crisis económica, con elevadas dosis de protesta (incluida una huelga general) e insatisfacción social –tanto más ante el desvelamiento de prácticas corruptas por parte del PP, heredadas de la década anterior–, pero relativamente tranquila en el ámbito parlamentario, según hizo patente el proceso de abdicación del rey Juan Carlos en favor de su hijo Felipe VI⁵, tramitado con el concurso de los dos principales partidos políticos. Bajo esta aparente calma, envuelta en el último gobierno de mayoría absoluta que ha tenido el país –más aún: en la última legislatura de corte bipartidista–, se activaron no obstante cambios cruciales que vinieron a alterar el sistema político en los años sucesivos: el inicio del proceso soberanista catalán en diciembre de 2012 (el *procés*), con el compromiso de los principales dirigentes de sus dos grandes partidos (CiU y ERC) para celebrar una consulta de autodeterminación en su comunidad autónoma, y el surgimiento de nuevos partidos políticos de alcance nacional que, a partir de 2015, pusieron en suspenso al bipartidismo en España: Ciudadanos (Cs) y Podemos.

El primero, una formación nacida realmente una década antes en el escenario catalán –como opción socialdemócrata antinacionalista–, intentó asumir en su reaparición posterior un papel de partido bisagra, liberal, centrista, dispuesto a pactar con la centroizquierda y la centroderecha, y obtuvo en todo caso su apoyo electoral de bases adheridas a su antinacionalismo y de votantes de derecha decepcionados con la ejecutoria del PP. Acaso este respaldo fue el que llevó gradualmente a sus líderes a pretender ocupar el espacio de la centroderecha en una estrategia que, ya en 2019, se reveló fallida.

Por su parte, Podemos cobró un protagonismo todavía mayor, en tanto fuerza que en sus inicios encauzó las demandas del 15-M, con un proyecto transversal, deliberadamente populista en su sentido menos peyorativo y más ambicioso des-

de el punto de vista teórico. Entroncando con los planteamientos de Ernesto Laclau, se trataba de superponer reclamos sociales para abanderar un momento refundacional del sistema, que aspiraba incluso a ganar la hegemonía cultural del país. La proximidad o afiliación directa de sus dirigentes con movimientos de izquierda posmarxista –desde el Partido Comunista hasta la organización Anticapitalistas–, junto con el frustrado *sorpasso* político al PSOE, así como su connivencia con los independentismos periféricos –por no hablar de las rivalidades orgánicas internas–, rebajaron sus expectativas (y también su tirón electoral), lo que lo obligó al cabo a reorientar su estrategia como espacio a la izquierda del Partido Socialista, hasta convertirse de hecho en una formación formalmente sistémica con el gobierno de coalición establecido tras las elecciones generales de noviembre de 2019.

Previamente, entre 2015 y 2019 –período, recuérdese, en los que acontecieron el *brexít* y las victorias de Trump y Bolsonaro–, se vivieron en España los años políticos más inestables desde 1982, caracterizados por dos repeticiones electorales –las generales de diciembre de 2015 se volvieron a convocar en junio de 2016, y las de abril de 2019, siete meses después–, y la primera moción de censura triunfante, que llevó al líder del PSOE, Pedro Sánchez, a la Presidencia del gobierno. En dicho tramo tuvo asimismo lugar la mayor crisis institucional de la democracia, desencadenada a raíz de la celebración del referéndum de autodeterminación ilegal de Cataluña el 1 de octubre de 2017, la posterior Declaración Unilateral de Independencia (anulada por el Tribunal Constitucional), y la consecuente activación del artículo 155 de la Constitución española, de intervención gubernamental en la comunidad autónoma para obligarla a cumplir con sus funciones legales (y que decaería una vez compuesto el gobierno resultante de las elecciones catalanas, fijadas a finales de ese año en las propias medidas adoptadas en aplicación del artículo 155).

Esta legislatura convulsa, en la que –con todo– se consensó en 2017 el Pacto de Estado contra la Violencia de Género (el último hasta la fecha),

⁵ No sin desprestigio de la Corona por la conducta poco ejemplarizante del primero.

fue igualmente en la que se fraguó el auge de Vox, partido de extrema derecha impulsado a finales de 2013 por antiguos militantes del PP, que pasó de obtener menos de 50,000 votos en las elecciones de 2016, a 3.6 millones en las de noviembre de 2019, en detrimento de la influencia política de Cs. Con la resolución de dichas elecciones, que dieron pie a la conformación del gobierno de coalición entre PSOE y Podemos –respaldado parlamentariamente por socios nacionalistas y soberanistas del País Vasco y Cataluña–, se cimentó un bibloquismo institucional, de enfrentamiento entre bloques, que parece haber sustituido al bipartidismo anterior y llega a la actualidad.

El impacto de la COVID-19 y de la guerra de Ucrania, las tensiones internas en la coalición gubernamental (exacerbadas por las consecuencias de la Ley Orgánica de la Garantía Integral de la Libertad Sexual) o las polémicas medidas tomadas para aplacar el conflicto catalán –en forma de indultos a los políticos independentistas presos por el *procés* (junio de 2021), y de reforma penal que derogó el delito de sedición y rebajó las penas para la malversación (diciembre de 2022)– erosionaron notablemente la imagen de la izquierda gobernante. Sin embargo, tras el duro castigo que sufrió en las elecciones municipales y autonómicas del 28 mayo de 2023, pudo recomponerse en las generales anticipadas de apenas dos meses después: la posibilidad de que Vox pudiese cogobernar el país sirvió de acicate para movilizar al electorado progresista. De este modo, en virtud de la correlación saliente de fuerzas parlamentarias, las elecciones las perdió el ganador (PP), y las ganó el perdedor (PSOE), que, no obstante –si desea continuar gobernando–, tendrá que seguir dependiendo no solo del partido a su izquierda (Sumar, un proyecto depurado de los elementos más arrebatados de Podemos), sino también del independentismo vasco y catalán.

Paradójicamente, el panorama desprendido de la cita electoral ofrece un repunte del bipartidismo –esto es, de las opciones moderadas de centroizquierda y centroderecha– y un encogimiento tanto de los extremos ideológicos como del nacionalismo

catalán, cuyo porcentaje de voto en Cataluña ha bajado por primera vez desde 1982 del 30 %, cuando había llegado al 43 % en las últimas generales. A su vez, la pérdida de 600,000 votantes de Vox y su rendimiento porcentual (del 12.3 %, muy lejos del 42 % de Le Pen), han aminorado el peso político de la formación más próxima al “iliberalismo” europeo, más aún cuando dichos resultados parecen haber encaminado al partido hacia su versión más “antiglobalista”, tradicionalista y antiliberal (en términos económicos), estrategia quizá con vocación de erigir redes internacionales, pero de poco arraigo en España.

Sea como fuere, la reedición del bibloquismo apunta hacia el alargamiento de una polarización más política que sociológica, y que, además de bloquear importantes reformas postergadas –netamente, la referida a la renovación del poder judicial– o imposibilitar salidas consensadas ante el conflicto catalán, no hace sino ensanchar la distancia entre los políticos y la ciudadanía. Cifras del Eurobarómetro de marzo de 2023 indican que el 90 % de la sociedad española desconfía de los partidos políticos y un 78 % lo hace del Parlamento, números que pueden sugerir un deslizamiento iliberal, pero que conviene contrastar con su identificación con la ciudadanía europea (86 %) y con su apoyo sostenido a la democracia: casi el 80 % prefiere la democracia a cualquier otro sistema de gobierno, prácticamente igual que hace cuarenta años (CIS, 2021). Por último, la clasificación del país en el vigesimosegundo puesto en el último *Democracy Index* de *The Economist* (2023), aun manifestando cierto deterioro, mantiene a España dentro de la categoría de “democracias plenas”. ¿Significa esto que no hay riesgo de quiebre democrático?

EN LA “POLICRISIS”

La incertidumbre de una época de “policrisis” –climática, bélica, financiera, energética, alimentaria, etc.– y de reconfiguración de un orden internacional cambiante impide pronunciar enunciados taxativos sobre el porvenir de la democracia liberal. Cier-

tamente, lejos de expandirse, parece certificarse una “recesión democrática” (Diamond) anunciada al menos desde 2015 y redoblada con la pandemia. Sin embargo, tal vez las noticias de su muerte sean apresuradas a la luz de la persistencia de las instituciones liberales en sistemas democráticos que padecen o han padecido líderes populistas (Estados Unidos, Brasil, Italia). No se trata de refutar la evidencia de la caída o estancamiento de sus indicadores esenciales: pluralismo político, libertad de expresión, participación cívica, derechos fundamentales o división de poderes. La cuestión consiste en ponderar la entereza del diseño liberal, asentado en un mecanismo de frenos y contrapesos, en el que “el poder detenga al poder” (Montesquieu), destinado a evitar la senda autoritaria. Este modelo, que presenta ya más de un siglo de rodamiento práctico –inspirado, no olvidemos, en el régimen mixto de Polibio– continuará sufriendo embestidas, pero resulta difícil imaginar un mejor marco de convivencia público, y en esto puede decirse que Fukuyama acertó.

Otro asunto es que el escenario sea propicio para tentativas refundacionales o procesos constituyentes, a los que hay que prestar máxima atención, y no únicamente por las potenciales regresiones jurídico-institucionales: la amenaza real radica aquí en situar la “voluntad soberana” por encima de las leyes o, dicho de otra forma, en renunciar al núcleo de principios constitucionales que actúan como límite a aquellas decisiones mayoritarias que precisamente ponen en peligro la democracia (la arbitrariedad puede proceder tanto de un dictador como de la multitud). La clave está en partir del “imperio de la ley” como piedra angular de la democracia liberal y concepto que diluye la contraposición entre legitimidad democrática y principio de legalidad, en tanto es justo “la ley la que crea el marco dentro del cual la ‘voluntad soberana’ puede ser comprobada y llevada a la

práctica”⁶, de modo que no hay democracia sin regla de la mayoría, pero tampoco sin “imperio de la ley”. Y es que este –sin poderlo todo– es el que garantiza la seguridad (jurídica) y la racionalidad del sistema político.

Pues bien, cuando en épocas de crisis se juega a promover “momentos fundacionales”, poniendo incluso en entredicho decisiones constituyentes, es recomendable que el legislador tenga a bien salvaguardar el diseño de un Estado democrático de derecho. Y estas consideraciones se hacen especialmente pertinentes a la hora de discernir cabalmente la situación en la que se encuentra la democracia española, por cuanto: i) la premisa básica de su Constitución –como la de toda norma fundamental de cualquier país, esto es: la unidad de la soberanía, del poder constituyente– aparece desafiada por formaciones independentistas, y ii) la desafección institucional provocada por la clase política en la ciudadanía podría derivar en una desatención cívica del “imperio de la ley”, apropiada para un reimpulso nacional-populista. Tendencias internas mencionadas en este texto (falta de independencia judicial, bibloquismo), tanto como externas (corrosión del multilateralismo, inflación), o que rebasan el objeto de esta reflexión (instrumentalización política de la inteligencia artificial) no son halagüeñas. Pero el carácter eminentemente técnico de gran parte de los problemas políticos en España, de reajuste normativo y renovación institucional –concernientes al funcionamiento de los partidos, uso (atenuado) de decretos leyes, o nombramiento de altas magistraturas: Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía del Estado, Agencia de Protección de Datos, etc. (De la Nuez, 2023)–, permite pensar en desenlaces sin duda arduos, pero transitables, alejados de presagios catastrofistas. Cabe pues confiar en que la resistencia de los materiales (institucionales) consiga que la democracia prevalezca.

6 Dictamen del Tribunal Supremo canadiense del 20 de agosto de 1998 sobre la secesión de Quebec.

REFERENCIAS

CIS, *Barómetro de febrero 2021. Avance de resultados*, Estudio núm. 3309, febrero 2021, disponible en: http://datos.cis.es/pdf/Es3309mar-MT_A.pdf.

Conde Ruiz, J. I., “Gender Gaps en el Mercado Laboral Español”, *Agenda Pública – El País*, 23 de noviembre, 2016, disponible en: <https://agendapublica.elpais.com/noticia/15613/gender-gaps-mercado-laboral-espanol>.

De la Nuez, E., “La garantía son las instituciones”, *El Mundo*, 14 de agosto, 2023.

Diamond, L., “Facing Up to the Democratic Recession”, *Journal of Democracy*, vol. 26, núm. 1, enero de 2015, pp. 141-155.

Eurobarómetro, *Opinión pública en la Unión Europea. Informe nacional: España*, Unión Europea, 2023, disponible en: https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/eurobarometro-tres-de-cada-cuatro-espanoles-favor-de-que-se-tomen-mas-decisiones-nivel-de-la-ue-2023-03-23_es.

Inglehart, R. et al., *Human beliefs and values: A cross-cultural sourcebook based on the 1999-2002 value surveys*, México, Siglo XXI, 2004.

Linz, J. J., “The Perils of Presidentialism”, *Journal of Democracy*, vol. 1, núm. 1, 1990, pp. 51-69.

Morán, M^a. L., “La cultura política y la interpretación de las transiciones a la democracia. (Notas sobre el caso español)”, *Política y Sociedad*, núm. 120, septiembre-diciembre, 1995.

Tooze, A., “Definir la policrisis: de la imagen a la matrix de la crisis”, *Sin Permiso*, 26 de junio, 2022, disponible en: <https://www.sinpermiso.info/textos/definir-la-policrisis-de-la-imagen-a-la-matrix-de-la-crisis>.

FRANCIA, DE DEMOCRACIA AVANZADA A POLIARQUÍA EN ENTREDICHO

Mario Ojeda Revah*

Al igual que el británico y el estadounidense, el sistema político francés ha sido considerado proverbialmente como una de las democracias avanzadas, paradigmáticas y de más larga data en el orbe occidental. No en vano, Francia fue principio y origen de la Revolución de 1789 que entronizó, propagó e hizo universales los valores fundamentales de la Ilustración, del liberalismo y, por ende, de la democracia contemporánea.

A diferencia de aquellas constituciones, la *polity* francesa se ha visto signada por la inestabilidad y el sobresalto a lo largo del tiempo, al transitar desde aquella fecha eminente hasta nuestros días

por cinco repúblicas, una restauración monárquica, una monarquía constitucional, dos imperios, una dictadura fascista y una ocupación extranjera. No obstante, en contraste con los sistemas políticos anglosajones, la democracia gala ha sido más radical en sus derechos y libertades desde el origen, al haber conferido el sufragio universal (masculino) y directo mucho antes que estos.

Hoy, ese mismo sistema político que, al menos desde 1871 y nuevamente desde 1958, se erigió en paradigma a emular y objeto de admiración por terceros, vive horas muy bajas, tanto que muchos observadores y analistas definen, sin hipérbole, su actual deriva como una auténtica crisis de régimen. La Constitución de la Quinta República es abiertamente cuestionada desde muy diversos flancos como anacrónica e inoperante. En las elecciones de 2017 y 2022, los cimientos de dicho sistema se vieron muy severamente trastocados, al punto que muchas voces comienzan a augurar su fin.

* Es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en esta misma disciplina por la London School of Economics. Está especializado en estudios diplomáticos y de integración europea, y en historia y literatura españolas. Actualmente, se desempeña como Investigador “A” en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La principal amenaza a la supervivencia y viabilidad de la democracia en Francia la constituye hoy la llamada Agrupación Nacional (AN o *Rassemblement National*, RN), organización sucesora y reemplazo del Frente Nacional, de extrema derecha, fundado en 1972 por el antiguo legionario y militar Jean Marie Le Pen, quien ganó fama por sus groseras invectivas contra el islam, por su negacionismo del holocausto y por sus durísimos ataques, sin filtro y sin freno, contra la inmigración magrebí y subsahariana. Hoy, el partido está acaudillado por su hija Marine, quien, pese a haber darle una imagen más moderada, no se ha distanciado de sus tendencias xenófobas y nativistas.

En la elección de 2017, proceso que estuvo marcado de modo alarmante por una gran abstención, superior al 25% en la segunda vuelta, el Partido Socialista Francés (PSF) y *Les Républicains* (Los Republicanos) –fuerzas de centroizquierda y centroderecha gaullista, que habían sostenido a la República y su consenso liberal-socialdemócrata por décadas– no consiguieron superar la primera ronda electoral al obtener 20.01 y 6.36 % de los votos emitidos, respectivamente. En el primer caso, su abanderado, François Fillon, ex primer ministro bajo el gobierno del expresidente conservador, Nicolás Sarkozy, se vio envuelto en un caso de desvío de dinero público.

Dicho descalabro se vio refrendado e incluso agravado en los comicios celebrados un lustro más tarde. La participación electoral fue incluso menor que cinco años atrás, al alcanzar la abstención la cifra escandalosa del 28.2 % del electorado, la más alta registrada desde 1969, lo que reveló la magnitud de la falta de credibilidad y la crisis de legitimidad que acechan al sistema político francés. En efecto, si a la abstención se le suman los votos anulados, se obtiene la cifra alarmante de 16,922,463 sufragios que no se sintieron identificados ni representados por Macron o Le Pen.

Por el contrario, *En Marche*, organización política creada a partir de la nada con el solo fin de apoyar la candidatura del ministro de Finanzas del gobierno saliente, Macron obtuvo el 27.85 % de los sufragios

y Le Pen, el 23.15 %. Incluso la Francia Insumisa, coalición de izquierdas capitaneada por el veterano militante del ala izquierda del PSF, Jean-Luc Mélenchon, obtuvo un portentoso 19.85% de los votos, ligeramente por debajo de Los Republicanos, lo que colocó a dicha alianza como la cuarta fuerza política francesa. Lo que se perfiló en esa elección fue una tendencia centrífuga hacia los extremos que no ha cesado de avanzar y que fue contenida por el centrismo de Macron en la primera ronda electoral, pero de manera exigua en el balotaje.

En 2022, republicanos y socialistas confirmaron su debacle. La candidata de los primeros, la antigua ministra de Enseñanza Superior y de la Investigación, Valérie Pécresse, obtuvo un exiguo 4.8 % de los votos, en tanto que la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, consiguió el peor resultado en la dilatada historia del PSF, al recibir apenas un muy vergonzoso 2.1 % de los sufragios emitidos. De modo diametralmente opuesto, las fuerzas radicales y antisistema de extrema derecha y ultraizquierda aumentaron de modo significativo sus caudales electorales, al obtener la AN un 23.15 % y LFI un 21.95 % de la votación en la primera ronda, lo que reveló de manera por demás angustiosa el grado de radicalización y polarización alcanzado por el electorado francés. Más perturbador incluso es el hecho de que Le Pen haya acortado la distancia que la separaba de Macron en la segunda vuelta de esos mismos comicios.

A año y medio de su primera elección, Macron debió hacer frente a la emergencia de un movimiento de base, los denominados “Chalecos Amarillos”, que pusieron en jaque a su gobierno. Inicialmente surgidos en las periferias marginales de la Francia profunda como un movimiento de protesta contra el aumento del impuesto ambiental al precio de los carburantes, en concreto del diésel, de la exigencia original, el movimiento muy pronto sumó nuevas banderas y reivindicaciones, propagándose con la celeridad y efusión de un incendio a las grandes ciudades. A lo largo de varios sábados, París y otras ciudades se convertirían en escenario de violentos enfrentamientos campales entre manifestan-

tes y fuerzas del orden, lo que deterioró grandemente la imagen internacional del país. Apremiado por la protesta social, aparentemente imparable, Macron suprimió el gravamen al carburante e incrementó en cien euros mensuales el salario mínimo.

El movimiento de los Chalecos Amarillos expuso de manera cruda la escisión creciente entre los *bobos* o *bourgeois-bohèmes* –como se conoce en Francia a los burgueses bohemios– y el común de los franceses. Los *bobos* tienden a mudarse a distritos antiguamente de clase obrera en París y otras ciudades, en donde promueven su gentrificación y, por ende, su encarecimiento, o que utilizan bicicleta y desprecian el uso del automóvil que es indispensable para muchos franceses menos favorecidos, al punto de estigmatizar su uso. Esta distancia se ahonda progresivamente, al grado que muchos hablan de la fractura francesa que divide a la Francia deprimida de la periferia de aquella del privilegio y la opulencia.

En ese sentido, durante la crisis, la brecha social entre franceses se reveló como abismal y aparentemente insalvable. Solo la pandemia puso fin a la querella. Tan grave fue el trance provocado por el movimiento de los Chalecos Amarillos que Macron se vio obligado a apresurar el cierre de una venerable institución que había sido pilar de la Quinta República francesa, la Escuela Nacional de Administración (*Ecole Nationale d'Administration*, ENA), que muchos consideran la fábrica de las élites francesas y de la que se había graduado la mayoría de los presidentes, primeros ministros, diputados y principales cuadros del sistema.

Emmanuel Macron fue el primer presidente en conseguir la reelección desde 2002. Su victoria dio a la Unión Europea (UE) un respiro temporal en medio de la invasión rusa de Ucrania. No obstante, en las segundas, Le Pen acortó de manera significativa la distancia que la separaba de Macron, al conseguir un caudal de votos sin precedente para la ultraderecha. En Francia, tres de cada diez electores decidieron quedarse en casa en la pasada segunda vuelta electoral del domingo 24 de abril en la que

Emmanuel Macron refrendó su presidencia tras obtener 18,779,809 votos con un respaldo del 58.5%.

Un exbanquero tecnocrático, eurófilo y centrista moderado, Macron, una vez en la presidencia, promovió e impulsó medidas muy impopulares tales como la reforma laboral de las pensiones, largamente pospuesta, que aumentó la edad de la jubilación de 62 a 64 años, disposición que los sindicatos franceses consideraron injusta e intolerable, lo que provocó un descontento social mayúsculo que desembocó, una vez más, en violentas manifestaciones callejeras. Para atajarlas, desplegó un arsenal de provisiones y facultades constitucionales especiales, en concreto, recurrió al artículo 49.3 de la Constitución de 1958, que permite aprobar sin voto parlamentario un proyecto de ley, lo que acentuó la sensación generalizada de que se trataba de una imposición antidemocrática y autoritaria de la medida y de que, con su adopción, se estaba favoreciendo a la derecha más extrema.

En la elección de 2022, irrumpió con fuerza un nuevo candidato ultraderechista, Éric Zemmour, comentarista de televisión y autor de varios libros éxitos de ventas, sin antecedentes o vínculos con el fascismo, proveniente de la tradición republicana francesa, y, de hecho, descendiente de judíos *pieds noirs* de Argelia. Su campaña con eslóganes descaradamente racistas lo hizo aparecer como un candidato incluso más extremista que la propia Marine Le Pen, lo que acabó por favorecerla, ya que, en la campaña de 2022, utilizó una estrategia deliberada bien asesorada por publicistas y medios de comunicación para suavizar su imagen y la de su partido.

Las declaraciones toscas de Zemmour que le han valido juicios por discurso de odio, de modo paradójico consolidaron la imagen de Le Pen de forma lenta, pero segura, como una candidata de extrema derecha “suave” y moderada. Zemmour ha hecho suya la teoría de la conspiración del Gran Reemplazo, acuñada por el escritor supremacista Renaud Camus, que plantea que las poblaciones de origen europeo están siendo gradual pero inexorablemente sustituidas por inmigrantes no blancos.

Tales delirios contrastan fuertemente con la posición pragmática, europeísta e integracionista de Macron. Con todo, los ciudadanos franceses reprochan acremente a su presidente haber defendido y llevado a cabo reformas que perciben como favorables a los empresarios y lesivas para la ciudadanía, las que le han valido el apodo de “presidente de los ricos”, todo ello pese al hecho incontestable de que, en el gobierno de Macron, el desempleo ha bajado de modo considerable y la economía marcha relativamente bien, también debido a los miles de millones que el gobierno ha gastado para atenuar el impacto de la pandemia.

Aunque en un principio Macron propuso nuevas leyes contra la discriminación de extranjeros, de manera crucial en lo que respecta al trabajo y a la vivienda, después de los resonantes avances de la ultraderecha se ha visto orillado a hacer propias muchas de sus más polémicas iniciativas, tal y como quedó de manifiesto en su reciente declaración de convocar un referéndum para endurecer todavía más las leyes relativas al tema de la inmigración. Las protestas en Francia iniciadas en enero de 2023 como una serie de huelgas generales y manifestaciones organizadas por los opositores a la reforma de las pensiones del gobierno de Macron se recrudecieron gravemente a mediados de año, después del asesinato del joven Nahel Merzouk a manos de un policía no identificado. La sensación de que Francia está bordeando de modo permanente el estallido social no deja de crecer.

Frente a las destemplanzas y asperezas de la extrema derecha, los antiguos cordones sanitarios de las fuerzas democráticas galas, que hasta hace poco cerraban filas ante el avance del fascismo decaen ahora y aparecen menguadas. Los avisos sobre los riesgos que representan estas fuerzas de raigambre fascista, totalitaria e incluso genocida para la viabilidad de la democracia no parecen tener ya eco en sociedades cada vez más polarizadas y divididas, como lo es, en forma aguda, la francesa.

La evidencia palmaria de que AN es un partido de corte *petainista* ya no parece espantar ni disuadir

a un sector importante del electorado francés que no vacila en otorgarle de modo consistente su voto a esa agrupación, tal y como hizo en 2002, pero, sobre todo en 2017 y 2022. Pese a que Le Pen ha rechazado con vehemencia la etiqueta de ultraderecha para su partido y de que ha acometido un ambicioso proceso de remodelación de la organización que ha encabezado en un afán de distanciarla y distanciarse de la imagen atrabiliaria y rijosa de su padre, lo cierto es que las raíces fascistas de su movimiento y su retórica racista, xenófoba e islamófoba ha sido una constante a lo largo de cinco décadas. El nuevo presidente del partido, el eurodiputado parisino Jordan Bardella de 27 años, quien sustituyó a Le Pen en el máximo cargo apenas en noviembre pasado ha refrendado, pese a su juventud y origen italiano, el vehemente rechazo a la inmigración, el tenaz discurso de seguridad y el nativismo y euroescepticismo irreductibles de su antecesora.

Por el flanco izquierdo, las asechanzas y amagos a la democracia francesa no son tampoco menores. Jean Luc Mélenchon, el agitador y principal dirigente de La Francia Insumisa, coalición de fuerzas sedicentemente progresistas que van desde el Polo de Renacimiento Comunista en Francia hasta remanentes del PSF, también ha propuesto abandonar el euro y regresar al proteccionismo y a la erección de barreras arancelarias en aras de un “patriotismo económico”. De manera sorprendente y muy alarmante, frente a la invasión rusa de Ucrania, el principal dirigente de la izquierda gala mostró relativa indulgencia hacia el régimen de Vladimir Putin, al tiempo que aumentaba su vitriolo contra Kiev y el primer ministro ucraniano, Volodimir Zelenski, mientras acusaba, en repetidas ocasiones, a la OTAN de ser una fuerza agresora y expansionista, y a la Unión Europea de ser rehén de los mercados y de las finanzas internacionales, fiel a las teorías conspiratorias al uso entre las fuerzas iliberales y antidemocráticas. Ya antes había afirmado que la anexión rusa de Crimea era legítima.

No en vano, Mélenchon ha sido acusado en repetidas ocasiones de sostener un discurso imprudente

e incendiario. En realidad, Le Pen y Mélenchon coinciden en su afinidad con y en su admiración por Vladimir Putin, tal y como demostraron en marzo de 2022 al intentar impedir que Zelenski pronunciase un discurso ante la Asamblea Nacional. Sus palabras amenazantes se tornaron perentorias después de las elecciones legislativas de junio de 2022, que pusieron a Macron contra las cuerdas, al dejarlo sin mayoría en la Asamblea Nacional, por vez primera desde la cohabitación de Lionel Jospin y Jacques Chirac.

Asimismo, los ataques terroristas que asolaron París en 2015 y Niza, un año después, en los que murió más de un ciento de personas, y, de nuevo en 2020, han exhibido el agotamiento del antaño eficaz modelo secular francés y de su incapacidad para integrar de manera exitosa a los flujos de migración de origen musulmán en el seno de la sociedad francesa, ante la falta de mecanismos eficaces de creación y ampliación de ciudadanía. La juventud alienada y desafecta en la *banlieue* o extrarradio de las grandes ciudades francesas, París en especial, habitados de forma predominante por ciudadanos franceses de origen magrebí y subsahariano que habita en los sórdidos y anómicos barrios marginados, escéptica e incrédula frente a las dulces y huecas promesas e ideales de la República francesa –en especial de aquellas relativas a la igualdad y la fraternidad– ha sido presa fácil de las tentaciones y reclamos del islamismo radical, lo que podría representar una amenaza adicional para la viabilidad de la democracia francesa.

El racismo y la intolerancia arraigados en la sociedad e instituciones del Estado, señaladamente la Policía –que ha mostrado un patrón recurrente de prejuicio, brutalidad y violencia excesiva contra las minorías étnicas–, han avivado de manera alarmante la anomia y el resentimiento de estas contra la sociedad de acogida. Pero, al mismo tiempo, sus explosiones de ira han retroalimentado el discurso de la ultraderecha y la percepción de amplios sectores de la población francesa de la necesidad imperiosa de anteponer el orden y la seguridad a cualquier otra consideración, en especial a las libertades civi-

les, lo que a todas luces constituye también un serio desafío a la continuidad de la democracia francesa.

El modelo de la Quinta República francesa padece de una crisis de legitimidad aparentemente profunda, producto del desgaste y del descrédito de muchas de sus instituciones señeras, como el Estado de bienestar y la educación pública, lo que se refleja en el hecho de que más y más franceses den cada día la espalda a la democracia, un sistema político que muchos comienzan a percibir como ineficaz para articular los conflictos y proveer de servicios. El declive y desfundamiento de los partidos tradicionales, socialistas y republicanos que sostenían la tendencia centripeta y moderada de la democracia ha tenido su correlato negativo en el paralelo ascenso de fuerzas antisistema, tales como La Francia Insumisa, la Agrupación Nacional, Reconquista o la propia *En Marche!*, la agrupación creada *ex professo* en torno de la candidatura de Macron en 2017. Todo ello da cuenta de un sistema en crisis con un respaldo menguante de parte de la población.

El hecho de que Macron haya impuesto la reforma de las pensiones mediante decreto y a contrape-lo del rechazo mayoritario de la población –70% se oponía, de acuerdo con diversas encuestas– ha agravado el malestar social y reforzado la noción generalizada de que su gobierno es una plutocracia, ajeno e inmune por completo a la voluntad de los ciudadanos. En un tiempo caracterizado por el resentimiento creciente de las masas ante unas élites cada vez más privilegiadas y distantes y en el pináculo de las redes sociales irrumpen con fuerza los populistas de ultraderecha e izquierda dura, para arrogarse la representación y presentarse como intérpretes de la voluntad popular.

La reforma a la Constitución francesa que impulsó Sarkozy en 2008 impide la reelección de Macron, quien después de su derrota en la elección legislativa de junio de 2022 luce de modo creciente como un pato cojo. Esta condición aparentemente habrá de padecer Macron hasta 2027, cuando deje finalmente la presidencia, sin que haya visos de un re-

levo entre los suyos capaz de concitar entusiasmo o ilusión entre un electorado cada vez más escéptico, crispado y dividido.

En efecto, con miras a un futuro sin Macron, su partido, La República en Marcha, optó en septiembre pasado por llevar a cabo un cambio de nombre, y adoptó la sugerente, pero poco original, denominación de *Renaissance* (Renacimiento), en un afán deliberado por reinventarse y afrontar un futuro incierto sin su fundador y principal dirigente. Lo cierto es que ni el antiguo primer ministro, Edouard Philippe, ni su sucesora, la actual jefa de gobierno, Élisabeth Borne, ni mucho menos el actual dirigente del partido, el eurodiputado, Stéphane Séjourné, parecen tener los tamaños suficientes o el carisma y atractivo necesarios para llenar los zapatos que dejará vacíos el todavía joven presidente de Francia.

Tampoco parece previsible que emerja un liderazgo alternativo en los muy maltrechos partidos del antiguo consenso de centristas, socialistas y republicanos. En todo caso, solo La Francia Insumisa parece posicionada para hacer frente al ascenso aparentemente irresistible de la ultraderecha, lo que, con toda certeza, ahondaría la polarización del electorado francés a extremos todavía más complicados y preocupantes.

De este modo, las repercusiones negativas de un posible triunfo de la Agrupación Nacional y de la consecuente llegada de Marine Le Pen al poder en un 2027 cada vez más cercano trascenderían, con mucho, los límites estrictos de la realidad nacional francesa. Al ser Francia, país cofundador de la UE y piedra angular del eje franco-alemán que ha impulsado y sostenido contra viento y marea al organismo supranacional, el potencial advenimiento de Marine Le Pen a la presidencia gala supondría un muy grave desafío a la viabilidad y a la existencia misma de la construcción europea.

El declarado euroescepticismo y nacionalismo económico de las opciones extremas, tanto de ultraderecha como de la izquierda radical, con sus

delirantes proclamas de deserción de la UE y de la OTAN, el retorno del franco francés como divisa nacional, y la erección de cruces fronterizos, de barreras aduanales y de controles policíacos hacen temer con razonable pesimismo que la democracia francesa esté en entredicho. En última instancia, la política identitaria, excluyente y francamente racista de AN representa una amenaza existencial al pluralismo de la sociedad francesa, fundamento irrenunciable de toda democracia que se precie de serlo.

Cabe mencionar también el efecto dominó que la caída del Palacio del Elíseo en manos de la extrema derecha francesa podría suponer para el resto de los países de la UE. En efecto, un probable triunfo de Le Pen en 2027 podría dar alas renovadas a los países desafectos de la Unión, como Hungría y Polonia, que han protagonizado exabruptos y retrocesos democráticos con toda impunidad, ante la tibieza y omisión de Bruselas frente a sus desplantes. De modo tal vez más peligroso, la llegada de los ultras al poder en Francia podría favorecer el crecimiento de fuerzas extremistas análogas como Alternativa por Alemania (AfD), el Foro por la Democracia (FvD) en Países Bajos o Vox en España, por mencionar tan solo unas cuantas, con todas las repercusiones negativas que tal efecto dominó podría desencadenar para la UE, en términos de los valores democráticos, de las reglas comerciales del bloque supranacional o del frente común ante una Rusia cada vez más agresiva y amenazante.

Por último, pero no por ello menos grave, una posible presidencia de Marine Le Pen bien podría derivar en un nuevo eje dentro de la Unión, el París-Roma, esta vez de corte autoritario, encabezado por Le Pen y Giorgia Meloni, al que podrían sumarse las organizaciones antedichas, en lo que bien podría significar un golpe, acaso devastador y definitivo, que hiciera saltar por los aires el proyecto mismo de la UE, como bastión del consenso liberal, social y de la democracia misma en un escenario de muy graves asedios y amenazas a su supervivencia.

EL HOMBRE FUERTE DE HUNGRÍA: VIKTOR ORBÁN

Andrés Herrera Esquivel¹

En el corazón de Europa Central, en la encrucijada de culturas y tradiciones, Hungría se ha convertido en un microcosmos de las amenazas a las que se enfrenta la democracia liberal en el siglo XXI. Su tejido político y social ha experimentado una profunda transformación en las últimas décadas.

Explorar el escenario húngaro es encontrarse con una narrativa que pone en tela de juicio los fundamentos de la democracia liberal y ejemplifica las tensiones entre soberanía nacional e integración europea. Además, ofrece una visión de la compleja dinámica que caracteriza las amenazas que se ciernen hoy sobre la democracia liberal, como la concentración de poder, el debilitamiento de las

instituciones democráticas y la creciente polarización política y social.

Este texto examina los antecedentes históricos y políticos de Hungría; el ascenso de Viktor Orbán y de su partido, Fidesz; las estrategias populistas que utiliza, y sus efectos en las instituciones democráticas, la sociedad civil y los derechos humanos. También ofrece una comparación con las experiencias latinoamericanas, con lo que se pretende ofrecer una visión global de este fenómeno político en evolución.

Hungría se convierte así en un punto de partida para una reflexión más amplia sobre las amenazas a la democracia liberal en todo el mundo. Aunque las circunstancias y los escenarios pueden variar, las lecciones extraídas de la exploración del caso húngaro pueden arrojar luz sobre los retos y las posibles soluciones en otros lugares, tanto en Europa como en América Latina y en el mundo en general.

¹ Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Anáhuac Mayab. Sus áreas de estudios abarcan los temas chinos, europeos y de seguridad internacional. Es pasante de política interna en la Embajada de Reino Unido en México y miembro de la Unidad de Estudio y Reflexión Europa+ del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi).

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y POLÍTICOS DE HUNGRÍA

Hungría tiene una rica historia política de más de mil años. Fue el Reino de Hungría durante la Edad Media y desempeñó un papel fundamental en la defensa de Europa contra las incursiones otomanas. Sin embargo, la historia de Hungría también estuvo marcada por la dominación extranjera, incluido el dominio de los habsburgo del Imperio austrohúngaro durante varios siglos. La experiencia de Hungría bajo la dominación extranjera dejó una profunda huella en la psicología política. La búsqueda de la independencia y de la identidad nacional se convirtió en un elemento central del país a lo largo de los años e influyó en la formación de movimientos nacionalistas y autonomistas.

Tras la Primera Guerra Mundial y la desintegración del Imperio austrohúngaro, Hungría se convirtió en un Estado independiente en 1918, pero enfrentó desafíos económicos y políticos, así como la pérdida de territorio mediante el Tratado de Trianon en 1920. Durante la Segunda Guerra Mundial, el país estuvo aliado con la Alemania nazi, lo que resultó en la ocupación soviética al final de la guerra.

La pérdida de territorio fue un golpe devastador para Hungría. El país perdió aproximadamente dos tercios de su territorio, lo que exacerbó sentimientos de agravio y nacionalismo. Esto influyó en la percepción húngara de estar en desventaja y generó un deseo de recuperar la grandeza nacional. Por eso, se alió con Alemania en el intento de recuperar algunos de los territorios perdidos. Pero la colaboración llevó a la ocupación y de ahí a la imposición de un régimen comunista en 1944.

El régimen, bajo la influencia soviética, suprimió a la oposición política y restringió las libertades civiles. Se llevaron a cabo purgas políticas, represión de la disidencia y nacionalizaciones de la industria y la agricultura, lo que afectó significativamente a la sociedad húngara. La ocupación también se insertó dentro de la época de una Guerra Fría entre el

bloque occidental liderado por Estados Unidos y el bloque oriental liderado por la Unión Soviética.

En 1956, estalló la Revolución húngara, un levantamiento popular contra el régimen comunista y la influencia soviética. La revuelta buscaba la independencia de Hungría del bloque oriental y la restauración de la democracia. Sin embargo, fue sofocada brutalmente por las fuerzas soviéticas.

La Revolución húngara y su represión subsiguiente dejaron una profunda huella en la memoria colectiva del país y en la conciencia política de la región en su conjunto. Hungría continuó bajo el control comunista y la influencia soviética durante décadas. El sentimiento nacionalista en Hungría se ha visto influido por la memoria de la Revolución y la lucha por la independencia, y a menudo se refleja en la retórica política de hoy, incluidas las políticas del presidente actual, Viktor Orbán.

Al terminar la revolución, János Kádár asumió el poder. Su liderazgo marcó un período conocido como “comunismo *goulash*”, caracterizado por un enfoque relativamente moderado y pragmático dentro del bloque del Este. Durante su mandato, buscó mantener un equilibrio entre las demandas soviéticas y las aspiraciones de mayor autonomía y bienestar de la población húngara. Introdujo reformas económicas que permitieron cierta liberalización y flexibilidad en la economía.

Este enfoque de moderación sucedió a medida que el comunismo en Europa del Este comenzaba a tambalearse. Esto llevó al primer ministro Miklós Németh a abrir la frontera con Austria, lo que permitió que miles de ciudadanos de Europa del Este huyeran hacia Occidente. La decisión se consideró un paso crucial en la caída del Telón de Acero, al eliminar la serie de fronteras cerradas y divisiones ideológicas que habían separado a Europa Occidental de la Oriental durante décadas, y que marcó un punto de inflexión en la historia europea.

El año siguiente, se celebraron manifestaciones y protestas, en las que se exigían reformas políticas

y la legalización de partidos políticos de oposición. Esto llevó a Károly Grósz a permitir la formación de nuevos partidos, incluidos los no comunistas, y comprometerse a llevar a cabo elecciones democráticas en 1989. Estas elecciones permitieron la creación de un parlamento democrático y el surgimiento de un gobierno no comunista bajo el liderazgo de József Antall.

La caída del comunismo en Europa Central y del Este en 1989 abrió un nuevo capítulo en la historia de Hungría. Sin embargo, la transición a la democracia y a la economía de mercado también generó desafíos económicos y sociales. La economía estaba en crisis, con altos niveles de inflación y desempleo, y se requerían reformas económicas significativas. Antall y su gobierno implementaron un conjunto de reformas económicas conocidas como la “Gran revuelta de la economía húngara». Estas reformas incluyeron la liberalización de precios, la privatización de empresas estatales y la introducción de una moneda estable, el florín húngaro.

Este período de reformas llevó a la economía húngara a experimentar un crecimiento sostenido durante la década de 1990 y se convirtió en una de las economías más sólidas de Europa del Este. También experimentó cambios de gobierno entre partidos políticos de derecha e izquierda: partidos como el Partido Socialista Húngaro (MSZP) y la coalición de partidos de derecha liderada por el partido Fidesz-Unión Cívica Húngara (Fidesz) alternaron su tenencia del poder. Estos cambios reflejaron la madurez de la democracia multipartidista en Hungría y la capacidad del electorado para ejercer su derecho a elegir a sus líderes.

Durante este período, Viktor Orbán asumió el cargo de primer ministro en julio de 1998, con lo que se convirtió en el líder más joven en la historia de Hungría en ocupar ese cargo. Orbán puso en marcha reformas económicas destinadas a impulsar el crecimiento económico y reducir el déficit presupuestario. Estas reformas incluyeron la reducción de impuestos y medidas para atraer inversiones extranjeras. Además, mantuvo una política exte-

rior proeuropea y buscó la adhesión de Hungría a la Unión Europea, lo que finalmente se logró en 2004.

Sin embargo, a medida que avanzaba la década de los 2000, Hungría enfrentó desafíos económicos, incluida una creciente desigualdad económica. La distribución desigual de la riqueza y de las oportunidades llevó a tensiones sociales y políticas. La percepción de que un pequeño grupo se beneficiaba desproporcionadamente del crecimiento económico contribuyó a la insatisfacción generalizada.

La emigración de jóvenes y trabajadores calificados en busca de mejores oportunidades en el extranjero también se convirtió en un fenómeno notable. La diáspora húngara creció, y esto tuvo consecuencias para la economía y la sociedad húngaras. La pérdida de capital humano capacitado y la falta de oportunidades laborales en el país afectaron la capacidad de Hungría para mantener su fuerza laboral y promover la innovación económica.

La crisis financiera global de 2008 intensificó los desafíos y resultó en una profunda recesión en Hungría. La economía se contrajo y el producto interno bruto (PIB) disminuyó considerablemente. El florín húngaro se debilitó frente al euro, lo que aumentó la deuda en moneda extranjera de empresas y hogares húngaros. La crisis económica también resultó en un aumento del desempleo en Hungría. Muchos ciudadanos perdieron sus empleos, lo que generó tensiones sociales. El gobierno tuvo que adoptar medidas de austeridad, incluida la reducción del gasto público y la puesta en marcha de reformas económicas para controlar el déficit presupuestario y la deuda pública.

Estas medidas generaron descontento público en Hungría. Hubo protestas y manifestaciones contra el gobierno de Ferenc Gyurcsány, que se mantuvo en el poder durante gran parte de la crisis. En 2009, Gyurcsány renunció como primer ministro; lo reemplazó Gordon Bajnai, quien lideró un gobierno tecnócrata, compuesto en su mayoría por expertos técnicos y profesionales en lugar de políticos de carrera.

Bajnai continuó con las medidas de austeridad, lo que ocasionó que muchos ciudadanos perdieran la confianza en la clase política tradicional. Esto llevó a que, en las elecciones parlamentarias de 2010, Viktor Orbán y su partido Fidesz obtuvieran una victoria contundente. Orbán capitalizó la insatisfacción pública y utilizó un discurso nacionalista que resonó con gran parte del electorado. Prometió restaurar la soberanía nacional y hacer frente a las preocupaciones económicas y sociales.

Viktor Orbán demostró ser un político adaptable y capaz de cambiar su mensaje político para atraer a una base más amplia. Durante su primer mandato (1998-2002), se presentó como un líder liberal y reformista, pero, en el segundo y a partir de 2010, adoptó un enfoque más nacionalista y populista que resonó con un segmento significativo del electorado húngaro descontento.

Los sucesos políticos en Hungría que culminaron con la llegada de Viktor Orbán al poder en 2010 marcaron una época de profundos cambios y desafíos en la política húngara. Tocada por la transición de un régimen comunista a una democracia en la década de 1990, la primera década del siglo XXI presencié la transformación de la sociedad y de la economía húngaras. Los altibajos económicos, la insatisfacción pública y la búsqueda de un liderazgo capaz de responder a las preocupaciones ciudadanas sentaron las bases para el regreso de Orbán y su partido, Fidesz, al poder. También proporciona el marco necesario para comprender cómo un país con una tradición democrática emergente ha enfrentado la erosión de los valores democráticos en el siglo XXI.

EL ASCENSO DE VIKTOR ORBÁN Y FIDESZ

En el amplio y complejo panorama político global, pocas figuras y partidos han generado una impronta tan profunda y controvertida en la última década como Viktor Orbán y su partido, Fidesz, en Hungría.

A medida que se explora esta narrativa, se desglosan las diferentes facetas de su carrera política y su influencia en el país y, por extensión, en el ámbito de la democracia liberal en el ámbito global. Desde su ascenso inicial en la política húngara hasta su consolidación en el poder, el mandato de Orbán ha generado debates sobre los fundamentos de la democracia liberal.

La carrera política de Orbán comenzó en la Universidad de Budapest, donde se involucró en la disidencia estudiantil contra el régimen comunista. En 1988, cofundó el partido Fidesz (Alianza de Jóvenes Demócratas), que inicialmente tenía un enfoque liberal y progresista. Su participación en la disidencia le dio credibilidad y respeto entre sus seguidores y colegas políticos y, gracias a su papel como uno de los fundadores de Fidesz, se dio a conocer en la clase política de ese entonces.

Orbán también emergió como una figura destacada en la Revolución húngara. Su activismo durante este período lo consolidó como un líder de la oposición y un defensor de la democracia. Tras la caída del comunismo, Hungría celebró sus primeras elecciones parlamentarias democráticas en 1990. Fidesz participó en las elecciones y obtuvo representación en el Parlamento. Orbán fue elegido diputado y rápidamente se destacó como una voz influyente en la política húngara.

En 1993, Orbán fue elegido presidente de Fidesz, con lo que consolidó su liderazgo en el partido. Durante su Presidencia, el partido experimentó una transformación ideológica que lo alejó de su enfoque inicialmente liberal y lo llevó hacia una plataforma más nacionalista y conservadora.

En las elecciones parlamentarias de 1998, Fidesz obtuvo la mayoría de los escaños en el Parlamento. Como resultado, a la edad de 35 años, Viktor Orbán se convirtió en el primer ministro de Hungría, el líder más joven en asumir ese cargo en la historia del país. Sin embargo, su primer mandato no fue particularmente populista en ese momento.

Pero, a medida que Hungría enfrentaba dificultades económicas y políticas en la década de 2000, Fidesz decidió cambiar su plataforma política para atraer un espectro más amplio de votantes. Esto incluyó la adopción de un discurso más nacionalista, la promesa de restaurar la soberanía de Hungría y un enfoque concentrado en cuestiones populares y de identidad nacional.

La pérdida de confianza en los partidos políticos tradicionales y la percepción de corrupción y estancamiento político llevaron a muchos votantes a buscar alternativas políticas. Fidesz, bajo el liderazgo de Orbán, se presentó como una opción de cambio y reforma, lo que resonó con un electorado descontento. Adoptó un discurso antielitista y anti-*establishment* que apuntaba a los partidos políticos existentes y a las élites económicas y políticas. Todo eso llevó a que ganara las elecciones parlamentarias de 2010.

Uno de los primeros pasos significativos que dio Fidesz fue la aprobación de una nueva Constitución en 2011, que reemplazó a la antigua Constitución socialista de 1949. Conocida como la “Ley Fundamental”, consolidó el poder de Fidesz al establecer reglas electorales y políticas que favorecían al partido en el poder y limitaban la capacidad de futuros gobiernos para deshacer las reformas. Además, se introdujeron numerosas enmiendas constitucionales que ampliaron el control del gobierno sobre instituciones como el poder judicial y la autoridad electoral.

Fidesz también implementó cambios en la regulación de los medios de comunicación que generaron preocupaciones sobre la libertad de prensa y la independencia de los medios. El sistema judicial también pasó por reformas que suscitaron preocupaciones sobre la independencia judicial. En el ámbito económico, adoptó políticas de estímulo fiscal, incluidos recortes de impuestos y programas de ayuda social. Sin embargo, también implementaron medidas controvertidas, como la nacionalización de fondos de pensiones privados y la imposición de impuestos especiales a ciertas industrias extranjeras.

A pesar de las críticas y las tensiones internacionales, Fidesz obtuvo la victoria en las elecciones parlamentarias de 2014, lo que permitió a Orbán continuar en el poder y comenzar su segundo mandato como primer ministro. Su permanencia en el poder generó críticas debido a los cambios en las leyes electorales y la Constitución, lo que, según alegaban sus opositores, les permitió influir en el proceso electoral y limitar la capacidad de otros partidos para competir en igualdad de condiciones. Además, resaltaban el control del gobierno sobre los medios de comunicación estatales y privados para promover su mensaje y desacreditar a la oposición.

Pero aun con eso, para algunos votantes, Orbán representaba la estabilidad y el liderazgo fuerte en un momento en el que Europa enfrentaba desafíos económicos y migratorios. Esta percepción atrajo a un sector de la población que valoraba la firmeza en la toma de decisiones. Esto se sumó a que promovió un mensaje de “Hungría primero” que resultó atractivo para los votantes y se presentó como la fuerza que defendería los intereses nacionales frente a las influencias externas, incluida la Unión Europea.

En su segundo mandato, Orbán mantuvo políticas económicas populistas y dirigidas a los retos sociales. Introdujo medidas como la reducción de impuestos a las empresas y la eliminación de las hipotecas en francos suizos para aliviar la carga financiera de los ciudadanos. También implementó un programa de construcción de viviendas asequibles y otorgó beneficios fiscales a las familias con varios hijos, en un intento por aumentar la tasa de natalidad y combatir la decadencia demográfica en Hungría.

Las tensiones entre Hungría y la Unión Europea se intensificaron durante este período. Orbán mantuvo una posición desafiante en cuestiones clave, como la política migratoria y las reformas políticas y judiciales en Hungría. Esto generó críticas por parte de la Unión Europea y sus instituciones, así como de otros Estados miembros que veían estas políticas como una amenaza para los valores fun-

damentales del bloque. Además, en 2015, Hungría construyó vallas en sus fronteras para frenar la entrada de migrantes y refugiados, lo que generó mayor controversia.

Orbán buscó estrechar lazos con gobiernos que compartían su enfoque nacionalista y soberano, incluidos líderes en Europa del Este y líderes populistas en otros países de la Unión. Esto a menudo lo llevó a chocar con los líderes del bloque y a tomar posiciones que eran contrarias a la línea oficial. Su gestión también atrajo críticas internacionales por lo que se percibía como un debilitamiento de la democracia y del Estado de derecho en el país. Organizaciones de derechos humanos y líderes políticos expresaron su preocupación por las políticas y reformas implementadas.

La victoria de Fidesz en las elecciones de 2018 y 2019 generó preocupaciones tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Se argumentó que el proceso electoral no había sido equitativo y que el control del gobierno sobre los medios de comunicación socavaba la competencia política.

Además, la llegada de la pandemia de COVID-19 en 2020 otorgó a Orbán la capacidad de gobernar por decreto y suspender el Parlamento a su discreción. Algunos sostienen que la ampliación de los poderes del Ejecutivo, que en un principio se enmarcó como respuesta a la crisis de COVID-19, permitió a Orbán gobernar con controles y equilibrios ilimitados. Se consideró como un retroceso preocupante, que indicaba un alejamiento de los principios democráticos por parte de Hungría.

Finalmente, el 3 de abril de 2022, Viktor Orbán se aseguró su cuarto mandato consecutivo como primer ministro de Hungría. Orbán consiguió mantenerse en el poder a pesar de enfrentarse a una oposición muy unida y de la creciente preocupación por el retroceso democrático de Hungría. Obtuvo más del 53 % de los votos, con lo que se aseguró una mayoría absoluta en el Parlamento. La victoria electoral consolidó su posición como uno de los jefes de gobierno más longevos de Europa,

por encima incluso de la antigua canciller alemana, Angela Merkel.

El momento de la reelección de Orbán se produjo en medio del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Durante las primeras fases, Orbán se enfrentó a críticas por su posición ante el conflicto. En particular, se negó a permitir el transporte de armas occidentales por territorio húngaro y descartó imponer sanciones a las fuentes de energía rusas. Estas posiciones recibieron críticas tanto dentro de Hungría como en el exterior, dada la proximidad de Hungría a Rusia y la reputación de Orbán como un hombre cercano al Kremlin. Esto llevó a que, hasta el día de hoy, Viktor Orbán continúe en el cargo, a medida que los temas aquí expuestos se combinan con los retos de un sistema internacional globalizado y cambiante.

Es necesario reconocer la dinámica cambiante del liderazgo de Orbán, su dominio de las tácticas jurídicas y políticas, y los retos duraderos que esto plantea a las instituciones democráticas húngaras. Comprender estas complejidades es esencial a la hora de examinar la transformación en curso del panorama político húngaro y sus implicaciones para el resto del mundo.

ESTRATEGIAS POPULISTAS DE VIKTOR ORBÁN

El ascenso al poder y la permanencia de Viktor Orbán en el poder han estado marcados por un conjunto de estrategias populistas que han modificado profundamente la dinámica política del país y han suscitado preocupaciones dentro y fuera del país.

Para empezar, el populismo de Viktor Orbán se ha caracterizado por un discurso y una retórica que destacan la lucha contra lo que él considera como una élite corrupta y la defensa de la identidad nacional húngara. Algunos aspectos notables de su discurso populista son:

1. **Antiinmigración:** Orbán presenta a los inmigrantes como una amenaza para la cultura y la seguridad de Hungría. Ha utilizado este discurso durante la crisis migratoria de 2015, cuando Hungría se convirtió en uno de los puntos de entrada para miles de refugiados que huían de conflictos en Medio Oriente y otras regiones. En el mismo sentido, Orbán se opuso firmemente al sistema de cuotas de refugiados de la Unión Europea para redistribuir a los solicitantes de asilo entre los Estados miembros, con el argumento de que desestabilizarían al país.

2. **Defensa de la soberanía:** Orbán argumenta que Hungría debe defender su soberanía nacional contra las instituciones supranacionales, como las de la Unión Europea. Ha criticado repetidamente la intervención de Bruselas en sus reformas judiciales. Defendió las reformas y argumentó que fueron necesarias para eliminar lo que él llamó “vestigios comunistas” en el sistema judicial húngaro. Esto es una muestra de cómo los antecedentes históricos y políticos siguen muy presentes en la política nacional actual.

3. **Discurso de “nosotros contra ellos”:** La sociedad húngara está dividida entre “nosotros” (los partidarios de Orbán y Fidesz) y “ellos” (la oposición y la élite). Esto crea una narrativa que refuerza su posición como el único líder capaz de representar al “pueblo verdadero”. Orbán utilizó este discurso con mayor fuerza durante las elecciones parlamentarias de 2018.

4. **Cuestionamiento de las instituciones democráticas:** Orbán cuestiona la eficacia de las instituciones democráticas tradicionales y acusa a la oposición de socavar la voluntad del pueblo. Cuando se aprobó la “Ley sobre Universidades Extranjeras”, que tenía como objetivo restringir las actividades de la Universidad Centroeuropa (CEU) que fundó George Soros, Orbán defendió la legislación como una medida para proteger la soberanía húngara y cuestionó la eficacia de la CEU. Además, argumentó que esas instituciones socavaban la voluntad del

pueblo húngaro y operaban bajo influencias extranjeras.

Más allá del discurso, los cambios significativos en la legislación electoral y el sistema de justicia también han sido fundamentales en la estrategia populista de Orbán, porque le permiten consolidar su poder y dificultar la competencia política al alterar las reglas del juego democrático. Algunos de estos cambios incluyen:

1. **Rediseño del sistema electoral:** Fidesz modificó el sistema electoral húngaro a su favor. La redistribución de distritos electorales y la introducción de un sistema de representación proporcional mixta han beneficiado a Fidesz en las elecciones.

2. **Control del poder judicial:** Se han realizado nombramientos políticos en el sistema judicial, lo que ha generado preocupaciones sobre su independencia. Esto ha permitido a Fidesz ejercer influencia sobre la interpretación de la ley y el control de casos políticamente sensibles.

3. **Reforma constitucional:** Se han realizado cambios en la Constitución de Hungría para consolidar el poder de Fidesz y limitar el margen de maniobra de futuros gobiernos. Esto incluye restricciones en la financiación de los partidos de oposición y la imposición de limitaciones a la participación en elecciones.

Finalmente, controlar los medios de comunicación y la educación le permite a Orbán mantener un control efectivo sobre la narrativa pública. Puede promover su mensaje, difundir propaganda favorable y desacreditar a la oposición. Esto le ayuda a mantener su imagen como el único líder capaz de representar los intereses del “pueblo verdadero”. En tres casos lo aplica:

1. **Control de medios de comunicación estatales:** Orbán ejerce un fuerte control sobre los medios de comunicación estatales, y utiliza su influencia para promover su agenda. Esto

ha generado serias preocupaciones sobre la libertad de prensa en Hungría. Así sucedió en el caso de la Agencia de Comunicación Estatal (MTVA), en el que se afirmó que la cobertura sesgada de sucesos políticos y la supresión de voces críticas suscitó preocupaciones sobre la libertad de prensa en el país.

2. Adquisición de medios privados: Aliados cercanos a Fidesz han adquirido importantes medios de comunicación privados, lo que ha contribuido a la consolidación del control sobre la información y la narrativa pública. El caso que más destacó fue el del periódico *Népszabadság*, en 2016. La repentina suspensión de la publicación del periódico generó preocupaciones sobre la pluralidad de voces en Hungría y el declive de la independencia mediática.

3. Cambios en la educación: Se han realizado reformas en el sistema educativo para promover una ideología más nacionalista y conservadora. Un ejemplo concreto de estos cambios es la introducción de un nuevo plan de estudios en 2020 que pone énfasis en la historia y la cultura húngaras y reduce la enseñanza de la Literatura y la Filosofía extranjeras en las escuelas.

El análisis detallado de las estrategias populistas de Viktor Orbán arroja luz sobre la transformación significativa de la política húngara bajo su liderazgo. Estas estrategias, que van desde el discurso antiinmigración hasta la reforma institucional, han permitido a Orbán consolidar su poder y socavar las bases de la democracia liberal en Hungría.

CONSECUENCIAS PARA LA DEMOCRACIA LIBERAL

El populismo de Viktor Orbán ha tenido consecuencias significativas en la democracia liberal de Hungría, al transformar fundamentalmente su dinámica política y debilitar sus pilares fundamentales. Uno de los más notorios ha sido la concentración

de poder en manos del partido Fidesz. Este poder acumulado ha permitido la toma de decisiones unilaterales y ha socavado el equilibrio de poder en la democracia. La separación de poderes, un principio fundamental de la democracia liberal, se ha debilitado considerablemente, ya que las instituciones legislativas, ejecutivas y judiciales se ven cada vez más subordinadas al partido en el poder.

Otra consecuencia se relaciona con los cambios en la legislación electoral. Mediante reformas diseñadas para beneficiar a Fidesz, se ha alterado el sistema electoral húngaro, lo que ha tenido un efecto desalentador en la competencia política. El partido en el poder ha logrado rediseñar los distritos electorales y ha introducido un sistema de representación proporcional mixta que favorece su posición. Estos cambios han debilitado la capacidad de la oposición para competir de manera efectiva y han creado un entorno electoral menos pluralista y competitivo.

La sociedad civil en Hungría también ha enfrentado graves restricciones durante el gobierno de Orbán. Las organizaciones no gubernamentales y los grupos que defienden los derechos humanos han visto limitada su capacidad para supervisar al gobierno y abogar por cambios políticos y sociales. Las leyes que exigen que las ONG que reciben financiamiento extranjero se registren como “organizaciones financiadas desde el extranjero” han generado temores sobre la represión y la intimidación de la sociedad civil.

Además, los derechos humanos en Hungría han estado en riesgo, especialmente los de las minorías y los de los solicitantes de asilo. La retórica y las políticas populistas de Orbán han contribuido a un ambiente político hostil hacia las minorías étnicas y religiosas, así como hacia los migrantes y refugiados. La restricción de los derechos de las minorías y el endurecimiento de las políticas de asilo han generado preocupaciones dentro y fuera del país.

El populismo de Orbán también ha tenido un impacto en la credibilidad internacional de Hungría.

La controversia en torno al populismo y la erosión de los valores democráticos en el país han dañado la reputación de Hungría en la arena internacional. Esto ha llevado a debates dentro de la Unión Europea sobre cómo hacer frente a las amenazas a la democracia en sus Estados miembros y ha destacado la importancia de mantener y fortalecer los valores democráticos en el continente europeo.

En conjunto, estas acciones han debilitado la democracia liberal en Hungría y han generado preocupaciones sobre el estado de la democracia en el país. Los efectos de las estrategias populistas de Orbán destacan la necesidad de comprender cómo el populismo puede erosionar los fundamentos de la democracia liberal y cuestiona la capacidad de las instituciones democráticas para resistir dichos embates.

La experiencia húngara destaca la importancia de hacer frente a las amenazas a la democracia desde una perspectiva comparada, a partir tanto de las similitudes como de las diferencias con otras regiones, como América Latina, donde el populismo también ha dejado su huella. Al final, estamos frente a un fenómeno claramente global.

¿CÓMO SE VE HUNGRÍA DESDE AMÉRICA LATINA Y POR QUÉ LO QUE ALLÍ PASA RESUENA AQUÍ?

A pesar de las diferencias de todo tipo, se pueden identificar notables paralelos entre el populismo en Hungría y las experiencias en América Latina. Todos incluyen líderes carismáticos, discursos anti-*establishment*, énfasis en la soberanía nacional, simplismo político y promesas de cambio radical. Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador en México ha denunciado repetidamente a la “mafia del poder”, mientras que Orbán ha apuntado a lo que él llama “burócratas de Bruselas” en la Unión Europea.

Orbán y otros líderes populistas en Hungría han subrayado la necesidad de defender la soberanía nacional contra influencias extranjeras, ya sean econó-

micas o culturales. En América Latina, líderes como Rafael Correa en Ecuador también han insistido en la independencia frente a supuestas injerencias extranjeras, a menudo supuestamente vinculadas con intereses imperialistas de Estados Unidos.

Sin embargo, también hay diferencias clave debido a historias políticas distintas, culturas políticas variadas, situaciones económicas diferentes e influencias externas de distinto cuño. En Hungría, el populismo ha evolucionado en el marco de una transición relativamente reciente de un sistema comunista a una democracia parlamentaria. Orbán emergió como una figura política en este proceso y pudo aprovechar el desencanto de la población con la élite poscomunista para consolidar su poder. En contraste, en América Latina, el populismo ha surgido en una región con una historia política diversa, que incluye episodios de dictaduras militares, movimientos de izquierda y derecha, y fluctuaciones democráticas.

Además, las circunstancias económicas y los desafíos en América Latina difieren significativamente de los de Hungría. Mientras que algunos países latinoamericanos enfrentan problemas crónicos de desigualdad y pobreza, Hungría ha experimentado una transición económica notoriamente favorable en el marco de su pertenencia a la Unión Europea. El populismo latinoamericano ha a menudo prometido una redistribución de la riqueza y un enfoque en la justicia social para hacer frente a estos problemas económicos, mientras que Orbán ha centrado su retórica populista en la defensa de la identidad nacional y la soberanía en lugar de en cuestiones económicas.

La comparación entre Hungría y América Latina subraya la importancia de proteger y defender la democracia liberal en todas partes y recuerda que la lucha por la democracia es un esfuerzo continuo que requiere la participación de la sociedad civil y la solidaridad internacional. La vigilancia democrática es esencial para preservar los valores fundamentales de la democracia y la libertad en un mundo donde las amenazas a estos principios pueden surgir en cualquier parte.

REFERENCIAS

Lendvai, Paul, *Orbán: Hungary's Strongman*, Londres, Oxford University Press, 2018.

Müller, Jan-Werner, "How Autocrats Endure", en *Foreign Affairs*, 18 de abril de 2022, s. pp., en <https://www.foreignaffairs.com/articles/hungary/2022-04-19/how-autocrats-endure>. Consultado el 23 de agosto de 2023.

Pap, András L., *Democratic decline in Hungary: law and society in an illiberal democracy*, Londres, Routledge, 2017.

Stone, Norman, *Hungary: A Short Story*, Londres, Gardners VI Books AMS006, 2019.

Szelényi, Zsuzsanna, *Tainted Democracy: Viktor Orbán and the Subversion of Hungary*, Londres, Hurst & Company, 2022.

LOS ROSTROS DEL POPULISMO EN ITALIA: LA LEGA NORD (LN), FRATELLI D'ITALIA (FDI) Y EL MOVIMIENTO 5 STELLE (M5S)

Niccoló Morelli*

En las últimas décadas, la política italiana ha sufrido de manera significativa las consecuencias de un fenómeno crucial en el escenario de la globalización: el populismo. Esta tendencia, que se ha arraigado profundamente en el ámbito político italiano y ha adoptado diversas manifestaciones, ha generado debates acalorados que han marcado la evolución política del país.

Para entender mejor el populismo en Italia, este capítulo se divide en dos secciones principales. Primero, se establecerá un marco histórico para describir cómo el fenómeno populista ha ido desarrollándose y cuáles han sido sus consecuencias para la dinámica social y política del país. El análisis inicia con el ascenso de Silvio Berlusconi, primer

líder carismático y antipolítico, hasta la llegada de Giorgia Meloni, primera presidente del Consejo. También se examina cómo la Gran Recesión de 2008 desencadenó el surgimiento del Movimiento 5 Stelle y de la Lega Nord, además de marcar el fin del equilibrio entre Forza Italia y el Partido Democratico.

Segundo, el análisis se concentra en las expresiones actuales del populismo en Italia, que se dividen en dos corrientes: el populismo de derecha y el populismo sin afiliación ideológica. Con base en esta categorización, se estudian los tres casos de populismo más significativos para la política actual: el Movimento 5 Stelle, la Lega Nord y Fratelli d'Italia. Se describen las características de estos partidos para destacar los elementos que los definen como populistas y que han contribuido a su éxito en la política italiana.

* Estudiante italiano de tercer año en la Universidad de Florencia, con especialización en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Mediante el programa Erasmus, colaboró con el CIDE y actualmente mantiene una colaboración activa con la Universidad Claustro de Sor Juana.

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS: ¿CÓMO NACE Y SE DESARROLLA EL POPULISMO EN ITALIA?

1.1 Berlusconi: el origen del populismo italiano contemporáneo

El populismo en Italia tuvo sus inicios en medio de la crisis de Tangentopoli en abril de 1992, cataclismo que sacó a la luz la corrupción arraigada en el sistema político tradicional italiano y que puso fin a la Primera República. En consecuencia, se desintegró el aparato ideológico tradicional y la clase política perdió legitimidad frente a los electores.

Fue esta experiencia la que preparó el terreno para la llegada, en 1994, de Silvio Berlusconi, un empresario que se presentó como una alternativa a una clase política corrupta. Según el historiador inglés Ginsborg, la inexperiencia política de Berlusconi le permitió conectarse profundamente con los italianos e inaugurar la que el politólogo italiano Sartori denominó como la era de la “Videocracia”, es decir, un período que se caracterizó por la utilización de los medios de comunicación, especialmente la televisión, para dirigir al país mediante el poder de las imágenes (Bickerton y Accetti, 2021).

La “Videocracia Berlusconiana” se convirtió en una herramienta populista sumamente eficaz para promover soluciones superficiales a problemas complejos y establecer un vínculo “directo” con el electorado. Por medio del dominio televisivo, que Berlusconi obtuvo al garantizar para sí el control exclusivo de los tres principales canales de televisión privados nacionales, creó una plataforma que promoviera sus propuestas políticas, forjara una conexión personal con la audiencia y moldeara la opinión pública. Esta influencia se manifestó al distorsionar la percepción colectiva de la realidad política y social, al tiempo que transformaba gradualmente las preferencias de la au-

diencia italiana. Por un lado, maquillaba la información para configurar narrativas sociopolíticas. Por otro, procuraba apaciguar a los medios críticos. Como resultado, la vida cotidiana y la cultura popular italiana experimentaron cambios profundos y duraderos.

La influencia que tuvo Berlusconi no se verificó solo en el ámbito cultural y mediático. En el político, su retórica populista fundada en luchas contra la justicia llevó a un progresivo debilitamiento de las instituciones democráticas y sus tácticas para distorsionar la verdad tuvieron consecuencias duraderas, al punto de servir como modelo para líderes populistas posteriores como el presidente estadounidense Donald Trump (Ruocco, 2023).

La presidencia de Berlusconi estuvo marcada por controversias, lo que, tras rumores de conexiones con la Mafia y el fracaso de su cuarto gobierno en 2011, llevó a la formación del gobierno técnico de Mario Monti. Así, la experiencia berlusconiana de Forza Italia entró en un receso y se observó el declive del partido que introdujo a Italia al fenómeno populista.

1.2 El Movimento 5 Stelle: del populismo televisivo al populismo de la web

La incapacidad del gobierno de Monti para recuperar la economía tras años de gastos excesivos durante los cuatro mandatos de Berlusconi y la crisis económica global de 2008, conocida como la Gran Recesión, agravaron la percepción de que las élites estaban priorizando sus propios intereses en detrimento de los ciudadanos comunes. De esta forma, se allanó el camino para el rápido crecimiento del blog di Grillo.

De manera similar a cómo Berlusconi utilizó la televisión en su época, Beppe Grillo, un cómico italiano de renombre, aprovechó Internet para establecer las bases de su Movimento 5 Stelle, claramente anti-*establishment*. Por medio de su blog, buscó difundir sus valores en contra de la política

y de las élites, así como organizar a sus seguidores mediante una forma de “democracia directa” basada en encuestas para tomar decisiones internas.

En 2009, un año después del inicio de la Gran Recesión, se fundó oficialmente el Movimento 5 Stelle como alternativa a los partidos tradicionales que, según los seguidores de Grillo, conocidos como “grillinos”, habían contribuido a la crisis (Bickerton y Accetti, 2021). El Movimento se presentó como defensor de la voz del pueblo y abandonó la sede partidista convencional en favor de un espacio virtual representado por el blog de Grillo. Esta nueva estrategia de comunicación marcó la evolución de los métodos para conectar a las masas con los líderes y promover soluciones simples a problemas complejos. De esta manera, se evidenció un desarrollo en el populismo que había introducido Berlusconi (Dal Zotto, 2017).

La retórica populista del M5S resonó particularmente con las clases sociales más bajas y con aquellos cansados de mantener el bipartidismo entre el centro-izquierda y el centro-derecha. Esto permitió que los esfuerzos del Movimento rindieran frutos en las elecciones de 2018. En colaboración con la Lega de Matteo Salvini, se formó el primer gobierno con Giuseppe Conte, profesor de Derecho en la Universidad de Florencia, como primer ministro, el segundo gobierno puramente populista en la historia italiana. Sin embargo, las crecientes diferencias entre los líderes de los dos partidos, Matteo Salvini de la LN y Di Maio del M5S, llevaron a poner fin al gobierno de coalición y a la era amarillo-verde.

Este escenario condujo a una reconfiguración política y a la formación de un nuevo gobierno, esta vez con el Partido Democrático (PD), históricamente de centro-izquierda, en el gobierno de Conte II. La llegada de la pandemia de COVID-19 en 2020 puso a prueba al nuevo gobierno, y lo llevó a enfrentar el desafío de manejar la salud pública y mitigar los efectos económicos negativos derivados de la paralización de la producción. Sin embargo, las medidas adoptadas para contener la propagación del virus y respaldar la economía fueron ampliamente critica-

das y la mayoría del gobierno no logró mantenerse en el poder. Así, comenzó el tercer gobierno técnico en la historia italiana, liderado por Mario Draghi, el salvador de la eurozona, como la única figura capaz de unir fuerzas políticas con ideologías distintas.

El gobierno de Draghi marcó el fin del Movimento 5 Stelle tal como se concibió, como un Movimento “ni de izquierda ni de derecha”, y dio origen a una evolución en su identidad política. Por un lado, Luigi di Maio, antiguo líder del M5S, optó por fundar su propio partido después de enfrentar críticas por su desempeño en los últimos años (Corbetta, 2018). Por otro lado, Conte asumió oficialmente el liderazgo y propuso una reestructuración del Movimento hacia un enfoque más verde, europeísta y de centro-izquierda, en un intento por sobrevivir en el cambiante sistema político italiano.

1.3 Nacimiento de los populismos de derecha

1.3.1 Lega Nord: del populismo étnico-identitario al populismo nacionalista euroescéptico

La Lega Nord nació el 4 de diciembre de 1989, bajo la dirección de Umberto Bossi, quien tenía la ambiciosa visión de transformar Italia en un sistema federal. Bossi fue uno de los primeros políticos en manifestar características propiamente populistas. De acuerdo con Testa, un investigador y especialista en el lenguaje de Bossi, el líder empleó un lenguaje vulgar y sencillo para promover el interés de las regiones del Nord en contra de la corrupción en el ámbito nacional. El autor sugiere que Bossi personifica lo que él define como “populismo étnico-identitario”, es decir, un fenómeno orientado a preservar la propia comunidad, consolidar un liderazgo personal y establecer una conexión directa y sólida con el pueblo.

A pesar de su inicial éxito, Bossi y su partido fueron víctimas de una decadencia gradual que se manifestó con la reducción en la capacidad para movilizar a las masas y la pérdida de importancia de la

cuestión territorial. Finalmente, el populismo bos-siniano llegó a su ocaso a causa de las acusaciones de corrupción y malversación de fondos públicos que afectaron tanto a él como a su familia, lo que lo forzó a renunciar a su puesto como secretario del partido (Del Palacio, 2015).

La llegada de Matteo Salvini en las elecciones de 2013 marcó un cambio de rumbo importante para el partido e inauguró un nuevo capítulo para la Lega. El liderazgo de Salvini optó por modificar la orientación federalista original del partido a favor de una perspectiva nacionalista. Conforme a Del Palacio, la nueva Lega Nord alteró el populismo étnico-identitario anti-Roma, al promover, mediante redes sociales, una retórica antiinmigración y anti-Unión Europea que resonó ampliamente entre los electores que consideraron a Bruselas como responsable de las crisis que habían afectado a Italia (Del Palacio, 2015).

Como se mencionó previamente, el mensaje del “Capitano”, apodo inventado por el especialista que se ocupa de su comunicación social, Luca Morisi, resonó tan profundamente que, en 2018, logró formar un gobierno con el Movimento 5 Stelle de Di Maio. Sin embargo, a pesar de los resultados más que satisfactorios en las elecciones europeas de 2019, el intento de derrocar el gobierno para alcanzar una mayoría unipartidista culminó en un fracaso significativo que condujo a la formación de una coalición entre el Partido Democrático y el Movimento 5 Stelle. Como resultado, Salvini y la Lega pasaron de ser el segundo partido más votado a ser marginados por completo en la escena política, cediendo el protagonismo a otro componente de la coalición de derecha: Fratelli d’Italia (De Petris y Seddone, 2020).

A pesar de su intento fallido de adueñarse de la centralidad política, la Lega no desapareció por completo, aunque se observó un redimensionamiento en la naturaleza del populismo de su liderazgo. Esto se debió en parte a su participación en el gobierno de Mario Draghi durante los años de la pandemia de COVID-19, de 2021 a 2022. Con el objetivo de

gestionar la emergencia sanitaria, el líder liguista impulsó reformas internas para atenuar el extremismo inherente del partido. Este proceso dio origen a un fenómeno que, Sofia Ventura, profesora asociada de Ciencias Políticas en la Universidad de Bolonia, definió como “*effetto Draghi*” (Valbruzzi y Ventura, 2023).

1.3.2 Fratelli d’Italia: desarrollo de un populismo identitario en esteroides

En diciembre de 2012, Fratelli d’Italia surgió como una respuesta a la división dentro del partido Popolo della Libertà (PDL), liderado por Silvio Berlusconi. En ese momento, una líder joven llamada Giorgia Meloni se unió a Ignazio La Russa, una figura influyente que había transitado desde el Movimento Sociale a la Alianza Nacional, dos partidos de extrema derecha. Su ambición conjunta era la de crear un partido capaz de revitalizar la ideología posfascista en Italia (De Petris y Seddone, 2020).

Aunque Fratelli d’Italia no se autodefinió explícitamente como un partido populista, su retórica presentaba rasgos populistas al fusionar elementos de identidad étnica, nacionalismo y tradicionalismo. De manera análoga a la Lega de Matteo Salvini, Giorgia Meloni identificó a la Unión Europea como su principal adversario, aunque sus fundamentos diferían significativamente. Su lucha por reavivar la identidad italiana se oponía a los ideales de mayor diversidad sociocultural que impulsa la UE. Además, tomando inspiración de la estrategia populista de Berlusconi, Meloni se esforzó por conectarse con su base electoral mediante las redes sociales, donde promovió valores cristianos y desafió la esfera política convencional (De Petris y Seddone, 2020).

Con el declive de Matteo Salvini y su partido, la Lega Nord, Giorgia Meloni emergió como la líder indiscutible del populismo italiano. Capitalizó el descontento de los ciudadanos con la política tradicional, y marcó un hito histórico al convertirse en la primera mujer presidenta en Italia y en el primer partido de extrema derecha en llegar al poder desde los tiempos de Mussolini.

Sin embargo, una vez en el gobierno, Meloni se vio en la necesidad de dejar de lado su retórica populista anti-Unión Europea para hacer frente a los estragos derivados de la pandemia de COVID-19. Esto implicó la distribución de los fondos del Plan Nacional de Reconstrucción y Recuperación y la urgencia de evitar el aislamiento internacional. No obstante, aunque moderó su crítica hacia la UE, no abandonó por completo su deseo de reformarla para hacerla más democrática y eficiente (Ventura, 2022).

En el ámbito nacional, su gobierno ha prometido avanzar en una agenda conservadora que abarca desde la reducción de la inmigración hasta políticas de austeridad fiscal y la defensa de valores tradicionales. Si bien Meloni ha moderado su discurso populista en los primeros meses de su gobierno, continúa siendo una líder de derecha conservadora. Defiende con firmeza los valores tradicionales y aboga por un papel más activo del Estado en la economía. Además, ha expresado admiración por líderes autoritarios como Viktor Orbán y Vladimir Putin.

La transformación política que ha experimentado Giorgia Meloni es un fenómeno notable en Italia y en el panorama político europeo. Ha sabido adaptarse a las cambiantes circunstancias políticas y dejar una huella profunda en la política de su país, al punto de marcar un hito histórico en la Italia contemporánea.

2. POPULISMO DE DERECHA VS. POPULISMO “NI DE DERECHA NI DE IZQUIERDA”

2.1 Populismo de derecha

Franziska Otto, investigadora de *Civics Monitor*, en su artículo para *Civil Liberties for EU*, define el populismo de derecha o populismo nacionalista como una “ideología política que amalgama elementos de derecha con ideas populistas”. En tér-

minos políticos, esto se traduce en la formación de partidos antiélites, xenófobos y nacionalistas que buscan establecer una comunicación directa con los ciudadanos. Estos partidos a menudo centran su atención en temas relacionados con la identidad nacional, la inmigración, la seguridad y la conservación de la cultura tradicional, y procuran movilizar a la población en contra de lo que consideran amenazas externas (Otto, 2022).

En el escenario italiano, Antonella Seddone, investigadora de la Universidad de Turín, teoriza sobre el uso estratégico de la retórica populista por parte de partidos de derecha radical y populista. Estos partidos, en un cambio gradual, han abandonado políticas económicas liberales en favor de enfoques más intervencionistas. Esta evolución tiene como objetivo atraer el apoyo de un electorado diverso en términos políticos y económicos. La estrategia invita a un electorado que comparte posiciones económicas intervencionistas, prescindiendo de sus inclinaciones de izquierda o de derecha. En este sentido, los partidos populistas de derecha están buscando establecer un vínculo más sólido con una base más amplia y variada de votantes mediante la adaptación de sus políticas económicas y de la retórica (De Petris y Seddone, 2020).

2.1.2 Lega Nord

La Lega Nord es un partido de carácter federal, con una estructura organizativa extendida por las regiones del norte de Italia, y es en esta área donde encuentra su base electoral. Umberto Bossi, el fundador, asumió el papel de líder carismático que contrastaba las élites políticas con sede en Roma con la voluntad del pueblo del Nord, cuya identidad estaba siendo amenazada por intereses egoístas. Sin embargo, debido a procesos legales que afectaron a Bossi, el liderazgo pasó a manos de Matteo Salvini.

El nuevo líder conservó aspectos populistas del partido original, aunque los modificó. En primer lugar, Salvini cambió el objetivo de sus críticas y acusaciones de Roma a Bruselas y, por lo tanto, a la Unión Europea, la cual, según el joven miembro

de la Lega, es responsable de la prolongada crisis económica en Italia. De esta forma, Salvini redefinió la posición del partido al adoptar una perspectiva euroescéptica y centrar la atención en temas de seguridad y migración. Progresivamente, su mensaje abandonó el regionalismo que había caracterizado al partido desde su inicio y empezó a enfocarse en la identidad nacional.

Las redes sociales se volvieron cruciales para la transformación del partido de regionalista a nacionalista. Salvini utilizó plataformas como Twitter y Facebook como canales de comunicación para superar la falta de organización del partido en las regiones del centro y del sur. Por medio de estas plataformas, estableció una conexión directa entre él como líder y su audiencia, lo que implicó la adopción de una lógica de personalización por parte del partido. La Lega, despojada de elementos federalistas, se enfocó en dos aspectos principales.

La Lega creó una dicotomía entre las élites y el pueblo, y se presentó como la voz de los trabajadores cuyas necesidades se ignoran, y como un oponente de la clase política acomodada. En consecuencia, el programa político de la Lega se concentró en reformas de las políticas de seguridad social y temas relacionados con la seguridad (De Petris y Seddone, 2020). Fue en este último ámbito donde la Lega obtuvo un amplio respaldo en las elecciones europeas de 2019. La posición de Salvini en contra de la inmigración atrajo a votantes italianos que sentían una preocupación por los efectos de la hiperglobalización. De esta forma, el líder liguista transformó a la inmigración y el euroescepticismo en medios para defender la identidad y los intereses nacionales.

2.1.3 Fratelli d'Italia

A diferencia de la Lega, Fratelli d'Italia no ha sido etiquetado oficialmente como un partido populista, aunque comparte ciertos elementos de la retórica populista. Esta diferencia se debe a su historia y a los vínculos con su pasado posfascista, representado por el Movimento Social Italiano y Alianza

Nacional, tanto en aspectos culturales como en su organización.

La importancia de este trasfondo histórico se hace más evidente por la posición que Fratelli d'Italia ha mantenido desde su inicio en 2012 hasta su reciente entrada al gobierno. Según Sofia Ventura, esta situación podría haber influido en la incorporación de algunos elementos populistas, como el destacado liderazgo de Giorgia Meloni, quien desempeña un papel clave al personalizar el partido. Es importante destacar que Fratelli d'Italia se identifica fuertemente con su líder, al ser prácticamente Meloni quien se muestra como la cara del partido en los medios. Gracias a estas estrategias, la visión de Meloni ha ganado mucho apoyo. De hecho, Meloni fue la primera política italiana en abrir una cuenta en Instagram, donde comparte imágenes de fuerza y determinación, junto con mensajes informativos e institucionales (Ventura, 2022).

Esta tendencia de personalizar el partido coincide con las ideas de Levinger sobre la retórica partidista. Fratelli d'Italia sigue un estilo de populismo de derecha radical que se desarrolla con tres actores principales: los *insiders*, que son la gente común; los *outsiders*, que son los extranjeros vistos como amenazas a la seguridad y la tradición, y las élites, a quienes se dirige un sentimiento de indignación.

Esta idea está relacionada, según Antonella Seddone, con el enfoque político de FdI, centrado en temas vinculados a la defensa de las tradiciones culturales italianas, especialmente la familia tradicional y las raíces católicas. Por esta razón, Meloni y Fratelli d'Italia respaldan una Unión Europea basada en valores tradicionales y cristianos, que defienda los intereses nacionales frente a la globalización y al multiculturalismo que pueda perjudicar la identidad nacional (De Petris y Seddone, 2020).

Sofia Ventura, al analizar los elementos populistas de Fratelli d'Italia, destaca dos en particular: el uso de las *inside politics* y el *welfare chauvinism*. Por un lado, la estrategia de *inside politics* es una herramienta política que utiliza aspectos personales de

un líder político para presentar una imagen más cercana que permita a los votantes identificarse con él. También se utiliza para minimizar la importancia de ciertos aspectos que podrían alejar a parte del electorado (Valbruzzi y Ventura, 2023). En el caso de Fratelli d'Italia, se emplea para ocultar la relación de Meloni con la experiencia fascista y posfascista de Italia, así como su visión centrada en la identidad nacional.

Por otro lado, el “chovinismo del bienestar” implica la idea de que los beneficios del sistema de bienestar deberían estar disponibles solo para los ciudadanos nacidos en ese país en particular. En este sentido, Meloni siempre ha subrayado la importancia de priorizar a los italianos cuando se trata de acceder a los servicios sociales (Ventura, 2022).

2.2 “Populismo ni de derecha ni de izquierda”

El populismo “*Ni de derecha ni de izquierda*” toma su nombre de su carácter postideológico, distanciando de las tradicionales divisiones entre izquierda y derecha. A diferencia de los partidos tradicionales, este tipo de populismo busca capitalizar la insatisfacción del electorado hacia la clase política y presentarse como una alternativa fresca. Por esta razón, el objetivo es conectar con las emociones y preocupaciones de la población en un nivel más personal.

2.2.1 Movimento 5 Stelle

La consolidación del Movimento 5 Stelle (M5S) ha representado un cambio sin precedente en la política italiana, y es un caso excepcional en los ámbitos nacional e internacional. En contraste con formas previas de “partido de un líder” y populismo en Italia, como el caso de Forza Italia de Silvio Berlusconi o la Lega Nord de Umberto Bossi, el M5S resulta difícil de encajar en el espectro izquierda-derecha. Aunque se presenta a las elecciones con candidatos y busca obtener cargos, se autodefine como

un “no partido” y una “no asociación”, que, por un lado, aboga por medidas tradicionales de izquierda como el ingreso mínimo, pero, por otro, se alía con los euroescépticos. Esto se debe a su estructura organizativa, a su modelo de liderazgo y a un estilo de comunicación único basado en el blog de Beppe Grillo.

A pesar de la falta de una ideología constante, es innegable que el M5S presenta varios elementos relacionados con el populismo. En primer lugar, dirige sus mensajes al “pueblo soberano”, al que, según el Movimento, debe ser devuelto el poder de decisión. Según Corbetta, un influyente sociólogo italiano, esta noción se refuerza con la idea de que los políticos no deben considerarse más que empleados del pueblo. El llamado del Movimento no se limita al pueblo soberano físico, sino que se dirige también al “pueblo de la web”, compuesto por los seguidores del blog de Grillo.

En segundo lugar, se observa una marcada hostilidad hacia la clase política, incluidos burócratas, tecnócratas e intelectuales, a quienes Grillo responsabiliza de la situación de Italia. La novedad radica en que Grillo amplía su ataque para incluir a los periodistas y medios televisivos, al considerarlos también como “servidores” de la política. Este giro resalta su percepción de la prensa convencional como parte del sistema establecido. El comediante aprovecha las redes para transformar el panorama político, explorar nuevas formas de democracia directa y difundir sus mensajes con mayor celeridad. Reconocer su anticipación en cuanto a la importancia y el potencial revolucionario de la web es esencial, ya que Grillo fue uno de los pioneros en utilizar esta plataforma para impulsar sus valores e ideas (Corbetta, 2018).

En tercer lugar, el M5S rechaza la dicotomía derecha-izquierda, por considerarla una distracción de la verdadera lucha entre las élites corruptas y el pueblo virtuoso, y también rechaza las alianzas políticas y las estructuras organizativas tradicionales de los partidos políticos. Esto se manifiesta principalmente en el ámbito del liderazgo del Mo-

vimiento. En el ámbito teórico, no debería existir un líder verdadero, sino que el liderazgo debería ser colectivo, ya que el objetivo final del M5S es garantizar la participación directa de todos. No obstante, en la práctica, la situación es completamente diferente. Por esta razón, se observa una fuerte personalización del partido en favor de un único líder carismático. En último lugar, el programa del M5S se caracteriza por la hipersimplificación de las complejidades políticas, con el propósito de fortalecer la conexión directa entre el Movimiento y el ciudadano común (Dal Zotto, 2017).

Contrariamente a esto, Corbetta argumenta que los elementos que caracterizaban al Movimiento 5 Stelle de Grillo se han ido modificando gradualmente debido al cambio de liderazgo que puso a Luigi di Maio, un joven con poca experiencia, en el centro del Movimiento. Esto se evidenció particularmente en el cambio de mensaje del Movimiento, que pasó de ser agresivo, destructivo y más populista, a ser más constructivo y orientado hacia el futuro.

Un cambio adicional ocurrió con la llegada de Giuseppe Conte, quien reemplazó a Di Maio después de su fracaso como ministro de Asuntos Exteriores y vicepresidente del gobierno de coalición amarillo-verde. El objetivo de Conte es revitalizar el Movimiento 5 Stelle, para orientarlo hacia una agenda política más inclinada hacia la izquierda.

Consideraciones finales

El populismo en Italia ha desempeñado un papel transformador y profundamente arraigado en el panorama político del país en las últimas décadas. Por medio del análisis de la Lega Nord, Fratelli d'Italia y el Movimiento 5 Stelle, se revela una perspectiva única sobre cómo el populismo puede manifestarse en la política italiana, y se demuestran la riqueza y la amplitud de enfoques y estrategias que este fenómeno abarca.

La transformación de la Lega Nord desde un partido regionalista hacia un movimiento nacionalista y populista de derecha destaca cómo el populismo puede trascender los límites geográficos y evolucionar para incluir cuestiones más amplias de identidad y seguridad. Bajo el liderazgo de Matteo Salvini, la Lega se ha convertido en una fuerza impulsora en la política italiana, al reconfigurar la discusión política y redefinir la retórica en torno a temas críticos como la inmigración y la relación con la Unión Europea.

Fratelli d'Italia, por otro lado, presenta una fusión única de elementos populistas y conservadores, derivados de su herencia posfascista. La habilidad de Giorgia Meloni para personificar el partido mientras mantiene vínculos con las tradiciones políticas anteriores resalta la flexibilidad y la adaptabilidad del populismo en diferentes escenarios históricos y sociales.

El caso del Movimiento 5 Stelle subraya cómo el populismo puede desafiar las categorías políticas convencionales. Aunque el M5S inicialmente adoptó una posición anti-*establishment* y antiélite, su participación en el gobierno y el cambio de liderazgo lo llevaron a explorar políticas más inclinadas hacia la izquierda. Esto demuestra cómo el populismo puede evolucionar y adaptarse para satisfacer las demandas cambiantes de la sociedad y el entorno político.

En conjunto, el populismo italiano se presenta como un fenómeno dinámico y en constante evolución, con grandes capacidades para adaptarse a diferentes escenarios y líderes. Si bien los tres casos analizados representan diferentes manifestaciones del populismo, comparten el impulso de establecer un vínculo directo con el pueblo y desafiar las estructuras políticas tradicionales.

REFERENCIAS

- Bickerton, C. J. y Accetti, C. I., *Technopopulism: The New Logic of Democratic Politics*, New York, Oxford University Press, 2021.
- Corbetta, P., “Come Cambia Il M5S Guidato da Di Maio”, *Rivista il Mulino*, <https://www.rivistailmulino.it/a/come-cambia-il-m5s-guidato-da-di-maio>, 2018, Fecha de consulta: 10/08/2023.
- Dal Zotto, E., “El populismo en Italia: el caso del Movimiento Cinco Estrellas”, *Fundación CIDOB*, https://www.cidob.org/es/articulos/cidob_report/n1_1/el_populismo_en_italia_el_caso_del_movimiento_cinco_estrellas, 2017, Fecha de consulta: 10/08/2023.
- Del Palacio, Martín, J., “La Nueva Lega Nord”, *Cuadernos de Pensamiento Político*, núm. 46, 2015, pp. 157–73. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/24368041>, Fecha de consulta: 31/08/2023.
- De Petris, A. y Seddone, A., “Democrazia e Diritti umani: Populismi e la Destra in Italia”, *Friederich Ebert Stiftung Italia*, <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/rom/16357.pdf>, 2020, Fecha de consulta: 02/08/2023.
- Otto, F., “What is populism: definition, characteristics, examples”, *Liberties*, <https://www.liberties.eu/en/stories/populism/44261>, 2022, Fecha de consulta: 20/08/2023.
- Ruocco, A., “Silvio Berlusconi: un’eredità economica, mediatica e sportiva”, *Creditnews*, <https://www.creditnews.it/berlusconi-eredita-economica-mediatica-sportiva/>, 2023, Fecha de consulta: 21/08/2023.
- Valbruzzi, M. y Ventura, S., “Fratelli d’Italia e Lega: Diversamente populistici di destra?”, *Friederich Ebert Stiftung Italia*, <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/rom/19963-20230123.pdf>, 2023, Fecha de consulta: 28/07/2023.
- Ventura S., “Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia: Un Partito Personalizzato tra Destra Estrema e Destra Radicale”, *Friederich Ebert Stiftung Italia*, <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/rom/19408.pdf>, 2022, Fecha de consulta: 28/07/2023.

POLONIA: DE EJEMPLO DE TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA A AUTOCRACIA EN CIERNES

Mónica Laborda Sánchez*

En el escenario global contemporáneo la democracia está bajo amenaza en todo el mundo. Las normas e instituciones democráticas se enfrentan a fuertes presiones por lo que hay más democracias que decaen que en cualquier otro momento del último siglo. En la actualidad, las democracias están en deterioro e incluso hay algunas que están muy cerca de la autocracia.

En Europa, y más concretamente en Europa del Este, el caso de Polonia llama la atención por varios motivos: el primero es su situación estratégica, que hace de este país la puerta más importante de comunicación entre Europa Occidental y el Este;

el segundo tiene que ver con las características de su transición política, ya que fue uno de los pocos países que contó con un movimiento organizado de resistencia frente al régimen socialista (el sindicato Solidaridad), y, finalmente, habría que agregar la peculiar evolución de su sistema de desarrollo económico y su compleja transformación política, que a la postre ha acabado acercándola a los criterios de la Unión Europea (UE) e incluso a su adhesión en 2004.

Entre los países excomunistas, Polonia se distinguió por su apuesta por la democracia. Es importante recordar que la transición política de Polonia se caracterizó por un rechazo abierto al orden político anterior, el régimen socialista, y por su deseo de entrar en los márgenes del modelo que identificaba el sistema político con la libertad. El régimen comunista, como dictadura exterior que era, supuso un ahogamiento de lo popular o tradicional, que en el caso de Polonia constituía su identidad.

Cabe señalar que el caso de Polonia es –si se deja aparte el caso húngaro– bastante distinto al del

* Doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea. Asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) y miembro de la Unidad de Estudio y Reflexión Europa+ del mismo. Miembro de la Red de Europeístas en México y miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Conferencista, catedrática y colaboradora para diversos medios nacionales e internacionales. Investigadora del Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad Autónoma de Barcelona.

resto de los países de Europa Central y Oriental en cuanto a la conformación de una cultura política democrática. Las reformas democráticas de Polonia avanzaron a buen ritmo, hasta instaurar un régimen democrático que permitió la integración del país en la Unión Europea. En el momento de su adhesión a la UE, Polonia estaba considerada como un caso ejemplar de transición democrática exitosa.

La historia reciente de este país ha dado muestras más que suficientes, tanto en los años de la oposición al régimen comunista como a lo largo de la transición, de la capacidad del pueblo polaco para generar redes de participación incluso en la clandestinidad. Cabe recordar que un fuerte movimiento sindical llamado *Solidarnosc* (Solidaridad) fue abriendo caminos para transformar el régimen comunista anterior en uno democrático. Uno de sus líderes, Lech Walesa (cofundador de la organización), fue insistente en querer legalizar el sindicato. Gracias a la ayuda de la reestructuración económica (*Perestroika*) y a la apertura política que permitía la libertad de expresión y asociación (*Glasnost*) de Gorbachov, el gobierno polaco aprobó una reforma en 1989, que permitió el pluralismo político y la legalización de Solidaridad. Esto hizo posible la presentación de este sindicato en las elecciones democráticas de 1990, en las que Walesa resultó vencedor y se convirtió en presidente de la República polaca. De esta forma, Solidaridad dejó de ser sindicato y se transformó en partido político con un amplio apoyo de la Iglesia católica polaca y de Estados Unidos.

Este precedente es el signo más claro de la existencia de una sociedad civil que actúa y se moviliza. Esto sin duda debe haber influido en el carácter singularmente pacífico de los cambios acaecidos en Polonia y en el resto del Este europeo, toda vez que el mantenimiento de la paz requiere de la consistencia de una cultura política de colaboración con las instituciones y de aceptación de las reglas del juego.

Luego de la caída del Muro de Berlín, Polonia comenzó a reorganizarse, con el fin de integrarse cuan-

to antes a las estructuras europeas y así disminuir las barreras entre Este y Oeste que dominaron el panorama político y económico durante la Guerra Fría. Polonia comenzó a apoyar las actividades de la comunidad internacional a favor de la paz duradera en Europa y el mundo, como también para la protección de los derechos humanos fundamentales y el desarrollo de todos los países. Con un amplio respeto por la Organización de las Naciones Unidas como foro multilateral contra las amenazas globales, Polonia participó activamente en las acciones antiterroristas respaldadas por esta organización.

En el ámbito interno, entre 1989 y 1991, Polonia protagonizó una transición democrática que puso fin a la República Popular de Polonia al consolidar un gobierno democrático, conocido como la Tercera República de Polonia (*III Rzeczpospolita Polska*). Los Acuerdos de la “Mesa Redonda de Varsovia”, celebrados entre el 6 de febrero y el 4 de abril de 1989, marcaron el fin de un proceso de transición de la ocupación y el comunismo a la democracia. Son tres los aspectos fundamentales de la transición polaca: 1) el carácter independiente y nacionalista del pueblo polaco; 2) el liderazgo de Lech Walesa, y 3) la influencia de Juan Pablo II y de la Iglesia católica. En esta aproximación a los factores que promovieron y permitieron el cambio, no se puede pasar por alto la presencia e influencia del pontificado de Juan Pablo II. El Papa polaco –tal y como lo llamaban– intervino directamente en el proceso con los medios que le eran permitidos: el aliento a su pueblo y la fuerza de su palabra.

De la transición política polaca se debe rescatar –como en la transición española, chilena y brasileña– la conformación y arraigo de la cultura democrática en la ciudadanía. Cabe recordar que, con la caída del comunismo, surgió el “síndrome del repliegue”, que implicó el aislamiento de los ciudadanos de la participación social. La inercia vivida en los países de Europa Oriental durante la era comunista conformó sociedades pasivas, poco responsables de sí mismas como tales. Sin embargo, esas mismas sociedades son las que abrieron brecha hasta hacer que sus países transitaran a la democracia liberal.

Ciertamente, había muchos incentivos para que lo hicieran. Por ejemplo, la instauración de un Estado de derecho era la condición *sine qua non* para la incorporación de estos países a las instituciones europeas, y, en este caso en particular, esto sí que suponía una necesidad real dadas las desastrosas condiciones en que se encontraba la economía de Polonia durante la etapa del cambio estructural.

En 1996, Polonia ingresó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que le dio la oportunidad de acelerar los procesos de integración en las estructuras europeas. Asimismo, Varsovia mantuvo el dinamismo en las relaciones con sus principales socios europeos: Alemania, Francia y Reino Unido. Polonia ingresó en 1999 a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) junto con la República Checa y Hungría. Finalmente, en 2004 concretó su adhesión a la UE, la cual transformó por completo el carácter de las relaciones de Polonia con sus socios europeos, pero también con terceros países.

No obstante, las cosas cambiaron tanto para la UE como para sus Estados miembros, y quizá de forma particularmente aguda para los de reciente ingreso, que apenas habían concluido sus transiciones a la democracia y a la economía de mercado. En 2008, dio inicio la crisis más complicada que ha vivido la UE en tiempos recientes, conocida como la “gran recesión” o la “glaciación” europea. De esta gran crisis económica, importada desde Estados Unidos, pero que pegó con fuerza en la Europa integrada, nació otro desafío existencial para la UE, visible en los alarmantes signos de deterioro y retroceso de la democracia liberal en el mismo seno de este proceso de integración.

Y puede considerársele una crisis existencial, porque, para pertenecer a la UE, a los países candidatos se les exige el cumplimiento indispensable de los llamados Criterios de Copenhague, que consisten en contar con una democracia liberal plena, en la que se respeten los derechos humanos y el Estado de derecho; una economía de mercado suficientemente sólida como para sobrevivir en el mercado

interior, y la aceptación del acervo comunitario, es decir, de todas las normas, reglas y leyes que apuntalan el proceso europeo desde su creación y hasta el momento del ingreso del nuevo Estado miembro. El problema está en que, una vez dentro, los procesos y mecanismos establecidos para verificar que estos criterios sigan cumpliéndose no han resultado del todo eficaces y los castigos en caso de incumplimiento no parecen haber producido el efecto deseado, es decir, que los infractores cambien su conducta. Esto ha empezado a conocerse como el “dilema de Copenhague”.

Otros analistas consideran que el deterioro de la democracia en Europa está vinculado precisamente con la conocida como la “gran ampliación”, es decir, la que supuso la adhesión a la UE de los países del Este en 2004 y 2009, en un escenario de crisis económicas y financieras, que se fueron transformando en una crisis social y de valores como consecuencia de las políticas de austeridad impuestas por un manejo insatisfactorio de la propia crisis. Esto ha redundado en una impugnación de la propia idea de construcción europea desde diversos frentes ideológicos.

Recientemente, Polonia ha dado muestras de un deterioro igualmente preocupante. Si bien no se trata, desgraciadamente, de casos aislados, sino de una tendencia cada vez más generalizada visible en el auge de la extrema derecha a lo largo y ancho de la UE, Polonia, que solía ser la mayor historia de éxito democrático en Europa del Este y que durante tres décadas constituyó el mayor triunfo del mundo poscomunista, como un ejemplo a seguir entre quienes vivieron tras la “Cortina de Hierro”, ahora se enfrenta a una fuerte polarización política.

Los problemas democráticos en Polonia, debido a las malas prácticas del gobierno ultraconservador ahora en el poder, el del partido Ley y Justicia –*Prawo i Sprawiedliwość*, conocido por sus siglas como PiS–, siguen generando preocupación en los ámbitos nacional e internacional. La elección de octubre de 2015 en Polonia fue un golpe para las

fuerzas democráticas europeas: el partido Ley y Justicia volvió al poder con mayoría absoluta, algo que nunca había ocurrido en la historia de la democracia polaca.

Cabe señalar que Polonia tiene un sistema de gobierno parlamentario, con un legislativo bicameral, conformado por la Cámara de Representantes (*Sejm*) y el Senado, y un poder ejecutivo a cargo de un presidente elegido por voto popular. La victoria del PiS en 2015 fue significativa no solo porque siguió a dos mandatos consecutivos de la Plataforma Cívica entre 2007 y 2015, sino también porque la coalición política liderada por el PiS fue la primera desde que comenzó la transición democrática de Polonia que obtuvo el control de la Presidencia y una mayoría en ambas cámaras del Parlamento en 1989.

No obstante, el PiS aprovechó esta mayoría para imponer un control duradero sobre las instituciones estatales y transformar las estructuras sociales y económicas hacia un modelo nacionalista y estatista. La erosión del Estado de derecho, la limitación de los derechos y las libertades fundamentales, la discriminación hacia minorías y la crisis migratoria son algunos de los principales problemas que han socavado la democracia en este país.

En particular, la erosión de la independencia judicial y del Estado de derecho llaman la atención en el gobierno que encabeza el PiS. El gobierno ha realizado cambios en el sistema judicial, lo que ha llevado a la politización de los tribunales y ha socavado la separación de poderes. La reforma del Tribunal Constitucional, por ejemplo, ha debilitado su papel como garante de la constitucionalidad de las leyes, lo que ha generado críticas de la Unión Europea y también de organismos internacionales.

La restricción de las libertades y derechos fundamentales es otra cuestión importante. El gobierno ha aprobado leyes que limitan la libertad de prensa y la independencia de los medios. Estos han enfrentado presiones y censura, lo que ha llevado a una disminución de la libertad de expresión en el país. Aunadas a esta tendencia, el gobierno ha

instaurado políticas que discriminan a minorías y colectivos vulnerables. La comunidad LGBTQ+ ha sido particularmente afectada, ya que el gobierno ha promovido leyes y retórica homofóbicas que han generado un clima de hostilidad y discriminación. Esto ha llevado a la violación de sus derechos humanos y ha sido objeto de condena por parte de organismos internacionales y defensores de los derechos humanos tanto dentro como fuera de Europa.

Otro tema de gran preocupación es la crisis migratoria que vive el país. Algunos inmigrantes y refugiados han llegado a Polonia bajo las duras y hostiles políticas del gobierno, que han resultado en la implementación de medidas restrictivas y violaciones de sus derechos humanos. Estas malas prácticas del gobierno han llevado a una creciente polarización política y a una división en la sociedad polaca. Las protestas y manifestaciones han sido frecuentes, con ciudadanos que luchan por proteger los valores democráticos y exigen cambios en las políticas del gobierno.

Ante la inminencia de las elecciones legislativas a celebrarse el 15 de octubre de 2023, está en tela de juicio si el actual Ejecutivo polaco dominado por el PiS podrá continuar, pues se especula que podría no obtener la mayoría. Más allá de eso, también es muy preocupante el crecimiento excepcional de Confederación, una formación más a la derecha aún que el PiS y con serias posibilidades de cuadruplicar su exigua presencia parlamentaria actual, de once diputados a una cuarentena, según los más recientes sondeos. Su ascenso es una alerta más sobre la derechización de los electorados europeos, que cuestionan la unidad de la UE, especialmente por el lado de los países que ingresaron en las últimas ampliaciones.

Europa está experimentando gradualmente un cambio que podría dar paso a una nueva tendencia política. Los partidos de extrema derecha que alguna vez estuvieron en la periferia de la política ahora están ganando posiciones gubernamentales, un hecho crucial que supone un grave riesgo para la democracia. La nueva extrema derecha se beneficia

de la profunda decepción, las crisis institucionales y el pesimismo centrado en el futuro de los partidos tradicionales. En términos de elecciones, el eje político de Europa se inclina hacia la derecha, y los partidos ultraconservadores no solo tienen una carta de ciudadanía, sino que también comparten el poder en varios Estados.

El ascenso de varios grupos de extrema derecha se ha incrementado en la escena europea en la última década. Sin duda, la crisis migratoria que comenzó en 2015 y sus consecuencias han desencadenado focos de tensión ultranacionalistas generalizados que se han exacerbado por la pandemia de la COVID 19, la invasión rusa de Ucrania y la persistencia de la crisis económica.

Las próximas elecciones polacas tienen importantes implicaciones en el marco de la invasión rusa de Ucrania. Otra victoria del PiS podría debilitar la posición de Polonia como freno a los designios imperiales del presidente ruso, Vladimir Putin. Desde que Rusia comenzó su invasión en Ucrania, Polonia, como ningún otro miembro de la UE, se volcó en la ayuda y en la solidaridad, sobre todo en la acogida de miles de refugiados, el suministro de armas, la instrucción de tropas y el apoyo logístico al conflicto defensivo con Rusia. El pueblo polaco puede identificarse con la difícil situación de los refugiados ucranianos, porque les recuerda la barbarie que vivieron por culpa de los nazis, incluida la destrucción de Varsovia por orden de Hitler.

Las elecciones siempre son cuestiones de alto riesgo en aquellos países que experimentan un retroceso democrático. Es lo que sucedió en la elección presidencial de Turquía; ahora, de la misma manera, cuando los polacos vayan a las urnas este otoño, la democracia allí estará en riesgo. Como ya se apuntó, desde que llegó al poder en 2015, el partido populista Ley y Justicia (PiS) de Polonia ha politizado el poder judicial, ha acosado a la sociedad civil y ha trabajado incansablemente para cerrar los medios independientes. El PiS ha seguido los pasos tanto de Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, como de Viktor Orbán, el primer

ministro de Hungría, país que ya no puede considerarse una democracia, según ha afirmado el Parlamento Europeo, aunque sigue perteneciendo a la Unión Europea.

Recientemente se han presentado protestas antigubernamentales en Varsovia, donde ciudadanos de distintas partes de Polonia han marchado por el temor de que el país se esté orientando hacia la autocracia y para expresar su enojo contra funcionarios a los que acusan de socavar las normas democráticas. Los simpatizantes de la marcha han advertido que estas elecciones de 2023 podrían ser la última oportunidad para que se ponga fin al deterioro de la democracia en Polonia, en medio de crecientes temores de que los comicios podrían no ser imparciales.

La actualidad polaca es una muestra clara de que incluso la pertenencia a la UE no es condición suficiente para sostener una democracia liberal, o, al menos, para garantizar su calidad. Es incuestionable que un retroceso de la democracia es un fenómeno grave en cualquier país del mundo, pero es particularmente dañino en el caso de un Estado que pertenece a una construcción tan interconectada como la Unión Europea, que ve reducida su credibilidad y su capacidad de actuación en un momento histórico en el que Europa debe mostrar fortaleza y unidad.

La gran pregunta es cómo contrarrestar el auge populista con ideas innovadoras que sean incluyentes socialmente hablando y que, a la vez, promuevan la renovación política, además de crear sociedades más igualitarias que permitan la supervivencia de las democracias liberales. El caso de Polonia, que amenaza los cimientos mismos del gran proyecto de Europa, es una expresión de un problema político más profundo: que la democracia europea ya no tiene el mismo eco y aceptación en la ciudadanía.

La extendida crisis económica que vive el mundo desde la última década, a la que se suman la pandemia y sus desastrosas consecuencias económicas y sociales, que incrementan las oleadas

de migrantes han creado un caldo de cultivo para que los nacionalismos extremos y un neopopulismo ultraconservador logren llegar al poder en democracias liberales, para luego socavarlas desde él.

Europa vive una pugna entre sus valores democráticos y los de aquellos que, mediante los mecanismos de la propia democracia, han llegado al poder para desde allí comenzar a minarla. Tal es el caso de Polonia, que tiene la oportunidad en las próximas elecciones parlamentarias de transformar su política nacional y consolidar su democracia en una coyuntura global por demás amenazante para la Unión Europea.

LA CRISIS DE LOS *TORIES* EN LA ERA *BREXIT*

Alicia Gutiérrez González¹

Este artículo se divide en tres partes y la primera de ellas explica brevemente la pertenencia del Reino Unido (RU) a la Unión Europea (UE) durante 47 años bajo el privilegio de una Europa “a la carta”, en la que podía elegir lo que le convenía y dejar atrás todo aquello que no le favorecía. En la segunda parte se analiza la crisis del liderazgo de los *tories* entre 2016 y 2022, mientras ocupaban el número 10 de Downing Street. La tercera

parte menciona las crisis del Reino Unido en la era pos-*brexit*, desde los conflictos del Protocolo de Irlanda del Norte, la posible independencia de Escocia, así como del rompimiento de las monarquías caribeñas con la Corona británica hasta la situación del RU como tercer país para la UE con el tema migratorio sobre la mesa y el posible *regrexit*. Finalmente, el artículo concluye que la crisis del RU se debe principalmente a un *brexit* que nunca debió ocurrir y que por eso el país está sumido en una crisis económica, política y social sin precedente. Por lo tanto, el *brexit* ha sido un movimiento exitoso antisistema que se integra claramente al movimiento internacional populista. Ahora bien, la idea de regresar a ser parte nuevamente de la UE puede ser parte de la solución; sin embargo, el *regrexit*, de ocurrir, no devolverá al RU la posibilidad de contar con la Europa “a la carta” que tuvieron en otros tiempos.

¹ Doctora en Derecho Internacional, Europeo, Económico y Ambiental por la Georg August Universität, Göttingen, Alemania. Es investigadora de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac México, miembro de la Unidad de Estudio y Reflexión Europa+ del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) y del Sistema Nacional de Investigadores nivel II. Autora del libro *El brexit: la relación del Reino Unido con la Unión Europea* (2020), de *El Derecho Europeo: la integración europea, principios y jurisprudencias* (2a. ed., 2022) y de otros libros, artículos y capítulos, y es una de las voces prominentes en Derecho Europeo, de Integración y Ambiental, así como en los temas de migración y derechos humanos. Imparte las cátedras de Europa, seguridad internacional, sostenibilidad y desarrollo, entre otras.

I. ANTECEDENTES DE LA RELACIÓN DEL REINO UNIDO CON LA UNIÓN EUROPEA

1. Evolución histórica

Cabe recordar que, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, Winston Churchill, líder del partido conservador (los *tories*) y entonces primer ministro del RU, en un discurso en la Universidad de Zúrich propuso crear unos Estados Unidos de Europa donde Francia y Alemania fueran los precursores de la reconstrucción de Europa tras la terrible devastación de la guerra. A grandes rasgos, la parte medular de su discurso fue incitar a los países europeos a levantarse con el apoyo de Estados Unidos, de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), del RU y de la Mancomunidad de Naciones. En su discurso jamás mencionó que el RU sería parte de ese proyecto de integración europea. Para entender mejor esa posición es necesario saber que, en aquel entonces, el Imperio británico aún se beneficiaba de la explotación de sus colonias y, por ende, no le resultaba atractivo ingresar a un proyecto donde tuviera que compartir parte de su soberanía y de sus ingresos, ya que eso socavaba su independencia política y económica. Por eso evitó ser parte del proyecto europeo en un principio. Así las cosas, en 1951 se creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) entre Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Para 1957 se crearon dos comunidades más: la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom). Estas tres Comunidades Europeas contaban con instituciones supranacionales que velaban por el bien común de los países miembros a largo plazo.

Ahora bien, con el paso del tiempo, el RU se dio cuenta de que las Comunidades Europeas prosperaban y no se quiso quedar atrás. Así, por cuestiones económicas solicitó su adhesión al club comuni-

tario en tres ocasiones; sin embargo, se encontró con la negativa del presidente de Francia Charles de Gaulle, quién vetó en dos ocasiones su entrada con el argumento de que el RU sería el caballo de Troya, aliado de Estados Unidos, que minaría desde adentro el proyecto europeo. Años más tarde, con George Pompidou como presidente de Francia, el RU volvió a solicitar su ingreso y finalmente fue aceptado a las entonces Comunidades Europeas el primero de enero de 1973, junto con Dinamarca e Irlanda.

2. La Europa “a la carta” del Reino Unido y el primer referéndum en 1975

El RU fue parte de la hoy Unión Europea (UE) durante 47 años (de 1973 a 2020), sin integrarse plenamente al proyecto europeo, ya que disfrutó de una suerte de Europa “a la carta” que le permitía elegir solamente los proyectos en los que quería participar y dejar de lado los que no le convenían. Pese a este privilegio, en 1975, a escasos dos años de haber entrado, ya tenía en mente salir del club comunitario debido a que el principio de solidaridad, la contribución al presupuesto y compartir parte de su soberanía con instituciones supranacionales no eran de su agrado. *Grosso modo*, al RU le interesaba mejorar su economía y, por ende, sus ojos estaban puestos en la libre circulación de sus mercancías y la abolición de los aranceles. Al RU no le interesaba integrarse; lo que buscaba era el beneficio económico que le brindaba este gran mercado. Harold Wilson como primer ministro y líder del partido laborista llevó a cabo el primer *referéndum* donde se le preguntó al pueblo británico: “¿Piensa usted que Reino Unido debe permanecer en la Comunidad Económica Europea (el Mercado Común)?”. Los ciudadanos respaldaron la votación con una aprobación del 67 %. El éxito de la permanencia radicó en que tanto los *tories* como los laboristas se unieron en una campaña para apoyar la permanencia del RU en las Comunidades Europeas.

Por otra parte, en lo que se refiere a la Europa “a la carta” resulta importante mencionar tres rubros:

a) El presupuesto

El RU no pagaba el presupuesto que le correspondía gracias al cheque británico que negoció Margaret Thatcher con la Europa integrada durante su mandato al frente del partido conservador. Esto sucedió cuando el país estaba en una crisis derivada del desempleo y donde reinaban las protestas. Así las cosas, Thatcher logró en beneficio del RU el famoso cheque británico que consistía en devolver a los británicos parte de sus contribuciones a las finanzas comunitarias destinadas a compensar su menor uso de las ayudas agrícolas.

b) El euro

El euro no se adoptó en el RU, ya que John Major, líder de los *tories*, solicitó la exención de su país de la tercera fase de la Unión Económica Monetaria y se le concedió, por lo que se quedaron con su moneda, la libra esterlina. Aquí se refleja nuevamente la negativa por parte del RU a compartir el control de su política monetaria, lo que era un hecho si aceptaban el euro como moneda.

c) El control de las fronteras

El control de las fronteras se mantuvo y no se permitía la libre circulación de personas. Tampoco quiso formar parte del Espacio Schengen. Esta ha sido y sigue siendo una de las líneas rojas de Londres, ya que el rechazo a la inmigración siempre ha estado en la agenda británica. Con esto en la antesala, la Europa “a la carta” le permitió al RU obtener los beneficios de pertenecer a la UE sin tener todas y cada una de las obligaciones que le correspondían como Estado miembro. Esto trajo como consecuencia y de manera natural que el RU no se integrara al club comunitario, contrario al espíritu de los padres fundadores de Europa.

II. LA CRISIS EN EL LIDERAZGO DE LOS *TORIES* DE 2016 A 2022 EN EL NÚM. 10 DE DOWNING STREET

1. El *referéndum* de 2016 y la dimisión de David Cameron

David Cameron, líder de los *tories* y primer ministro, al ver cómo el euroescepticismo proliferaba en su partido, prometió que, en caso de reelegirse en las elecciones de 2015, convocaría a un *referéndum* para que el pueblo británico se pronunciara con respecto a la siguiente pregunta: “¿Debe permanecer el Reino Unido en la Unión Europea o debe salir?”. Los conservadores más radicales y antisistema, aquellos en contra de la agenda de la UE que comulgaban con los ideales del partido United Kingdom Independence Party (UKIP) liderado por Nigel Farage, y personajes como Boris Johnson vieron con buenos ojos esta promesa de campaña y lo apoyaron para lograr la salida del Reino Unido de la UE mediante el *referéndum*.

Es importante señalar que el partido UKIP reforzó la idea de recuperar la soberanía del RU, y estaban totalmente en contra de la llegada de un gran número de personas como durante la crisis de refugiados de 2015, en la que la UE intentó que los Estados miembros aceptaran una cuota de refugiados para repartirlos de manera equitativa. Aunque el intento de la UE fracasó, esto sirvió para que el UKIP tomara más fuerza. El lema de la campaña fue “retomar el control de su país”, en el entendido de que la UE les quitaba su soberanía, su dinero y además aceptaba a migrantes terroristas que violaban a sus mujeres, les quitaban su trabajo y hasta su religión por ser musulmanes en su mayoría. Otro de los argumentos para dejar la UE era que el euro y el Espacio Schengen debilitaban económicamente al país y que, finalmente, el RU perdía más dentro que fuera de la UE. La campaña estuvo llena de verdades a medias, de noticias falsas, de nostal-

gia por el gran Imperio británico de antaño y por un pasado poderoso y próspero. Johnson también prometió en su campaña programas sociales, de salud y de seguridad, lo que le permitió llegar a la clase trabajadora, a los inconformes con el sistema y a los frustrados de los sectores que veían a la UE como la generadora de sus problemas tanto sociales como económicos.

Este segundo *referéndum* se llevó a cabo el 23 de junio de 2016 y el 51.9 % votó por la salida del RU de la UE. Eso fue posible gracias al discurso anti-inmigrante del partido de ultraderecha UKIP, donde Nigel Farage y Boris Johnson desempeñaron un papel decisivo en las decisiones de los votantes, ya que lograron penetrar en la base ideológica del pueblo británico.

Al parecer, la campaña por la permanencia que lideraron Cameron y May no informó al pueblo británico sobre los privilegios de la Europa “a la carta” en la que vivían. Tampoco tomaron en cuenta la situación del país, ni la crisis migratoria de 2015, ni la crisis monetaria de 2008 donde el euro, estuvo en peligro y no hubo una comunicación certera que llegara a los hogares británicos, donde les dijeran lo catastrófico que podría ser para ellos salir de la UE después de 47 años como parte de la construcción comunitaria. Jamás le comunicaron a la población que el *brex*it destruiría las cadenas de suministros y que los costos aduaneros subirían considerablemente.

2. El paso de cinco primeros ministros entre 2016 y 2022

La crisis en el liderazgo de los *tor*ies se agravó con el *brex*it. David Cameron dimitió como primer ministro cuando, en el *referéndum* del 23 de junio de 2016, ganaron los partidarios de abandonar la UE con 51.9 %. Al ser Cameron un europeísta de corazón, no tuvo más remedio que dimitir. La segunda primera ministra en renunciar fue Theresa May, sucesora de Cameron y partidaria también de la

permanencia del RU en la UE. Esto fue el principio del fin para la premier británica, ya que, al no ceder con el *brex*it, le resultó imposible negociar la retirada del RU del club comunitario. Durante su encargo tuvo que solicitar tres prórrogas y vencer dos mociones de desconfianza por parte de los parlamentarios, sin mencionar que el Acuerdo de Retirada nunca prosperó durante su mandato y la mayoría de sus ministros renunciaron.

El tercer primer ministro en llegar al poder fue Boris Johnson, el líder de la campaña del *brex*it y parte del ala más conservadora, euroescéptica y xenófoba de los *tor*ies. Con él al mando, se aprobó el tan esperado Acuerdo de Retirada con la UE. Sin embargo, al llegar la pandemia de COVID-19, el confinamiento fue inevitable por la proliferación del virus y el exceso de muertes. Esto trajo consigo el cierre de las fronteras interiores tanto de la UE como del Espacio Schengen. Esta situación, junto con la entrada en vigor del *brex*it a partir del primero de enero de 2021, llevó al RU a una crisis de falta de trabajadores extranjeros (choferes, carniceros, personal de limpieza) que tenían que dejar el RU por falta de visa de trabajo. Por otra parte, el desabasto de combustible y las noticias falsas, así como las fiestas de Johnson durante el confinamiento y las múltiples dimisiones dentro de su gabinete lo forzaron a renunciar.

Liz Truss, la tercera mujer en ser primera ministra del RU, sucedió a Johnson y se caracterizó por ser la líder del RU con el mandato más corto (apenas 45 días). Truss se vio en la imperiosa necesidad de dimitir por el cúmulo de problemas y de malas decisiones tomadas durante su mandato.

Finalmente, en octubre de 2022, Rishi Sunak (hijo de inmigrantes) fue nombrado primer ministro, pero sus retos siguen siendo los mismos que los de 2016: velar por la estabilidad económica del RU, bajar el costo de la vida, resolver los problemas de abastecimiento, combatir el movimiento de independencia de Escocia y la posible reunificación de las dos Irlandas, y, por si esto fuera poco, la inmigración y la burocracia que han ido *in crescendo*

desde el primero de enero de 2021 porque el RU ya no es parte de la UE.

Así las cosas, en seis años, el RU ha tenido cinco primeros ministros del partido conservador: David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, y Rishi Sunak desde 2022. A pesar de no haber perdido el poder, el partido conservador enfrenta una de las peores crisis de su historia, al mostrarse incapaz de resolver la cascada de problemas que se detonó tras la apuesta electorera de Cameron que llevó al RU a abandonar la UE. El *brexit* polarizó a la población en dos grandes grupos, tal y como se hace en el populismo: están los que apoyan a las instituciones, al sistema y al multilateralismo, y los escépticos y nacionalistas.

III. LA CRISIS DEL REINO UNIDO EN LA ERA POS-BREXIT

1. Irlanda del Norte y Escocia

El Reino Unido está formado por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Por lo tanto, es importante mencionar que el *brexit* ganó con un 51.9 % en el Reino Unido como un todo, pero, en Escocia, ganó la permanencia con un 62 % al igual que en Irlanda del Norte, con un 55.8 %. Por lo tanto, tanto los escoceses como los norirlandeses están buscando la manera de poder regresar a la UE.

a) Escocia

Escocia quiere llevar acabo un *referéndum* de independencia, pero el Tribunal Supremo ha decidido que no puede convocar a un *referéndum* sin el consentimiento del Reino Unido y este ha dicho que no lo permitirá, razón por la que Nicola Sturgeon dimitió como primera ministra de Escocia y, en su lugar, asumió el poder Humza Yousaf (hijo de inmigrantes y, además, musulmán), proclamado como líder del Partido Nacional Escocés (SNP,

por sus siglas en inglés). Hay que recordar que, en el primer referéndum que se llevó a cabo en Escocia en septiembre de 2014, 55 % de los escoceses votaron por no independizarse del RU porque entonces eran parte de la UE. Ahora, el panorama es diferente, porque ya no están dentro del club comunitario y la crisis económica, política y social es cada vez más insostenible. Cabe hacer mención de que, dentro de la agenda política de Yousaf, está en primera línea la defensa de la independencia de Escocia.

b) Irlanda del Norte

El caso de Irlanda del Norte es diferente, porque el Acuerdo de Viernes Santo, celebrado entre Irlanda e Irlanda de Norte en 1998, fue un hito histórico que puso fin a treinta años de conflictos sangrientos entre los republicanos católicos y los unionistas protestantes. En este Acuerdo se estipuló que el poder en la isla sería bipartito y que, “en caso de que haya evidencias que confirmen un cambio en la opinión pública sobre su estatus constitucional, se podría convocar a un *referéndum* sobre la reunificación de las dos Irlandas”, por lo que el *brexit* podría causar el desmembramiento del RU en un futuro próximo.

Ahora bien, en el Acuerdo de Retirada del Reino Unido se negoció el Protocolo de Irlanda del Norte y ahí se establece que Irlanda del Norte está obligada a cumplir con el ordenamiento jurídico del Mercado Único de la UE y, por lo tanto, debe establecer controles para una serie de productos procedentes de los otros países que conforman el RU. Este Protocolo “evita una frontera física entre Irlanda e Irlanda del Norte, posibilitando así el buen funcionamiento de la economía de la isla en su totalidad y protegiendo el Acuerdo de Viernes Santo (Belfast) en todas sus dimensiones”, y, además, “preserva la integridad del Mercado Único de mercancías de la UE, junto con todas las garantías que ofrece en cuanto a la protección de los consumidores, la salud pública y la sanidad animal, y la lucha contra el fraude y el contrabando”.

Con el fin de evitar más conflictos en la isla, la UE propuso una reducción de hasta 80% en los controles aduaneros, sanitarios y fitosanitarios que impuso el Protocolo en un principio, lo cual fue bienvenido por Londres; sin embargo, el RU pretende también que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya no supervise el correcto funcionamiento del Mercado Interior en territorio norirlandés, ya que los euroescépticos no toleran un tribunal extranjero en territorio soberano británico. La UE manifestó al respecto que esto es inadmisibles, ya que se firmó un Acuerdo y, por lo tanto, debe cumplirse en todos y cada uno de sus términos.

Este Protocolo sigue siendo el problema más difícil de resolver, por lo que la UE y el RU llegaron a un acuerdo político en febrero de 2023 denominado Marco de Windsor. Por su parte, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo han adoptado tres reglamentos mediante un procedimiento acelerado con el fin de poner en práctica las soluciones acordadas conjuntamente en materia de salud pública y sanidad animal y vegetal, medicamentos, y determinados productos siderúrgicos.

2. La independencia de los países del Caribe de la Corona británica

El Imperio británico debe su riqueza a la explotación de sus colonias. Cuando el Imperio se empezó a desintegrar y las colonias más grandes se independizaron (Canadá, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda) de la Corona británica, se creó la Mancomunidad de Naciones el 11 de diciembre de 1931 con base en el Estatuto de Westminster (acta del Parlamento del Reino Unido) que estableció un estatus de igualdad legislativa entre los dominios autogobernados del Imperio británico y del Reino Unido.

La Mancomunidad de Naciones tiene 54 miembros: diecinueve de África, doce del Caribe, once del Pacífico, ocho de Asia, tres de Europa y uno de Norteamérica. El comercio y la cooperación abar-

can alrededor de 2,500 millones de personas. Estos países comparten un pasado y valores comunes como antiguas colonias británicas.

En el caso del Caribe, los países que rompieron lazos con la Corona británica son: Barbados, Trinidad y Tobago, Guyana y Surinam. Esto significa que estos países ya no tienen como jefe de Estado al rey Carlos III, pero siguen dentro de la Mancomunidad de Naciones. Es importante mencionar que de las ocho monarquías que todavía tienen como jefe de Estado al monarca son: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Granada, Jamaica, las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente. Los primeros seis países han manifestado su intención de convertirse en repúblicas para elegir a sus gobernantes libremente y desvincularse de la Corona británica. Los últimos dos países no han expresado opinión alguna, pero tal vez lo hagan en un futuro próximo, al ver el cambio político de los otros países caribeños. Este es otro reto al que se enfrenta el RU y que no tenía previsto, aunado a que los países han dicho que quieren convertirse en repúblicas y olvidarse de la Corona británica por lo menos de manera simbólica, ya que su relación está estrechamente vinculada con el esclavismo, la represión y las terribles condiciones de trabajo en las que vivían. Algunos países han solicitado incluso una indemnización por los abusos coloniales y los años de esclavitud por parte de la Corona británica. Otros piden justicia reparativa por las atrocidades cometidas. Por lo anterior, se queda en el aire la manera en la que el rey Carlos III y su premier tratarán de resolver esta situación que no deja de ser otra preocupación más en la agenda del RU.

3. El Reino Unido como tercer país, la inmigración y el *regrexit*

Hay que saber que, desde el primero de enero de 2021, el Reino Unido es un tercer país para la Unión Europea, porque después del *referéndum* del 23 de junio de 2016 y una vez que el *brexit* triunfó, el 29 de marzo de 2017 se presentó ante el presidente

el Consejo Europeo la solicitud de retirada de la UE, cuyo término era en principio de dos años. No obstante, debido a que se solicitaron dos prórrogas, el plazo se extendió más allá de 2019, es decir, hasta el 31 de enero de 2020, el *brex*it entró en vigor después de un período transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020. Así las cosas, desde el 1 de enero de 2021, el RU es un tercer país para la UE.

a) La inmigración

Otro problema al que se enfrenta Sunak es el de la migración indocumentada que llega al RU y resulta curioso que ese siga siendo un problema para los británicos, ya que ellos argumentaron que el problema de la migración se derivaba de su pertenencia a la UE. Ya han pasado dos años desde que el *brex*it entró en vigor y la inmigración al RU ha aumentado de manera considerable. Al respecto, Sunak propuso un proyecto de Ley de Migración Indocumentada el 7 de marzo de 2023 ante la Cámara de los Comunes y argumentó que el objetivo es “prevenir y disuadir la migración ilegal, y en particular la rutas inseguras e ilegales, al exigir la expulsión del Reino Unido de ciertas personas que ingresan o llegan al Reino Unido violando el control de inmigración”. Ese proyecto lo aprobó el Parlamento británico, pese a que el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) lo haya condenado en julio de 2023 al igual que diversas organizaciones no gubernamentales.

Esta ley propone la deportación inmediata de los migrantes a su país de origen o a Rwanda, considerado por el RU como un tercer país seguro. Para entender esto hay que saber que Boris Johnson firmó un acuerdo con Rwanda para mandar a todos los solicitantes de asilo que llegaran al RU de forma irregular. Este acuerdo está dotado de 120 millones de libras (aproximadamente 144 millones de euros). Mediante este acuerdo con el país africano, el 19 de marzo de 2023 la ministra del Interior británica, Suella Braverman (hija de inmigrantes), anunció “Hoy hemos firmado una adenda a la Asociación

de Migración y Desarrollo Económico, que ampliará la prestación de apoyo a las personas que sean reubicadas en Rwanda”. También señaló que: “El Reino Unido está invirtiendo en la capacidad de Rwanda para ofrecer mejores oportunidades para los migrantes y los rwandeses también.”

Sunak sigue endureciendo su política migratoria al igual que lo está haciendo Estados Unidos, incluso si esto viola la Convención de Refugiados de 1951 que establece que “los países deben brindar protección a los refugiados, así como asegurarles sus derechos y libertades”. Con esta ley el RU puede deportar de forma expedita a los migrantes y solicitantes de asilo sin que medie juicio alguno. Al respecto, tanto Sunak como Braverman aseguran que deben detener la inmigración. Lo que olvida Sunak es que ninguna ley ha detenido la inmigración; por el contrario, lo que se propicia con este tipo de leyes es el aumento del tráfico de personas y el incremento de riesgos para las personas que quieren solicitar asilo. Estas medidas van en contra del Derecho Internacional y de los derechos humanos. Así las cosas, el Canal de la Mancha recibió en 2022 más de 45,000 personas que llegaron a las costas británicas. Esta ley propiciará la esclavitud moderna, porque los contrabandistas, delincuentes y bandas del crimen organizado obtendrán más beneficios económicos y pondrán a las personas en grave riesgo al atentar contra su integridad física y mental. Cabe mencionar que el primer ministro también firmó con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, un acuerdo para aumentar la colaboración fronteriza. Este proyecto también fue criticado por Acnur, ya que es una forma de prohibir el asilo.

Al respecto, el Tribunal de Apelación del RU ha declarado ilegal enviar a Rwanda a los refugiados que solicitan asilo, ya que Ian Burnet, lord juez del Alto Tribunal de Londres, señaló que: “Las deficiencias del sistema de asilo en Rwanda son tales que existen razones fundadas para creer que existe un riesgo real de que las personas enviadas a ese país sean devueltas a sus países de origen, donde sufrieron persecución u otros tratos inhumanos,

cuando en realidad tienen una buena solicitud de asilo. En este sentido, Rwanda no es un tercer país seguro”, contrario a lo dicho por el premier y su ministra del Interior.

Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) evitó la deportación de solicitantes de asilo a Rwanda treinta minutos antes del despegue del avión el año pasado, ya que, al ser el RU miembro de la Convención Europea de Derechos Humanos, el TEDH tiene jurisdicción en el país, y, por ende, el RU está obligado a respetar sus decisiones. Hay que señalar que el TEDH no está relacionado con el TJUE, por lo que la UE nada tiene que ver.

b) El posible *regrexit* del Reino Unido a la Unión Europea

El RU llegó a un acuerdo con la UE con respecto al programa Horizon, debido a que los científicos y las universidades británicas se han quedado sin fondos para financiar sus investigaciones. Con este acuerdo, los científicos británicos podrán acceder al fondo de casi 100,000 millones de euros para investigación. Esto significa que el RU volverá a contribuir al presupuesto de la UE hasta 2027 con 3,000 millones de euros anuales a partir de enero de 2024. Pero hay que destacar que la secretaria de Ciencia británica, Michelle Donelan, manifestó: “La diferencia con este acuerdo es que realmente estamos obteniendo una buena relación calidad-precio, por ejemplo, no estamos pagando por los años en los que no estuvimos asociados” y declaró que: “Además, contamos con un mecanismo de devolución que nos permite obtener un reembolso en caso de que no obtengamos los mismos beneficios que aportamos”. Con estas declaraciones se aprecia nuevamente la ideología británica que ha permeado por años. Se vio en el discurso de Churchill de 1946, en el *referéndum* de 1975 con todas las negociaciones llevadas a cabo para que el RU obtuviera más derechos que obligaciones, en el *referéndum* de 2016 e incluso en el Acuerdo de Retirada. Con esta posición, el RU vuelve a poner en primera plana el aspecto económico y el círculo vicioso de su relación con la UE se renueva.

Algunos medios de comunicación han comentado que esto podría ser el comienzo de un *regrexit* a la UE; sin embargo, de ser así, Sunak deberá informar al pueblo británico sobre las ventajas y desventajas de regresar al club comunitario, porque no regresarían con la Europa “a la carta” que tenían. De volver, tendrían que adoptar el *acquis communautaire* que incluye todos los tratados, la legislación en vigor, las sentencias del TJUE, el euro, el Espacio Schengen, y se olvidarían del cheque británico entre otras reservas más. Como se dijo en alguna ocasión, el Mercado Interior de 500 millones de personas trae consigo derechos y obligaciones.

IV. CONSIDERACIONES FINALES

Las crisis de los *tories* parece que no tiene fin, porque la inflación, las huelgas del sistema de salud, las críticas al actual gobierno, la inmigración, la desvinculación de los países caribeños de la Corona británica, la posible independencia de Escocia, el Protocolo de Irlanda del Norte y el desabasto y la falta de empleados siguen ahí y empeoran día con día. Al parecer, con las condiciones actuales, el pueblo británico se está dando cuenta de que los problemas no veían de la UE; los problemas ya estaban en el país y, contrario a lo que les contaron antes del *referéndum* de 2016, estar en la UE les ayudaba a evitar un colapso económico y social como el que están viviendo. Es increíble que, en un período de seis años, el liderazgo de los *tories* haya pasado por cinco primeros ministros y estén peor que como estaban en 2016. Los efectos del *brexit* no van a parar; 47 años no se borran de la noche a la mañana y los motivos que tuvo el RU para abandonar la UE fueron falsos, ya que la inmigración al RU ha aumentado considerablemente, no se ha retomado el control como se le había prometido al electorado, y han perdido y están perdiendo más dinero del que realmente le aportaban a la UE. En este orden de ideas, se puede decir que su retirada fue en vano y lo peor de todo es que, si el RU decide regresar a la UE, tendrá que adoptar el *acquis*

communautaire como todos y cada uno de los países miembros y hacerlo sin reservas para estar en un plano de igualdad soberana con los demás Estados miembros de pleno derecho. En lo que se refiere al fin de las monarquías caribeñas, ahí lo simbólico es separar el mandato británico ligado a la esclavitud y a la represión y cambiarlo por países libres y soberanos que decidan su propio rumbo político y económico.

El partido conservador se enfrenta a un descrédito terrible por todas las promesas incumplidas en la campaña del *referéndum* del 23 de junio de 2016 y, más aún, por la inestabilidad económica y política que hoy caracteriza al RU. Esto progresivamente inclina a la opinión pública a manifestar el deseo de volver a la UE. Sin más que decir, el *brexit* fue un fracaso y un error que están pagando los británicos por no informarse, por creer en las mentiras y en la propaganda del UKIP. El *regrexit*, de ser posible, no será fácil, ya que el RU necesita más a la UE que la UE al RU.

La crisis de los tories continuará y en las elecciones de 2024 el electorado tendrá que informarse mejor para decidir si quiere que los tories sigan o votar al partido laborista que lleva más de diez años fuera del poder, hoy con Keir Starmer como líder del partido. Por lo pronto se postula como favorito y su victoria en las elecciones municipales de mayo de 2023 indica un cambio en las preferencias electorales.

El *brexit* ha sido un movimiento antisistema que encaja perfectamente en el actual movimiento internacional populista y nacionalista. En el caso del RU, el nacionalismo británico debilitó la confianza pública en las instituciones europeas y polarizó a la sociedad. Las noticias falsas propiciaron desconfianza, incertidumbre y miedo. Se puede decir

que, al menos desde hace más de dos décadas, los medios de comunicación, los partidos de ultraderecha y las noticias falsas han contribuido a que los nacionalismos crezcan en Europa, lo que conlleva un gran reto para las democracias liberales, ya que los nacionalismos populistas difunden el euroescepticismo y se enfilan en contra de las democracias liberales.

El argumento que estuvo en el corazón de la campaña de salida del RU estuvo plagado de mentiras, de una amenaza migratoria inexistente y de beneficios utópicos si abandonaban la UE. La desinformación generó una realidad virtual y modificó la percepción del electorado con el fin de movilizarlo, de desestabilizar al país y de amenazar por ende su proceso democrático. La idea de liberarse de la burocracia de Bruselas, del exceso de regulaciones y de los extranjeros permeó en la clase frustrada que se sintió identificada con los partidos populistas y nacionalistas que culpan al mundo globalizado de la inequidad social y económica. Por lo tanto, el voto *brexit* fue irracional basado en propaganda xenófoba y racista llevando al electorado a sentir una amenaza en contra de sus valores e identidad británica. Así las cosas, los partidarios del ultranacionalismo y del anhelo de retornar al Estado-Nación contribuyeron a despertar emociones y sentimientos nacionalistas en la población y esto representó una clara amenaza a la democracia. Hay que recordar que el populismo en su discurso es violento y al ofrecer soluciones rápidas llega pronto al sector más frustrado y resentido de la sociedad. No cabe duda de que el *brexit* atentó contra una de las democracias más antiguas, lo que demuestra que ningún país queda exento de este movimiento populista que ha tomado fuerza en los últimos veinte años en Europa.

REFERENCIAS

- El Acuerdo de Retirada entre la Unión Europea y el Reino Unido, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement_es
- Gutiérrez González, Alicia, *El brexit, la relación del Reino Unido con la Unión Europea*, México, Tirant lo Blanch/Universidad Anáhuac México, 2020.

III.

ESTUDIOS DE CASO: AMÉRICA LATINA

¿QUIÉN ES JAVIER MILEI?: LA DERECHIZACIÓN DE LA POLÍTICA ARGENTINA

Mariano Schuster¹

Ahora, al parecer, casi nadie habla del tema. Se lo menciona escasamente y el silencio dice demasiado. Cuando se pregunta por las celebraciones no son pocos quienes agachan la cabeza y se preguntan: “y en este contexto, ¿qué podríamos festejar?”. Las conmemoraciones, al parecer, serán austeras. Y no solo debido a la crisis económica, a la alta inflación –que ya supera el 100 % anual–, a la elevada pobreza y a la creciente desigualdad. El 10 de diciembre, cuando se cumplan los cuarenta años de democracia ininterrumpida en Argentina, un *outsider* que se define como “paleoliberal” y “anarcocapitalista” podría hacerse cargo de los destinos del país. Su nombre es Javier Milei. Resulte o no resulte elec-

to –algo que se sabrá antes de la publicación de este artículo–, Milei expresa un proceso que hace evidente los deslizamientos a la derecha que, en distintos sentidos y con diversos énfasis, vive la política argentina.

En los medios de comunicación, en la academia y en los círculos políticos, ya no se habla de otro tema. La posibilidad de que Javier Milei acceda a la primera magistratura lo domina todo. Las alarmas se encendieron tras las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), un tipo de elección que, en Argentina, sirve, en teoría, para que cada fuerza elija sus candidatos, pero que, en la práctica, al votar todo el padrón electoral, constituye una primera vuelta anticipada, que crea el clima para la verdadera elección que, en este caso, se llevará a cabo el 22 de octubre. En la elección primaria, Javier Milei, el candidato libertario de extrema derecha, obtuvo el primer lugar, con 30 % de los votos; la oposición liberal-conservadora quedó en segundo puesto, con menos votos de los esperados (28 %), y el peronismo, por primera vez

¹ Es editor en la publicación latinoamericana de ciencias sociales *Revista Nueva Sociedad*. Es maestrando en Sociología de la Cultura por la Escuela (Idaes-Unsam). Forma parte del Grupo de Estudios e Investigación en Edición y Política del Centro de Estudios y Políticas Públicas del Libro, con sede en la Universidad Nacional de San Martín. Fue jefe de redacción de las publicaciones socialistas argentinas *La Vanguardia* y *Nueva Revista Socialista*. Es colaborador en diversos medios de comunicación de su país y del extranjero.

en la historia, en tercer lugar, con 27% de los votos. Hoy, Milei es el candidato mejor posicionado para la elección que se celebrará el 22 de octubre. Pero, de triunfar en ese turno, deberá hacerlo por un amplio porcentaje. De lo contrario, irá a una segunda vuelta electoral. Es decir, a un balotaje que definirá finalmente quien se colocará la banda presidencial el 10 de diciembre.

Los otros dos candidatos que se medirán en la contienda con Milei tampoco se ubican en la izquierda del espectro político. Ni siquiera el kirchnerismo, cuya discursividad estuvo asociada, en buena medida, al proceso regional de la “marea rosa” lleva un candidato consustanciado con esas ideas. El hombre elegido, en esta oportunidad, es Sergio Massa, que funge como un candidato de unidad entre las tendencias más tradicionales del peronismo y las más progresistas del kirchnerismo. Massa es, sobre todo, un político pragmático, con ideas adaptables, a quienes los sectores más progresistas del kirchnerismo nunca vieron con buenos ojos –al punto de que se presentó contra ellos tras armar su propio partido hace diez años–. Sin duda, en esta elección, será él quien cosechará votos progresistas, pero muchos de quienes pongan su papeleta en la urna desde esa identidad no lo harán con un gran entusiasmo. Más bien, intentarán evitar el mal mayor. O dos...

Si Javier Milei ha encendido las alarmas –no siempre claras, y no siempre con análisis situados–, Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio, la fuerza de la derecha *mainstream* no está lejos de algunas de sus ideas (e incluso es más radical en otras). Aunque es una figura política de larga data –comenzó su actividad política en la izquierda peronista de la década de 1970, para luego pasar a posiciones de centroderecha, convertirse en ministra del gobierno de Fernando de la Rúa, y finalmente recalar en el “ala dura” de Juntos por el Cambio, la fuerza que creó Mauricio Macri–, sus posiciones se han radicalizado cada vez más. Exministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri (2015–2019), Bullrich es ahora la candidata de una coalición que, si bien pertenece

a la derecha *mainstream*, fusiona discursos liberales con posiciones más extremas. Como parte del sector de los “halcones” de esa fuerza política, Bullrich ha hecho campaña prometiendo “mano dura”, utilizando eslóganes como “ley y orden” y planteando la necesidad de “acabar para siempre con el kirchnerismo”. Una de sus publicidades propone, por ejemplo, crear una cárcel de máxima seguridad a la que promete llamar “Cristina Fernández de Kirchner”.

Aunque este artículo se publicará luego de las elecciones argentinas, cuando sea claro quién ocupará la Presidencia del país –las elecciones generales serán el 22 de octubre y, de haber balotaje, se realizará el 19 de noviembre–, está claro que la presencia de Milei en una posible segunda ronda es mucho más que probable. En tanto resulta el personaje más disonante de la elección y los aspectos que expresa seguirán ahí incluso si no consigue triunfar en el proceso electoral, resulta necesario analizar quién es, qué busca y qué pretende. ¿Qué representa su vertiginoso ascenso político en este año en el que Argentina celebra el cuadragésimo aniversario de su democracia? ¿A qué sectores moviliza y por qué se ha convertido en una figura de primer orden? Las respuestas no son sencillas. Intentaremos dar algunas pistas.

DE *OUTSIDER* A POLÍTICO “ANTICASTA”

Hacia 2016, Javier Milei era, todavía, un personaje poco conocido. Hasta ese momento, el economista libertario y profesor de la Universidad de Buenos Aires nacido en 1970 solo había participado en algunos programas de televisión en los que expuso sus hipótesis sobre los problemas de la economía argentina. Sin embargo, el mismo año en el que Trump consiguió la Presidencia de Estados Unidos, su presencia comenzó a hacerse cada vez más frecuente en los debates económicos y políticos que proponían diversos medios. Su figura era disruptiva y las mediciones de audiencia mandaban:

un hombre de pelo desenredado –llegó a decir que a él lo peinaba “la mano invisible del mercado”–, que despotricaba contra la “casta política”, vituperaba a la “economía keynesiana”, y decía ser un paladín de la libertad –a la que entendía como la eliminación de las trabas y los obstáculos económicos– era claramente codiciado por una serie de medios alineados en la batalla “antikirchnerista”. En sus ruidosas intervenciones, Milei aseguraba que el kirchnerismo era “comunista”, afirmaba que el gobierno de Macri era “socialdemócrata”, sostenía que los impuestos eran un “robo” y criticaba la intervención del Estado en todos los terrenos de la vida económica. El hecho de que un economista se refiriera en la televisión a autores como Keynes era ya una novedad. Y que discutiera política económica con argumentos de los economistas de la escuela austriaca, como Hayek y Von Mises, lo era más aún. En diversas ocasiones, Milei afirmó que la política argentina estaba infectada de keynesianismo y esgrimió en su contra las posiciones del economista libertario estadounidense Murray Rothbard, al que sigue de manera fervorosa. Sus acaloradas intervenciones televisivas –Milei solía gritar de forma desaforada– no solo incluían críticas a la idea de justicia social y a la distribución del ingreso –a las que también calificaba de robos– o a la política tradicional –a la que tachaba de “casta parasitaria”–, sino que también se combinaban con sus comentarios sobre sus prácticas de sexo tántrico, y, tal como lo ha definido Pablo Stefanoni, con su “batalla cultural antioletoquista”. Evidentemente, Milei tenía “pasta” para los medios.

El perfil mediático y las posiciones económicas y políticas de Milei resultaron cautivantes para un sector juvenil –conformado mayoritariamente por postadolescentes– que no se sentían interpelados por la prédica de la izquierda o del kirchnerismo. Jóvenes que, a diferencia de aquellos que habían sido opositores al neoliberalismo y habían visto en el kirchnerismo el cumplimiento de algunos de sus deseos –sobre todo en materia de derechos humanos, ampliación de políticas sociales y reconocimiento de derechos asociados al género y a la diversidad sexual–, se rebelaban, como afirmó Pablo

Stefanoni, “desde la derecha”². A su vez, el atractivo de Milei era, para esa cantera juvenil (compuesta mayoritariamente por varones), muy superior a lo que podían ofrecer buena parte de los políticos de la derecha tradicional representada por el macrismo: Milei no tenía formas encorsetadas, se vestía con camperas de cuero, hacía gala de conocimientos económicos, denunciaba la politiquería, y cifraba los males del país no en el desarrollo del peronismo (como lo hacía y lo hace la derecha tradicional), sino en dos procesos anteriores. Por un lado, la llegada al poder del radical Hipólito Yrigoyen en 1918 (al que acusa de ser el primer populista, antes que Perón) y, por otro, el de la creación del Banco Central en 1935 (al que en diversas oportunidades prometió dinamitar). Su desprecio por el peronismo parecía provenir, más que de las clásicas argumentaciones de la derecha conservadora clásica, del hecho mismo de que Perón hubiese exacerbado el “populismo” (con el que se identificaba a Yrigoyen) y el papel del Banco Central.

Con su prédica anarcocapitalista, Milei no tardó en convertirse en una estrella para ese grupo de jóvenes que, sin sentirse interpelados por el kirchnerismo o por la izquierda, le asignaron el papel de “gurú económico”, pero también el de referente político. Sus charlas atrajeron a cada vez más espectadores y, durante ese período, comenzó a desarrollar su propio programa de radio. En la Feria del Libro de Buenos Aires, las diversas presentaciones de sus libros concitaron una atención mayúscula, al punto de ser aquellas con mayor cantidad de público. Tal como lo ha analizado el sociólogo Ezequiel Saferstein³, las presentaciones de los libros de Milei se convirtieron en parte del paisaje de las “batallas culturales” de la nueva derecha radical. A su llegada a la Feria del Libro, cientos de jóvenes lo esperaban cantando “No me importa el kirchnerista, el

2 Pablo Stefanoni, ¿La rebeldía se volvió de derecha?, Buenos Aires, Siglo XXI, 2022.

3 Ezequiel Saferstein, “La ‘batalla cultural’ también se juega en los libros”, *Le Monde Diplomatique* (Edición Cono Sur), núm. 276, junio de 2022.

macrista y radical, queda claro en Argentina: comunismo o libertad”. En esas presentaciones, su público no era solo el de sus fanáticos directos. Se combinaba también con el de otras expresiones derechistas con las que Milei desarrolla un proceso de fusión. En ese marco, las ideas de otros jóvenes, como Agustín Laje o Nicolás Márquez, cuyos libros antiprogresistas, antifeministas y antiizquierdistas se han convertido en *bestsellers*, maridan bien con el economicismo libertario de Milei.

LA “BATALLA CULTURAL”

El perfil mediático y público de Javier Milei no hacía suponer, necesariamente, un “pasaje a la política”. El ahora candidato presidencial hacía gala, de hecho, de un marcado tono antipolítico, con el que criticaba al Estado y a “la casta”, y hacia un llamado, casi de manera permanente, a destruir el Banco Central, a acabar con la “basura keynesiana” y a liberar las fuerzas del mercado. En 2021, consciente de su base de apoyo, Milei dio el salto. En su primer elección, en la que se presentó como candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, obtuvo el para nada módico 17 % de los votos. Su figura empezaba a mostrar proyección política.

El pasaje de Milei al campo específicamente político supuso la necesidad de adoptar un repertorio más amplio de temas. Su eje en la economía y en la crítica de la casta política derivaban de una concepción liberal-libertaria, según la cual la idea misma de libertad depende de la eliminación de las trabas y de los obstáculos al libre desarrollo económico de los individuos. Murray Rothbard, el economista libertario estadounidense cuya prédica Milei ha seguido a rajatabla, no solo pregonaba esas ideas: sostenía, al mismo tiempo, que, para desarrollar el anarcocapitalismo, sería necesario trabajar desde el “populismo de derecha”. La hipótesis de Rothbard, centrada en Estados Unidos, consistía en que los libertarios no debían constituir una fuerza política marginal, sino que, por el contrario, debían desarrollar una política de alianzas y de “fusiones” con otras derechas. En ese espectro se destacaban, como afirma Stefanoni,

las “conservadoras y reaccionarias”, en tanto ellas “les permitirían ‘llegar al pueblo’”⁴.

Luego de crear el Partido Libertario, Milei apostó claramente por esa estrategia. Así, acabó conformando la coalición llamada La Libertad Avanza, que incluye a fuerzas como el Partido Demócrata, el Partido Libertario, Fuerza Republicana, la Unión Celeste y Blanco, el Partido Fe y el Partido Renovador Federal. En sus actos de campaña, Milei comenzó a utilizar una estrategia descontracturada: llegaba con su pelo al viento, al ritmo de música de bandas de rock clásicas de la Argentina, para presentarse ante su público con el apodo de “el León”. El apodo operaba y opera en más de un sentido. Por un lado, remite a la canción *Panic Show* de la banda de rock *La Renga*, que Milei ha utilizado permanentemente en sus actos para autoadjudicarse el papel del “león” que “se come a la casta política”. Por otro lado, remite a una idea fundamental de su universo ideológico: la que se vincula con una crítica a la militancia política kirchnerista, a la que identifica como parte de los “corderos” que siguen a su jefa política –Cristina Kirchner–. Milei ha declarado en más de una oportunidad que no ha venido “a guiar corderos, sino a despertar leones”. En ese sentido, su prédica ha conectado fuertemente con grupos de activistas juveniles que, sobre todo en las redes sociales, han decidido actuar como “leones” y, en definitiva, a hacerse cargo de la “incorrección política” de su movimiento y espetársela a sus contrincantes y, sobre todo, a lo que denominan “el progresismo”.

La batalla antiestatal es uno de los ejes claves del ascenso de Milei. “Si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia, porque la mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente y, sobre todas las cosas, la mafia compite”, sostuvo en una entrevista de 2020, poco antes de lanzarse a la política. Esa es una posición que se consustancia con sus ideas sobre los impuestos, a

4 Pablo Stefanoni, “El paleolibertario que agita la política argentina”, en *Revista Nueva Sociedad*, marzo de 2023.

los que considera “un robo”. En esa misma sintonía, Milei apunta su posición antiestatista en un marco mucho más directo que el de otras derechas. Y se anima, por ejemplo, a plantear la posibilidad de una privatización de las calles. “Hoy las calles tranquilamente podrían ser privadas. Acaso cuando pasás por una autopista, ¿no tenés un lector? Entonces tranquilamente podrías instrumentar un sistema de lectura donde las calles son privadas y cada uno se encarga de su calle. Eso te genera ingresos. El GPS te podría decir: “usted va a tomar este camino, le va a costar tanto”. Su idea, tal como la ha expresado en más de una oportunidad, es que las baldosas “escupen socialismo”.

Pese a que se proclama como un “luchador por la libertad”, su concepción “anarcocapitalista” de la misma es, por lo menos, dudosa y contradictoria. Por un lado, se ha mostrado partidario de la desregulación del mercado de armas, a la vez que ha llegado a posicionarse a favor de la venta de órganos, esgrimiendo la libertad de los ciudadanos de disponer de su propio cuerpo. Pero no ha tenido la misma posición, por ejemplo, en relación con el aborto, al que se ha opuesto al declararse “provida”. De hecho, la concepción libertaria de Milei, al igual que otras ideas ultraliberales, no es una extensión de la democracia moderna, sino una forma de discusión con ella. Como ha apuntado Stefanoni, “es un dilema conocido del ultraliberalismo: entre una democracia ‘socialista’ y una dictadura liberal, sería mejor la segunda. Por eso, en el pasado, varios ‘liberales’ apoyaron la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Pero en el caso de Milei no se trata solo de cinismo o doble rasero. En sus planteos conviven una tensión entre su ‘anarquismo’ y su ‘derechismo’ y un rechazo más o menos explícito a la democracia, asociada a los odiados políticos de la ‘casta’. Milei propone privatizar el conjunto de la vida social, hasta ‘las calles’, que al ser públicas ‘escupen socialismo’, o las cárceles. Como detesta la política profesional, sorteando cada mes su sueldo de diputado entre miles de inscriptos”⁵.

Las posiciones anarcocapitalistas no son las únicas con las que Milei libra la batalla contra lo que denomina “la casta” y, sobre todo, contra el progresismo. En su búsqueda de discursos que le permitan completar los apartados “no económicos” de su prédica, Milei ha recurrido a numerosas ideas de las “derechas alternativas”. En este sentido, su prédica económica se ha combinado con posiciones críticas respecto del cambio climático –al que considera una farsa– y a su condena del Foro de Sao Paulo, al que asocia con una red de progresistas e izquierdistas que pretenden imponer el socialismo en la región. Por supuesto, entre algunos de sus seguidores existe un acentuado antifeminismo y una defensa de los valores de la “familia tradicional”. A pesar de que este tipo de discurso no estaba en el ADN de Milei, el proceso de fusionismo entre el anarcocapitalismo y componentes de las derechas nacional-populistas y nacional-conservadoras ha provocado un deslizamiento de sectores con esas posiciones hacia la cantera de votantes de Milei. El feminismo es, de hecho, según algunas derechas alternativas –aunque también según algunas más tradicionales– parte de una “agenda ideológica de género” que emergió, sobre todo, como crítica a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada en 2020. Ese proceso de fusionismo de derechas, tal como lo ha denominado el politólogo Sergio Morresi⁶, encuentra también anclaje en la que es hoy la candidata a vicepresidenta de Milei. Victoria Villarruel no proviene del mundo “anarcocapitalista” de Milei, sino de un espacio militante en defensa de lo que denomina la “memoria completa”, que considera que las políticas de derechos humanos –sobre todo las que desarrolló el kirchnerismo y con las que se reabrieron los juicios a los militares responsables de la desaparición de personas durante la última dictadura militar– reivindican solo a los muertos por el terrorismo de Estado, pero no a los militares asesinados por “la guerrilla”. Villarruel –que proviene de una familia de militares– ha tenido rela-

⁵ Loc. cit.

⁶ Sergio Morresi, “Un museo de grandes novedades: antecedentes y novedades en el ascenso de Milei”, en *Le Monde Diplomatique* (Edición Cono Sur), núm. 291, septiembre de 2023.

ción directa con algunos de los líderes de la última dictadura –llegó a visitar a Jorge Rafael Videla en la cárcel– y podría quedar, en un posible gobierno de Milei, al frente de la cartera de Seguridad o de la de Defensa. Este proceso muestra, a las claras, las contradicciones de una fuerza nueva como la de Milei. Si la prédica del candidato presidencial ha sido, históricamente, “antiestatal” –incluso en el terreno securitario, donde ha tenido posiciones favorables al libre uso de armamento por parte de la población civil–, la incorporación en su armado político de exponentes de “otras derechas” de corte conservador lo han conducido a un esquema nuevo. Rodeado de personajes como Villarruel no sería impensable que su antiestatismo se circunscribiera a algunas áreas de la economía, pero que no alcanzara al aparato represivo. De hecho, durante el primer debate presidencial, Milei hizo evidente esa posición: su antiestatismo quedó de lado cuando afirmó que otorgaría más dinero a las Fuerzas Armadas. Además, realizó declaraciones negacionistas –al decir que la dictadura militar argentina fue producto de una “guerra contra la subversión” y discutir el número de desaparecidos (30,000)–, en línea con los planteamientos de su compañera de fórmula. En rigor, estas posiciones, que no estaban en los planteos iniciales de Milei, son una deriva asociada con su alianza con sectores de la derecha conservadora y con sus bases de apoyo en esos sectores. De hecho, Rothbard, el ideólogo libertario que venera Milei, no consideraba, bajo concepto alguno, ni el apoyo a guerras ni a fuerzas militares, y no por considerar que debían asociarse al Estado, sino porque apoyaba la idea de las milicias constituidas por “individuos libres”. El giro de Milei hacia posiciones de la extrema derecha conservadora evidencia también el abandono de algunos de sus postulados libertarios.

PROYECCIÓN Y ANALOGÍAS

Las elecciones primarias evidenciaron un proceso inédito en Argentina. Hasta ese momento, nunca antes la derecha dura había obtenido tantos votos. De hecho, entre Milei y Bullrich, sumaron casi la

mitad del electorado. Mientras que Bullrich capitalizó la crisis de seguridad, Milei hizo lo propio con la crisis económica. El gobierno de Alberto Fernández, que heredó una dura deuda con el Fondo Monetario Internacional que contrajo el gobierno de Mauricio Macri, no maniobró bien. Hoy, la inflación galopante carcome los bolsillos de los argentinos, y las propuestas económicas de Milei, aun cuando para muchos puedan resultar absurdas en términos técnicos, tienen un público. Si bien el candidato libertario comenzó apostando por un discurso en favor de la dolarización y se remitió al político al que considera el mejor presidente de la historia argentina, el peronista neoliberal Carlos Menem (1989-1999), que llevó el peso a una convertibilidad con el dólar, ya ha matizado esa propuesta.

La elección primaria evidenció, tal como planteamos con Pablo Stefanoni⁷, una suerte de “retorno de lo reprimido” de la crisis de 2001, un momento de inflexión en la historia política argentina. En aquellas jornadas, que acabaron con saqueos, protestas, y el presidente De la Rúa renunciando y huyendo en helicóptero desde los techos de la Casa Rosada, acabaron imponiéndose los discursos progresistas –que se harían evidentes con la llegada de Néstor Kirchner al poder unos años más tarde, quien, con el aparato del peronismo, desarrollaría la versión argentina de la “marea rosa”–. Pero en 2001 todavía estaban presentes, y generaban no pocas adhesiones, los discursos ultraliberales. En 2003, Carlos Menem planteaba que la solución a los problemas económicos argentinos –y, sobre todo, al de la sombra permanente de la inflación– no pasaba por hacer del peso una “moneda fuerte”, sino por la dolarización de la economía. Paradójicamente, Patricia Bullrich, la ministra más impopular y criticada del gobierno de De la Rúa –que debió renunciar en 2001– ha renacido ahora con un discurso duro, aunque no logró –al menos hasta ahora– superar

⁷ Mariano Schuster y Pablo Stefanoni, “La derecha dura cautiva al electorado argentino”, en *Revista Nueva Sociedad*, agosto de 2023.

en términos de posibilidades electorales a Javier Milei. Su crítica a “la casta” ha conectado con un estado de frustración social permanente, y ha sido él quien ha recuperado el cántico de la crisis de 2001: “Que se vayan todos... que no quede ni uno solo”. Esas palabras, que no se escuchaban desde hace veinte años, fueron estruendosas en su cierre de campaña previo a las primarias.

En este marco, el proyecto libertario de Milei ha conectado con una dimensión insoslayable, pero que ha pasado desapercibida para el universo progresista. Se trata del hecho de que la idea de “libertad” que esboza Milei adquiere sentido en un universo popular y de capas medias bajas y en riesgo en el que, como hemos escrito precedentemente, “la demanda de servicios públicos convive con formas de antiestatismo bastante radicales, asociadas a la economía moral del ‘emprendedurismo’ informal”. Los subsidios destinados a los sectores más empobrecidos, a los que se suma la llamada “economía popular”, tienen un buen funcionamiento para proteger a quienes más sufren en tiempos críticos. Sin embargo, no construyen expectativas de futuro ni horizontes deseables. Es la lógica del “esfuerzo individual” la que los reemplaza. Como lo han demostrado una serie de trabajos, entre los que destacan los de la socióloga Melina Vázquez, Milei ha recibido apoyos por parte de aquellos sectores a los que, desde el progresismo y la izquierda, se considera “precarizados”, pero cuya vocación no es, como podía suceder en el pasado, la de integrarse en un mercado de la economía formal, sino la de un ascenso social por medio de la autonomía individual⁸. Pablo Semán y Nicolás Welschinger, quienes también han trabajado sobre el fenómeno en clave sociológica, han apuntado en más de una ocasión que el “antiestatismo” de parte de los sectores populares que han votado a Milei es, en buena medida, un producto del “estatismo” sin resultados de las políticas

progresistas del kirchnerismo⁹. La idea de que la economía debe ser un “asunto personal” y no del Estado se refiere a lo que Semán ha denominado como la ideología del “mejorismo”. Ante la idea, expresada en la pandemia, de un Estado que “cuida”, buena parte de los sectores populares observan un Estado que no los protege y al que ya no le reclaman esa protección. Quieren, en cualquier caso, protegerse a sí mismos mediante el “progreso individual”. Esta narrativa, fundada más en las carencias políticas reales del progresismo que en una suerte de “ideología neoliberal” –como tantas veces han afirmado desde las usinas gubernamentales– sedimenta a una sociedad que el progresismo no parece ver. Entrampado en lógicas del Estado de bienestar y de los conceptos ligados a la sociología del *welfare*, el progresismo le habla cada vez más a menos sectores. El hecho de que Milei haya logrado resultados sorprendentemente buenos en barrios populares, e incluso en bastiones electorales peronistas como el de La Matanza y en provincias empobrecidas del interior del país, muestra a las claras que la retórica del “Estado que cuida” no la asume buena parte de la población a la que pretendidamente se dirige ese discurso. Milei, para ser muy claros, quedó primero en dieciséis de las veinticuatro provincias y en dos directamente arrasó en las elecciones primarias. Una de esas dos es Salta, en el norte andino argentino.

Evidentemente, Milei ha funcionado en el escenario particular de la Argentina al operar como el exponente de una “rebelión”. Tal como hemos escrito recientemente, “muchos de sus votantes no quieren abolir el Estado, comprar o vender órganos o niños, dinamitar el Banco Central ni acabar con la educación o la salud públicas. Pero, como se vio en las encuestas callejeras del canal sensacionalista *Crónica TV*, decir ‘Milei’, en boca de jóvenes y trabajadores precarizados, al igual que trabajadores de plataformas, terminó siendo una especie

⁸ Melina Vázquez, “Los rapped de Milei”, en *Revista Anfibia*, 10 de julio de 2023.

⁹ Pablo Semán y Nicolás Welschinger, “El ‘populismo de la libertad’ como experiencia”, en *Le Monde Diplomatique* (Edición Cono Sur), núm. 276, junio de 2022.

de ‘significante vacío’ de un momento de policrisis nacional”. Tal como lo analizó Melina Vázquez, hay una amplia cartera de trabajadores precarizados, entre ellos los que trabajan por cuenta propia vía aplicaciones digitales, que han encontrado en Milei a un intérprete de una ideología según la cual el esfuerzo individual permite sortear las condiciones de pobreza.

Contra lo que cree una parte del progresismo, Milei no fue un producto del *establishment* económico ni de los medios: los empresarios se interesaron en él cuando empezó a crecer –y siempre fue visto como folclórico e imprevisible– y los medios lo convocan porque les da *rating*, es decir, usufructúan más de su popularidad de lo que contribuyeron a crearla, aunque obviamente las horas de pantalla terminaron por aumentar su *performance*.

Milei –pero también, aunque con otros acentos, Patricia Bullrich– encarna un discurso refundacional fuertemente antiprogresista, algo similar, pero ideológicamente invertido al de la “marea rosa” de los años 2000. Es un arma en manos de los votantes para dinamitar el “sistema”, sea lo que esto signifique para cada uno.

En buena medida, Milei se inserta, aunque con diferencias, en un giro a la derecha de carácter global. Y es que las diferencias de Milei con otros líderes de las nuevas derechas radicales no borran sus puntos de contacto. Esos aspectos compartidos se derivan, en primer lugar, de los procesos de fusión ideológica que se producen en el marco de esas nuevas derechas. Si bien el eje discursivo de Milei siempre se ha centrado en aspectos económicos, no ha sido ajeno a las llamadas “batallas culturales”. En este sentido, el candidato libertario se ha declarado admirador de Bolsonaro y de Trump, y ha sido firmante de la Carta de Madrid que impulsó el partido ultraderechista Vox en España. Aun así, esta nunca ha sido la base de su apelación política. En este sentido, a pesar de que ha sido comparado con el presidente Nayib Bukele y con el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, Milei tiene, en realidad, similitudes “derivadas”, pero no

originarias. A diferencia de Bukele y de Bolsonaro, Milei no proviene de la política clásica –más bien la ha considerado execrable, al definirla como “la casta”– ni ha basado su popularidad ni su base de sustentación en el apoyo de militares –algo que solo ha conseguido por medio de su ahora candidata a vicepresidenta– ni en espacios religiosos conservadores –aunque ha tenido numerosos pastores evangélicos de corte conservador en listas provinciales, diversos estudios sociológicos han demostrado que no ha habido un voto evangélico masivo hacia su candidatura que permita hablar de un “voto evangélico” como uno diferenciado del de otros actores sociales–. Como ha explicado Pablo Stefanoni, “a diferencia de Trump, que tenía el apoyo de un Partido Republicano transformado desde sus bases con anterioridad al triunfo del magnate, o de Bolsonaro, que cubrió su falta de partido con el apoyo de evangélicos conservadores, agroindustriales y militares, el apoyo a Milei es aluvional”¹⁰.

Sin embargo, las diferencias no pueden conducir a una infravaloración contextual. Claramente, Milei se inserta en un clima regional y global donde derechas tradicionales y no tradicionales se fusionan y combinan discursos que, anteriormente, podían verse como contradictorios o, incluso, como antagónicos.

CONCLUSIONES

A diferencia de lo que ha sucedido en otros países con el crecimiento de derechas radicales, en Argentina, la posibilidad de desarrollar un “cordón democrático” es compleja. Hay quienes creen que Sergio Massa y Patricia Bullrich deberían evitar, por formar parte de partidos tradicionales, la elección de Milei. Pero lo cierto es que Bullrich tiene, en muchas áreas, posiciones tan duras como las del candidato libertario. Es más: sostiene esas posiciones con un aparato mejor ubicado, más sólido y con más resortes institucionales. Si bien Bullrich constituye,

¹⁰ Pablo Stefanoni, *El aluvión Milei y las elecciones argentinas*, Análisis Carolina / Fundación Carolina, 11/2023.

como lo ha mostrado el politólogo Martín Vicente¹¹, un personaje complejo –combina discursos de derecha dura con posiciones más liberales, por ejemplo, en cuestiones de género y diversidad, aunque también la apoyan sectores que se oponen a esas políticas–, sus posiciones cada vez más radicales han hecho que, en su contradicción principal –el kirchnerismo– muchas de sus ideas mariden con las de Milei. Aunque ahora precisa despegarse claramente de Milei, su discurso político linda con el del libertario en numerosas áreas.

Argentina vive, en definitiva, un proceso de derechización. Milei opera como el nombre fundamental de ese proceso, pero, incluso en el caso de perder en la contienda electoral, sus posiciones y, sobre todo, las de muchos que lo apoyan seguirán ahí. Hoy todo parece indicar que sigue bien posicionado en las encuestas y que tiene posibilidades reales de llegar a la Presidencia de Argentina. Cuando este artículo se publique, ya sabremos quién es el presidente y todas las dudas sobre si Milei es capaz de ganar en primera vuelta o si deberá ir a un segundo turno electoral estarán despejadas. En el aniversario número cuarenta de la democracia argentina, el hecho de que un hombre de la derecha dura tenga la posibilidad de llegar a la Presidencia solo indica una cosa: que para muchos es poco lo que hay para celebrar.

¹¹ Martín Vicente, “La ‘piba’ de la derecha argentina”, en *Revista Nueva Sociedad*, marzo de 2021.

¿POR QUÉ LOS BRASILEÑOS ELIGIERON VOTAR POR LA ULTRADERECHA?: EL FENÓMENO BOLSONARO¹

**Camila Rocha, Esther Solano
y Jonas Medeiros²**

Más allá del pragmatismo electoral, el voto a favor de Jair Bolsonaro en las elecciones de 2018 fue una señal de adhesión a su discurso radical de una parte significativa del electorado. A partir de una investigación cualitativa realizada en la ciudad de São Paulo en el segundo semestre de 2017, un año antes de las elecciones presidenciales, se pudo verificar cuáles eran las principales ideas presentes en los discursos de partidarios convencidos del valor del entonces candidato a la Presidencia.

Se realizaron entrevistas en profundidad con siete entrevistados residentes en la ciudad de São

Paulo, seleccionados con la intención de cubrir un amplio espectro en términos de posición económica, empleo, edad y género. Se puede considerar a tales electores como partidarios convencidos del candidato militar, teniendo en cuenta que, en ese entonces, según la encuesta del Instituto Datafolha realizada en septiembre de 2017, la intención de voto de Bolsonaro oscilaba entre un 15 % y un 19 % según distintos escenarios posibles, aunque reunía el 33 % de los votos en un posible segundo escenario contra Lula, que vencería con el 47 % de la preferencia. Se puede decir incluso que el mismo porcentaje que lo apoyaba de forma tan convencida entonces permaneció inalterado hasta el primer semestre de 2021.

A continuación, se sistematizan en tópicos los elementos presentes en sus respuestas que reproducen diversos elementos presentes en los discursos de Jair Bolsonaro y conforman las principales ideas que guiaron al bolsonarismo y que cambiaron poco después de su elección.

¹ El contenido de este capítulo es parte del capítulo 4 del libro de Camila Rocha, Esther Solano y Jonas Medeiros, *The Bolsonaro Paradox. The Public Sphere and Right-Wing Counterpublicity in Contemporary Brazil*, Springer/FES Brasil, Cham, 2021.

² Camila Rocha es doctora en Ciencia Política e investigadora del Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap); Esther Solano es doctora en Ciencias Sociales y profesora de la Universidad Federal de São Paulo, y Jonas Medeiros es doctor en Educación e investigador del Cebrap.

Table 4.1 Entrevistados en Estudio 1

Código	Género	Edad	Ocupación	Otras características
Entrevistado W	Hombre	24	Estudiante universitario	Nacido en Brasilândia
Entrevistado D	Hombre	37	Oficial de la Policía Militar del Estado de Sao Paulo	Nacido en Grajaú
Hombre entrevistado E	Hombre	32	Propietario de un bufete de abogados	Miembro de una familia económicamente poderosa, nacido en Jundiaí
Entrevistada M	Mujer	35	Manicurista	Nacida en Jaraguá
Mujer entrevistada E	Mujer	50	Mujer de negocios	Nacida en Jardim Paulista
Entrevistado J	Hombre	19	Estudiante	Autoidentificado como “gay de derecha”, nacido en Capão Redondo
Entrevistada L	Mujer	45	Psicóloga	Nacida en Vila Mariana
Entrevistado A	Hombre	27	Conductor de Uber	Nacido en Itaquera

SEGURIDAD PÚBLICA Y MILITARIZACIÓN DE LA VIDA

Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, durante 2017, la ciudad de São Paulo registró un promedio de 530 robos al día. El número de asaltos en la capital ascendió a un total de más de 150,000. Aunque el estado de São Paulo tenía una tasa de homicidios inferior a la de otros estados del país, durante el mes de noviembre de 2017 se registraron 295 víctimas. También hubo 1,051 violaciones. Estos datos escandalosos se tradujeron en que la gente sintiera un miedo permanente y una inseguridad constante:

¡Te pueden matar en cualquier momento! Este país es horrible. Tienes una hija, sale por la noche y la pueden violar. Robos, asaltos, en todas partes. No se puede vivir así, no se puede. Tengo miedo por mí, por mis hijos. Nadie merece vivir siempre con miedo. Queremos soluciones. (Entrevistada E)

Para lidiar con estos sentimientos, los entrevistados con frecuencia organizaron sus palabras en un discurso que oponía lo que consideraban como el buen ciudadano contra la figura del delincuente, leído como un enemigo que necesita castigo. Durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), muy poco se hizo para mejorar los índices de seguridad pública o para crear contranarrativas que combatieran tal dualismo, operacionalizado por una parte significativa de la población y conectado históricamente con las ideas de la impunidad y la militarización de la vida como respuesta a la inseguridad.

Otro tema recurrente en las entrevistas fue la victimización de los delincuentes. Era constante la idea de que “el ladrón se convirtió en víctima”. Así, en una alteración del orden social, la víctima de un delito estaría completamente abandonada por el Estado, y el buen ciudadano quedaría siempre desprotegido mientras que el delincuente sería sobrepotejado por el Estado y por los defensores de

los derechos humanos, vistos como “defensores de delincuentes”. Esta lógica quedó bien resumida en los lugares comunes que impregnan el imaginario social brasileño, explotados hasta el hartazgo por Bolsonaro: “derechos humanos para humanos derechos” y “bandido bueno es el bandido muerto”:

Solo sé que, hoy en día, es mejor ser un delincuente que un buen ciudadano. Nosotros salimos a la calle con miedo y ellos no. Tienen más derechos que nosotros y luego salen en la televisión llorando para darnos pena. ¿Que nos den pena los delincuentes? ¡Compadézcanos a nosotros, que no podemos vivir en paz! (Entrevistada M)

Ante tal escenario, las respuestas de Bolsonaro eran convincentes: mano dura, disciplina, cárcel, reducción de la edad de imputabilidad penal, aumento de las penas en el Código Penal, prisión perpetua, portación de armas, dar más poder y protección a la Policía³ y acabar con la “victimización del bandido”:

Portar armas debería estar permitido a los ciudadanos honrados. Si el Estado no nos protege, tenemos que protegernos nosotros mismos. Los bandidos tienen armas y nosotros no. Como en Estados Unidos. ¡Es nuestro derecho! Si queremos tener un arma para defender a nuestra familia, nuestra casa, ¿cómo pueden prohibirlo? (Entrevistado A)

En lo que sí había consenso entre los entrevistados era en la necesidad de disciplina, autoridad, jerarquía, o, como dice el dicho popular: “poner orden en la casa”. En este sentido, el militarismo como modelo social y político, incluidas las escuelas militares, era ampliamente defendido por todos. Para los entrevistados, la redemocratización y los gobiernos del PT fueron demasiado permisivos con la delincuencia y descuidaron la agenda de seguridad pública, lo que generó una inversión de valores

³ Esto se haría mediante la extensión de un dispositivo legal llamado exclusión de ilegalidad, que puede desencadenarse con la presencia de ciertos elementos o situaciones que descartan la ilegalidad de una acción.

que solo podía revertirse con la imposición de la militarización en la vida privada y pública:

Ahora te pasan de año aunque no sepas leer y escribir con fluidez. Falta disciplina y falta autoridad. ¡Compara una escuela pública con una escuela militar! Ahí hay dedicación, disciplina, autoridad, los chicos incluso mejoran en sus casas, tienen respeto. El Ejército te enseña a ser una persona, a ser un hombre, a ser decente. Pero esta generación de hoy solo quiere libertinaje, sin reglas, sin límites, y así no se puede. (Entrevistado A)

Bolsonaro siempre movilizó en sus discursos una resignificación de la dictadura militar como un período en el que la vida era más segura y disciplinada, en contraposición al régimen democrático que se construyó después, cuando la vida era mucho más insegura, “un lío”, “libertinaje”. De este modo, tanto el militar como sus partidarios idealizaron la dictadura como una época nostálgica en la que los buenos ciudadanos estaban protegidos por el Estado y reinaba el orden en lugar de la confusión. En su opinión, la democracia era un sistema de gobierno caótico en el que gobiernan los corruptos y los buenos ciudadanos se sienten desprotegidos. Así, aunque no todos los entrevistados estaban realmente a favor de una posible intervención militar, la mayoría tampoco condenaba la idea, ya que los militares eran uno de los pocos actores sociales que aún contaban con legitimidad para recuperar los valores tradicionales olvidados:

Siempre aprendí en casa que no hubo golpe militar, sino una intervención necesaria. ¿Hubo torturas? Sí, pero era un estado de guerra. ¿Acaso no era necesario? Pero ahora un golpe no lo solucionaría. El general Villas Boas⁴ [2] es excelente, uno de los mejores

⁴ El general Eduardo Villas Boas fue comandante del Ejército entre el inicio del segundo mandato de Dilma Rousseff, en 2015, y el inicio del mandato de Jair Bolsonaro, en 2019. Adquirió notoriedad política por un tuit de abril de 2018 que se leyó como una amenaza al Tribunal Supremo Federal para que denegara un recurso de *habeas corpus* que impediría la detención de Lula. Al dejar el Alto Mando del Ejército en 2019,

que ha tenido el ejército, él estaría al mando, pero no es tonto, sabe que ahora no hay lugar para eso. Si eso resolviera algo, yo mismo saldría y tomaría las armas". (Entrevistado E)

Esta concepción de la vida pública se materializó más tarde en el alto grado de militarización del gobierno de Bolsonaro. En marzo de 2021, el gobierno Bolsonaro tenía, de un total de veintiún ministros, un vicepresidente que era general, diez ministros militares y más de 3,000 cargos en el gobierno en manos de miembros de las Fuerzas Armadas, lo que lo convirtió en el gobierno más militarizado de la historia brasileña, incluida la dictadura militar. Como referencia, en los gobiernos de Dilma Rousseff y Michel Temer, los militares en altos cargos comisionados sumaban el 2.4 % y el 3 % del total, respectivamente; en el gobierno de Bolsonaro, el porcentaje llegó al 14 % (Trezzi, 2021). El militarismo también se adentró en el Congreso Nacional, donde exmilitares, policías y bomberos (militares) formaron el Frente Parlamentario por la Seguridad Pública, conocido como "Bancada de la Bala", que también compartía discursos similares a los de Bolsonaro, como la defensa de la derogación del Estatuto del Desarme, la reducción de la edad de imputabilidad penal y el apoyo a la industria nacional de armas, que incluye a la empresa Taurus y a la Compañía Brasileña de Cartuchos (CBC).⁵

Villas Boas se convirtió en asesor especial del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) de la Presidencia de la República, comandado por un militar que había apoyado a Bolsonaro desde el inicio de la campaña electoral del año anterior.

⁵ Según una encuesta de Congresso em Foco, en 2019, la "Bancada de la Bala" pasó de 36 parlamentarios a 102, con 93 diputados y dieciocho senadores, mientras que en 2014 no tenía siquiera un senador. Gran parte de la bancada estaba formada por miembros del Partido Social Liberal (PSL), al que Bolsonaro se afilió en 2018. Tomando todos los parlamentos estatales juntos, 73 policías y militares fueron elegidos para cargos legislativos en 2018. En 2014 fueron solo dieciocho. De los 73 policías y militares elegidos, 43 están afiliados al PSL. El teniente coronel Luciano Zucco (PSL) fue el más votado entre los diputados estatales de Rio Grande do Sul. En Mato Grosso do Sul, los diputados estatales más votados fueron el capitán del Ejército Renan Contar (PSL) y el coronel de la PM y excomandante general Carlos Alber-

MERITOCRACIA Y VICTIMIZACIÓN

No hay aún consenso social en Brasil sobre la adopción de políticas de ajuste fiscal y reducción del Estado. Según una encuesta de Datafolha, el 71 % de los brasileños rechazaba la Reforma Previsional que presentó el gobierno de Temer y el 64 % pensaba que la Reforma Laboral propuesta por su gobierno traería más beneficios a los empresarios que a los trabajadores. Del mismo modo, una encuesta del Instituto Vox Populi indica que la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que buscaba congelar el gasto público durante dos décadas⁶ suscitaba el rechazo del 70 % de los brasileños. Por último, una encuesta del Instituto Data Popular muestra que el 81 % de los brasileños prefería tener acceso a mejores servicios públicos que pagar menos impuestos⁷.

Al mismo tiempo, ideas como el esfuerzo personal, el mérito y el espíritu emprendedor tienen una penetración significativa entre amplios sectores de la población, lo que señala una potencial aceptación subjetiva de una racionalidad neoliberal⁸. Al fin y al

to David dos Santos (PSL). Algunos de ellos destacan por su trayectoria, como la cabo de la Policía Militar de São Paulo Kátia Sastre, que mató a un delincuente a la salida de una escuela en la ciudad paulista de Suzano y fue elegida séptima diputada federal más votada de São Paulo gracias al uso en su propaganda electoral de las imágenes del asesinato captadas por las cámaras de seguridad.

⁶ En aquel momento era la PEC 241, aprobada a finales de 2016.

⁷ Contenido de las cuatro encuestas citadas:
<http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2017/05/1880384-reforma-da-previdencia-e-rejeitada-por-71-dos-brasileiros.shtml>,
<http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2017/05/1880398-maioria-rejeita-reforma-trabalhista.shtml>,
<https://cut.org.br/system/uploads/ck/files/PesquisaVoxout2016PDF.pdf>,
<http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Visao/noticia/2014/04/81-dos-brasileiros-preferem-ter-servicos-publicos-melhores-pagar-menos-impostos.html>

⁸ Este enfoque del profundo efecto de la racionalidad neoliberal en la formación de la cultura política y las subjetivi-

cabo, la adhesión al neoliberalismo no solo se expresa en una dimensión superficial, a partir del apoyo o rechazo a reformas económicas específicas, sino también y sobre todo en una dimensión profunda, relacionada con la formación de subjetividades.

Así, políticas públicas como el programa Bolsa Familia o los cupos raciales en las universidades se veían como iniciativas negativas, porque fomentarian la pereza y producirían ciudadanos pasivos que parasitan al Estado. Esta percepción suele asociarse con la retórica del contribuyente: “Pago mis impuestos y con eso mantengo a los vagos que no hacen nada” **(Entrevistado A)**. Otro factor negativo es que estas políticas, según los entrevistados, las utilizaría de forma clientelista el PT para asegurarse los votos de los más pobres y mantenerlos bajo control. Por tanto, estas políticas serían innecesarias porque “quien trabaja triunfa en la vida”, de modo que el *self-made man* es el modelo de éxito a alcanzar:

Hay mucha gente perezosa que solo quiere chupar de la teta del gobierno. Y nosotros los apoyamos, ¿no? Bolsonaro acabaría con eso. ¿Quiere comer? ¡Trabaja! Pero es más fácil hacerse el pobre: “Soy pobre, soy pobre”. Y entonces sale pidiendo subvenciones, pidiendo ayuda para todo. Y nosotros nos matamos trabajando. Es injusto. **(Entrevistado A)**

Es interesante observar que varios de estos entrevistados fueron, en algún momento, directa o indirectamente, beneficiarios de las políticas públicas del PT, pero al momento de la entrevista algunos de ellos negaron su importancia, en consonancia con una racionalidad neoliberal más amplia que entiende que las desigualdades pueden superarse por medio del mercado y que está subjetivamente anclada en las ideas de mérito y esfuerzo propio:

Mi hijo tiene Fies (Programa de financiación universitaria del gobierno), pero se lo merece. El gobierno

no se lo da gratis. Es él quien se esfuerza por estudiar. ¿Voy a votar al PT por eso? No soy tan pobre ni del noreste como para votar al PT. Eso de ser trabajador, de tener éxito en la vida, eso es lo que queremos, no una limosna del gobierno. Queremos que nos dejen trabajar. **(Entrevistado M)**

CORRUPCIÓN Y ANTIPOLÍTICA

El discurso anticorrupción es fundamental para entender el rechazo de la política tradicional entre los entrevistados. En su opinión, la corrupción impregnaba a todos los partidos. No había diferencia entre izquierda y derecha, porque prácticamente todos los políticos solo están interesados en su propio beneficio. La excepción era Jair Bolsonaro, a quien los entrevistados veían como uno de los pocos políticos honestos de Brasil y, por lo tanto, una alternativa a la corrupción sistémica:

Bolsonaro no es corrupto y es diferente de los partidos que están ahí. El PT y el PSDB son la misma cosa. En Brasil solo hay poder y dinero. Mire lo de Lava Jato; en el Congreso están enfrentados, pero en la corrupción son iguales. Bolsonaro es diferente porque no es corrupto. **(Entrevistado D)**

Cuando se les preguntó sobre las críticas de la prensa dirigidas al exmilitar, la mayoría de las respuestas coincidieron: la prensa perseguía a Bolsonaro para minar su candidatura. En la opinión de los entrevistados, el capitán retirado era víctima de un complot de los medios tradicionales para boicotear su vida pública: “La prensa quiere derribarlo porque sabe que es muy fuerte. Nadie puede detenerlo. Harán lo que sea para hundirlo, pero nosotros sabemos que es honesto” **(Entrevistado E)**. Este argumento se reiteró años más tarde entre los partidarios más leales de Bolsonaro, como se confirmó en una encuesta posterior realizada para la Fundación Friedrich Ebert Brasil (Rocha y Solano, 2020).

En opinión de los entrevistados, la Operación Lava Jato estaba, según sus propias palabras, limpiando el país y sacando a los corruptos del poder. Al in-

dades es compatible con la articulación heterodoxa entre las perspectivas neomarxista y foucaultiana de Wendy Brown (2019, pp. 17-21).

terrogarlos sobre procedimientos controvertidos de la operación, como las detenciones coercitivas, los acuerdos de culpabilidad, la proximidad con la prensa, el atropello del debido proceso y las garantías de los implicados, los entrevistados argumentaron que: el político corrupto es “malo”, un cáncer que hay que extirpar, y que el grupo de trabajo de la Lava Jato, el juez Sérgio Moro y los fiscales implicados, representaban figuras “buenas”, heroicas, que, en un discurso salvador, tenían la misión de rescatar a Brasil de la corrupción. Para ellos, el político corrupto y, fundamentalmente, el petista, era el enemigo que había que abatir y, por lo tanto, las garantías jurídicas eran meros formalismos:

El problema ahora son los derechos de Lula. ¿Derechos? Si quiere derechos, ¡que no robe! Pobrecito, ¿no? Dice que la delación no es una prueba, que se filtró. El tipo es el jefe de una banda, ¡y todavía quiere derechos! (Entrevistada E)

MORALIZACIÓN Y CRISTIANIZACIÓN DE LA VIDA

En sus apariciones públicas, Bolsonaro citaba a menudo el versículo de la Biblia Juan 8:32, “y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”. De origen católico, fue bautizado el 12 de mayo de 2016 en el río Jordán por el pastor Everaldo, presidente del Partido Social Cristiano (PSC), al que estaba afiliado en aquel momento. La palabra “Dios” fue una de las más repetidas tanto en su campaña electoral de 2018 como en su discurso de investidura el 1 de enero de 2019 en Brasilia.

Una encuesta de Datafolha del 25 de octubre de 2018 estimó que, proporcionalmente, los votantes evangélicos optaron por Bolsonaro: 29.9 % católicos y 21.7 % evangélicos, contra 28.7 % de católicos y 9.7 % de evangélicos de los votos válidos que fueron a parar al candidato de la oposición, Fernando Haddad, del PT. Antes de eso, el 30 de septiembre de 2018, el obispo Edir Macedo, fundador y líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que, según

él mismo, contaba con unos diez millones de fieles y que siempre apoyó al PT hasta 2016, cuando votó a favor del juicio político contra Dilma Rousseff, utilizó sus cuentas de Twitter y Facebook para hacer público su apoyo al entonces candidato Jair Bolsonaro, y dejó en claro que su historia política de apoyo al PT había terminado. La Asamblea de Dios, que también tenía con un gran número de creyentes, también optó por Bolsonaro. Silas Malafaia, líder de la Asamblea que era lulista en 2002 y apoyó a Marina Silva en 2010 y a Aécio Neves en 2014, también se inclinó por Bolsonaro en marzo de 2018.

De esta forma, las dos principales Iglesias evangélicas de Brasil se metieron en cuerpo y alma en las elecciones, ambas contra el PT. Según informaciones del Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria (DIAP), basadas en datos disponibles en la página web del Tribunal Superior Electoral (TSE), en 2014 había 75 diputados federales que seguían la doctrina evangélica, agrupados en dieciocho partidos. Entre las catorce denominaciones con diputados federales, la Asamblea de Dios y la Iglesia Universal del Reino de Dios tenían 36. Los diputados de la Asamblea de Dios estaban más repartidos en distintos partidos, mientras que los vínculos institucionales de los diputados de la Iglesia Universal estaban centralizados en el PRB. En las elecciones de 2018, la bancada evangélica aumentó a 84 diputados federales.

Los entrevistados afirmaron que su apoyo a Bolsonaro también se debió a su posición a favor de valores como la familia, la religión, la disciplina, la autoridad y la ética, ausentes del debate público durante los gobiernos del PT. En este sentido, la corrupción del PT era tanto política como moral, si se consideran los valores relacionados con el ámbito de las costumbres, y se haría eco de una crisis moral más profunda en el país:

Bolsonaro es un hombre de valores, de familia, de principios, de religión. Eso es muy importante. En el fondo, la crisis de Brasil es una crisis de valores. Ya nadie respeta nada. (Entrevistado E)

Una cuestión de la que hablaron mucho los entrevistados es el desprecio del campo progresista hacia las posiciones cristianas, y más concretamente hacia las evangélicas, que se consideraban tontas, fanáticas y fundamentalistas. Por otro lado, Bolsonaro representaba un candidato que respetaría a las personas de fe y promovería un renacimiento de los valores cristianos en la vida pública y privada. Durante su campaña electoral de 2018, al PT se le presentó continuamente como el partido que estaba en contra de la familia brasileña y que, de ser elegido, acabaría con la familia cristiana tradicional y sus valores. El mensaje era claro: los cristianos, especialmente los evangélicos, debían votar a Bolsonaro si querían preservar sus costumbres, valores y forma de vida:

Soy evangélica, voy a la iglesia porque siento paz, me gusta estar allí. Pero parece que a veces tenemos que pedir perdón por eso. Dicen que los evangélicos son estúpidos, que los evangélicos solo votan lo que dice el pastor. ¿Yo me meto en la vida de ellos? (Entrevistada M).

Esta percepción se amplificó en relación con la escuela y la universidad, percibidas como lugares de adoctrinamiento izquierdista y de censura de los valores y modos de vida cristianos, y por eso los entrevistados defendían iniciativas como el movimiento “Escuela sin Partido”, que proponía denunciar, e incluso censurar, a los docentes que en las aulas tuvieran una conducta considerada doctrinaria, especialmente en lo que se refiere a los temas relacionados con la sexualidad humana, que se tenían que “reprivatizar” (como dice Fraser, 1989), es decir, que se debían tratar solo en el ámbito privado y no en el público:

Sabemos que los docentes son todos de izquierda e influyen mucho sobre los alumnos. En esas carreras de ustedes, de Sociología e Historia, solo hay profesores comunistas. En el aula hay que enseñar todas las ideologías, no solo las que ustedes quieran. Por eso la Escuela sin Partido es buena, porque garantiza la libertad en la clase y protege a los alumnos de los docentes que solo quieren

captar alumnos para los partidos de izquierda. (Entrevistada E)

EL ODIO POP Y EL LENGUAJE DEL PUEBLO

Cuando se les preguntó sobre el discurso de odio de Bolsonaro, la mayoría de los entrevistados dijo que sus declaraciones violentas y prejuiciosas simplemente reflejaban su forma natural de hablar. En su percepción, a pesar de su forma ruda, grosera y agresiva de expresarse, Bolsonaro no tenía intención real alguna de herir a las personas. De hecho, su radicalismo era bien visto, ya que era una señal de autenticidad y honestidad, puesto que Bolsonaro no se dejaría dirigir ni domesticar como los políticos tradicionales, que “hablan bonito” pero solo tienen la intención de engañar y manipular a la población. El discurso de odio de Bolsonaro puede entenderse como un discurso de odio pop, presentado, en la mayoría de las ocasiones, como un meme, una frase irreverente, en forma de vídeo de YouTube con lenguaje juvenil y humorístico, como una broma. Las personas entrevistadas no veían su discurso violento como algo que hubiera que rechazar. Al contrario, quienes señalaban la existencia de un discurso de odio estaban actuando con exageración e histeria ante una forma políticamente incorrecta y folclórica de decir las cosas. De esta forma, Bolsonaro lidiaba una batalla contra lo que sus más enfáticos partidarios percibían como una tiranía de la corrección política, vista como la imposición del pensamiento minoritario, en favor de la libertad de expresión. De esta forma, lo políticamente incorrecto se valoró como un ejercicio de crítica irreverente y de libertad:

Es que él tiene esa forma tosca, bruta para hablar, esa forma militar. Pero no quería decir esas cosas. A veces exagera, no piensa porque se deja llevar por los impulsos. Es muy honesto, muy sincero y no tiene pelos en la lengua como otros políticos, siempre pensando en lo políticamente correcto, en lo que dirá la prensa. A él no le importa lo política-

mente correcto, dice lo que piensa y punto, pero no es homofóbico. Le gusta la gente gay. Es su manera de ser. **(Entrevistada L)**

Uno de los entrevistados que se autoidentificó como “gay de derecha” señaló que las posiciones de los partidos de izquierda y de los grupos LGBT+ eran bien de exhibicionismo exagerado o de victimismo y privilegio. En su opinión, aunque la población LGBT+ sí sufre discriminación, la solución estaba en “trabajar más y llorar menos”. Según sus propias palabras, era necesario tratar a los homosexuales sin privilegio alguno, como cualquier ciudadano, como lo haría Bolsonaro:

¿Por qué no puedo ser un gay de derecha? Apoyo un gobierno liberal, apoyo los valores tradicionales, la disciplina, la autoridad, creo que debemos tener mano dura con los delincuentes. ¿Te gustan los delincuentes? Llévatelos a casa. Porque soy gay ¿me tienen que gustar esos ladrones del PT o esos radicales del PSOL? Soy gay, pero no me gusta la marcha LGBT, por ejemplo, me parece muy exhibicionista, muy provocadora, ¿qué necesidad hay de eso? No soy víctima de nada. Eso de que somos pobrecitos, víctimas, no funciona. Trabajemos más y lloremos menos. **(Entrevistado J)**

Lo mismo ocurrió con las entrevistadas, que no veían problema alguno en ser mujeres e identificarse con las declaraciones de Bolsonaro. Entre estas mujeres, el término feminismo se rechazaba porque, según una de las entrevistadas: “ellas son mujeres que luchan por sus derechos, pero no son feministas, de hecho, yo soy antifeminista” **(Entrevistada L)**. En su opinión, Bolsonaro no era machista ni misógino, sino un hombre mayor que se comportaba de forma polémica, pero sin intención negativa alguna, y las mujeres que se sintieran ofendidas por Bolsonaro era porque recurrían a un discurso de victimización propio del feminismo, por lo que serían “feminazis”, según una de las entrevistadas:

Sí, soy mujer, pero no soy feminista. Se la pasan quejándose, vienen con eso del victimismo, son todas radicales, tratando de pasarles por encima a

los hombres. Feminazis, eso no me gusta nada. Soy empresaria, vivo bien, me va bien en la vida y nunca he necesitado el feminismo. Si luchamos, conseguimos lo mismo que los hombres, pero estas mujeres parece que solo saben llorar y echarle la culpa a los hombres. Exageradas. **(Entrevistada E)**

Sin embargo, algunos de los entrevistados criticaron a Bolsonaro por su excesiva teatralidad, lo que le hacía mermar la seriedad digna de un político, en lo que aparentaba ser una referencia a la “política de la respetabilidad” (Brooks-Higginbotham apud Gomes 2018). Esta es una de las críticas que luego se reiteraron con mayor fuerza entre sus votantes tras su investidura como presidente de la República:

Jair se está transformando en un personaje. Para ganar volumen, se está ridiculizando a sí mismo. Tiene una rudeza militar, una rusticidad, pero se ha vuelto demasiado *showman*. No es lo que parece, pero realmente quiere hacer el bien, es sencillo, no tiene avaricia de dinero. Sé de viajes que hace y se aloja en hoteles baratos, no es por aparentar, es por sencillez. Es un gran estratega, sabe que si se pone el uniforme y adopta una línea dura no será popular, y es un gran *showman*, comunica muy bien, tiene la inteligencia para darse cuenta de que así aporta mucho, pero corre el riesgo de perderse en el personaje. **(Entrevistado E)**

La construcción de la figura del *outsider* es fundamental para entender el poder de la figura de Bolsonaro. Aunque Bolsonaro llevaba veintiocho años en política, la gente supo identificarlo como un *outsider*, un político diferente que se atrevía a enfrentarse a lo que él describía como “la vieja política”: “No queremos más de lo mismo. Son todos iguales. Queremos a alguien diferente” **(Entrevistada M)**. En este sentido, los discursos radicales y violentos fueron fundamentales para su reconocimiento como *outsider*.

CONSIDERACIONES FINALES

Por una parte, el conjunto de las entrevistas muestra profundas y legítimas experiencias de falta de respeto y sentimientos de injusticia, tales como: (1) la inseguridad y desprotección resultantes del abandono y omisión por parte del Estado, especialmente en las periferias urbanas; (2) la autopercepción de estigmatización (prejuicio, discriminación y menosprecio) de los policías, como asesinos, y de los evangélicos, como tontos, ciegos y fundamentalistas; (3) el deseo de autonomía frente al Estado (o, como mínimo, el deseo de no depender del Estado como cliente); (4) la indignación ante la interpenetración corrupta del sistema político y el sistema económico, y, por último, (5) el deseo de una cultura política basada en la autenticidad, la honradez, la sinceridad, la sencillez y la proximidad con las clases populares.

Por otra parte, las entrevistas revelan cómo sus partidarios normalizaron el radicalismo de Bolsonaro. La primera operación para negar superficialmente la existencia del discurso de odio en el caso de Bolsonaro, o legitimarlo como odio pop, es la oposición entre lo políticamente correcto, interpretado como un sistema o norma excluyente y tiránica, y lo políticamente incorrecto, interpretado como el ejercicio de una amplia libertad de expresión. Los argumentos de los entrevistados también venían acompañados de una característica mezcla de emociones que confirió al apoyo a Bolsonaro un significado más profundo que el mero acuerdo o desacuerdo con políticas públicas concretas. En resumen, es posible agrupar las emociones presentes en los discursos en tres tipos básicos: ira [*anger*], alegría [*joy*] y confianza [*trust*]⁹. Más allá de reconocer sus diferencias, lo fundamental es entender la articulación simultánea de las tres emociones que aparentemente legitimaron los discursos de

Bolsonaro desde el punto de vista de los receptores de sus mensajes.

La primera emoción es la ira, que a veces se expresó de forma más suave (como si Bolsonaro fuera provocador o polémico), más condescendiente (Bolsonaro era tosco, rústico o grosero –y se atribuía la tosquedad al hecho de que había sido militar–) y rara vez se asumió como tal; después de todo, si su retórica se recibiera como violenta sin mediación alguna, sería más difícil negar su discurso de odio¹⁰. La segunda emoción es la alegría; Bolsonaro era irreverente, divertido, entretenido, un excelente comunicador, un *showman* y, por lo tanto, diferente de otros políticos tradicionales, vistos como aburridos, grises y distantes, y el carisma de Bolsonaro se exacerbó a veces en las figuras del héroe –valiente y rebelde– y, por supuesto, del “mito”. Finalmente, la tercera emoción es la confianza: sus electores sentían que estaba más cerca de la gente que otros políticos porque “hablaba el lenguaje del pueblo”, lo que a veces se ve como un signo de sinceridad (era honesto, sencillo, “es su forma de ser”) y a veces como impulsividad. En cualquier caso, la recepción de su discurso y su retórica generalmente era positiva por su valentía: “dice lo que piensa y le importa un bledo”.

Más allá de esta descripción tipológica de las tres emociones, también es posible ver tres oscilaciones aparentemente incoherentes en las caracterizaciones de los entrevistados sobre la retórica de Bolsonaro: (1) entre la teatralidad estratégica (es un personaje, a veces excesivo, rozando el ridículo, pero un *showman*) y la sinceridad expresiva (“es su forma de ser”, “dice lo que piensa”, “impulsivo”); (2) entre la estupidez (tosco, rústico) y la inteligencia

⁹ A grandes rasgos, la identificación de las tres emociones se basó en la propuesta de la sociología de las emociones y los movimientos sociales de Jasper (2016, pp. 106-109).

¹⁰ Como ejemplo de un discurso explícito de odio, en una alocución transmitida a los manifestantes a favor de su elección, Bolsonaro dijo que: “Estos rojos marginales serán desterrados de nuestra patria” y que la *petralhada* (en referencia a los petistas e izquierdistas) sería enviada “a la punta de la playa” (Veja, 2018), en una referencia velada a una base de la Marina donde se arrojaban clandestinamente los cuerpos de los disidentes políticos torturados y asesinados durante la dictadura militar brasileña (Balloussier, 2018).

(“comunica muy bien”, “un gran estratega”), y, por último, (3) entre lo extraordinario (“mito”, héroe, *pop star*, rebelde contra el sistema) y lo ordinario (sencillo, “habla el lenguaje del pueblo”, cercano al pueblo)¹¹. Sin embargo, estas oscilaciones no son malentendidos; al fin y al cabo, su ambivalencia fue fundamental para que la estrategia retórica contrahegemónica radical del bolsonarismo resonara entre los receptores de estos discursos y construyera la legitimidad de su circulación cada vez más amplia, es decir, desde los contrapúblicos de Bolsonaro hacia los públicos dominantes. En lugar de reconocer la retórica de Bolsonaro como un discurso de odio, la gente la recibió como una perspectiva antisistémica.

Las experiencias de falta de respeto, desprecio y sentimiento de injusticia vividas por los entrevistados no produjeron *a priori* y esencialmente tendencias autoritarias y “fascistas”. Sin embargo, dada la incapacidad y el distanciamiento de diversos sectores tanto de izquierda como de derecha, esas experiencias solo se recibieron y elaboraron simbólicamente en la campaña electoral de Jair Bolsonaro, quien, al canalizarlas políticamente, fue capaz de fortalecer y legitimar su proyecto político de ultraderecha, que defendía y elogiaba la dictadura militar, reactualizaba el anticomunismo en la sociedad brasileña y estaba marcado por procesos de militarización y cristianización de la vida pública y privada que corroyeran la democracia brasileña. En este sentido, el bolsonarismo resignificó la esfera pública que surgió en Brasil tras la redemocratización como “el sistema” al que había que combatir y sustituir mediante la instauración de un nuevo régimen autoritario en el país.

11 Esa misma oscilación entre lo ordinario y lo extraordinario se verificó en el análisis de Mendonça y Caetano (2020) sobre la autopresentación visual de Bolsonaro en la red social Instagram.

NAYIB BUKELE: ¿EL DICTADOR DEL FUTURO?

Jacques Coste*

En los últimos años, se ha publicado una cantidad enorme de libros, ensayos y otros textos sobre el “declive” o la “erosión” de la democracia y el auge de los populismos y los autoritarismos. Curiosamente, casi siempre se omite el apellido “liberal” al hablar de democracia, como si la democracia liberal fuera la única posible.

En su mayoría, estos escritos comparten una narrativa un tanto simplista sobre los retos, las oportunidades y los problemas de la democracia liberal, que va más o menos así: “Alrededor del mundo, los ciudadanos, inconformes con la desigualdad socioeconómica y cansados de los dirigentes polí-

ticos tradicionales, están votando por líderes autoritarios o populistas, figuras que les prometen que van a resolver todos sus problemas mediante acciones firmes y soluciones simples. Esos líderes aprovechan que el sistema democrático les permite participar en elecciones y obtener legitimidad mediante los votos de la gente, para después debilitar las instituciones y romper las reglas democráticas, a fin de afianzar su poder, gobernar de manera voluntarista y deshacerse de los contrapesos y las oposiciones políticas”.

Casi todos esos textos están escritos desde la nostalgia y la autocomplacencia: presentan el orden liberal de la segunda posguerra como un pasado idílico que, si bien tenía algunos problemas menores, permitía en general que la gente viviera con mayores niveles de paz y prosperidad que en cualquier momento del pasado. Algunos autores asocian el desencanto democrático de los ciudadanos con la desigualdad socioeconómica ocasionada por el giro neoliberal; otros, con un supuesto encanto de los líderes carismáticos que engañan

* Es autor del libro *Derechos humanos y política en México, la reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica* (Tirant lo Blanch e Instituto Mora, 2022). Asimismo, es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Anáhuac México, maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora y actualmente cursa un doctorado en Historia en la Universidad de Stony Brook, Nueva York. También es editorialista y ensayista político en *Expansión Política*, *Nexos* y otros medios.

al pueblo; unos más, con los desórdenes sociales y los choques culturales que trajo consigo la globalización; algunos otros, con el fenómeno de la posverdad, consistente en la preeminencia de las opiniones personales por encima de los hechos objetivos, facilitado por las redes sociales y aprovechado por los dirigentes populistas, y, finalmente, otros autores aluden a alguna combinación de los factores anteriores como explicación del “declive” de la democracia.

Sin duda, hay alguna riqueza en estos textos y sus explicaciones tienen cierto mérito. Vale la pena revisar algunos de estos volúmenes y estar familiarizado con las discusiones y las preocupaciones de los autores. Sin embargo, sus argumentos suelen ser demasiado generales: por ejemplo, muchos de esos textos colocan en una misma categoría a gobernantes tan disímiles como Vladimir Putin (Rusia), Xi Jinping (China), Recep Tayyip Erdoğan (Turquía), Viktor Orbán (Hungría), Nayib Bukele (El Salvador), Hugo Chávez (Venezuela), Donald Trump (Estados Unidos), Jair Bolsonaro (Brasil) y muchos otros. Si bien es ilustrativo encontrar rasgos comunes o factores explicativos compartidos de por qué ascienden los líderes populistas, me parece que las narrativas generalizantes tienden a pasar por alto las particularidades de cada caso, es decir, de cada sociedad, cada sistema político y cada líder en particular.

En otras palabras, los análisis de las causas generales y los factores comunes sobre el declive de la democracia liberal y el auge de los liderazgos populistas o autoritarios –conceptos que no son sinónimos y, sin embargo, muchos autores liberales los usan indistintamente– son interesantes y aportan a la discusión sobre estos fenómenos. No obstante, al mezclar tantos tipos de líderes y escenarios político-sociales, terminan por lanzar explicaciones que tienden a generalizar y simplificar en exceso, al tiempo que pierden los matices y las características específicas de cada caso particular.

Por eso, conviene analizar cada caso en su justa dimensión y desde una perspectiva que tome en

cuenta sus dinámicas particulares. Entre todos los casos antes mencionados, hay uno que me parece especialmente llamativo: el del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele o, como a él mismo le gusta llamarse, “el dictador más *cool* del mundo”.

Y digo que vale la pena detenerse en El Salvador porque ahí puede haber muchas claves para entender por qué ascienden los populismos y los autoritarismos, pero, sobre todo, para comprender qué podemos esperar hacia el futuro. Bukele no es un populista más en América Latina. Bukele no es un autoritario más en la región. Tampoco es una caricatura andante, un fanfarrón o un payaso. Por el contrario, hay que tomarlo muy en serio. Aventuro aquí una conjetura algo arriesgada: *Bukele representa el futuro del autoritarismo en América Latina y otras regiones asoladas por la violencia y la precariedad generalizadas.*

El presidente salvadoreño llegó a la primera magistratura de su país en 2019, cuando tenía apenas 38 años de edad. Su triunfo produjo un terremoto en el sistema político de El Salvador, toda vez que terminó con la era del bipartidismo, que surgió luego de los acuerdos de paz que pusieron fin a la Guerra Civil en 1992. Desde entonces, las dos principales facciones de la conflagración interna, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, de derecha) y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN, de izquierda), erigidas como partidos políticos, disputaron el poder político en elecciones y se alternaron los triunfos y las derrotas.

Bukele construyó su carrera política en el FMLN, fuerza política a la que representó como alcalde de Nuevo Cuscatlán y de San Salvador. A pesar de esa trayectoria, en su campaña presidencial, Bukele se presentó como un *outsider* y como un gran crítico del bipartidismo salvadoreño. Pese a esta incongruencia, no es difícil entender por qué una campaña de crítica feroz contra el sistema de partidos tuvo ese nivel de éxito.

En 2019, El Salvador era un país roto por la violencia, indignado por la corrupción, cansado de la falta de oportunidades y de la monstruosa desigualdad

socioeconómica. Un dato ilustrativo es que la Organización Mundial para las Migraciones calcula que 1.4 millones de personas salvadoreñas viven en Estados Unidos, cuando la población total del país es de 6.5 millones de personas.

Dicho de manera muy sencilla (y redondeando las cifras), uno de cada seis salvadoreños vive en la Unión Americana. La mayor parte de ellos migró entre finales de los años ochenta y hasta finales de la década pasada. Sin afán de exagerar, se puede afirmar que se trata de un éxodo masivo de personas que abandonaron su país, muchas de ellas a causa de las violencias provenientes, en un primer momento, de la Guerra Civil y, luego, de las pandillas y las estrategias fallidas del Estado para combatirlas.

Otro dato ilustrativo es que, en 2018 (año previo a la llegada de Bukele al poder), la tasa de homicidios de El Salvador era de 51 por cada cien mil habitantes. El único país con una tasa de asesinatos mayor a la salvadoreña era Venezuela. Las famosas “maras” (las pandillas salvadoreñas) no solamente estaban involucradas en el narcotráfico, el robo y los asesinatos, sino que también extorsionaban (con el cobro de derecho de piso) a los comercios locales y reclutaban de manera forzada a miles de jóvenes que engrosaban sus filas cada año.

Si a eso le añadimos décadas enteras de gobiernos tan corruptos como ineficientes, no debe sorprender que la ciudadanía salvadoreña estuviera harta de la clase política y tuviera hambre de cambio. En 2019, Bukele leyó bien esta realidad y lanzó una campaña contra el *establishment* político, lo que le valió ganar las elecciones en primera vuelta, con 53 por ciento de los votos. Consiguió este triunfo como abanderado de una coalición de partidos pequeños, llamada Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANU), con una ideología difusa, aunque marcada por el nacionalismo y el conservadurismo.

Bukele no era un candidato normal. Se vestía como un joven cualquiera, con camiseta, pantalón de mezclilla, tenis y una muy característica gorra hacia atrás. El día de su victoria, felicitó al pueblo salva-

doreño por “derrotar al bipartidismo” y “pasar la página de la posguerra”. Añadió: “Este movimiento no es de nosotros, es del pueblo salvadoreño y ustedes pueden hacer con él lo que ustedes quieran. [...] A partir de mañana nos toca a todos empezar a construir El Salvador que todos queremos”.

Apenas llegó al poder, Bukele desapareció la institución gubernamental encargada de temas de transparencia bajo la excusa de que era corrupta, con el argumento de que él no tenía por qué esconder nada y la promesa de que siempre informaría directamente a los ciudadanos de las acciones de su gobierno, sin necesidad de procesos burocráticos engorrosos. Durante la primera mitad de su mandato, el Congreso intentó bloquear varias de sus iniciativas, pues Arena y el FMLN contaban con más legisladores que la coalición gobernante. No obstante, Bukele burló, en más de una ocasión, los controles del Congreso mediante decretos presidenciales. Además, en febrero de 2020, luego de que los diputados de oposición retrasaran la aprobación del presupuesto para su política de seguridad, Bukele irrumpió en el Congreso con la compañía de militares y pronunció una de las frases que lo lanzó a la fama internacional: “Ahora creo que está muy claro quién tiene el control de la situación”.

En las elecciones locales y legislativas de 2021, Nuevas Ideas, el partido que fundó Bukele y en donde se concentra la fuerza política que ya se conoce como *bukelismo*, obtuvo un triunfo abrumador, con casi setenta por ciento de los votos. Así, el presidente aseguró la mayoría legislativa necesaria para poner en marcha su proyecto político sin obstáculos, pues consiguió 64 de 84 asientos en el Congreso.

La primera medida que Bukele tomó tras su victoria en la elección intermedia fue la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del titular de la Fiscalía General de la República, a quienes sustituyó con cuadros leales. En consecuencia, diversos medios internacionales consignaron que “Nayib Bukele ya no tiene contrapeso alguno”. Asimismo,

el informe “Justicia amordazada”, publicado por la Organización para el Debido Proceso, asevera que: “Más que tres poderes independientes y separados, existe una sola fuerza política en control de todos ellos, concentrada en el Ejecutivo. El sistema de pesos y contrapesos democráticos ha desaparecido” en El Salvador.

Por otra parte, Bukele ha emprendido acciones para debilitar a Arena y al FMLN mediante una supuesta campaña anticorrupción, que ha derivado en la incautación de bienes a los partidos de oposición y en la intimidación de los líderes de los partidos. Así las cosas, en la actualidad hay muy pocos contrapesos al gobierno de Bukele en El Salvador. Incluso, a inicios de 2023, *El Faro*, el periódico independiente más importante del país y uno de los más renombrados de América Latina, anunció que trasladaría sus oficinas centrales a Costa Rica luego del constante acoso de Bukele a su diario y a la prensa crítica en general.

La falta de oposición llega a grado tal que Bukele anunció que pretende buscar la reelección en 2024. La Constitución salvadoreña prohíbe la reelección inmediata; sin embargo, los magistrados leales de la Sala Constitucional hicieron una interpretación jurídica a modo, en la que afirman que no hay obstáculo para la reelección si Bukele deja el cargo seis meses antes del fin de su mandato, por lo que es muy probable que el presidente se reelija.

Los párrafos anteriores deberían bastar para dejar claro el carácter autoritario de Bukele. Sin embargo, falta hablar del rasgo de su gobierno que, en realidad, lo convierte en uno de los mandatarios más autoritarios y represivos del continente. Me refiero, por supuesto, a su política de “guerra contra las pandillas”, como él mismo ha denominado a su violenta estrategia de seguridad para contener la violencia de las maras.

En marzo de 2022, el gobierno salvadoreño declaró un régimen de excepción, tras una jornada de violencia pandilleril que causó la muerte de más de ochenta personas. El régimen de excepción –que

supuestamente tendría vigencia limitada– se ha ampliado más de diez veces, por lo que, al momento de escribir estas líneas, lleva en marcha año y medio, lo que ha permitido a las autoridades detener a más de setenta mil presuntos pandilleros como parte de esta política. Diversas organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación, toda vez que las autoridades no respetaron garantías mínimas, como el acceso a un juicio justo, el principio de presunción de inocencia o el debido proceso. En la práctica, los cuerpos de seguridad están deteniendo a cualquier persona sospechosa de formar parte de una pandilla, sin más. Esto ha conducido a la detención arbitraria de cientos de personas y a que mucha gente esté en prisión sin que se les haya comprobado la comisión de crimen alguno.

Como parte de esta política de seguridad, el gobierno salvadoreño construyó una mega prisión, el famoso Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que tiene capacidad para albergar a cuarenta mil prisioneros. Las personas reclusas en esta y otras cárceles viven en condiciones de hacinamiento total. Han sido despojadas de toda dignidad. Según las estimaciones más recientes, al momento de escribir estas líneas (agosto de 2023), alrededor de 1.7 por ciento de la población salvadoreña está en este tipo de prisiones, una cifra brutal.

Las fotografías con las cuales el gobierno salvadoreño se ha vanagloriado de la detención de los presuntos pandilleros son escandalosas: las celdas están sobrepobladas, los internos están obligados a formarse sentados en el piso –cada uno con la cabeza descansando en la espalda de su compañero de enfrente– y el propio Bukele ha afirmado sin pudor alguno que se redujo la calidad y la cantidad de la dieta de los prisioneros con el argumento de que los criminales no tienen por qué comer mejor que los “buenos ciudadanos”. Incluso, el mandatario salvadoreño llegó al extremo de amenazar a los prisioneros en un mensaje difundido en televisión nacional: según dijo, si los pandilleros seguían cometiendo crímenes en el exterior de las prisiones, él iba a cortar el suplemento alimenticio de los reos.

“Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran”, declaró.

Esos exabruptos de Bukele en contra de las pandillas no son excepcionales en lo absoluto. Por el contrario, son una de las claves del éxito y la popularidad de su gobierno. El mandatario salvadoreño gusta de pronunciar discursos rodeado de militares, con equipo de combate, en los que se presenta como un hombre fuerte, que no teme enfrentar a las pandillas y que está dispuesto a todo con tal de acabar con la violencia. Asimismo, en sus redes sociales (en las cuales tiene millones de seguidores) publica videos promocionales de su campaña de seguridad, que más bien parecen películas de acción, ya que tienen una gran producción. En algunos, aparecen fuerzas de élite en pleno operativo para aprehender y eliminar criminales. En otros, se ven policías y militares alistándose para combatir a los delincuentes. En unos más, se puede ver cómo encierran a los presuntos pandilleros en celdas o cómo los obligan a formarse y los delincuentes obedecen dócilmente.

Cabe aclarar que, cuando Bukele asumió la presidencia, inicialmente no declaró la guerra a las pandillas. Según las investigaciones periodística de *El Faro*, el mandatario pactó una tregua secreta con ellas. La tregua se basaba en un acuerdo informal previo entre el gobierno y las pandillas, que estuvo vigente en 2012, en el cual los líderes de pandillas en prisión recibían beneficios y, a cambio, los miembros de sus bandas reducían la violencia en las calles. La tregua finalmente se rompió en marzo de 2022, cuando las maras llevaron a cabo más de ochenta homicidios en unos cuantos días. Ahí fue cuando Bukele declaró el régimen de excepción.

Sin embargo, aunque la guerra contra las maras no fue una promesa de la campaña electoral de Bukele, sí se ha convertido en la piedra angular de su gran popularidad, que alcanza una cifra por encima del noventa por ciento, según la mayoría de encuestas. Pese a su evidente carácter violatorio de derechos humanos, pese a la detención de cientos de personas inocentes, pese a la construcción de

un Estado policiaco, pese a que Bukele ha aprovechado el régimen de excepción para debilitar a la oposición y la prensa crítica, pese a la destrucción del debido proceso y el principio de presunción de inocencia, pese a todo ello, esta estrategia de seguridad ha sido el mayor éxito de Bukele y la base de su asombrosa popularidad y la aprobación de la ciudadanía.

Además, es imposible negar que esta política de seguridad ha frenado la inercia de violencia pandilleril en El Salvador, al menos por ahora. Entre mayo de 2022 y mayo de 2023, no hubo un solo homicidio en El Salvador (según cifras oficiales). Es algo notable si se considera que la tasa de homicidios dolosos era de 51 por cada cien mil habitantes en 2018. Cuando se cumplió el año sin asesinatos, el propio Bukele declaró: “El Salvador se ha convertido en el país más seguro de América Latina”. Muchos analistas consideran que tiene razón.

El renombrado periodista Ioan Grillo lo sintetiza de la siguiente forma: “Hay tres verdades incómodas sobre la ofensiva [de Bukele contra las pandillas]: 1) Es eficiente; 2) es popular, y 3) es brutal”. Su opinión es digna de tomarse en cuenta, toda vez que se trata de un reportero que lleva cubriendo la violencia pandilleril centroamericana muchos años: “Cuando visité [el país] a finales de 2022, quedó claro que las pandillas habían sido pulverizadas de una manera que no se veía desde su surgimiento hace tres décadas. Durante años, habían tenido un control excesivo sobre los barrios, exigiendo la identificación de quienes entraban y haciendo cumplir pagos y normas. Ahora han desaparecido casi por completo. La extorsión ha disminuido drásticamente. [...] El Salvador podría terminar el año 2023 con una tasa de homicidios similar a la de gran parte de Europa”.

Por eso, considero que Nayib Bukele puede marcar tendencia en la región. Ya tiene reconocimiento internacional. De hecho, muchos líderes políticos de América Latina han prometido que seguirán los pasos de Bukele. Por ejemplo, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha iniciado una ofen-

siva similar contra las pandillas: incluso, el estilo comunicativo de la campaña contra la violencia pandilleril copia los modos, los tonos y el contenido de los mensajes de Bukele. Por su parte, el gobierno de Ecuador declaró un estado de excepción luego del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, y algunos de los candidatos presidenciales de ese país han asumido posiciones similares a las de Bukele en materia de seguridad pública. Lo mismo ha ocurrido en Argentina, Chile, Colombia y Guatemala, en donde figuras políticas prominentes (sobre todo de las oposiciones) han manifestado su admiración por el modelo de Bukele y han anunciado su intención de replicarlo en sus países.

Incluso, más allá del discurso de algunos líderes políticos, sectores sociales amplios de los países de la región apoyan esta clase de estrategia de seguridad de mano dura. En México, por ejemplo, es común escuchar a personas elogiando al mandatario salvadoreño en las calles, en los cafés, en los taxis o en las redes sociales. Son frecuentes los comentarios del tipo: “Ojalá en México se atrevieran a hacer algo así”. Lo mismo está ocurriendo en otros países. El caso mexicano no es excepcional.

En una región marcada por la inseguridad, la violencia y el crimen organizado, resulta especialmente atractivo que un mandatario haya encontrado una salida fácil y rápida para estos problemas: una solución sencilla y eficiente para regresarle la tranquilidad a la gente, que vive con miedo y está harta de tantos años de inseguridad. No obstante, diversos especialistas en materia de seguridad dudan de la eficacia de la política de Bukele en el largo plazo por cuatro motivos principales.

Primero, en la práctica, El Salvador se ha convertido en un Estado policiaco, donde cualquier persona puede resultar sospechosa y, por tanto, ser detenida por las autoridades sin mayor explicación. En el mediano plazo, la población se puede hartar de esta situación, la popularidad de Bukele se puede evaporar y el entorno de violencia podría resurgir. Segundo, se trata de una estrategia muy demandante

en términos de presupuesto, personal y esfuerzos. Es difícil que un gobierno pueda sostener algo así por mucho tiempo.

Tercero, casi dos por ciento de la población está en la cárcel: ¿qué hará Bukele?, ¿seguirá encarcelando a sus compatriotas indefinidamente? A este ritmo, el país se convertirá en una prisión con himno nacional. Cuarto, en ocasiones, la violencia represiva del Estado puede resultar efectiva en un primer momento, pero no es extraño que, poco tiempo después, haya un reflujo de violencia criminal, como respuesta y mecanismo de defensa ante la violencia del propio Estado.

Además, la replicabilidad de la política de Bukele está en duda por las razones expuestas anteriormente, pero también porque El Salvador es un país pequeño, lo que facilita la focalización de esfuerzos, recursos y elementos de seguridad. En un país más amplio en términos territoriales y demográficos, una estrategia así se torna casi imposible de sostener.

Inicié este texto con una reflexión crítica frente al sensacionalismo y la nostalgia de algunos liberales que han pegado el grito en el cielo con el ascenso de distintos líderes populistas alrededor del mundo, toda vez que –desde mi punto de vista– han equiparado el nivel de autoritarismo de todos ellos. Pues bien, el caso de Bukele sí es para alarmarse. Más allá de las dudas sobre su efectividad en el largo plazo, la estrategia de seguridad de Bukele es una amenaza, como pocas otras, para los derechos humanos y las libertades políticas de las personas comunes y corrientes.

El Salvador lleva año y medio en un régimen de excepción. Esto significa que los cuerpos policiales y militares pueden detener de forma arbitraria a cualquier ciudadano. También quiere decir que los detenidos no cuentan con acceso a un juicio justo; por el contrario, ser sospechoso es igual a ser culpable, y ser culpable es igual a vivir en una prisión indigna, sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes.

El régimen de excepción también es una herramienta poderosísima para que un gobierno pueda acallar a sus opositores y debilitar la independencia judicial. Asimismo, es un mecanismo que el gobierno puede utilizar para evadir sus responsabilidades en el combate de las causas profundas de la violencia: ¿para qué atender la desigualdad, la pobreza, los bajos niveles educativos, la falta de oportunidades o la precariedad de la mayoría de familias si, en lugar de hacer todo eso, se puede encarcelar a casi dos por ciento de la población?

Por lo demás, no hay espacio para la deliberación, la disidencia, la prensa libre y el debate público en un régimen de excepción. Basta con ver lo que le ocurrió a *El Faro*, forzado a mudar sus oficinas centrales a Costa Rica. Al anunciar esta medida, uno de los directivos principales de este medio declaró: “El desmantelamiento de nuestra democracia, la falta de controles al ejercicio del poder de un pequeño grupo, los ataques a la libertad de prensa y el cierre de todo mecanismo de transparencia y rendición de cuentas en El Salvador amenazan seriamente el derecho ciudadano a estar informado”.

Por si fuera poco, en un régimen de excepción como el salvadoreño, es fácil que cualquier gobierno impulse una agenda nacionalista y sectaria. El clima de guerra –contra enemigos reales o imaginados– tiende a favorecer que la sociedad respalde de forma casi unánime al gobierno, lo que hace crecer la intolerancia contra la crítica, pues las expresiones de oposición o cuestionamiento se consideran actos antipatrióticos o favorables a los enemigos.

Esto es otro golpe importante contra la libertad de expresión y algunos otros derechos, como la libertad de asociación.

En suma, Bukele, quien es un líder carismático con grandes habilidades comunicativas y una política de seguridad sumamente exitosa (en lo inmediato), se ha convertido en un ejemplo a seguir en América Latina y es posible que esto también ocurra en otros países del Sur Global con graves problemas de inseguridad y violencia. Su ascenso en la arena internacional debe tomarse con seriedad y preocupación, pues la posible adaptación de estas políticas de seguridad en otros países representa una auténtica amenaza contra los derechos y las libertades más básicas de millones de personas.

No se trata del ascenso de “un populista más”. Por eso, es peligroso mezclar a todos los líderes con rasgos populistas y colocarles, por igual, la etiqueta de “autócratas” o “antidemócratas”. El caso de Bukele es distinto. Su discurso *antiestablishment* y sus cuestionamientos al orden internacional liberal y al sistema político –supuestamente– democrático de El Salvador son lo de menos. Lo verdaderamente importante es su política de seguridad violatoria de derechos humanos y libertades que, además, se ha tornado cada vez más represiva. Si ese modelo se replica en otros países latinoamericanos, la región estará frente a la tendencia de autoritarismo, violencia de Estado y represión política más fuerte desde la imposición de las dictaduras militares en los años setenta.

LAS AMENAZAS A LA DEMOCRACIA EN MÉXICO: ENTRE LA DESIGUALDAD, EL DESAPEGO DEMOCRÁTICO Y EL POPULISMO

Luis Antonio Huacuja Acevedo¹

*El mayor error que puede cometer
la gente en las democracias
es el olvido de sí misma.*

—THOMAS MANN

En este texto se pretende hacer una reflexión sobre las amenazas que aquejan a la democracia en México, donde el populismo aparece como el enemigo ideal. Sin embargo, el planteamiento que se ofrece busca entender las causas de esas amenazas y comprender el fenómeno político denominado

“Cuarta Transformación”. En la primera parte se profundiza sobre la crisis de la democracia en Occidente, y se resalta la tendencia que apunta a la desigualdad como el origen del desapego democrático. Posteriormente, se presenta el panorama sobre la desigualdad en México para continuar con la reflexión sobre si la llegada de López Obrador al poder es una causa o una consecuencia del desencanto con la democracia. A continuación, se hace un repaso sobre las distintas expresiones del populismo en la historia reciente de México y, posteriormente, se analiza el concepto de populismo desde la teoría de Cas Mudde y Cristóbal Rovira, para identificar en qué categoría y enfoque se pueden ubicar el liderazgo y el gobierno de López Obrador. Finalmente, se hacen algunas consideraciones sobre el discurso, las acciones, las políticas y los resultados de la gestión del presidente mexicano y sus efectos en el ánimo y las preferencias políticas de los mexicanos.

¹ Candidato a doctor en Derecho e Integración Europea por el *Institut Universitari d'Estudis Europeus* de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene una maestría en Derecho por la misma universidad y un posgrado en Unión Europea por el Colegio de Europa. Es licenciado en Derecho por la UNAM. Ha sido responsable del Programa de Estudios sobre la UE en el Posgrado de la UNAM. Es miembro del proyecto Jean Monnet “Impacto, riesgos y oportunidades del populismo en Europa y América Latina”. Es miembro de la Unidad de Estudio y Reflexión Europa+ del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi).

LAS CAUSAS DEL DESAPEGO DEMOCRÁTICO

Vivimos en tiempos complejos, imprevisibles y críticos, caracterizados, precisamente, por la confluencia de distintas crisis. Entre ellas, la del desapego con respecto a la democracia, que se ha acentuado principalmente en Occidente, y cuyas causas más recientes apuntan a la crisis financiera y económica mundial que estalló en 2008 y se hizo acompañar, a su vez, de una crisis política y de representación, debido a la desconfianza que generaron en los ciudadanos los partidos políticos tradicionales y que se tradujo en la búsqueda de alternativas, principalmente de corte antisistema.

Cabe recordar que, después de la Segunda Guerra Mundial, se formó un consenso sobre la importancia de dar un nuevo impulso a la economía global y al libre mercado, junto con la consolidación de los valores democráticos, al tiempo que se procuraban mecanismos para elevar el nivel de vida de la mayoría de la población (Spitz, 2019). Existía entonces un equilibrio entre el libre mercado y las democracias consolidadas, que dotaba de cierta legitimidad al sistema. Las democracias tenían la capacidad de regular y controlar al mercado mientras este satisfacía las demandas del interés general.

Sin embargo, a partir de los años ochenta, ese equilibrio entre las democracias, el mercado y la distribución de la riqueza se fue fracturando, pues los beneficios se concentraron en pocas manos, las estructuras estatales comenzaron a claudicar y los grandes capitales tomaron el control para aumentar sus beneficios e imponer las reglas, mientras la desigualdad económica se fue acrecentando con el tiempo en perjuicio de las poblaciones más vulnerables, lo que creó un malestar generalizado y creciente. Cada vez son más las voces que señalan los excesos del capitalismo neoliberal, que han favorecido a los más poderosos en detrimento del resto de la sociedad, al punto de producir una ruptura política y social que

acentuó la polarización y ha causado el desapego a la democracia.

La importante concentración de la riqueza a costa del debilitamiento de los salarios y los derechos laborales, junto con el control de los medios de comunicación y el descuido de la calidad de las instituciones se ha calificado incluso como “fundamentalismo del libre mercado”, en tanto que no logró generar una distribución de beneficios de manera equitativa y sí, en cambio, profundizó la desigualdad (Acemoglu, 2023). Los gobiernos se fueron alejando progresivamente de los ciudadanos, que quedaron marginados de las decisiones políticas y económicas. Eso provocó tensiones, desencanto y, quizás lo más grave, la erosión de la confianza en la justicia y en las capacidades de los gobiernos democráticos. Como ha señalado Martin Wolf, al hablar de la crisis del capitalismo democrático: “las instituciones han fallado a la gente y no al revés” (Wolf, 2023).

El estadounidense y nobel de Economía, Joseph Stiglitz, en un reciente artículo titulado “Desigualdad y democracia”, sostiene que hay una relación intrínseca entre la desigualdad económica y la desigualdad política (Stiglitz, 2023). Los grandes capitales se alimentan, entre otras cosas, de políticas que favorecen la evasión de impuestos, principalmente de los más ricos; de un sistema educativo destinado a los más privilegiados, y de una regulación antimonopolio defectuosa que favorece la acumulación y el abuso del poder del mercado. “Esta desigualdad política se refuerza a sí misma y conduce a políticas que afianzan aún más la desigualdad económica”.

La profundización de la desigualdad y su impacto en la confianza en la democracia coincide con los resultados que ha arrojado el “Barómetro democrático”, publicado en septiembre de 2023 por la Fundación Open Society, que evidencia también la tendencia al desapego democrático y muestra que la principal preocupación global es la pobreza y la desigualdad, incluso por encima del cambio climático, la corrupción, la seguridad alimentaria

y la estabilidad política². En suma, la desigualdad produce la ruptura de la cohesión y la confianza social. El propio Alexis de Tocqueville, uno de los principales ideólogos del liberalismo, advertía que la permanente desigualdad de condiciones abriría la puerta a un importante retroceso democrático.

LA DOLOROSA DESIGUALDAD EN MÉXICO

Si en Occidente la desigualdad es una importante amenaza a la democracia, en México la situación es aún más crítica. La desigualdad es uno de sus principales y más añejos problemas. México es un país muy rico en recursos naturales y con una posición geográfica privilegiada, lo que hace que sea uno de los Estados con mayor biodiversidad del planeta. Es una de las primeras quince economías del mundo. Se ha insertado de manera importante en la economía global desde la década de los ochenta, y tiene relaciones de libre cambio con las principales potencias económicas. Sin embargo, es uno de los países con mayor desigualdad en el planeta, solo superado, en proporción, por Mozambique y la República Centrafricana (Ríos, 2023).

México es profundamente desigual. El hombre más rico del país y uno de los quince más ricos del planeta concentra más riqueza que la mitad de la población (65 millones de mexicanos). Un estudio de la CEPAL, de marzo de 2023, evidencia que, en México, el 1 % de la población posee el 41.2 % de la riqueza. En lo que se refiere a los activos financieros, la concentración es aún mayor, pues el 1 % de la población posee el 87.9 % de la riqueza financiera, y, en cuanto a la concentración de patrimonio, solo el 0.1 % de las familias en México posee el 22.3 % de

la riqueza neta (activos físicos, más activos financieros y menos pasivos financieros)³.

La desigualdad en México no solo es producto de una pésima distribución del ingreso, sino también de un diseño institucional defectuoso y de estructuras inoperantes que facilitan esa concentración excesiva de los ingresos en unos cuantos. Solo así se entiende que, mientras las empresas en casi todo el mundo reparten sus ganancias en una mayor proporción para los trabajadores que para los dueños, en México es totalmente al revés (Ríos, pp. 74 y 75). Por ejemplo, mientras que, según el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los dueños de las empresas se quedan con el 31 % y reparten para sus trabajadores el 69 %, en México los dueños se quedan con el 66 % y reparten a sus trabajadores solo el 34 % de las ganancias.

Esa diferencia es todavía mayor en algunos sectores específicos, como el financiero, donde el reparto de ganancias representa únicamente el 22 % para los trabajadores, mientras que, en el sector de medios de comunicación, es el 16 % y en el de la minería de tan solo el 15 % (Ríos, pp. 84 y 85). La situación es más grave si se considera que las ganancias en estos tres sectores tienen lugar a expensas del Estado, que es quien otorga autorizaciones en el primer caso y concesiones en el segundo y tercer casos, y donde, no por casualidad, invierten los hombres más ricos de México.

Precisamente los rubros de telecomunicaciones, medios de comunicación, minería y de servicios financieros son un ejemplo de la relación perversa entre el poder económico y el poder político, que evidenció el estudio “Desigualdad extrema en México. Concentración del poder económico y

² “Barómetro democrático”, Fundación Open Society, septiembre de 2023. Disponible en: <https://www.opensocietyfoundations.org/focus/open-society-barometer>. Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2023.

³ Miguel del Castillo, “La distribución del ingreso y la riqueza: nuevas aproximaciones conceptuales y metodológicas”, CEPAL, marzo de 2023. Disponible en: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/48636-la-distribucion-ingreso-la-riqueza-nuevas-aproximaciones-conceptuales>. Fecha de consulta, 20 de septiembre de 2023.

político” de Oxfam, 2015⁴. Estos sectores cuentan con unas de las legislaciones más laxas en todo el mundo, hechas a la medida para que las empresas puedan tener todos los beneficios en detrimento de sus trabajadores, de sus proveedores, de los consumidores, del medio ambiente, de sus competidores y de la propia hacienda pública, y quedan sometidos a muy escasos controles, lo que les permite abusar de su posición dominante.

Si esto no fuese suficientemente grave, habría que agregar la desigualdad tributaria. En un país con una excesiva concentración de la riqueza como México, son los hogares los que aportan cerca del 73 % de los ingresos tributarios, en vez de las empresas. Los millonarios en México pagan muchos menos impuestos que la clase media en proporción de sus ingresos.

Los ricos más ricos, que representan el 0.001% de la población, pagan la misma proporción respecto de sus ingresos que alguien que gana el equivalente a 533 dólares al mes (Ríos, pp. 127 y 128). Además, pueden pagar a grandes despachos que buscan resquicios en las leyes fiscales para eludir el pago de impuestos o, de plano, evadir el pago, por medio de artilugios legales o, en el extremo, logran que el Estado mexicano les condone el pago de impuestos. Además de las defectuosas tasas impositivas, las personas con actividad empresarial evaden casi el 70 % de los impuestos que deberían pagar. Mientras que el estrato bajo, que representa el 50 % de la población, evade 22.912 millones de pesos al año, el estrato alto (el 10 % superior) evade 429,116 millones, o sea, casi veinte veces más.

México es, por lo tanto, un paraíso legal, laboral y fiscal para las empresas nacionales y extranjeras, lo que se traduce en violencia económica contra la mayoría de la población y que se acentúa en los es-

tratos económicos más vulnerables. México padece una desigualdad sistémica que resulta, inequívoca y profundamente, antidemocrática.

LA CUARTA TRANSFORMACIÓN EN MÉXICO: ¿CAUSA O CONSECUENCIA?

El 1 de julio de 2018 Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se llevó la victoria en las elecciones a la Presidencia de la República con el 53 % de los sufragios y se convirtió en el presidente más votado en la historia de México. Ganó en 31 de las 32 entidades federativas del país, se hizo con 19 de los 32 congresos locales y obtuvo la mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso federal. La proporción de los votantes que le dieron su confianza era muy similar en rangos de edad, posición económica, escolaridad y género.

¿Qué es lo que llevó a los mexicanos a otorgar su voto a un líder como AMLO y a un partido político que apenas había obtenido su registro cuatro años antes? Por un lado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) había regresado al poder con bríos renovados, con la oferta de ser un “Nuevo PRI”, distinto, después de dos mandatos del Partido Acción Nacional (PAN). El PRI ofrecía juventud, rostros nuevos, innovación y preparación. Sin embargo, todo se vino abajo conforme transcurría el sexenio 2012-2018. La percepción sobre la corrupción alcanzó niveles récord. Seis gobernadores priistas fueron procesados y algunos de ellos enjuiciados durante el sexenio de Peña Nieto por cargos de peculado, desvío de recursos, lavado de dinero y crimen organizado, entre otros.

Peña Nieto terminó su sexenio con una aprobación del 24 %. El ánimo social era de malestar y decepción ante un gobierno que apostaba por la frivolidad y la lejanía respecto de la ciudadanía. De acuerdo con el Índice del Pew Research Center, para 2017,

⁴ Gerardo Esquivel, “Desigualdad extrema en México: concentración del poder económico y político”, OXFAM, junio de 2015, https://oxfamMexico.org/wp-content/uploads/2017/04/desigualdadextrema_informe.pdf. Fecha de consulta: 2 de septiembre de 2023. 2023.

la satisfacción con la democracia en México era de apenas el 6 %⁵.

A diferencia de otras partes de la región latinoamericana, en México no había un ánimo desbordado de enojo, aunque había condiciones para que así fuera debido a los agravios acumulados. La más lacerante de ellas consistía en una silenciosa desigualdad que golpeaba de manera constante el ánimo de los ciudadanos y alimentaba al germen de la polarización.

Por eso, en aquel 2018, cerca del 85 % de los mexicanos que acudieron a votar lo hicieron por un cambio. AMLO lo capitalizó. Había hecho su tarea. Recorrió cada rincón del país, llenó plazas y foros y, sobre todo, se dedicó a escuchar las necesidades de la gente. Fue construyendo un discurso incluyente. Hizo suyos los reclamos ciudadanos, las necesidades, las carencias y los ánimos.

Se acercó a los históricamente olvidados, maltratados y excluidos. Les habló con sus mismas palabras y elaboró una narrativa para hablar en su nombre, lo que le permitió tejer un fuerte lazo afectivo con la ciudadanía, que, al paso de los años, sigue mostrando suficiencia y solidez. Por eso, aquel triunfo se celebró con tanta euforia, porque, como llegó a escribir Juan Villoro: “no se ha votado por un programa de gobierno, sino que se ha definido el tamaño de una esperanza”.

La vorágine mediática, la lucha constante por el relato y las trampas de la perfección, nos hacen perder de vista que la democracia es un proceso político en constante evolución y también de aprendizaje. Por lo tanto, los procesos políticos no están exentos de accidentes, de desatinos, de

excesos, de carencias, de contradicciones y de frustraciones. Corresponde a todos cuidar, vigilar, entender y reconocer dichos procesos en su justa dimensión.

MÉXICO Y SU AMPLIO MENÚ POPULISTA

Estamos en una época de cambios políticos, geopolíticos y tecnológicos vertiginosos, que nos ha orillado a la inmediatez y a la simplicidad, ante las que es relativamente fácil sucumbir. Es el caso del concepto de “populismo”, del que se habla mucho, se entiende poco y se le llena de atributos como origen de todos los males y las amenazas democráticas.

En México, por ejemplo, se ha hablado del propio movimiento revolucionario de 1910 como una revolución populista, por tener sus causas y centrar su atención en los derechos de los obreros y campesinos de la época. Más de tres décadas después, llegó a la Presidencia el general Lázaro Cárdenas, cuyo gobierno fue calificado como populista revolucionario, pues se caracterizó por la reivindicación de los derechos del pueblo mexicano, por la repartición de tierras y por un nacionalismo revolucionario que tuvo su expresión más clara en la expropiación petrolera.

Los gobiernos del PRI de los años setenta representaron el populismo autoritario, primero bajo la presidencia de Luis Echeverría, caracterizado por la concentración del poder, la intolerancia y la represión de movimientos sociales y estudiantiles, que combinaba con importantes baños de masas. En 1976 llegó a la Presidencia José López Portillo, como candidato único. Enfrentó la contradicción del auge petrolero en México y una muy severa crisis económica, cuya gestión culminó con su decisión de nacionalizar la banca.

En 2000, Vicente Fox fue el primer candidato de oposición en ganar una contienda presidencial,

⁵ Richard Wike, *et al.*, “Globally, Broad Support for Representative and Direct Democracy. But many also endorse non-democratic alternatives”, Pew Research Center, 16 de octubre de 2017, p. 13. Disponible en: <https://www.pewresearch.org/global/2017/10/16/globally-broad-support-for-representative-and-direct-democracy/>. Consultado el 2 de septiembre de 2023.

después del dominio hegemónico del PRI tras sesenta años en el poder. Como recurso de campaña, Fox hizo gala de un populismo discursivo en pos del cambio, con la consigna de “sacar al PRI de Los Pinos”, refiriéndose a la residencia oficial que ocupaba entonces el presidente de la República. La retórica de Fox, ataviado con sombrero y botas vaqueras, pronto se convirtió en demagogia y en frustración de quienes pedían un cambio verdadero en el país. Seis años después de terminar su mandato, Fox llegó al absurdo de apoyar abiertamente la candidatura del postulante del PRI a la Presidencia de la República, para “regresar al PRI a Los Pinos”. Felipe Calderón, por su parte, después de un cuestionado triunfo electoral en 2006, basó su popularidad en emprender la llamada guerra contra el narcotráfico, que lo llevó, incluso, a portar un traje militar en más de una ocasión, cual combatiente en esa guerra accidentada en contra de los carteles de la droga.

En 2018, AMLO llegó a la Presidencia de la República con un discurso claramente populista, adversarial y progresista. Se lanzó contra las élites económicas y políticas, y contra las instituciones anquilosadas, bajo el lema “Por el bien de todos, primero los pobres”.

Con la sucesión presidencial en ciernes, el partido en el gobierno ha apostado por la doctora Claudia Sheinbaum, feminista, científica y exjefa del Gobierno de la Ciudad de México, quien carece de los atributos de un líder carismático como AMLO, pero garantiza la continuidad del proyecto de la llamada Cuarta Transformación, sobre todo en cuanto a las políticas sociales y la prioridad hacia los menos favorecidos, con el sello propio que ha prometido. Hereda las amplias simpatías y aprobación del obradorismo, que serán un factor determinante en la contienda presidencial de 2024, y la colocan muy por encima de los demás aspirantes, de acuerdo con la mayoría de las mediciones demoscópicas.

Por otro lado, la aspirante a candidata, la senadora Xóchitl Gálvez, irrumpió en la escena política en

julio de 2023 para darle un soplo de aire fresco a la coalición opositora conformada por PAN, PRI y PRD. Haciendo valer la espontaneidad, el desparpajo y lenguaje florido que la caracterizan, enfrenta al partido en el gobierno, mientras pone énfasis en su origen indígena y en los méritos que la llevaron a ser una empresaria próspera. Utiliza, igualmente, un discurso populista. Confiesa que recibió una señal de una mariposa de colores que la llevó a decidir postularse como candidata a la Presidencia y no tiene empacho en ser comparada con la Virgen de Guadalupe, aludiendo a su aparición cuando más se le necesitaba. Si algo debería preocupar es la postulación vía candidatura independiente de alguien como Eduardo Verástegui, actor con trayectoria en Estados Unidos, con simpatías y apoyos de personajes de la talla de Donald Trump y Steve Bannon, y cobijado por la extrema derecha internacional, como el partido Vox en España, de quien utiliza los lemas, los colores y hasta la tipografía de esa agrupación política para promover su candidatura y que ha calificado como “terroristas” a los defensores de los ODS, del cambio climático y de lo que él y otros como él llaman la “ideología de género”.

Se puede decir que el populismo es un recurso, una herramienta política, una estrategia, un discurso, una política económica, una ideología o una combinación de todo lo anterior. El populismo parece estar presente en la mayoría de las expresiones políticas de la historia reciente de México, aunque de distinta manera. Sin embargo, conviene abundar sobre el concepto con mayor rigor, para alejarse de la perplejidad que provoca el término “populismo” y, sobre todo, para advertir si el populismo, en sí, puede considerarse como una amenaza a la democracia.

EL POPULISMO Y LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

El populismo es un concepto muy socorrido en los últimos años para tratar de describir, sobre todo,

ciertas expresiones políticas, como las de la extrema derecha en Europa y algunos regímenes latinoamericanos de izquierda, con sus distintas variantes. En un interesante y valioso ejercicio de exorcismo y depuración, Cas Mudde y Cristóbal Rovira despejan del concepto de populismo los estereotipos, las especulaciones y los prejuicios, al tiempo que acusan el abuso generalizado del término, que causa confusión y frustración (Mudde y Rovira, 2022, p. 22), sobre todo porque se utiliza de manera recurrente con una connotación negativa, lo cual dificulta su comprensión, así como la de sus distintas variantes y enfoques.

Como también apunta Daniel Innerarity: “no comprendemos bien aquello que detestamos” (Innerarity, 2020). De ahí la conveniencia de problematizar un concepto como el de populismo y emprender la tarea de reflexión y análisis que permita revisarlo con profundidad y amplitud, sobre todo si se pretende el acercamiento a un fenómeno como el de la Cuarta Transformación en México y al liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El proyecto de López Obrador contiene distintos elementos que lo identifican, inequívocamente, con el populismo en su acepción más primaria. Es un líder carismático, con un discurso de reivindicación del pueblo y de enfrentamiento con las élites que representan el *statu quo*. La premisa de “Por el bien de todos, primero los pobres” es el eje central de su propuesta, que coincide con su posición soberanista del Estado.

Conviene, sin embargo, identificar las distintas variantes, expresiones y enfoques del concepto de populismo que ofrecen Mudde y Rovira, para determinar cuál se adecua más al fenómeno de la Cuarta Transformación en México.

En la recta final de su gobierno, hay suficientes elementos para advertir que el obradorismo está lejos del populismo económico. López Obrador ha optado, más bien, por el pragmatismo económico: prudencia en la política monetaria, cuidado de las finanzas públicas y apertura comercial.

López Obrador también está lejos de ser un caudillo. A pesar de los señalamientos de sus críticos, López Obrador cuenta con la legitimidad que le otorgaron en las urnas millones de mexicanos y que, pese a que su gobierno no ha estado exento de errores, excesos, contradicciones y limitaciones, conserva muy elevados márgenes de aprobación. Nunca ha estado en sus ideas ni en su proyecto ni en sus propuestas la posibilidad de perpetuarse en el cargo. Como apasionado de la Historia que es, uno de sus principales referentes es el líder revolucionario Francisco I. Madero, fundador del partido “antireeleccionista”. Quienes han insistido en promover la idea de su reelección han sido, en su gran mayoría, sus detractores, quizá con el deseo de materializar sus temores y justificar sus prejuicios.

El proyecto de AMLO dista mucho de un nacionalismo chovinista. Por el contrario, a pesar de las constantes presiones de Estados Unidos, AMLO ha sido un defensor de la migración y un convencido de la necesidad de atender el fenómeno desde sus causas, con todo y la complejidad que enfrenta México en las fronteras norte y sur del país.

En la misma tesitura, también resulta difícil identificar a AMLO como un líder autoritario. Sin soslayar sus excesos verbales y su beligerancia discursiva, lo cierto es que en momentos críticos ha mostrado compostura. Suele inconformarse en sus conferencias de cada mañana, pero asume, en el marco de la legalidad, los constantes reveses que recibe, tanto de la Suprema Corte de Justicia, como del Congreso mexicano e, inclusive, de la autoridad electoral.

Luego entonces, y a partir del planteamiento de Mudde y Rovira, el enfoque que mejor representa al populismo de AMLO es el ideacional, que supone una construcción ideológica (pp. 27-33). Es una suerte de ideología sutil, que se entremezcla con otras ideologías o se asimila a ellas. Con base en este enfoque ideacional, el populismo resulta complementario y no sustancial. Como se aprecia claramente en el proyecto de la Cuarta Transfor-

mación, hay una variedad de componentes ideológicos que coexisten y que, incluso, llegan a ser contradictorios, aunque tienden a adaptarse.

La búsqueda de la justicia social en el proyecto de AMLO también coincide con el enfoque ideacional, en la medida que el centro es el pueblo, que confiere fuerza al populismo respecto a las élites económicas y mediáticas corruptas (pp. 45 y 46). En esa medida existe una apuesta por mecanismos de democracia directa, que incorporan a la población en la toma de las decisiones públicas, lo que le aporta una fuerza democratizadora.

Por lo tanto, no existe, necesariamente, una relación directa entre democracia y populismo. Es, más bien, una relación compleja donde “el populismo puede ser amigo o enemigo de la democracia (liberal), dependiendo de la fase del proceso de democratización” (Mudde et al., 2022, p. 49).

Conviene, igualmente, apuntar que, en todo caso, el proyecto de la Cuarta Transformación también se ubica dentro de la categoría de populismo progresista e incluyente –opuesto al populismo excluyente y antiderechos propio de la extrema derecha–. El gobierno de AMLO ha ampliado el catálogo de derechos a garantizar y mantiene una variante que resulta fundamental: la lucha contra la desigualdad, no solo en el discurso, sino en la sustancia, en la política pública, con base en resultados, lo que le otorga legitimidad.

Con todo, el concepto de populismo, si bien sirve para describir algunos aspectos de la llamada Cuarta Transformación encarnada en la figura de AMLO, resulta insuficiente para explicar el fenómeno, que para su comprensión requiere de un tratamiento integral. Si se desagregan sus distintos elementos resulta incomprensible. Si, por el contrario, se analizan en su conjunto, en cuanto al discurso, políticas y resultados, entonces la perspectiva cambia de manera importante.

DEMOCRACIA, AFECTOS Y RESULTADOS

La Cuarta Transformación es un fenómeno exitoso en distintas dimensiones. Una de ellas es la dimensión discursiva, específicamente por el relato en nombre de los más vulnerables del país con la incorporación de los reclamos sociales y su traslado a la arena pública y mediática. La visibilización de las carencias, la desigualdad, el racismo y las injusticias que han lastimado históricamente a los más oprimidos y la claridad del diagnóstico sobre los principales males del país dotan de efectividad a ese discurso.

Pero si, además, el discurso va acompañado de acciones de gobierno, entonces cobra mucha más fuerza. A manera de ejemplo, en un país donde solo un 35 % de las personas en edad de jubilarse tienen derecho a una pensión y, cuando es el caso, el promedio de esas pensiones es de poco más de 7 mil pesos mexicanos al mes (el equivalente a 409 dólares), la ayuda complementaria del gobierno no solo ayuda a las familias a sobrevivir, sino que tiene un impacto muy positivo en el ánimo de la gente y fortalece el lazo afectivo hacia AMLO.

Muchas de los apoyos sociales son insostenibles en el largo plazo, si no van acompañados del refuerzo de las políticas económicas y, sobre todo, fiscales, pero resuelven problemas reales, mediante acciones tangibles y concretas, en un país con una pronunciada desigualdad, donde muchas de las discusiones públicas como la militarización y la división de poderes resultan abstracciones muchas veces incomprensibles (Lara, 2023). Para muchas personas, esos apoyos directos tienen un significado tan potente como haberles devuelto la dignidad.

En la dimensión del quehacer público, AMLO estableció prioridades, también más allá del discurso. En sus primeros tres años de gobierno pudo construir alianzas legislativas para contar con la mayoría suficiente para aprobar reformas

constitucionales. Contaba con el capital político para haber impulsado reformas a la Constitución en materia energética o electoral, pero prefirió apuntalar los programas sociales para dotarles de rango constitucional porque esa era su prioridad. Desde que asumió el cargo, en 2018, el gasto total en programas sociales materialmente se duplicó. El beneficio para los adultos mayores, madres solteras, jóvenes estudiantes y personas con discapacidad representa, en su conjunto, cerca del 20 % de la población.

Durante los primeros cinco años de gobierno de AMLO, el salario mínimo aumentó 134.8 %, después de cuatro décadas de estancamiento. El incremento significativo del salario, junto con otras políticas públicas, como la eliminación del *outsourcing*, abonaron a que las tasas de desempleo llegaran a su nivel más bajo en los últimos diecisiete años, lo que también ha contribuido a reducir de manera importante la pobreza laboral. Según cifras del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), la pobreza total se redujo en 5.1 millones, lo que implica una reducción de 4.3 puntos porcentuales desde 2018. En otras palabras, las políticas sociales del gobierno mostraron su efectividad al lograr disminuir la desigualdad.

Existen muchas tareas pendientes y preocupaciones varias como la seguridad, el combate al crimen organizado, la corrupción y la prevalencia de complicidades con los sectores económicos, así como la excesiva condescendencia hacia las Fuerzas Armadas, entre otras. Sin embargo, el ánimo del ciudadano mexicano, en general, es positivo. La democracia económica se mide en bienestar y se traduce en reconocimiento. En el tramo final de su mandato, el presidente López Obrador goza de una aprobación de alrededor del 60 %. La encuesta sobre la aprobación presidencial del periódico *El Financiero* del 3 de julio de 2023 arrojó un dato revelador: el 87 % de las personas que votaron por AMLO en 2018, y el 12 % de quienes votaron por otro candidato en esa ocasión, aprueban su gestión.

El factor AMLO y la buena salud de la Cuarta Transformación también se reflejan en el territorio. El partido Morena y sus aliados gobiernan veintitrés de las 32 entidades federativas del país y conservan la mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso federal. Las previsiones para las elecciones generales de 2024 apuntan a la continuidad de este proyecto de manera muy holgada, lo que también se explica porque la oposición no ha sabido y no ha podido construir un relato atractivo y creíble para la mayoría de la población.

CONSIDERACIONES FINALES

En el ámbito global, hay una crisis de la política que se refleja también en una crisis de los modelos democráticos en distintas partes del mundo. Se ha descuidado el equilibrio entre el Estado y el mercado y, sobre todo, se ha llevado al extremo la desigualdad política y económica, lo que ha provocado un malestar social que favorece la desafección de los valores democráticos y la irrupción de alternativas antisistema.

En el caso de México, la histórica desigualdad es tan profunda y se ha afianzado de tal manera en las estructuras políticas y económicas que, incluso, parece normalizarse y apelar a la resignación. Sin embargo, su desatención resulta absolutamente insostenible y podría llegar al extremo de amenazar la propia existencia colectiva del Estado.

La democracia supone un conjunto de valores, entre ellos el de procurar la mayor igualdad posible dentro de una sociedad. Soslayar este valor implica un riesgo mayúsculo para la democracia que desemboca en la ruptura. Por eso, la irrupción de las expresiones antisistema, como el populismo, no son la causa, sino que son la consecuencia de esa ruptura con los esquemas democráticos tradicionales. En este sentido, el propio concepto de populismo merece un tratamiento mucho más riguroso y diferenciado en cuanto a sus características, expresiones, su utilización como herramienta política y sobre sus propias limitaciones.

La llamada Cuarta Transformación en México y el liderazgo de López Obrador son un fenómeno político complejo que contiene ciertos elementos populistas que, sin embargo, no lo definen. La llegada de López Obrador a la Presidencia de la República ha sido un catalizador del descontento acumulado. Su gestión de gobierno, no exenta de desaciertos, ha atinado en el diagnóstico y sus políticas sociales han resultado efectivas en el combate a la desigualdad. De ahí que se haya creado un lazo afectivo tan robusto. Los procesos democráticos actuales implican reajustes y exigen nuevas fórmulas que atiendan de mejor manera las demandas sociales. La consolidación de la democracia, decía Tocqueville, depende de la valía intrínseca de sus valores.

REFERENCIAS

- Acemoglu, Daron, “¿El fin del capitalismo democrático? Cómo la desigualdad y la inseguridad alimentaron una crisis en Occidente”, en *Foreign Affairs*, 20 de junio de 2023. Disponible en: https://www.foreignaffairs.com/reviews/end-democratic-capitalism?utm_medium=social&utm_source=twitter_posts&utm_campaign=tw_daily_soc. Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2023.
- De Tocqueville, Alexis, *Democracy in America*, New York, USA, Mentor, 1984.
- Del Castillo, Miguel, “La distribución del ingreso y la riqueza: nuevas aproximaciones conceptuales y metodológicas”, CEPAL, marzo de 2023. Disponible en: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/48636-la-distribucion-ingreso-la-riqueza-nuevas-aproximaciones-conceptuales>. Fecha de consulta: 20 de septiembre de 2023.
- Esquivel, Gerardo, “Desigualdad extrema en México. Concentración del poder económico y político”, OXFAM, junio de 2015. Disponible en: https://oxfamMexico.org/wp-content/uploads/2017/04/desigualdadextrema_informe.pdf. Fecha de consulta: 2 de septiembre de 2023.
- Innerarity, Daniel, “Comprender lo que se desprecia”, *La Vanguardia*, 6 de noviembre de 2020. Disponible en: <https://www.lavanguardia.com/opinion/20201106/49262190768/comprender-lo-que-se-desprecia.html>
- Lara, Guido, “Sueños y aspiraciones”, *Revista Nexos*, núm. 545, año 46, mayo 2023, pp. 56-62.
- Moreno, Alejandro, “Aprueba 57% labor de AMLO en junio, según Encuesta EF”, *El Financiero*, 3 de julio, 2023. Disponible en: <https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/07/03/aprueba-57-labor-de-amlo-en-junio/?outputType=amp>
- Mudde, Cas y Rovira, Cristóbal, *Populismo. Una breve introducción*, Madrid, Alianza Editorial, 2022.
- Peiris, Chanu y Samarasinghe, Natalie, “Barómetro democrático”, Fundación Open Society, septiembre de 2023. Disponible en: <https://www.opensocietyfoundations.org/focus/open-society-barometer>. Fecha de consulta 25 de septiembre de 2023.
- Ríos, Viri, “De un lado y del otro. Así se vive la desigualdad en México”, *Especial El País*, 30 de enero de 2023. Disponible en: <https://elpais.com/mexico/2023-01-30/de-un-lado-del-otro-asi-se-vive-la-desigualdad-en-mexico.html>. Fecha de consulta: 2 de septiembre de 2023.
- Ríos Viri, *No es normal. El juego oculto que alimenta la desigualdad mexicana y cómo cambiarlo*, México, Penguin Random House, 2021.
- Spitz, Jean-Fabien, “El capitalismo democrático: ¿el fin de una excepción histórica?”, *Revista Nueva Sociedad*, núm. 282, julio-agosto de 2019. Disponible en: <https://nuso.org/articulo/el-capitalismo-democratico-el-fin-de-una-excepcion-historica/>. Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2023.
- Stiglitz, Joseph, “Desigualdad y democracia”, en *El País*, 23 de septiembre, 2023. Disponible en: https://elpais.com/economia/negocios/2023-09-24/desigualdad-y-democracia.html?utm_medium=Social&utm_campaign=echobox&utm_source=Twitter&ssm=-TW_CM_AME#Echobox=1695532301
- Wike, Richard; Simmons, Katie; Stokes, Bruce, y Fetterolf, Janell, “Globally, Broad Support for Representative and Direct Democracy.

But many also endorse nondemocratic alternatives”, Pew Research Center, 16 de octubre de 2017. Disponible en: <https://www.pewresearch.org/global/2017/10/16/globally-broad-support-for-representative-and-direct-democracy/> (p. 13). Fecha de consulta: 2 de septiembre de 2023.

Wolf, Martin, *La crisis del capitalismo democrático*, Barcelona, España, Ediciones Deusto, 2023.

LAS AMENAZAS A LA DEMOCRACIA LIBERAL COMO FENÓMENO GLOBAL: EL CASO DE VENEZUELA¹

Anais López Caldera²

*Nuestras democracias fallan en prevenir el absurdo
y asumo que estamos todos tan agotados
que hemos dejado la papa caliente
de nuestras crisis milenaristas
a los únicos que las desean, los desaforados.*

—DIEGO FONSECA
(MILEI Y LOS MARCIANOS DE MAUSSIAN)

Hoy, es indiscutible que la democracia liberal, que se había erigido triunfante como el único modelo de referencia en términos de libertad y bienestar

¹ Este texto recoge partes importantes de una reflexión elaborada junto a Sabine Kurtenbach (GIGA-Institute) sobre el deterioro del marco institucional democrático en Venezuela que se publicará a finales de 2023 en el libro *Venezuela: De la Pax Malandra a la Paz Ciudadana: Una aproximación al tipo de conflicto y violencias que se viven en Venezuela y alternativas para transformarlos*.

² Es socióloga y especialista en estudios de género y planificación del desarrollo. Actualmente, se desempeña como coordinadora de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert en Venezuela.

para organizar la vida en sociedad en Occidente después de la Segunda Guerra Mundial, hace agua por todos lados. Muchos y muy calificados políticos y analistas expertos en el estudio de los sistemas democráticos en Occidente –Munk, Welp y Urbinati, por mencionar algunos– han hecho grandes contribuciones para ayudar a comprender lo que ha pasado y cómo se ha erosionado el sistema democrático.

En el caso de Venezuela, buena parte del continente americano y, en general, el mundo occidental ve todavía con estupor cómo fue que uno de los países más prósperos, una de las democracias más estables de la región en el siglo XX, cayó en desgracia. Cabe recordar que, cuando no pocos países de América Latina estaban gobernados por dictaduras militares, y, más tarde, cuando la región experimentaba altos niveles de conflictividad por los ajustes macroeconómicos derivados del cambio estructural que promovió el Consenso de Washington, Venezuela aparecía como un ejemplo de estabilidad y orden en su sistema democrático, le-

vantado sobre las bases del pacto suscrito por las principales fuerzas políticas a partir de la caída de la última dictadura militar en 1958. Este acuerdo es más ampliamente conocido como el Pacto de Puntofijo³.

¿Qué pasó entonces? ¿Cómo fue que, en un período relativamente corto, el país se precipitó y apostó todas sus esperanzas a un desconocido caudillo militar, que, después de intentar un golpe de Estado en 1992, aprovechó el espacio para lanzar un discurso breve pero contundente contra el funcionamiento del sistema democrático? En palabras del propio Chávez después de ser capturado:

Compañeros, por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Nosotros en Caracas no logramos controlar el poder [...] es hora de reflexionar, ya vendrán nuevas situaciones, el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor⁴.

Hugo Chávez solo estuvo dos años en una cárcel común que se convirtió en el lugar de peregrinación para todos aquellos que se sintieron reivindicados en sus palabras y en su propuesta de erradicar a las élites partidistas y por extensión al sistema democrático representativo y basado en la división de poderes. Desde ahí, proyectó su liderazgo político y transformó su intentona golpista en una apuesta electoral que encontró terreno fértil, debido al severo desgaste de las élites bipardistas de Acción Demo-

crática y Copei⁵, que se habían alternado en el poder durante poco más de treinta años. A esta situación se sumaba una crisis económica que duraba ya una década y una cultura política construida de forma clientelar sobre la base del rentismo petrolero⁶. Todos estos factores crearon las condiciones para que una buena parte de la población, agobiada por la desigualdad, despolitizada y con una formación ciudadana precaria, abrazara con fervor el discurso radical y “nuevo” de Hugo Chávez, discurso que, por cierto, no solo entusiasmó a la izquierda venezolana y a la población en general, sino también a buena parte del progresismo y de las izquierdas en todo el hemisferio occidental.

Fue así como el 6 de diciembre de 1998, con una clara mayoría, llegó Hugo Chávez a la Presidencia de la República. Han transcurrido veinticinco años de ese acontecimiento, cinco lustros de chavismo en el poder que han acabado con el Estado de derecho en su totalidad y en los que se ha erigido un nuevo tipo de tiranía o, para decirlo eufemísticamente, un

3 El Pacto de Puntofijo fue un acuerdo de gobernabilidad entre los partidos políticos venezolanos AD, Copei y URD, firmado el 31 de octubre de 1958 para el establecimiento de una vida democrática pocos meses después del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez y antes de las elecciones de diciembre de ese mismo año. Este pacto permitió la estabilización en los primeros años del sistema democrático representativo. El objetivo del pacto era conseguir la sostenibilidad de la recién instaurada democracia, mediante la participación equitativa de todos los partidos en el gabinete ejecutivo del partido triunfador, sin el Partido Comunista de Venezuela y los sectores afines a la derrocada dictadura de Marcos Pérez Jiménez (https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_de_Puntofijo).

4 https://www.youtube.com/watch?v=d6jMP_TYgS8

5 Acción Democrática era un partido socialdemócrata nacido a inicios de los años cuarenta. Fue la principal fuerza política del país hasta finales de la década de los ochenta, cuando logró por última vez ganar una elección presidencial. Por su parte, el Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei) es un partido de orientación socialcristiana, fundado el 13 de enero de 1946, enmarcado dentro de la tendencia ideológica como partido de centro democrático y humanismo cristiano. Desde 1958 hasta 1998, Copei mantuvo el poder político sobre Venezuela de manera bipartidista con Acción Democrática (<https://es.wikipedia.org/wiki/Copei>).

6 De acuerdo con Nelly Arenas: “Venezuela es un país rentista, en el sentido de que su principal recurso, el petróleo, genera un ingreso que no tiene contrapartida productiva. Aunque en un comienzo la renta petrolera viabilizó el programa democrático, el colapso del modelo rentista a fines de los setenta se tradujo también en una crisis de la democracia. Sobre esta crisis se montó Hugo Chávez, quien, una vez en el poder, no solo no corrigió, sino que exacerbó los rasgos más negativos de este diseño económico, y les sumó un manejo del poder populista que, lejos de mejorar, ha deteriorado la calidad de la democracia en Venezuela” (<https://nuso.org/articulo/la-venezuela-de-hugo-chavez-rentismo-populismo-y-democracia/>).

tipo de régimen democrático *iliberal*⁷. El término es una forma nueva de nombrar al autoritarismo político/electoral que bloquea de hecho cualquier posibilidad de alternancia en el poder en lo que se refiere al Ejecutivo y ejerce un control opresivo sobre el resto de los poderes que se eligen por medio del voto popular como el de gobernaciones, alcaldías y asambleas legislativas locales.

LA DEMOCRACIA FRENTE AL DETERIORO DE LO PÚBLICO

Un elemento fundamental en el malestar del pueblo venezolano en los años ochenta y noventa del siglo pasado fue, sin duda, el deterioro de lo público. El Estado venezolano, al ser una democracia petrolera, construyó un sistema de bienestar inestable y contingente al recurrir, en la década de los setenta, a concesiones en el campo de lo social que en otros escenarios habrían implicado luchas concretas (beneficios laborales, sistemas de protección social universal y otros), en este caso financiadas con ingresos petroleros muy mal invertidos en lo interno. También se caracterizó por ejecutar una política de alto endeudamiento que dio por hecho que los altos precios del petróleo se mantendrían hasta el fin de los tiempos. Desde finales de los setenta y hasta la década de los ochenta del siglo pasado, Venezuela experimentó una severa contracción de sus ingresos y el descenso en la calidad de vida de la población, así como la merma en las garantías y derechos que se habían otorgado a partir

⁷ Una democracia iliberal es un sistema de gobierno en el que, aunque se celebren elecciones, los ciudadanos no tienen conocimiento de las actividades de quienes ejercen el poder real debido a la falta de libertades civiles; por tanto, no es una "sociedad abierta". Hay muchos países "que no están clasificados como 'libres' ni 'no libres', sino como 'probablemente libres', que se encuentran en algún lugar entre regímenes democráticos y no democráticos. Los politólogos y los historiadores sostienen que la democracia iliberal es antidemocrática y, por lo tanto, algunos prefieren utilizar términos como 'autoritarismo electoral', 'autoritarismo competitivo' o 'autoritarismo blando'" (https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_iliberal).

del pacto democrático de gobierno firmado por las principales fuerzas políticas en 1958, con la caída de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez.

A pesar de esto, se mantenía un piso de protección social que evitó que Venezuela se constituyese en una democracia neoliberal. El denostado plan de ajustes que proponía el presidente Carlos Andrés Pérez hacia finales de la década de los ochenta planteaba en esencia un proceso de ordenación de la estructura financiera del Estado de forma progresiva⁸. Claro que el presidente Pérez omitió hablar con honestidad de esto en su campaña, que más bien se dedicó a movilizar la nostalgia por la bonanza que había sido el signo de su gobierno en la década anterior.

Esto es importante, porque, a pesar de que el ajuste no planteaba un desprendimiento de las obligaciones

⁸ "El gran viraje", conocido por sus detractores como el "Paquetazo económico", fue una serie de medidas económicas liberalizadoras adoptadas en Venezuela en 1989 por el gobierno del recientemente electo presidente Carlos Andrés Pérez como respuesta a la recesión económica en la que se sumió el país en los años posteriores al Viernes Negro (1983). El objetivo era una progresiva desregulación de la economía a partir de un programa de ajustes macroeconómicos preconizado por el Fondo Monetario Internacional. Las principales medidas anunciadas fueron: someterse a un programa bajo supervisión del Fondo Monetario Internacional con el fin de obtener aproximadamente 4,500 millones de dólares en los tres años siguientes; liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30 %; unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial; determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones con el exterior a la nueva tasa flotante; liberación de los precios de todos los productos a excepción de dieciocho renglones de la cesta básica; anuncio del incremento, no inmediato, sino gradual, de las tarifas de servicios públicos como telefonía, agua potable, electricidad y gas doméstico; aumento anual en el mercado nacional, durante tres años, de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del 100 % en el precio de la gasolina; aumento inicial de las tarifas del transporte público de un 30 %; aumento de sueldos en la administración pública central de entre el 5 y el 30 % e incremento del salario mínimo; eliminación progresiva de los aranceles a la importación; reducción del déficit fiscal a no más del 4 % del producto territorial bruto, y congelación de cargos en la administración pública. (Wikipedia)

del Estado en materia de política social, el anuncio de la única medida que intentó aplicar, el aumento de la gasolina cuyo precio había estado congelado desde hacía décadas, desató una reacción de hartazgo y violencia en las principales ciudades del país, que muy rápidamente mutó en saqueos muy violentos que sobrepasaron las capacidades de los cuerpos de seguridad ciudadana para contenerlos. El gobierno del presidente Pérez tomó entonces la decisión de que el Ejército se encargara de la contención y represión de la protesta, con consecuencias desastrosas que dejaron poco más de trescientos muertos⁹. El malestar frente al deterioro sostenido de la calidad de vida y el Caracazo sirvieron de escenario para que Hugo Chávez se apropiara narrativa y simbólicamente de esos momentos. ¿Y cómo no? Era evidente que la democracia no solo no estaba respondiendo en materia de justicia social y justicia en general; además reprimía este malestar de forma violenta y letal. Así, el nuevo ciclo de gestación y ascenso de liderazgos y movimientos populistas cuyo objetivo y legado concreto ha sido erosionar el Estado de Derecho empezó en Venezuela con la aparición de Hugo Chávez y lo que después ha sido el chavismo en el gobierno. Evidentemente, el país no solo no llegó a un destino mejor, sino que cayó en el peor de los infiernos.

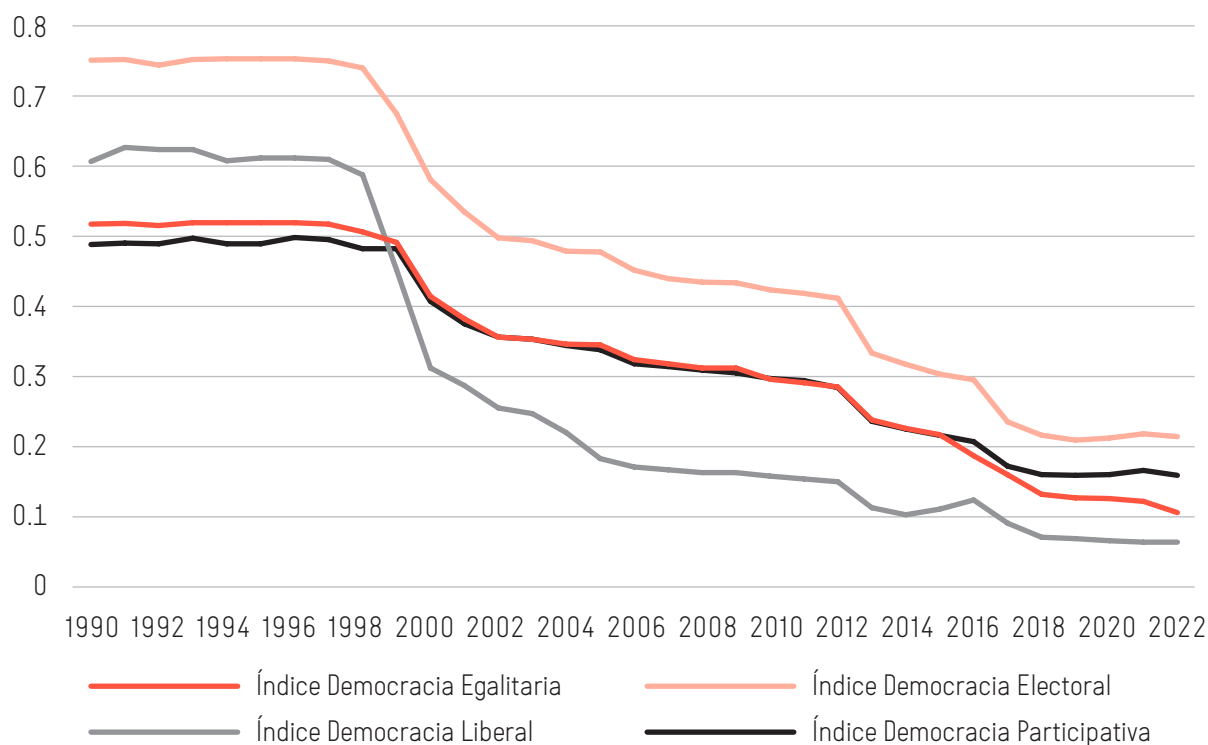
⁹ “El Caracazo” es el nombre de una serie de fuertes protestas, disturbios y saqueos en Venezuela que comenzaron el 27 de febrero de 1989 en Guarenas, se extendieron hasta Caracas y finalizaron el 8 de marzo del mismo año. Se iniciaron principalmente en respuesta a las medidas económicas anunciadas durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, las cuales incluían un incremento de la gasolina y del costo del transporte urbano. El nombre del suceso proviene de Caracas, la ciudad donde acontecieron gran parte de los hechos. Terminó con un elevado número de víctimas mortales (las cifras oficiales reportan 276 muertos, algunos informes extraoficiales hablan de más de 3,000 fallecidos), la mayoría a manos de las fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana, Fuerzas Armadas del Ejército y de la Guardia Nacional, después de que salieran a las calles a controlar la situación. Hasta ese momento, Venezuela había sido uno de los países más estables de Latinoamérica. (Wikipedia)

SOBRE EL SISTEMA POLÍTICO EN VENEZUELA

Durante las últimas dos décadas, el sistema político de Venezuela cambió de modo significativo. En los años setenta del siglo XX, Venezuela fue uno de los pocos países en América Latina sin experiencia de dictadura militar o régimen cívico-militar. La primera bonanza petrolera, en el marco de un régimen de gobierno democrático en los años setenta, consolidó un tipo de Estado rentista que se hizo en extremo dependiente del petróleo para sostener la ilusión de una democracia moderna. Hacia finales de esa década, el inicio de la caída de los precios del petróleo, aunado a una elevada deuda externa contraída en plena bonanza petrolera, dieron cuenta de la evidente incapacidad del sistema político democrático para resolver los problemas esenciales de la población, que antes había podido consumir mercancías importadas y mantener un estilo de vida sostenido por el subsidio a los combustibles y las transferencias de renta, ahora se veía a sí misma marchar aceleradamente hacia la pobreza. Con el inicio de la década de los ochenta, empezó a consolidarse el malestar y el descontento contra el bipartidismo, la corrupción y el uso clientelar de lo público como modelo de gobierno. El Caracazo de 1989 fue solo el preludio de la larga crisis política y de representación que se extiende en Venezuela hasta el presente.

De una democracia liberal representativa, el sistema político se transformó al cabo de dos décadas en un régimen autoritario. Acorde a los distintos índices de democracia (liberal, electoral, participativa e igualitaria) del proyecto V-Dem (Coppedge *et al.*), se observa un retroceso significativo (véase gráfico).

Por lo tanto, Venezuela se suele calificar como uno de los países en los que se debilita la democracia y se consolida el autoritarismo. La profundización del régimen autoritario se consolidó con la muerte de Hugo Chávez, en marzo de 2013, y sobre todo con la estrepitosa caída del precio internacional del petróleo hacia finales de 2014.



Fuente: https://v-dem.net/data_analysis/CountryGraph/

EL CHAVISMO EN EL PODER: POLARIZACIÓN, MOVILIZACIÓN Y REFERÉNDUM

Sería mezquino no reconocer que, en efecto, Hugo Chávez, un militar de origen humilde, supo conectar bien con el sentimiento de impotencia de la población por los altos niveles de desigualdad que empezó a experimentar Venezuela en la década de los ochenta. Las clases trabajadoras que habían gozado de una movilidad ascendente facilitada por la protección social del Estado se vieron (y sintieron) de pronto en la intemperie. Hay que decir también que, en la medida que el chavismo empezó a crecer como movimiento, se manifestó una reacción clasista contra Chávez y sus seguidores, considerados como “hordas” iletradas y resentidas. Si bien es cierto que no toda la élite política se manifestó en este sentido, también lo es que buena parte de ella guardó silencio. Esto le permitió a Chávez construir y consolidar su narra-

tiva populista con él como el portavoz del pueblo, con certificación de origen, un neo-Bolívar reencarnado, su nuevo justiciero.

Cuando Hugo Chávez irrumpió en la escena política, imperaban el descrédito de los partidos y el desgaste de la población frente a lo que podía realmente esperar del sistema democrático. En este marco, el liderazgo populista que encarnaba Chávez supo muy bien cómo capturar y reencauzar las expectativas y la esperanza, al dirigirse de forma directa a la ciudadanía despolitizada en términos ideológicos y desorganizada en términos materiales. Una primera cosa que habría que apuntar es que los liderazgos populistas son la puerta de entrada a la erosión de los sistemas democráticos y tienen más posibilidades de imponerse cuando provienen de sus propias entrañas y son capaces de apoderarse de la narrativa para resignificarlos ahí donde esos sistemas ya están deslegitimados por sí mismos. Siguiendo a Urbinati (2023):

El populismo no es algo externo a la democracia, sino una transformación interna de esta. Es una forma política que se produce dentro de la democracia representativa y que no constituye un régimen: no tiene sus propias instituciones ni sus procedimientos. Utiliza los de la democracia, parasitándolos. Si hay mediaciones y partidos clásicos, una ciudadanía activa y una democracia social, la política populista penetra mucho menos fácilmente.

Eso fue lo que Chávez logró en el caso de Venezuela, en donde los partidos y la noción de ciudadanía activa estaban en una posición de descrédito y precariedad.

El malestar ciudadano fue la base central para el surgimiento del proyecto populista de Hugo Chávez y lo que después serían sus gobiernos, así como del apoyo popular hacia ellos. Al mismo tiempo, se observa que la estrategia chavista de la polarización fue ampliamente correspondida en los sectores antichavistas de oposición; esto creó una dinámica entre los partidarios de Hugo Chávez y sus opositores que ha producido hasta el día de hoy discursos y proyectos excluyentes. El chavismo, por su lado, con todo el poder del Estado y del gobierno, desacredita y profiere insultos y calificativos a veces muy violentos contra la oposición, mientras que la oposición desconoce la legitimidad de origen y en los hechos del chavismo e intenta, desde sus inicios, combinar las demandas electorales con la esperanza puesta al mismo tiempo en salidas militares y violentas. El camino hacia lo que hoy es un régimen claramente autoritario es el resultado de esta interacción, aunque, por supuesto, la carga de mayor responsabilidad recae en el chavismo por su poder y su capacidad para controlar todos los recursos del Estado, especialmente el poder de la represión y el amedrentamiento a liderazgos sociales y políticos. Las instituciones del sistema político han tenido un papel clave en los conflictos y su desarrollo. No le falta ironía al hecho de que tanto el gobierno como la oposición recurrieron a estrategias similares en los momentos en los que las instituciones existentes no les servían: la violencia acompañada o no de la creación de instituciones paralelas.

EL PODER EJECUTIVO: EL PRESIDENCIALISMO DESENCADENADO

Chávez llegó a la Presidencia en diciembre de 1998 con más del 56 % de los votos. Durante su primer período al frente del Ejecutivo, convocó elecciones para una Asamblea Constituyente en 1999, con el fin de remodelar el sistema político de acuerdo con sus ideas de concentrar aún más el poder en la Presidencia de la República. El mandato presidencial se amplió a seis años (inicialmente con una sola reelección). Además, el primer mandatario recibió amplios derechos legislativos para gobernar por decreto. Se abolió el Senado, la segunda cámara del parlamento, y se ampliaron las oportunidades de participación ciudadana directa, con referendos y otras prácticas innovadoras de participación popular (Posado, 2022; Ellner, 2012).

Mientras que Chávez ganó las primeras elecciones bajo la nueva Constitución con una clara mayoría, la oposición recurrió a mecanismos autoritarios, al promover y apoyar un intento de golpe de Estado por parte de altos cargos militares en 2002, durante el cual Pedro Carmona, quien era entonces jefe de la asociación empresarial Fedecámaras, fue nombrado presidente interino. La mayor parte de la población venezolana y de los gobiernos latinoamericanos y caribeños condenaron el golpe. Dos días después, Chávez regresó al palacio presidencial, dados los altos niveles de improvisación en los factores golpistas y un fuerte rechazo de la opinión pública. El incidente le dio a Chávez una buena oportunidad para purgar las Fuerzas Armadas y llenar los puestos militares más altos con seguidores leales. Entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, la oposición intentó de nuevo derrocar al gobierno de forma no constitucional –esta vez convocando a un apoyando una huelga general apoyada por la dirigencia gremial empresarial y los principales medios de comunicación–. Otra vez, Chávez aprovechó la situación para depurar las Fuerzas Armadas y aumentar el control tanto sobre la autoridad electoral como sobre la industria petrolera. También incrementó

el número de jueces en el Tribunal Supremo y llenó las vacantes con sus partidarios. Un referendo auspiciado por la oposición para destituir a Chávez fracasó en 2004.

En la era Chávez, el uso de los diversos instrumentos electorales (elecciones en todos sus niveles, referendos) se convirtieron en plebiscitos en los que siempre estaba en juego de un modo existencial el destino de la nación y, por lo tanto, del pueblo. El pueblo para Chávez era el pueblo chavista, por supuesto. Como plantea Nadia Urbinati, todo liderazgo y movimiento populista modifica la idea “normativa” de pueblo (todos los habitantes de una nación) para promover la idea de que existe un pueblo social y político como verdadera mayoría. “Esto implica que el líder define al pueblo, por lo que el pueblo, al ser, en definitiva, una entidad definida, es al mismo tiempo una entidad cerrada, con límites y, por ello mismo, en mi opinión, abierta a la intolerancia. Si el pueblo es encerrado en determinados límites o fronteras, se opera, necesariamente, una forma de exclusión. El segundo elemento de la desfiguración democrática interna que produce el populismo se vincula a la modificación de un principio sustancial de la tradición democrática: el de la mayoría” (Urbinati, 2023).

Es verdad que el chavismo fue mayoría mientras Chávez estuvo vivo, pero también es cierto que, a partir de 2006, año de su primera reelección, Chávez quiso avanzar en una serie de consultas para modificar la Constitución (es decir, transformar el régimen liberal democrático) que rechazaron incluso sectores del chavismo. Cuando no pudo ganar electoralmente, Chávez recurrió a gobernar por decreto y mediante leyes habilitantes, mientras la oposición no era capaz de trascender la denuncia y plantear debates más consistentes sobre el modelo chavista, su dirección y por qué hacía de la oposición una alternativa más allá de salir del gobierno.

En 2006, Chávez se reeligió con el 63 % de los votos. A pesar de la clara y firme mayoría con la que había sido reelegido apenas unos meses antes, el chavismo enfrentó su única derrota electoral en

las urnas con el rechazo de un referendo para reformar la Constitución en 2007, que concentraba aún más el poder central y militar. Aunque fue por un margen cerrado, lo cierto es que perdió y Hugo Chávez se vio obligado a reconocerlo. Fue un reconocimiento de intención, porque, en febrero de 2009, logró imponer su voluntad autoritaria, al apelar a la figura de la enmienda constitucional. El 15 de febrero de 2009, se convocó a un referendo para decidir la aprobación o no de la enmienda de los artículos que permitirían la reelección inmediata e indefinida para todos los cargos de elección popular en Venezuela.

Es decir, una vez consolidado tras su segunda reelección, Hugo Chávez emprendió una serie de reformas para modificar la Constitución, que buscaban esencialmente la reelección continua e indefinida del presidente de la República, la modificación de la estructura del Estado al agregar poderes, crear nuevos componentes dentro de lo militar como la milicia nacional bolivariana, y, en general, la atribución de poderes centralistas y autoritarios a la figura del presidente. Esta reforma se proponía eliminar los contrapesos para la toma de decisiones en el parlamento y elevar los costos para la ciudadanía de cualquier ejercicio consultivo o de referendo. Cada vez más, figuras militares comenzaron a dirigir instituciones clave del Estado, tales como las relacionadas con el sector energético, en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y toda el área de alimentación compartió la gestión del Estado y del gobierno con los militares, hasta establecer un gobierno cívico-militar (en la era Maduro, se agregó a esta fórmula lo policial). En resumen y vista en retrospectiva, la estrategia de la oposición de forzar la salida de Chávez burlando las normas existentes resultó contraproducente, porque permitió ampliar la influencia del gobierno sobre la economía y el Estado (Gamboa, 2017).

En 2011, Hugo Chávez anunció que padecía un cáncer severo y que iba a iniciar el respectivo tratamiento. En octubre de 2012, volvió a ganar las elecciones presidenciales, pero “solo” con el 55 % de los votos. La muerte de Chávez obligó a celebrar

nuevas elecciones presidenciales, en las que Nicolás Maduro, quien venía de ejercer funciones como canciller, ganó por un margen muy estrecho según los resultados oficiales, y en las que se produjeron irregularidades masivas, de abuso y control del Estado en los centros de votación, como extender el horario de los centros o limitar y amedrentar la participación de testigos electorales de la oposición en determinados territorios. Con la controvertida reelección presidencial de Maduro en 2018, la crisis institucional se agravó. Boicoteado por la mayoría de la oposición, al no presentar un candidato representativo y llamar a la abstención, Maduro se declaró vencedor –victoria no reconocida ni por la oposición ni por muchos países en las Américas y la Unión Europea–.

Nicolás Maduro asumió la Presidencia el 10 de enero de 2019. Ese mismo año, la Asamblea Nacional eligió a Juan Guaidó como su presidente y declaró vacante la Presidencia de la República debido a las elecciones no democráticas del año anterior. El 23 de enero de 2019, Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino en virtud del artículo 233 de la Constitución venezolana, con el que se asumió como nula la elección presidencial de 2018, y que preveía que, dado este caso, el presidente de la Asamblea Nacional debía llenar el vacío de poder en cuestión.

LA LUCHA POR EL PODER LEGISLATIVO EN LA ASAMBLEA NACIONAL

La oposición pasó la primera década del gobierno chavista buscando atajos para una salida rápida de Hugo Chávez. Cuando fracasó la estrategia insurreccional que buscaba producir un golpe de Estado, agotada ya en el primer lustro de la era chavista (2001-2004), pasó a exaltar la estrategia de la abstención como una forma de presionar para conseguir mejores condiciones electorales. Sin embargo, para entonces, la oposición antichavista había perdido no una, sino varias veces en el terreno electoral,

entre otras cosas porque había decidido hacer de la cuestión electoral una muy mala estrategia en favor del desconocimiento del voto, del ente rector y de las posibilidades de desarrollar una estrategia de participación ciudadana plena. Para las elecciones legislativas de 2010, la oposición al chavismo acordó volver a participar en este proceso electoral de forma unitaria y logró obtener el 40 % del total de los votos. Desde ese entonces, la vida política nacional transcurre entre los intentos bloqueados a la oposición de hacer algún tipo de contraloría al gobierno y seguir viendo cómo avanzar en la recuperación del camino electoral para recuperar la alternancia en el poder.

La enfermedad y la muerte de Hugo Chávez produjeron problemas sustanciales para la legitimidad y la sostenibilidad del régimen populista que tiende a depender de la figura del líder y de su carisma. Francine Jácome (2018, 23) ubica el punto de inflexión de la competitividad del chavismo en las urnas en los años 2012-2013. Si bien el apoyo al chavismo ya venía decreciendo con Chávez en vida, se redujo drásticamente después de su muerte y durante el gobierno de su sucesor, Nicolás Maduro. Desde entonces, dominan tres estrategias para asegurar la permanencia del chavismo en el poder: militarización, represión, y manipulación del sistema electoral, muy especialmente mediante el uso de recursos públicos para coaccionar o manipular el voto antes, durante y después de la elección. A pesar del incremento de las medidas autoritarias, el régimen de Maduro siguió realizando elecciones regulares no solo para presidente (2018), sino también para la Asamblea Nacional (2015 y 2021), y, en 2017, promovió la elección de una Asamblea Constituyente como mecanismo para legitimar a su gobierno y desconocer a la asamblea elegida en 2015, que le arrebató al chavismo el control absoluto de esta instancia por primera vez en casi una década.

En este escenario, al ver el claro retroceso electoral y el debilitamiento del chavismo como mayoría, la oposición cambió de estrategia y empezó a luchar dentro del marco institucional. La hora de la oposición parecía haber llegado en las elecciones

parlamentarias de 2015: por primera vez, después de más de una década de chavismo en el gobierno, consiguió una mayoría de dos tercios en la Asamblea Nacional, con el 56.2 % del total de los votos. Sin embargo, casi inmediatamente, para revocar la mayoría absoluta obtenida por la oposición, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia ordenó que se suspendiera la toma de posesión de tres diputados indígenas del estado de Amazonas.

A pesar de ser mayoría, la oposición no pudo bloquear o modificar las iniciativas del gobierno. Una vez más, el parlamento, liderado entonces por Henry Ramos Allup, máximo representante del histórico y venido a menos partido Acción Democrática, entonces elegido para presidir el parlamento, inició su mandato con el anuncio de que su principal objetivo desde la presidencia de la Asamblea Nacional sería promover un referéndum revocatorio sobre la continuidad del mandato de Nicolás Maduro en la Presidencia de la República. No se cuestiona la legitimidad de la iniciativa, que finalmente es un derecho ciudadano reconocido en la Constitución y al cual el propio Hugo Chávez apeló en 2004 para resolver la crisis de gobernabilidad de la época. Lo equivocado fue convertir al parlamento, un poder institucional, en una trinchera desde la cual se promovía directamente el cese del gobierno de Maduro, en medio del clima de descontento que ya se hacía patente tras los efectos del colapso de los precios del petróleo en 2014 y la caída de la propia producción venezolana, asociada a malos manejos en materia de mantenimiento e inversión y una alta corrupción en Pdvs.

Mientras que Chávez había ganado un referéndum de este tipo en 2004, el gobierno de Maduro, a sabiendas de que no había forma legítima de ganar una consulta popular en ese escenario, hizo uso del control político que el Ejecutivo mantiene sobre el poder judicial y bloqueó cualquier posibilidad de que la oposición avanzara en la recolección de firmas y todo el procedimiento que demanda la Constitución, usando una vez más su control sobre el Tribunal Supremo de Justicia y el poder disuasivo y represor del Estado para inhibir cualquier

movilización en favor del referendo revocatorio. A pesar de eso, el gobierno de Maduro sí tuvo que incrementar su represión contra la oposición, por ejemplo, contra las protestas de 2014 (hasta la fecha). Frente a la pérdida sostenida de apoyo popular, a medida que se profundizaba la crisis económica y social, así como un crecimiento sostenido de la protesta durante 2017, el mecanismo central de gobierno fue aumentar la represión y escalar abiertamente a prácticas de terrorismo de Estado: allanamientos y detenciones sin orden, desapariciones forzadas, cientos de heridos y asesinados en las calles por los cuerpos de seguridad del Estado o grupos paramilitares vinculados a este (HRW, 2017). Los distintos informes de la Alta Comisionada de Derechos Humanos sobre Venezuela y del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social ponen en evidencia el alto nivel represivo y la falta absoluta de respeto a los derechos humanos, así como a las libertades civiles y políticas en Venezuela.

Esta política represiva se complementó con la creación de instituciones paralelas que le otorgaron al gobierno el control sobre todos los poderes, con sustitución de aquel bajo control opositor, especialmente la Asamblea Nacional. En 2017, Nicolás Maduro convocó una nueva Asamblea Constituyente con funciones legislativas, que despojó de toda autoridad a la Asamblea Nacional, legítimamente electa en 2015. Con este acto, el gobierno de Maduro cruzó la última línea roja hacia un tipo de sistema autoritario que hasta el día de hoy ha demostrado su capacidad de resistencia y adaptación. Javier Corrales (2020, 40) llama esto “fusión de funciones”, según la cual se conceden funciones a instituciones que tradicionalmente se habían reservado para otras. Es una táctica autoritaria adicional para la sobrevivencia de regímenes autoritarios que tratan de evitar los costos de la represión excesiva.

REFORMAS INSTITUCIONALES: EL EJEMPLO DE LA AUTORIDAD ELECTORAL

Las reformas institucionales pueden promover transparencia y participación democrática, pero también se pueden producir en función de intereses políticos, sea del gobierno en turno, sea de grupos influyentes. Las autoridades electorales son clave, porque definen y monitorean las reglas del juego democrático en el cual las elecciones son el mecanismo de cambio o persistencia fundamental.

En Venezuela, una parte importante de la narrativa de Chávez y posteriormente del chavismo como forma de pensar el Estado y el gobierno fue cuestionar la corrupción del sistema electoral previo a 1999. Por eso, dentro de sus propuestas de gobierno estaba la de convertir al Consejo Nacional Electoral (CNE) en un poder autónomo del Estado y avanzar en su modernización para dar garantías a los electores de que, en verdad, estaban eligiendo a sus autoridades libremente. Aunque es cierto que, desde el ascenso del chavismo al poder, hubo rectores claramente identificados con el gobierno, podría afirmarse que realmente se había hecho un esfuerzo por blindar el sistema electoral de forma tal que su papel como ente técnico no pudiese cuestionarse o ponerse en duda en términos de resultados. Sin embargo, a medida que se fue consolidando el chavismo en el poder, la estructura directiva del CNE se fue concentrando cada vez más en favor del gobierno de Chávez, primero, y de Maduro, después. El poder electoral en la era chavista se caracteriza por la parcialidad de los rectores que presiden el Consejo, la laxitud para aplicar y obligar al gobierno o actores específicos de este a cumplir las normas en materia electoral, y la falta de control y contraloría sobre el uso de propaganda y el financiamiento de las campañas, salvo que sea para sacar a algún adversario del juego.

A pesar de eso, en 2021, a punto de vencerse el tiempo máximo de permanencia de alguno de los rectores en la directiva del gobierno, actores del

chavismo y de la oposición en el marco de la Asamblea Nacional electa por el chavismo en el año 2020, junto con una coalición de actores de la sociedad civil agrupados en el Foro Cívico¹⁰, acordaron el nombramiento de una nueva directiva para el CNE, que incluyera al menos dos rectores provenientes del mundo político de la oposición, uno de ellos con mucha experticia en la cuestión electoral. En noviembre de 2021 se convoca a elecciones locales y regionales organizadas por este nuevo CNE, en las que el gobierno aceptó la observación de una misión electoral de la Unión Europea¹¹.

Los nuevos rectores fueron elegidos para un período de siete años; a pesar de eso, en junio de 2023, se produjo la renuncia en concierto de los tres rectores chavistas, a los que siguió sin mayores resistencias o explicación la de los dos rectores vinculados a la oposición en ese momento. Antes de esta renuncia, la oposición organizada en la figura de la Plataforma Unitaria, y que ha promovido la realización de elecciones primarias para escoger al candidato opositor de la próxima elección presidencial pautada para 2024, había solicitado al poder electoral el apoyo técnico para la realización de las primarias. La renuncia de los rectores dejó en el limbo esta solicitud, por lo que los organizadores de la primaria decidieron avanzar en la organización sin

¹⁰ <https://poderopediave.org/organizacion/foro-civico-de-venezuela/>

¹¹ En este escenario, tuvo lugar la elección a la gobernación en el estado Barinas, del cual era oriundo Hugo Chávez y que había sido gobernado por varios de sus familiares desde su llegada al poder, en la que el gobierno apeló a la inhabilitación de candidatos de la oposición y a un despliegue de gasto público para neutralizar la victoria de la oposición, quien reaccionó y superó el escollo de las inhabilitaciones, lo que terminó concediéndole el triunfo que el gobierno finalmente reconoció. Sin embargo, frente al informe que produjo la misión electoral de la Unión Europea, en el que se reportaban las irregularidades antes señaladas en términos del uso de recursos públicos, la censura a la oposición en el sistema de medios públicos y el amedrentamiento a electores en zonas de influencia chavista, el chavismo reaccionó con virulencia, con la descalificación del informe de la misión y diciendo que “nunca más” aceptarían una misión de observación que cuestionase la forma de actuar del Estado

el apoyo del CNE. En agosto de 2023, se designó una nueva junta directiva para el CNE con la misma fórmula: tres rectores vinculados al chavismo, dos rectores vinculados a partidos de oposición (AD y UNT). Sin embargo, la figura de estos dos rectores principales (y suplentes) no es suficiente para contener la arbitrariedad permanente del gobierno en torno a los procesos electorales *ex ante* y *ex post*. La inhabilitación de candidatos, las restricciones para el registro de nuevas organizaciones políticas, las modificaciones al cronograma electoral y la indisposición para reconocer y canalizar el voto de los venezolanos en el exterior siguen siendo moneda corriente. Mientras se escriben estas líneas y la oposición se prepara para la realización de la elección primaria prevista para el 22 de octubre de 2023, el directorio del CNE ha respondido formalmente a la solicitud de apoyar técnicamente la elección primaria, lo que es a todas luces una estrategia para detener el proceso y atizar las divisiones entre los factores de oposición, entre los cuales no existe acuerdo alguno sobre el apoyo del CNE a esta elección. También es muy probable que este CNE adelante el cronograma de la elección presidencial que debería tener lugar en diciembre de 2024 para el primer semestre del próximo año, lo que también es una forma de desalentar y golpear aún más la precaria capacidad organizativa de la oposición.

EL PODER JUDICIAL: LA FALTA DE INDEPENDENCIA DEL SISTEMA DE JUSTICIA

La tarea más importante del poder judicial es implementar y monitorear la vigencia de las normas y las leyes vigentes. En sistemas democráticos, la independencia del sistema de justicia del gobierno es clave para que haya controles y contrapesos. En Venezuela, el poder judicial ya presentaba serias debilidades desde la década inmediatamente anterior al chavismo y a su ascenso. La última gran crisis política que tuvo Venezuela en un marco democrático cerró un capítulo con la destitución del presidente Carlos Andrés Pérez por orden del Tribunal Supre-

mo de Justicia, que, además, ordenó su detención. También fue famosa en aquellos años la publicación de un expolítico del partido de centro-izquierda, la Causa R, William Ojeda, ¿Cuánto vale un Juez? (1995), en la que hace una dura crítica a la descomposición del sistema judicial en Venezuela. El libro da cuenta de cómo la justicia estaba privatizada de facto para los más pobres, por un lado, y, por otro, cómo operaba abiertamente en favor de intereses económicos y políticos de las élites. Como con la cuestión electoral, la reforma del sistema de justicia es una de las promesas del chavismo desde siempre. Incluso hoy, el propio Maduro ha invocado no una, sino varias veces, la necesidad de reformar el sistema judicial en Venezuela.

Como con el CNE, el chavismo muy rápidamente entendió que el poder judicial era clave para avanzar en su proyecto de modificar la estructura del Estado para ponerla al servicio de sus intereses. La mayoría sostenida durante casi una década en el parlamento le permitió avanzar sobre el nombramiento y jubilación de magistrados, así como con respecto al nombramiento de su directiva, lo que le ha permitido un control eficiente y articulado para reformar el Estado y, al mismo tiempo, usar al Tribunal Supremo de Justicia como un instrumento para sacar del juego a actores de la oposición e inhibir la protesta. Y lo ha hecho de forma muy eficiente. Políticas como la creación de la Zona Económica Especial Arco Minero del Orinoco¹², la inhabilita-

¹² El Arco Minero del Orinoco (AMO), nombrado por el gobierno de Nicolás Maduro el 24 de febrero de 2016 como "Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco", es un área de explotación irregular y trabajos precarios de recursos minerales y personas en Venezuela desde 2017, gestionado por las Fuerzas Armadas de Venezuela. Ocupa mayoritariamente el norte del estado Bolívar, el declarado Patrimonio de la Humanidad Parque Nacional Canaima y, en menor proporción, el noreste del estado Amazonas y parte del estado Delta Amacuro. El Arco Minero del Orinoco abarca un área de 111,843.70 km², es decir 12.2 % del territorio venezolano. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, la Sociedad Venezolana de Ecología, la Asociación de Arqueólogas y Arqueólogos de Venezuela (AAAV), la Asamblea Nacional de Venezuela y la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) han expresado públicamente su preocu-

ción de políticos en ejercicio, la intervención de partidos políticos y la persecución judicial contra manifestantes y dirigentes sindicales y estudiantiles se ha hecho con el concurso del Tribunal Supremo de Justicia y sus dependencias locales.

Desde inicios de 2022, nuevamente actores del Foro Cívico quisieron mediar en una negociación con el gobierno para el nombramiento de nuevos magistrados en un escenario en el que se acercaba el período de jubilación de varios de ellos. A pesar de la iniciativa, no hubo acuerdos y el gobierno avanzó con la mayoría casi absoluta con la que cuenta en la Asamblea Nacional elegida en diciembre de 2020, y nombró a los veinte magistrados, de acuerdo con la nueva conformación del Tribunal Supremo de Justicia, también modificada por la mayoría chavista en la Asamblea (antes eran 32 magistrados). Repiten doce magistrados del período anterior (60 %), que son mayoría en las Salas Constitucional, Penal, Político Administrativa y Electoral. Además de esos doce magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que repiten en el cargo, cinco formaron parte de aquellos nombramientos exprés de 2015, denunciados como violatorios de la ley, para evitar que tal diligencia quedara en manos de la Asamblea Nacional opositora que ejerció desde 2016.

LOS PODERES PARALELOS EN EL ÁMBITO REGIONAL

Frente a la sostenida pérdida de apoyo popular, el colapso de la industria petrolera, la mala gestión de la casi única fuente de ingresos del chavismo en el gobierno, muy especialmente con el ascenso de Maduro, se ha profundizado la política de fortalecer instituciones y poderes paralelos al control del Estado y el gobierno también en el ámbito subnacional.

pación ante el incumplimiento de estudios de impacto ambiental y sociocultural y la violación de derechos a la consulta previa en las comunidades indígenas, del patrimonio cultural y natural y de la soberanía nacional (https://es.wikipedia.org/wiki/Arco_Minero_del_Orinoco).

El Estado venezolano, gestionado por el gobierno chavista de Nicolás Maduro, ha emprendido desde 2015 una política *de facto* por la vía de decretos presidenciales para modificar, alterar o imponer nuevos usos del territorio en diferentes regiones, en la búsqueda desesperada de recursos que le permitan sostener la precaria situación fiscal del país, colapsada por los altos niveles de corrupción en el Estado, la desinversión y la falta de diversificación de las funciones de la industria petrolera, la caída de los precios del petróleo, y, para rematar, las sanciones internacionales que impuso Estados Unidos en 2018, como un mecanismo de presión contra el gobierno.

Es así que, por ejemplo, frente a la búsqueda de nuevas e inmediatas fuentes de ingreso, en febrero de 2016, el gobierno de Nicolás Maduro creó por decreto la Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco. Inspirado en las visiones de Chávez, pero con su propio horizonte y proyecto, el gobierno de Maduro decretó la creación de un territorio de casi 112,000 km², para la extracción masiva de oro y recursos minerales, en una de las regiones más protegidas por ley en Venezuela. Se trata del territorio de pueblos indígenas, con grandes extensiones de tierra que hacen parte de parques nacionales y reservas, que se explotan de forma salvaje al costo de la deforestación, la pérdida de biodiversidad y mucha violencia social y política concreta. Otros proyectos, como la creación de zonas económicas especiales en enclaves turísticos y/o productivos ha sido una prioridad del gobierno, entendiendo que, en la práctica, es casi imposible que el petróleo venezolano recupere su preponderancia en el mercado mundial, y sea capaz de aprovechar como bonanza, nuevos períodos de alza de precios que le permitan sostener políticas de gasto público y de redistribución clientelar y extendida de la renta petrolera.

Frente a la pérdida de reconocimiento político y electoral, en determinadas regiones que el gobierno considera estratégicas, se nombran autoridades y figuras que no existen en la Constitución vigente. Tal es el caso de la figura de los *protectores*, figuras vinculadas al gobierno que pueden ser civiles, policías

o militares que actúan como autoridades paralelas a las que se asigna recursos y responsabilidades desde la Presidencia, sin haber sido elegidas en las urnas, y con la función clave de marcar y competir con las autoridades legítimamente elegidas. No es casual que un protector después resulte en el candidato a gobernador por el partido de gobierno.

En el segundo semestre de 2022, circuló en redes sociales un Proyecto de Ley Orgánica para la Planificación y Gestión Espacial del Territorio en Venezuela. Según nota de prensa reseñada en la página web de la Asamblea Nacional:

El Proyecto de Ley Orgánica de Planificación y Gestión Territorial que está en discusión en la Comisión Permanente de Ecosocialismo de la Asamblea Nacional plantea promover una nueva lógica urbana con un sistema de ciudades socialistas donde el poder popular se constituya como gran dinamizador en la democratización del espacio. Asimismo, expone una nueva arquitectura del territorio que rompa con el modelo colonial y que haga posible una visión de la escala regional, considerando la identidad de cada región y su infraestructura existente [...] los cimientos de este instrumento se fundamentan en nuevas estructuras sociales como consejos comunales, comunas, movimientos sociales, organizaciones económicas productivas, servicios sociales e infraestructuras con una nueva visión socialista.

Si bien es cierto que todo Estado debe contar con leyes y reglamentos que le permitan definir una política de ordenamiento del territorio, alineada con su modelo de desarrollo, Venezuela tiene una deuda de casi cuatro décadas para actualizar su política de ordenamiento territorial, por lo que el mismo se ha ido reconfigurando una y otra vez más allá de la vigencia del instrumento legal.

El proyecto de Ley para la Planificación y Gestión Espacial del Territorio busca legalizar lo que el Estado en manos del chavismo viene imponiendo de facto en los últimos años: identificación de territorios específicos de los cuales extraer recursos mediante la centralización autoritaria de la política

de ordenamiento territorial, en donde el presidente de la República y figuras impuestas directamente por él en la escala regional definen lo que está permitido y lo que no, así como las formas y el tipo de organización que pueden participar y cómo en este proceso de planificación.

La organización institucional que propone la ley dibuja la consolidación de una centralización arbitraria y paralela del poder administrativo, y desconoce el lugar que tienen las autoridades regionales democráticamente elegidas al imponer sobre estas una figura que no está prevista en instrumento legal alguno y que, por lo general, es una autoridad militar. Si bien es cierto que las cuestiones relacionadas con el orden territorial implican no pocas veces asuntos de seguridad y de defensa nacional, como en las fronteras, por ejemplo, también lo es que imponer este tipo de autoridad a la que se suma la autoridad casi total que tiene el propio presidente de la República en general supone al mismo tiempo límites muy concretos a un debate amplio y democrático sobre la planificación del territorio.

¿DÓNDE ESTÁ Y A DÓNDE PUEDE IR VENEZUELA EN LOS PRÓXIMOS AÑOS?

Lo descrito anteriormente expone los principales hitos de cómo el populismo chavista transformó el Estado democrático (incluso con todos los problemas que tenía) en un cuerpo al servicio de los intereses de la cúpula cívico-militar que mantiene el control de las instituciones y el territorio contra la voluntad de cambio y alternancia de los venezolanos que estamos dentro y fuera de Venezuela. Reconstituir socioculturalmente las instituciones y la cultura democrática en Venezuela será un proceso difícil y largo, y no solo por la determinación del gobierno de Maduro de subirle los costos a cualquier acuerdo que implique la mínima posibilidad de que el chavismo deje de controlar el poder y los recursos del Estado. Más desafiante aún será volver a dotar de significado la democracia y la posibili-

dad de vivir en un escenario democrático para los venezolanos. Esto pasa, en esencia, por recuperar la normalización de las distintas formas de pensar, es decir, reivindicar las diferencias que es la esencia de la vida en común en democracia. Si llegamos hasta este punto de degradación institucional, fue porque las élites bipartidistas habían renunciado a representar bien la expectativa ciudadana y la dejaron a la deriva. Dice Fonseca:

*...el agotamiento moral ha superado incluso a la fuerza inercial de las sociedades para sostener la normalidad democrática. El *qualunquismo* ha ganado espacio. El enojo sepultó a la razón y el pesimismo, el escepticismo y la negación se han adueñado de nuestros cuerpos. Por generalizar, nadie en el poder parece representar bien la expectativa ciudadana. Nuestros diputados y senadores no son las mejores frutas de la canasta. Muchos funcionarios llegan al poder para afincarse en él y usarlo en su propio beneficio, como si fueran remedos monárquicos que identifican el Estado consigo mismos (Diego Fonseca, *El País*, 20 de septiembre de 2023).*

Esto no deja de ser un desafío no solo porque Venezuela es un régimen autoritario, sino también porque en la oposición la calidad de los liderazgos y los partidos no ha mejorado sustancialmente como para transmitir mensajes programáticos y rutas de democratización adaptadas a nuestra realidad.

El análisis sobre cómo se vino abajo la democracia venezolana se puede resumir a partir de dos elementos clave: primero, se puede observar una codestrucción de la institucionalidad existente entre gobierno y oposición. Ambas han recurrido a la introducción de instituciones paralelas en momentos en los que las instituciones existentes –muchas veces disfuncionales– no sirvieron a sus intereses políticos. El efecto ha sido la devaluación y deslegitimación de la institucionalidad democrática, y el aumento de los altos niveles de desconfianza en instituciones como la Asamblea Nacional, el gobierno y el poder judicial. Segundo, el gobierno ha recurrido a la militarización del Estado y del gobierno desde 2002, y la oposición promovió y apoyó

un golpe en 2002, llamó a la intervención militar extranjera y a un nuevo golpe de Estado en 2019 o peor aún, una intervención militar extranjera. En ambos casos, esto ilustra una debilidad política y una crisis tanto de credibilidad como de legitimidad.

No hay duda de que la vía de cambios sustanciales y sostenibles en el tiempo tiene que pasar por el respeto y la independencia de las instituciones clave. Pero, en este escenario, el camino que se dibuja para la reinstitucionalización del Estado en Venezuela será largo y será complejo. Estos poderes paralelos son al mismo tiempo poderes económicos y no pocas veces militares, lo que implica poder de fuego y amedrentamiento. Negociar condiciones para volver a estructuras democráticas y bajo control civil es, sin duda, una de las dimensiones más difíciles en cualquier escenario de negociación con el chavismo y la deconstrucción de su modelo de Estado, después de más dos décadas en el gobierno. Como primer paso, gobierno y oposición necesitan construir un consenso mínimo acerca de las reglas del juego político y su monitoreo independiente. Aquí será clave incluir y empoderar organizaciones de sociedad civil para que puedan acompañar estos procesos y hacerse significativa en ellos.

Que esto sea posible dependerá en buena medida también de la dinámica geopolítica y de cómo los actores internacionales puedan comprometerse con una estrategia de acompañamiento a una salida a la crisis venezolana por las consecuencias que el deterioro de la situación está teniendo en materia migratoria en todo el continente americano. Es preocupante también lo señalado sobre las relaciones del gobierno venezolano con sectores del crimen organizado nacional y transnacional, y no hay que perder de vista las apuestas del régimen madurista de consolidar su alianza con países no alineados con los valores y la cultura democrática liberal occidental, como China, Cuba, Irán, Nicaragua y Rusia.

Venezuela puede volver a ser una democracia, pero para eso necesita ciudadanos con valores democráticos, y no solo la restricción del espacio cívico, sino

también el amplio deterioro de la infraestructura pública de educación juega muy en contra de esta posibilidad. A esto se suma que, desde Venezuela, atravesamos este desierto, cuando como bien plantea Nadia Urbinati:

[...] ya no vivimos en una sociedad democrática de los partidos, sino en una sociedad democrática de las audiencias. En tal sentido, constituimos un público desagregado que carece de organizaciones políticas que produzcan utopías y perspectivas de futuro. Y en una sociedad de este tipo, en la que las mediaciones se han roto, la forma más sencilla de unificar a un pueblo desagregado es mediante un proyecto populista. Aquí es donde la democracia minimalista, ligada al neoliberalismo, se une con la política populista” (Urbinati, 2023).

La preocupación por cómo detener el descalabro populista autoritario pasa por volver a plantearse las viejas preguntas sobre la economía política y sobre cómo organizarse para transformar en un sentido justo y digno las condiciones materiales de existencia. Las grandes mayorías no esperan hacerse millonarias, sino solo vivir una vida que valga la pena, que sea digna. Para que esto sea posible, necesitamos recuperar la memoria y cruzar con análisis concretos del presente sobre el tipo de instituciones mediadoras para este tiempo, qué formas de agregación de solidaridad entre personas son adecuadas, redescubriendo qué es lo que tenemos en común, los mínimos en los que debería sostenerse la vida en común y los acuerdos sociales sobre lo que debemos defender o por lo que luchar.

REFERENCIAS

- Coppedge, Michael, Gerring, John, Knutsen, Carl Henrik, *et al.*, 'V-Dem [Country–Year/ Country–Date] Dataset v11' *Varieties of Democracy Project*, (<https://v-dem.net/graphing/graphing-tools/>).
- Corrales, Javier, “Authoritarian Survival: Why Maduro Hasn’t Fallen”, *Journal of Democracy*, vol. 31, núm. 3, 2020, pp. 39–53, (<https://doi.org/10.1353/jod.2020.0044>).
- Ellner, S., “The Distinguishing Features of Latin America’s New Left in Power: The Chavez, Morales, and Correa Governments”, *Latin American Perspectives*, vol. 39, núm. 1, 2012, pp. 96–114, (<https://doi.org/10.1177/0094582X11425333>).
- Fonseca, Diego: Milei y los marcianos de Mausan. Recuperado en: <https://elpais.com/mexico/opinion/2023-09-20/milei-y-los-marcianos-de-maussion.html>
- Gamboa, Laura, “Strategies against the Erosion of Democracy in Colombia and Venezuela”, *Comparative Politics*, vol. 49, núm. 4, 2017, pp. 457–77.
- HRW/Foro Penal, *Arremetida contra opositores. Brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela*, 2017, (https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/venezuela1117sp_web.pdf).
- Ojeda, William, *¿Cuánto cuesta un juez?*, Caracas, Vadell Hermanos, 1995.
- Posado, Thomas, “From Chávez to Maduro: From Delegative Democracy to De-Democratization”, en Dieckhoff, Alain, Jaffrelot, Christophe, y Massicard, Elise, eds., *Contemporary Populists in Power*, The Sciences Po Series in International Relations and Political Economy, Cham, Springer, 2022, pp. 75–91.
- Schuster Mariano: La rebelión de «los pocos» contra «los muchos» Entrevista a Nadia Urbinati. Recuperado en: <https://nuso.org/articulo/pocos-contramuchos-urbinati-izquierda-populismo-derecha/>

El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) está dedicado al estudio, análisis y diálogo sobre el acontecer internacional y global. Nuestro objetivo es generar ideas que nos abran al mundo. Para lograrlo, creamos comunidad y redes, abrimos espacios para el debate en los núcleos de conocimiento pertinentes, y producimos información y propuestas que buscan contribuir al mejor entendimiento del mundo en el que vivimos, influir en la toma de decisiones e incidir en la formulación de políticas públicas –nacionales e internacionales–, en beneficio de México y del mundo.

*

La Fundación Friedrich Ebert (FES) es una fundación política sin fines de lucro que tiene sus orígenes en Alemania en el año 1925. Como fundación socialdemócrata, la FES fundamenta su trabajo en los valores de la libertad, igualdad y solidaridad. La FES instaló su oficina en México en 1969 y desde entonces desempeña la función de un “think and do tank”, promoviendo el análisis y el debate político, la organización de espacios de diálogo, la formación política y el fortalecimiento de sindicatos libres y democráticos. A través de este trabajo la FES busca contribuir a la construcción de un sistema político orientado hacia la justicia social, la participación ciudadana y la democracia.